

Memoria archivada pero no olvidada:

Representaciones de los desaparecidos y la desaparición forzada en los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga y su incidencia en las políticas de memoria sobre el conflicto armado en Colombia

Wendy Jacqueline Díaz Ortiz

Memoria archivada pero no olvidada: Representaciones de los desaparecidos y la desaparición forzada en los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga y su incidencia en las políticas de memoria sobre el conflicto armado en Colombia

Wendy Jacqueline Díaz Ortiz

**Universidad Pedagógica Nacional
Facultad De Humanidades
Departamento De Ciencias Sociales
Bogotá D.C, 2022**

Memoria archivada pero no olvidada: Representaciones de los desaparecidos y la desaparición forzada en los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga y su incidencia en las políticas de memoria sobre el conflicto armado en Colombia

Wendy Jacqueline Díaz Ortiz

Código: 2020289005

Tesis para Optar por el título de Magíster en Estudios sociales

Directora: Nydia Constanza Mendoza Romero

**Universidad Pedagógica Nacional
Facultad De Humanidades
Departamento De Ciencias Sociales
Bogotá D.C, 2022**

Agradecimientos

En primer lugar, le agradezco a Asfaddes seccional Bucaramanga, a su coordinadora, sus fundadoras y a los familiares congregados en la asociación, por abrirme las puertas de su comunidad y permitirme acercarme a un archivo de más de treinta años que es parte de un esfuerzo colectivo para documentar la desaparición forzada.

También, le agradezco a la directora de AMOVI- UIS, hoy directora del Archivo General de la Nación, por brindarme parte de su tiempo.

Asimismo, a la profesora Nydia Constanza Mendoza Romero por ser mi guía en este arduo proceso que se erige como un esfuerzo mutuo.

Especialmente le doy gracias a mis padres Adolfo y Mabel por apoyarme en el camino que elegí para mí a pesar de los altos y bajos, a mi hermana Karen por ser mi interlocutora y consejera de vida.

Del mismo modo, agradezco a mis docentes y compañeros de la Maestría en Estudios Sociales, porque con sus diálogos y debates he logrado deconstruir mi pensamiento, abrir mi mente hacia otras ideas y aprender de mí misma.

Para finalizar, le doy gracias a la Universidad Pedagógica Nacional por otorgarme la beca que me brindó la oportunidad de hacer este posgrado.

Dedicatoria

*A Aura María Díaz Hernández madre
de Cesar Ariel Sepúlveda Díaz
detenido desaparecido el 5 de
septiembre de 1994 en Oiba Santander.*

*¡Por nuestros desaparecidos ni un
minuto de silencio, toda una vida de
lucha!*

Contenido

Introducción	12
Justificación	12
Problema de investigación	13
Estado del Arte	24
Capitulación	31
CAPÍTULO 1:	33
REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS	33
1.1. Referentes teóricos	33
1.1.1. Archivos y producción de representaciones de sujeto	33
1.1.2. Las representaciones, los archivos y la memoria	39
1.1.3. Políticas de la memoria y del olvido	44
CAPÍTULO 2	55
ENTRE EL CONFLICTO ARMADO, LA DESAPARICIÓN FORZADA Y LOS ARCHIVOS	55
2.1 Conflicto armado y actores de la confrontación	55
2.1.1 Guerrillas de primera generación: el ELN y las FARC	56
2.1.2. Otros actores de la confrontación armada	64
2.1.3. El Magdalena Medio Santandereano y el conflicto armado	78
2.2 Desaparición forzada	83
2.2.1. La desaparición forzada en el Magdalena Medio santandereano	93
2.3 Iniciativas oficiales y sociales de archivo sobre el conflicto armado	97
2.3.1. Iniciativas oficiales de archivo	98
2.3.2. Iniciativas sociales	102
2.3.3. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos - Asfaddes	105

2.3.4. Asfaddes Seccional Bucaramanga	108
CAPÍTULO 3	110
REPRESENTACIONES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS Y DE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN LOS ARCHIVOS DE ASFADDES SECCIONAL BUCARAMANGA	111
3.2.1. Primer momento: Emergencia del movimiento por los derechos humanos	127
3.2.2. Segundo momento: La Constitución Política de 1991	156
3.2.3. Tercer momento: Negación oficial del conflicto armado y negociaciones con los grupos paramilitares	182
CAPÍTULO 4	224
USOS PÚBLICOS DEL ARCHIVO VISUAL DE ASFADDES SECCIONAL BUCARAMANGA	224
4.1 Caracterización y primeras apreciaciones del archivo visual de Asfaddes	225
4.2 Análisis del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga	231
4.2.1. Orígenes, tránsitos y transformaciones de las imágenes del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga	233
4.2.2. Usos públicos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga	243
CONCLUSIONES	278
Bibliografía	281

Índice de figuras e imágenes

Imagen 1 . Esquema de relaciones para el análisis visual. Fuente. Creación propia. -----	53
Imagen 2 . Recorte del periódico Vanguardia Liberal del 2 de junio de 1988, Fuente. Caso 270	146
Imagen 3 . Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “En Zapatoca Exaltan ciclista desaparecido” sin fecha, Fuente. Caso 301 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	148
Imagen 4 . Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “En comunicados el ELN: condicionan liberación del senador Jorge Sedano” 1990. Fuente. Caso 247 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	149
Imagen 5 . Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “DESAPARECIDO. Mucho menos que un cadáver” 1989. Fuente. Caso 270 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	152
Imagen 6 . Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “¿Víctimas estaban fuera de la ley?”. Fuente. Caso 111 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	178
Imagen 7 . Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “Murieron seis presuntos ilegales en combates contra el Ejército”. Fuente. Caso 258 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga sin fecha. -----	203
Imagen 8 . Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “Familiares de víctimas de presuntos ‘falsos positivos’ saldrán a marchar”. Fuente. Caso 258 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga sin fecha. -----	204
Imagen 9 . Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “En 428% crecieron las desapariciones precisa informe de la defensoría”. Fuente. Caso 121 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga 2003. -----	205
Imagen 10 . Fotografías de las personas desaparecidas. Fuente. Elaboración propia. -----	227
Imagen 11 . Imagen de la Galería de la memoria de Asfaddes seccional Bucaramanga. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	228
Imagen 12 . Esquema de relaciones en red para el análisis del archivo visual y sus convenciones. Fuente. Elaboración propia. -----	230
Imagen 13 . Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 1. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	234
Imagen 14 . Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 2. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	235

Imagen 15 . Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 3. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	236
Imagen 16 . Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 4. Borraduras. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	238
Imagen 17 . Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 5. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	241
Imagen 18 . Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 6. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	242
Imagen 19 . Usos políticos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Marcha del 1 de mayo de 1989. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	247
Imagen 20 . Usos políticos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Marcha por los “Falsos positivos” 2008. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.	249
Imagen 21 . Usos políticos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Marcha por los “Falsos positivos” 2008. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.	249
Imagen 22 . Usos políticos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Marcha por la paz 2016. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	253
Imagen 23 . Usos conmemorativos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Marcha 9 de abril del 2012. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.	256
Imagen 24 . Usos conmemorativos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Semana Internacional de los Desaparecidos Forzadamente en el año 2013. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	258
Imagen 25 . Usos conmemorativos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Día Internacional de los desaparecidos, 30 de agosto del 2017. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	260
Imagen 26 . Usos conmemorativos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Homenaje a los 30 años de la desaparición de ... en la UIS. 2016. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	261
Imagen 27 . Usos artísticos y simbólicos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Obra de Freddy Higuera titulada “Memoria para borrar (retórica de la impunidad)” 2015. Fuente. Ministerio de Cultura, 2015. -----	264
Imagen 28 . Usos artísticos y simbólicos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Exposición “zapatos desgastados” 2017. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	266

Imagen 29 . Usos artísticos y simbólicos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga, exposición de la Galería de la memoria 1, 2018. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	267
Imagen 30 . Usos artísticos y simbólicos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga, exposición de la Galería de la memoria 2, 2018. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	268
Imagen 31 . Usos rituales del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga, entrega e inhumación digna de ..., 2016. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. -----	270
Figura 1 . Estructura del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga en Amovi-UIS. Elaboración propia.	51
Figura 2 . Esquema sobre la clasificación del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga. Fuente. Elaboración propia.	112
Mapa 1 . Magdalena medio con subregiones, Fuente, comisión de la verdad b, 2022.	79
Mapa 2 . Víctimas de desaparición forzada por departamento entre 1985 y 2016, Fuente. JEP-CEV-HRDAG, 2022.	95
Mapa 3 . Lugares donde se presentaron las desapariciones de los casos registrados en los expedientes. Fuente. Elaboración propia.	123
Grafica 1 . Relación temporal de víctimas de violaciones a los derechos humanos 1985 - 2018, Fuente, Comisión de la verdad, 2022c.	85
Grafica 2 . Número de víctimas de desaparición forzada según actor entre 1985 y 2016.	89
Grafica 3 . Víctimas de desaparición forzada entre 1985 y 2016. Fuente. Comisión de la verdad, 2022c, p. 183.	91
Grafica 4 . Años en que ocurrieron las desapariciones forzadas según los expedientes. Fuente. Elaboración propia.	122
Tabla 1. matriz temática para el análisis de documentos.-----	52

Tabla 2. Descripción de los documentos que integran los expedientes o casos del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga.-----121

Tabla 3. Descripción de las imágenes que componen el archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga.----
-----228

Introducción

Justificación

Con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC- EP en el 2016, se dio apertura a una serie de mecanismos como la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV)¹ como una entidad extrajudicial con “facultades para acceder a todo tipo de información, inclusive información reservada” (Cordero, 2020, p. 11).

De esta manera, en el 2022 seis años después de la firma de los acuerdos, se realizó la publicación y difusión del Informe Final de la Comisión de la Verdad que con sus diez volúmenes da cuenta de las dinámicas del conflicto armado, además de una serie de hallazgos y recomendaciones. El trabajo de la Comisión se reconoce como uno de los procesos de documentación de mayor importancia que se ha visto en Colombia, ya que “consolidó el más vasto archivo de derechos humanos existente en el país a partir de los testimonios, informes, casos y bases de datos que recopiló. Lo que sigue es la entrega de esta información a entidades que puedan cuidarlo, administrarlo, custodiarlo y ponerlos al servicio de la ciudadanía y del mundo según los niveles de acceso” (Comisión de la verdad, 2022).

En relación con lo anterior, se considera que este es un momento importante para interpelar estos archivos que devienen de procesos de justicia transicional, al igual que aquellos producidos por iniciativas organizativas y de la sociedad civil, que dan cuenta del conflicto armado y de las violaciones a los derechos humanos que se han vivido en el país.

Otra discusión en materia de archivos que dio en los últimos años, se relaciona con una “crisis de confianza en las instituciones públicas que deberían resguardar estos archivos” (Espinoza, 2021, p. 12) en Colombia, debido al nombramiento de Darío Acebedo como director de este centro de memoria, por parte del presidente Iván Duque (2018 -2022), lo

¹ Esta hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia , Reparación y No Repetición (SIJVRN) que también medió la creación de otras entidades como: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD).

que conllevo a que organizaciones de derechos humanos decidieron retirar sus archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)².

El sinsabor que le dejó a las víctimas este nombramiento, se debe a que Acebedo como historiador ha negado en repetidas ocasiones la existencia del conflicto armado en Colombia, postura que limitaría su objetividad, además, de ir en contra de las demandas y las motivaciones de las víctimas en la construcción y entrega de estos archivos a la institución, ya que muchos de estos se enuncian como memorias del conflicto armado.

Por otro lado, ante este escenario de desconfianza, la discusión frente a los archivos que hacen referencia al conflicto armado en Colombia ha cobrado mayor relevancia y visibilidad como objeto de análisis que se hace evidente desde la organización de eventos como: el Congreso virtual de Memoria, derechos humanos y buenas prácticas en archivos universitarios y de investigación organizado por la universidad de los Andes o el III Seminario de Archivos, Derechos Humanos, Memoria Histórica y Transparencia a cargo del CNMH, eventos que no sólo movilizan el debate en torno a los archivos, sino que destacan la importancia del abordaje de estos en la actualidad.

En relación con lo anterior, es necesario destacar que los archivos que hacen referencia al conflicto armado en Colombia tienen un gran valor como estrategia de memoria, no solo frente al resguardo de los diferentes elementos que posibilitan el evocar un recuerdo o favorecer proceso de transmisión generacional, sino desde el lugar de importancia que estos cobran dentro de organizaciones sociales en la defensa de los derechos humanos, como prueba en el ámbito de la justicia y su poder para erigir unas formas de recordar dentro del escenario público, además de, contribuir en la construcción de sentidos frente al pasado reciente.

Problema de investigación

² El 3 de marzo del 2020 en la revista Semana con el titular “Retiran del Centro de Memoria archivos de 25 años de guerra en Colombia” se informa que la Asociación Minga con el retiro de sus archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) llevó a cabo una acción que organizaciones de víctimas como el Comité de Derechos Humanos de Bojayá o la Unión Patriótica habían anunciado con casi un año de antelación motivados por el inconformismo frente al (El tiempo, 2019).

El archivo es una materialidad maleable, es decir que es un elemento que en su dimensión tanto física como simbólica y discursiva está propenso a manipulación, y se halla en constante transformación ya que en la medida en que transita por diferentes lugares de creación y custodia, como hogares, museos, bibliotecas, centros de archivo, cárceles, hospitales, entre otros; pasa de ser la “huella” o el registro de un acontecimiento relacionado con la cotidianidad o momentos coyunturales de los colectivos, a tener un rol constitutivo dentro de las formas en que se configura el presente. Esto desde la comprensión del archivo como un lugar de memoria, de conocimiento y/o de justicia, especialmente en contextos transicionales, que implican transformaciones en su composición, estructura, usos, y los discursos que media, en concordancia con aquellos que lo poseen y que “moldean” una comprensión del pasado desde el manejo del archivo.

Lo anterior implica reconocer que el archivo es un ejercicio de poder - saber que produce maneras de entender y configurar subjetividades, esto se debe a que ,como lo afirma Foucault (2005) es un sistema de enunciación, que “es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares” (p. 219). Además, según Castro (2018) comentando a Foucault “las reglas del archivo” también determinan la conservación, la rememoración, la reactivación y la apropiación de los enunciados dentro de los discursos.

De los autores mencionados se puede comprender que, a partir de los archivos, así como se media la aparición y permanencia de unos enunciados, se reglamenta la negación, el silenciamiento u olvido de otros dentro de este sistema.

De acuerdo con lo anterior, Rufer (2016) desde una mirada poscolonial del archivo afirma que a pesar de su capacidad de “hablar” y de la legitimidad que lo caracteriza como soporte del pasar del tiempo, no lo cuenta todo, “crea silencios y reproduce secretos; sobre ellos solo podemos trabajar, si acaso, proponiendo el interrogante como herramienta epistémica y política” (p. 93), es decir, cuestionarlo en relación a lo que dice, propone, pero también acerca de lo que calla y se oculta bajo la superficie de sus discursos, en los usos que se le han dado y el mismo proceso de su creación, “preguntando por quiénes y para quiénes habla el archivo, qué miradas legítima, qué cuerpos acalla, qué códigos de valor sobre los

cuerpos invisibiliza, para qué secretos perdurables trabaja y sobre qué silencios descansa su reproducción meticulosa” (Rufer, 2016, p. 94).

Las ideas expuestas, nos permiten reafirmar que el archivo se encuentra enmarcado en un ejercicio de poder-saber que se establece sobre los sujetos y las formas en que estos son representados, en este sentido “el poder, parece, tiene que entenderse aquí no solo en términos de explotación económica y de coerción física sino también en términos culturales o simbólicos más amplios, incluyendo el poder de representar a alguien o algo de cierta forma dentro de cierto “régimen de representación”” (Hall, 2013, p. 444).

Por lo que, el “interrogante como herramienta epistémica” que propone Rufer (2016) nos permitiría cuestionar este poder y hacer del archivo una condición de posibilidad, para comprender las formas en que los sujetos son representados y producidos a partir de este. Asimismo, el archivo también es una condición de posibilidad en la medida en que los grupos sociales y los sujetos archivan su propia vida configurando representaciones del mundo y de sí mismos desde el resguardo de sus memorias, a partir de procesos de archivación empíricos e independientes, configurados como formas de disputar o establecer interpretaciones de sus pasados en el escenario público o dentro de la misma escritura de la historia.

De esta manera, la posibilidad de visualizar lo que proyecta y visibiliza, pero también lo oculto, el silencio y el secreto que contiene el archivo, el archivar y sus discursos, también potencia una disputa por el pasado en especial en escenarios de conflicto armado donde “las borraduras y olvidos pueden ser también producto de una voluntad o política de olvido y silencio por parte de actores que elaboran estrategias para ocultar y destruir pruebas y rastros...” (Jelin, 2002. p. 27), por lo que, según Jelin (2002) “una reacción social al temor a la destrucción de huellas se manifiesta en la urgencia de la conservación, de la acumulación en archivos históricos, personales y públicos” (p. 29).

Es así como, la consolidación de archivos se hace presente como una estrategia de memoria familiar, colectiva e histórica, en momentos de conflicto armado o violaciones sistemáticas a los derechos humanos como en el caso colombiano, ya que estos desde el resguardo del pasado permiten el surgimiento de sus diferentes versiones e interpretaciones. De esta

manera, los archivos pueden llegar a configurar políticas de la memoria, al incidir en las interpretaciones del pasado de diferentes grupos sociales o disputando las formas en que se recuerdan estos escenarios de conflicto que en ocasiones parecen innombrables, estableciendo formas de comprender lo pretérito.

Por esta razón, en Colombia, el archivo que hace referencia al conflicto armado se convierte en una herramienta fundamental para el acceso a la verdad y a la justicia, ya que su creación o resguardo permite rescatar las pruebas de lo ocurrido antes de que se borren, y con su preservación adquieren un gran valor al momento de interponer una denuncia, buscar los rastros de una persona desaparecida, en la construcción de sentidos frente a situaciones de violencia, exponer las versiones de las víctimas o para disputar su lugar en la construcción histórica de ese pasado violento.

Por lo que, el archivo desde su resignificación hace parte de las disputas por la construcción de discursos frente al pasado, las formas de comprender el presente y lo porvenir (Jelin, 2002). De este modo, en relación al conflicto armado interno en Colombia y la dificultad de comprender esta situación de violencia, que se ha extendido por más de seis décadas hasta el presente, el archivo es un puente en esa construcción de sentidos.

El conflicto armado colombiano³ es complejo e inacabado, ya que como se afirma en el informe general del Grupo de Memoria Histórica (GMH) (2013) “Se trata de una guerra difícil de explicar no solo por su carácter prolongado y por los diversos motivos y razones que la asisten, sino por la participación cambiante de múltiples actores legales e ilegales, por su extensión geográfica y por las particularidades que asume en cada región del campo y en las ciudades, así como por su imbricación con las otras violencias que azotan al país” (p. 19).

³ En relación con la idea de conflicto armado persisten diferentes interpretaciones como: guerra sucia, guerra contra la sociedad, violación a los derechos humanos y responsabilidad del estado; desde las posturas teóricas propuestas por Rodríguez y Sánchez (2009). Adoptar estas posturas destaca la responsabilidad del Estado Colombiano en el surgimiento, la extensión territorial y temporal del conflicto. Con esto no se busca restarles importancia a los diferentes actores del conflicto, sino hacer evidente que la lucha antisubversiva y la represión política ha sido un eje articulador del conflicto armado en Colombia, debido a que a lo largo de este se han hecho presentes múltiples estrategias que buscan erradicar al enemigo interno, atentando contra la población civil y dando paso a múltiples violaciones a los derechos humanos.

Sumado a esto, los actores del conflicto armado colombiano son variados en cuanto a contexto de origen, expansión territorial, acciones y permanencia en el tiempo. Entre estos estarían: guerrillas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- EP)⁴, el Ejército de Liberación Nacional (ELN)⁵, el Movimiento 19 de abril (M 19)⁶ y el Ejército Popular de Liberación (EPL)⁷. Otros de los actores del conflicto colombiano serían los grupos paramilitares⁸, el narcotráfico⁹, además del estado a través de las Fuerzas Armadas¹⁰.

Estos actores armados han perpetuado diferentes violaciones a los derechos humanos entre las que estarían: asesinatos, reclutamiento forzado, el uso de minas antipersonales, masacres, violencia sexual, secuestros, extorsión, desplazamiento forzado, desaparición forzada, entre otros, ejecutados como mecanismos de control y subordinación sobre las poblaciones, dejando “daños emocionales y psicológicos, daños morales, daños políticos y daños socioculturales” (GMH, 2013, p. 259), además, de daños ambientales.

⁴ El accionar de esta guerrilla inició en 1965 y se extiende hasta la actualidad, donde se hacen presentes algunas disidencias, tras la firma de los acuerdos de paz entre las FARC- EP y el gobierno en el año 2016.

⁵ El Ejército de Liberación Nacional (ELN) surgió en 1962 en el Magdalena Medio por iniciativa de un grupo de estudiantes colombianos (Chacón y Sánchez, 2006, p. 204). Según Aguilera (2006) esta “es una guerrilla eclipsada por el poderío militar que demostraron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)” a la cual se le pronosticaba un final desde los años noventa. Además, ha participado en varios procesos de paz fallidos.

⁶ El Movimiento 19 de abril (M-19) surgió en 1973 tras el fraude electoral del 19 de abril de 1970 y en 1990 comenzó su proceso de desmovilización negociado con el entonces presidente Belisario Betancourt (Mendoza, 2013, p. 276)

⁷ Esta guerrilla tiene su origen “en 1967 como brazo armado del Partido Comunista” (Peco y Peral, 2005, p. 45) y se desmovilizó en 1991, haciéndose presentes posteriormente algunas disidencias (GMH, 2013, p.124).

⁸ Su surgimiento se da en los ochentas y parte de dos factores decisivos, en primer lugar, estaría la inconformidad de “latifundistas y ganaderos, los cuales, asediados por la guerrilla, deciden organizar grupos de autodefensas, para que éstos combatieran a la subversión conjuntamente con el Ejército” (Sánchez y Chacón en Mendoza, 2013, p. 292), a esta inconformidad también se sumaron grupos narcotraficantes como financiadores.

⁹ “El narcotráfico tiene su auge en los inicios de los años 70’s con la bonanza del comercio de la marihuana, a partir de esta época empezaron a aparecer los famosos carteles del narcotráfico, como fueron los carteles de Medellín En cabeza de Pablo Escobar Gaviria, el cartel de Cali liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, el cartel del Norte del Valle liderado por la familia Henao, grupos narcoterroristas como las FARC y el ELN” (Pereira, 2010, p.5).

¹⁰ Las Fuerzas Armadas han estado implicadas de múltiples formas con el conflicto armado, por un lado, en la lucha contra los grupos al margen de la ley y por otro, como parte de estos, al ser asociados con las autodefensas desde el entrenamiento y dotación de armas a estos grupos, de esta manera son parte de los victimarios en la medida en que atentaron contra la población civil. (CNMH, 2013, p. 416).

Frente a estas violaciones a los derechos humanos se han conformado iniciativas tanto de instituciones públicas como de la sociedad civil que buscan salvaguardar, comprender y difundir las memorias de lo ocurrido durante el conflicto armado. Algunas de las iniciativas institucionales partieron de lo que Castillejo (2020) ha denominado “tecnologías globales de transición política” (p. 122), como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que surge con la Ley 975 de 2005 o “Ley de Justicia y Paz” en el marco de la negociación del gobierno de Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el año 2002. Además, como parte integral de la CNRR nació el Grupo de Memoria Histórica (Castillejo, 2020, p. 122), actualmente integrado al Centro Nacional de Memoria Histórica que tiene como parte de sus funciones la configuración de una serie de informes públicos sobre el conflicto armado en Colombia (GMH, 2013, p. 397) y el resguardo de documentos referentes al conflicto armado desde el Archivo de los Derechos Humanos, entre otras funciones.

Un proceso de transición política más actual sería el proceso de paz llevado a cabo durante el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc- Ep que se firmó en el 2016. Este se está implementando en la actualidad y tiene como parte de los acuerdos la creación de un sistema de justicia transicional que integra una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)¹¹, la Comisión de la Verdad¹² y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos¹³ (Espectador, 2018) cada uno de estos mecanismos de justicia, busca desde sus funciones esclarecer la verdad frente a las diferentes violaciones a los derechos humanos que se dieron en el marco del conflicto con las Farc- Ep, como en el caso de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos que pretende dar con el paradero de personas dadas por desaparecidas.

¹¹ La jurisdicción Especial para la Paz “tendrá la función de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, y conocerá de manera preferente sobre las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, y en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos” (<https://jepvisible.com/la-jep/que-es>)

¹² Es “un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad” (<https://comisiondelaverdad.co/>).

¹³ La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos tiene la misión de “buscar humanitaria y extrajudicialmente a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado para aliviar el sufrimiento de quienes buscan, y contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y la reparación, como aporte a la construcción de paz” (<https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/acerca-de-la-busqueda/#cont-mv>).

Por otro lado, estarían las iniciativas que parten de la sociedad civil las cuales, mediante procesos colectivos u organizativos desde el archivo, configuran las memorias del conflicto armado exigiendo justicia para sus comunidades o familiares, como el archivo de la Asociación de Familiares de los hechos Violentos de Trujillo Valle (Asfavit)¹⁴ o la Galería de la memoria de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes)¹⁵.

Una de las violaciones a los derechos humanos en las que se han enfocado estas iniciativas de memoria es la desaparición forzada, que ha sido uno de los mecanismos de terror usados por grupos armados, para obtener control territorial. Es de resaltar que según los casos registrados por la Comisión de la Verdad el número de desapariciones forzadas en Colombia es de 121.768 entre 1985 y 2026 y los mayores perpetradores de este crimen “son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 52 % de las víctimas, seguidos de las FARC-EP, el 24 % de responsabilidades (sumando las víctimas de ELN y otras guerrillas, se llega al 27 %). En tercer lugar se encuentra la categoría de responsables «múltiples» con el 9 % de las víctimas, mientras que los agentes estatales son responsables del 8 % de las víctimas” (Comisión de la Verdad, 2022c, p. 189).

En relación con lo anterior, para el CNMH (2016) la desaparición forzada se entiende como:

[...] Aquella modalidad de violencia desplegada intencionalmente en un contexto de extrema racionalización de la violencia, que consiste en la combinación de privación de libertad de la víctima, sustracción de esta del amparo legal y ocultamiento de información sobre su paradero, en que pueden ser responsables tanto los Estados nacionales, como los grupos armados ilegales que la incorporan a su repertorio en el marco de su actividad criminal (p. 38).

¹⁴ Este archivo se encuentra en el Parque Monumento a las Víctimas en Trujillo Valle y fue conformando por los habitantes del municipio, que también integran la asociación, estas personas se organizaron tras una serie de hechos violentos que perduraron por años, en los que perdieron a integrantes de sus familias y comunidad (García, 2019).

¹⁵ Es de destacar que “entre las primeras expresiones organizativas para la recuperación de la memoria está la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos –ASFADDES –, que en los años ochenta amplió su repertorio expresivo al incorporar el recurso a la memoria a través, por ejemplo, de la Galería de la memoria” (GMH, 2013, p. 390).

Las características de este hecho victimizante según Asfaddes (2003) acarrearán múltiples efectos dentro de las sociedades, como: la dificultad de llevar a cabo un proceso de duelo ante el hostigamiento y la ausencia de respuestas sobre el paradero de la persona desaparecida, afectaciones en la salud física y mental de los familiares debido a la incertidumbre y el desamparo. También se da como consecuencia una desconfiguración de los colectivos y los modos de vida conocidos, ya que las familias se ven desarticuladas por el impacto de la pérdida, el cambio de su estructura, y el desplazamiento o exilio al que se deben someter algunos de sus integrantes debido a amenazas y atentados contra sus vidas con el fin de suspender sus procesos de búsqueda. Por otro lado, estaría el empeoramiento de las condiciones de vida y la situación económica.

Además, las familias deben lidiar con su criminalización y la de las personas desaparecidas, dañando su reputación y atentando contra su identidad¹⁶. Por esta razón, los archivos cobran gran valor en la búsqueda de la persona desaparecida, ya que en Colombia en muchos casos los familiares deben encargarse de recolectar las pruebas de la desaparición para poder hacer la denuncia o que esta tenga credibilidad.

De esta manera, frente al fenómeno de la desaparición forzada y las problemáticas que acarrea, surgen procesos organizativos que reúnen a personas que atraviesan la misma situación, colectividades que “se han encargado de caracterizar y estudiar la desaparición forzada, promoviendo su comprensión” (CNMH, 2016, p. 339), además de brindar apoyo en los procesos de búsqueda y exigir justicia para las personas desaparecidas.¹⁷

Entre estos procesos organizativos se encuentra Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) la primera asociación de este tipo, que se organizó en 1982 en Bogotá. Esta asociación crea una red de apoyo de familiares de víctimas de desaparición

¹⁶ Esto se hizo evidente en la investigación de Romero (2015), que hace referencia a las personas desaparecidas durante la toma y retoma del palacio de justicia por parte del M-19 en 1985, ya que como lo afirma la autora, se asume que las personas desaparecidas tienen una relación con el grupo guerrillero M-19, por lo que los familiares se ven obligados a asumir un silencio en cuanto a lo que le pasó a su familiar y hasta su identidad.

¹⁷ Uno de los grandes logros de las organizaciones de familiares de desaparecidos es la tipificación del crimen de desaparición forzada en el año 2000 (Asfaddes, 2003).

forzada a nivel nacional, por medio de diferentes seccionales que se consolidaron en las regiones del país¹⁸ y a nivel internacional desde el apoyo de organizaciones de derechos humanos internacionales como la Federación latinoamericana de asociaciones de familiares de detenidos- desaparecidos (FEDEFAM).

Una de las seccionales es la de Asfaddes Bucaramanga, en la que se atienden los casos de 80 municipios del departamento de Santander. Esta seccional surge en 1988, debido a que la desaparición forzada en esta zona del país se estaba tornando como algo recurrente¹⁹ y estaba dirigida hacia estudiantes, líderes sindicales, militantes y poblaciones vulnerables, entre otros, llevada a cabo por agentes del Estado, paramilitares y grupos de limpieza social²⁰.

Es de destacar que los archivos dentro de Asfaddes y sus seccionales son de gran importancia como parte de procesos de denuncia pública, ante instancias gubernamentales y estamentos judiciales, o como “lugares de memoria”. En relación con lo primero, en Asfaddes fue necesaria la consolidación de archivos como parte de la documentación de casos, ya que “ante la negación gubernamental desde sus inicios Asfaddes tuvo que asumir la tarea de demostrar la evidencia, es decir que en Colombia sí existían las desapariciones forzadas y comprobar que eran cientos y no casos aislados” (Asfaddes, 2003, p. 41), asimismo los familiares se veían obligados a buscar las pruebas antes de que se borrarán y archivarlas, recolectar los testimonios de la desaparición, recorrer diferentes instituciones como medicina legal, hospitales, cárceles y hallar indicios, para de esta manera apoyar la denuncia y obtener apoyo en el proceso de búsqueda del familiar desaparecido. Además, la documentación de estos casos era presentada por Asfaddes ante instancias internacionales

¹⁸ Según Mesa (2019) en las seccionales de Asfaddes se realiza el seguimiento a los casos de los desaparecidos, el apoyo a los familiares mediante asistencia legal, acompañamiento y formación social, y se instauran las denuncias públicas.

¹⁹ Según Acebedo, Mejía y Correa (2020) “durante los años ochenta se registraron cerca de 2000 casos de asesinatos y desapariciones forzadas en Santander” (p.187).

²⁰ Acebedo, Mejía y Correa (2020) afirman que “la mayoría de estos hechos fueron responsabilidad de grupos de limpieza social, como la Mano Negra, el Escuadrón de la muerte; grupos paramilitares como Muerte a Expendedores de Bazuco (MEB), Muerte a Secuestradores (MAS), Toxicol 90, los Magníficos; y agentes del Estado como F-2, B-2, organismos de inteligencia, Ejército en alianza con paramilitares, DAS, Grupo de Operaciones Especiales del Ejército (GOES), y Comando Antiextorsión y Secuestro del Ejército (CAES)” (p.187).

de derechos humanos como la ONU, que hacía un registro de los casos colombianos y transmitía las denuncias al gobierno, obteniendo como respuesta en múltiples ocasiones la negación o justificación de las desapariciones al relacionar a las personas desaparecidas con guerrillas o narcotraficantes.

Respecto a lo segundo, una forma de presentar y apropiar el archivo dentro de la asociación partiría de su uso dentro de la Galería de la memoria²¹ que busca, como lo expone Asfaddes (2003) a partir de la intervención del espacio público, la “reconstrucción de la memoria histórica del delito de la detención – desaparición forzada” (p. 106). Esta intervención es reconocida por algunos familiares como un “ritual simbólico” (Asfaddes, 2003, p. 107), por lo que, de acuerdo a los planteamientos de Pierre Nora (2008) puede ser asumida como un “lugar de memoria” ya que, como lo afirma el autor, se trata de “un lugar puramente funcional, como un libro didáctico, un testamento, una asociación de ex combatientes [que] solo entra en la categoría si es objeto de un ritual” (p. 33).

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que en Asfaddes desde los archivos se empiezan a establecer unas narrativas e interpretaciones sobre el pasado reciente, así como una serie de prácticas de representación que configuran la desaparición forzada y al desaparecido.

Esto a través de una serie de estrategias o modos de administración y comprensión del pasado conocidos como políticas de la memoria, que refieren a un conjunto de iniciativas que se dan dentro del escenario público con el objetivo de “conservar, transmitir y valorizar el recuerdo de determinados aspectos del pasado considerados particularmente significativos o importantes” (Groppo, 2002, 192), además, de “modelar la memoria pública y construir, así, un cierto tipo de identidad colectiva” (Groppo, 2002, 192).

Lo anterior, según Rabotnikof (2007) se da “a través de medidas de justicia retroactiva, juicios histórico- políticos, la instauración de conmemoraciones, fechas y lugares, apropiaciones simbólicas de distinto tipo” (p. 261). Esto se relaciona con el caso de

²¹ La Galería de la memoria de Asfaddes se basa en la exposición de una serie de retablos con las fotografías de los desaparecidos en espacios públicos.

Asfaddes, ya que en la medida en que se configuró la asociación, se establecieron una serie de acciones de denuncia en el escenario público, por medio de marchas, plantones, fechas y eventos de conmemoración, y la exposición de objetos o fotografías.

Frente a lo situado desde Groppo (2002) y Rabotnikof (2007), podemos afirmar que Asfaddes contribuye en la configuración de unas políticas de la memoria, esto a partir de la instauración de unas formas de interpretar y comprender el conflicto armado en el escenario público donde, además, se hacen presentes una serie de representaciones de los desaparecidos y de la situación de la desaparición forzada en Colombia.

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se desarrollará en torno al archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga, debido a que a lo largo de su historia ha desarrollado una ardua labor de documentación frente a los casos de desaparición forzada.

En atención a lo anterior, la pregunta principal de la investigación es la siguiente:

¿Cuáles representaciones sobre los desaparecidos y la desaparición forzada se configuran en los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga (1982 - 2016) y de qué maneras inciden en las políticas de memoria sobre el conflicto armado en Colombia?

Y se proponen como preguntas derivadas

- ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que han mediado la configuración de las representaciones de los desaparecidos y la desaparición forzada en el archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga?
- ¿Qué transformaciones han tenido las formas de representar al desaparecido(a) y la desaparición forzada desde los archivos en Asfaddes seccional Bucaramanga y cuáles son los acontecimientos que han mediado estos tránsitos?
- ¿Cuáles actores sociales, institucionales y oficiales han interpelado el archivo de Asfaddes Bucaramanga?
- ¿Cuáles iniciativas públicas lleva a cabo Asfaddes seccional Bucaramanga desde sus archivos para visibilizar a los desaparecidos y a la desaparición forzada y cuáles usos le ha dado?

Objetivo General

Analizar las representaciones que se configuran acerca de las personas desaparecidas y la desaparición forzada en los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga (1982 - 2016) y su incidencia en las políticas de la memoria sobre el conflicto armado en Colombia.

Objetivos específicos

- Identificar las condiciones de posibilidad que han mediado la configuración de las representaciones de los desaparecidos y la desaparición forzada dentro del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga.
- Caracterizar las transformaciones han tenido las formas de representar al desaparecido(a) y la desaparición forzada desde los archivos en Asfaddes seccional Bucaramanga y los acontecimientos que han mediado estos tránsitos.
- Identificar a los actores sociales, institucionales y oficiales que han interpelado el archivo de Asfaddes Bucaramanga.
- Analizar las iniciativas públicas llevadas a cabo por Asfaddes seccional Bucaramanga desde sus archivos, los usos e interpretaciones del desaparecido y la desaparición forzada que a través de ellas movilizan.

Estado del Arte

Los trabajos que integran este balance se hallaron principalmente en repositorios institucionales como el de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de la Plata Argentina, la Universidad Industrial de Santander; Google Académico y bases de datos en línea como Scielo, Flacso, Academia.edu y Dialnet. Los términos de búsqueda fueron: estrategias de memoria simbólicas que llevan a cabo los familiares de personas

desaparecidas.²² Es necesario resaltar que la elaboración de este estado del arte contribuyó a redefinir el objeto de estudio de esta investigación.

De esta manera, se encontraron 24 trabajos resultados de investigación, entre los que se hallaron: 4 tesis de maestría, 18 artículos publicados en revistas científicas virtuales y 2 capítulos de libro. Los textos revisados corresponden al periodo entre los años 2005 y el 2020, y espacialmente las investigaciones se enfocaron en seis países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Chile, México, Perú y Ecuador.²³

El balance se organiza en cinco tendencias temáticas cada una de las cuales se analiza teniendo en cuenta: una breve descripción de la forma en que fueron abordados los ejes temáticos, la perspectiva conceptual, los enfoques metodológicos y los principales resultados. Para finalizar se presentará una serie de reflexiones en torno a los procesos investigativos revisados.

Lo fotográfico en la desaparición forzada

Las investigaciones consultadas que se relacionan con lo fotográfico frente a la desaparición forzada²⁴ centraron sus ejes de análisis en imágenes que devienen de procesos familiares u organizativos, entre sus preocupaciones estarían sus usos, su lugar en la

²² En el proceso de búsqueda se fueron ajustando los términos, así la palabra estrategias se reemplazó por: mecanismos, agenciamientos, afrontamiento, así mismo se añadían palabras como: en madres, en hijos, en hermanos, desde objetos, archivo, fotografía, prácticas textiles o escritura, esto con el fin de incluir un mayor número de trabajos relacionados con la temática de interés.

²³ De Argentina se encontraron 12 investigaciones, en Colombia 6, Chile 3, México 2, Perú 1, Ecuador 1. Frente a las tendencias temáticas el tema con mayor recurrencia fue el de lo fotográfico con 7 trabajos investigativos, seguido por posmemoria con 6, narrativas con 4, archivo con 3 y objetos con 2, además se hicieron presentes temas emergentes como habitar y género hallando un trabajo de cada uno. Es necesario resaltar que hay un volumen importante de trabajos referidos a la desaparición forzada en especial en países como Argentina o Chile, sin embargo, aquí solo se incluye una pequeña parte. Además, las investigaciones encontradas responden a ocho campos de estudio, siendo la antropología el más reiterativo con 6 investigaciones, seguido por los estudios literarios con 4, en tercer lugar, estarían los estudios de género, psicología, las ciencias sociales con 3 investigaciones en cada campo, mientras que de los estudios de la comunicación se hallaron 2 investigaciones, por último, se halló una investigación de archivística, bibliotecología y de sociología.

²⁴ Las investigaciones se titulan: “Cuerpo ausente, imagen presente: usos de la fotografía en la asociación de familiares de detenidos desaparecidos Asfaddes - Seccional Medellín” de Mesa (2019), “Reconstrucción de la memoria a partir de los objetos de los desaparecidos en Quito” de Rivas (2017), “«Fue así como se fue» El álbum fotográfico familiar como espacio para representar y reconocer a las víctimas de la violencia en el Perú” de Figueroa (2016), “Lucila Quieto, hijos atravesando el paisaje: Imágenes para construir el recuerdo añorado” de Larralde (2013), “Re-velar el horror. Fotografía, archivos y memoria frente a la desaparición de personas” de Da Silva Catela (2012) “Madres constructoras de memoria: uso del performance para la presentación de sí mismas y la representación de sus hijos desaparecidos en Facebook” de Cepeda (2020) y “Detenidos Desaparecidos: Ausencia y presencia a través de la imagen fotográfica” de Soto (2009).

reconstrucción de memorias, las transformaciones a las que se ven sometidas y las representaciones que configuran de las personas desaparecidas y sus familiares.

En relación con las formas en que se concibe lo fotográfico, frente a las investigaciones que toman como objeto de análisis el álbum familiar, se establece una comprensión desde autores como Bourdieu y Sontag como ritos sociales y domésticos que hacen parte de las formas en que lo colectivos se narran. Mientras que los trabajos que analizan archivos que devienen del ámbito familiar, pero en la actualidad le pertenecen a alguna institución o proceso asociativo, se define el archivo fotográfico desde una noción de vehículo de memoria o producción cultural.

En estos trabajos, frente al uso de las fotografías se reflexiona que este se ha centrado principalmente en la denuncia pública, buscando la reivindicación de la lucha y recuperación de la identidad de los desaparecidos, que así mismo puede servir como instrumento para iniciar procesos de sanación y catarsis. Del mismo modo, exponer los objetos y fotografías en espacios públicos tiene un gran alcance al generar rupturas en la cotidianidad de estos espacios.

También se resalta que una de las características importantes en las fotografías de los desaparecidos, es la modificación que se hace en ellas sacándolas de su contexto, al ponerlas en pancartas, carteles o camisetas que circulan en pro de la búsqueda.

Por otro lado, las representaciones de las personas desaparecidas que se producen desde lo fotográfico se desarrollan en torno a la reivindicación, pero también permiten exhibir la problemática de la desaparición forzada.

Posmemoria y transmisión generacional en contextos de desaparición forzada

Las investigaciones que toman como eje de temático la posmemoria o la transmisión generacional²⁵, se enfocan en procesos de construcción de memorias familiares, que

²⁵ Las investigaciones que se relacionan con la posmemoria y transmisión generacional se titulan: “Nuestros/as desaparecidos/as sí existen: fotografías y narrativas familiares en torno a los hechos del Palacio de Justicia” de Romero (2015), “La desaparición forzada de personas a cuarenta años del Golpe de Estado en Chile: un acercamiento a la dimensión familiar” de Azcárraga, Benavente, Cárdenas y Faúndez (2016), “Recuperando los recuerdos de Cristóbal Triana: un acercamiento crítico a la desaparición forzada desde la posmemoria” de Triana (2019), “Procesos de recuperación y negación de la voz filial en las poéticas

principalmente se relacionan con hijos de personas desaparecidas y tienen por eje de análisis, los usos del pasado, la reconstrucción de identidades y silencios o quiebres en la memoria familiar.

Frente a la comprensión del concepto la posmemoria se conceptualiza desde Hirsch²⁶ entendida como: el vínculo que se genera entre el pasado de los colectivos con los de las nuevas generaciones, construyendo lo que sería una memoria familiar que en ocasiones se ve mediada por traumas, con los que las nuevas generaciones se identifican desde la emotividad, pero contando con una distancia temporal con los hechos, que le permite a esta nueva generación acercarse a los pasados desde una mirada crítica.

Como parte de estas investigaciones, se concluye que al extenderse temporalmente el proceso de la búsqueda del familiar desaparecido, se da la vinculación de nuevas generaciones que se cuestionan frente a la identidad del familiar desaparecido para reconocer sus propios pasados, de manera que, esta transmisión permite la resignificación del pasado en especial cuando este lleva consigo traumas. Del mismo modo, se resalta que las transmisiones generacionales implican nuevos diálogos con el pasado, posibilitando un intercambio entre las generaciones desde lo estético.

Construcción de narrativas en relación con la desaparición forzada

Dentro de esta tendencia temática²⁷ se sitúan investigaciones que analizan producciones narrativas de familiares de personas desaparecidas y procesos organizativos en relación con

de hijos de desaparecidos. La colección de poesía "Los Detectives Salvajes" de Tavernini (2016) La quinta investigación es la de Vaisman llamada "Posmemoria y memoria desaparecida en dos obras de la posdictadura argentina" (2017) y "Representando la ausencia en la Argentina de la postdictadura. Reformulaciones del álbum familiar en los proyectos fotográficos de hijos de desaparecidos" de Quílez (2016).

²⁶ Esto podría deberse a que como lo afirma Quílez (2016) fue Hirsch quien acuñó en primer lugar el término posmemoria, para referirse a las memorias que eran transmitidas a la generación posterior al Holocausto.

²⁷ Las investigaciones que toman como eje temático las narrativas se titulan: "Lugar de hija, lugar de madre. Autoficción y legados familiares en la narrativa de hijos de desaparecidos en Argentina" de Peller (2016), "Histori(et)ar la memoria: sobre Historietas x la identidad, un proyecto de Abuelas de Plaza de Mayo" de Sabán (2017), "Narrativas Familiares y Memoria de la Pos-dictadura en Argentina: El Caso de HIJOS de Desaparecidos" de Cepeda (2013) y "Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional por medio de prácticas textiles en el conflicto armado colombiano" de Aranguren y Bello (2020).

la transmisión de memorias y la construcción de sentidos a partir de diferentes prácticas narrativas.

En relación con la forma en que se conciben las narrativas, se comprende que estas prácticas van más allá de un producto, ya que este trabajo implica una catarsis emocional y la construcción de memorias sociales, que lleva inmerso unas intenciones de cuidado y colectividad.

Como parte de las conclusiones relacionadas con las narrativas, se establece que construir un proceso de transmisión de memorias desde lo narrativo implica que las nuevas generaciones puedan reconstruir su identidad, además, de la adopción de nuevos lenguajes con los cuales se pueda materializar un dolor que no puede ser narrado con palabras. Por otro lado, frente a la producción de narrativas configuradas por los familiares de las personas desaparecidas se considera que estos procesos posibilitan la creación de vínculos sociales que se basan en la colaboración y el cuidado.

Archivos como resguardo del recuerdo de los desaparecidos

Las investigaciones que toman como eje temático el archivo²⁸, se centran en procesos documentales elaborados por familiares de personas desaparecidas y organizaciones, de esta manera, centran sus problemáticas en los usos que se hacen de los archivos y la forma en que estos contribuyen en la construcción de narrativas.

Como parte del abordaje conceptual de estas investigaciones, sitúa el archivo como un lugar de memoria desde Pierre Nora, entendiéndolo como un espacio material o inmaterial donde la memoria se cristaliza. Por otro lado, este también es entendido como un elemento biográfico, debido a la carga testimonial que acarrea el archivo que se analiza.

En cuanto a los hallazgos más importantes, frente a los usos del archivo se señala que entre estos se halla la acción de la denuncia, memoria, patrimonio, además, de su lugar en la creación artística y procesos de investigación. Del mismo modo, se destaca que los

²⁸ Las investigaciones relacionadas con este eje temático se titulan: “¡Archivar para resistir! Fondos Fabiola Lalinde y Asfavit” de García (2019), “Memoria, restitución y prácticas de la transmisión: El Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo” de Medina (2013), “Mirar el archivo con ojos de mar: un modo de hacer memoria sobre Daniel Omar Favero” de Bossié (2019).

archivos pueden generar una tensión entre lo personal subjetivo y los relatos sociales que entran en juego como parte de la construcción de la memoria y de la historia.

Objetos de los desaparecidos

En relación con las investigaciones que se relacionan con los objetos²⁹, se destaca que estas parten por establecer estos elementos como artefactos en la construcción de memoria que además cuentan con unos usos, trayectorias y nuevos sentidos tras la desaparición forzada de su propietario.

Dentro de estas investigaciones se comprende que los objetos³⁰ tienen un carácter de representación en el que se establecen las prácticas mnémicas, en especial en los casos donde se recuerda al familiar ausente. Por otro lado, los objetos son comprendidos como una materialidad singular que acompaña la desaparición, ya que estos adquieren nuevas formas a través del vínculo y las relaciones sociales en las que se ven implicados, siendo testimonios de la existencia de aquel ausente y lo que le sucedió.

Dentro de los resultados de estas investigaciones, se concluye que los objetos son una parte importante en los escenarios de conmemoración realizados en los espacios de memoria, como museos, monumentos, cementerios, marchas e instalaciones, pero también se destaca que son objetos que se hallan descontextualizados y fuera de su uso preconcebido debido a la desaparición forzada.

Emergencias conceptuales

Durante el proceso de elaboración del estado del arte, se hicieron presentes dos temas emergentes, que, a pesar de no ser muy reiterativos, brindan aportes a la comprensión de unas estrategias simbólicas de memoria frente a la desaparición forzada, estos temas son el género y el habitar.

²⁹ Las investigaciones que tienen como eje temático los objetos relacionados con la desaparición forzada se titulan: “Materializando la desaparición: la singularidad de sus cosas” de Casado, Castillejo, Díaz y Ruiz (2018) y “Voces de los objetos. Encrucijadas y desafíos en contextos de memoria y conmemoración en Chile. 1990 al presente” de Bustamante (2016).

³⁰ En este caso los objetos a los que se hace referencia son elementos personales que acompañan la desaparición como ropa, documentos personales o elementos de supervivencia.

Frente al género en relación con la desaparición forzada³¹ se indaga acerca de el “papel que juegan las construcciones culturales predominantes de lo femenino y lo masculino en la forma en que las mujeres son victimizadas en medio del conflicto armado y específicamente en medio de los procesos individuales o colectivos de búsqueda de sus familiares” (p. 504)³².

La conceptualización de género se apoya en Espinal Ruiz (2003) que afirma que “consiste en una interpretación cultural del sexo, es decir, el conjunto de expectativas sociales depositadas sobre los roles a desempeñar por hombres y mujeres: lo que se espera de ambos” (Espinal citado por Enciso, 2017, p. 27).

Dentro de las principales conclusiones de este trabajo se encuentra que la búsqueda de la persona desaparecida, para las mujeres se convierte en una forma de confrontar los roles de género que se les habían impuesto.

Por otro lado, frente a la investigación relacionada con el habitar frente a la desaparición forzada³³, esta indaga por los efectos que tiene la desaparición forzada en las configuraciones espaciales del hogar. La comprensión del habitar dentro de esta investigación se sitúa a partir de Harrison quien afirma que “el habitar implica que toda relación social se produce en el espacio y es espacial” (p. 325). Por otro lado, se entiende desde Bachelard que “habría un habitar que ha sido aprendido a partir de una experiencia primera y singular de la casa” (Colombo, 2007, p. 325).

Por último, dentro de este artículo se concluye que la desaparición forzada genera una fractura dentro de los hogares y la vida cotidiana, estableciendo la necesidad de reivindicar la normalidad en la que la constante es la desaparición que altera el vínculo con los espacios.

³¹ La investigación se titula “Género, resistencia y desaparición forzada: Una mirada a través de la construcción de trayectorias de vida” Enciso (2017).

³² Esto se logra desde los relatos de cinco mujeres pertenecientes a Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) seccional Bucaramanga, evidenciando el papel que juegan las ideas hegemónicas dentro de la construcción de roles de género que desempeñan tanto hombres como mujeres.

³³ La investigación se titula: “(Des)habitar: la inscripción espacial de la desaparición forzada en la casa” de Colombo (2007).

A manera de balance general del estado del arte, es posible señalar, en primer lugar, que la identidad y las representaciones fueron temas que, aunque no se hicieron presentes como ejes temáticos dentro de las investigaciones sí fueron recurrentes dentro las problemáticas y reflexiones planteadas dentro de las investigaciones revisadas.

Frente a la identidad, este tema hizo parte de las investigaciones que están enfocadas en los hijos de los desaparecidos, ya que se hace evidente una necesidad por reconstruir la identidad del familiar desaparecido (padres o madres) que así mismo termina contribuyendo con la construcción de su propia identidad. Mientras que en relación con la representación, esta se halla principalmente dentro de investigaciones que hacen referencia a las fotografías y objetos de las personas desaparecidas. Además, es de resaltar que las representaciones dentro de estas investigaciones surgen como parte de los problemas referidos a la desaparición forzada, ya que en algunos casos tras la desaparición, las familias se ven obligadas a ocultar muchos aspectos de la vida del familiar que vivió este crimen.

Frente a las estrategias que llevan a cabo las familias para recordar a sus desaparecidos se encontró que estas parten de lo cotidiano, personal y familiar (en ocasiones se empiezan a configurar antes de la desaparición como elementos de rememoración familiar), desde el resguardo o configuración de elementos que permitan recordar, transmitir generacionalmente o llevar a cabo procesos de catarsis dentro de estos contextos privados. Sin embargo, estos salen a la esfera pública, pasando a ser estrategias de rememoración colectiva.

De esta manera, los temas recurrentes que se encontraron en la búsqueda corresponden, por un lado, a estrategias de memoria como es el caso de: lo fotográfico, el archivo y las narrativas. Mientras la posmemoria, pertenece a las intencionalidades dieron paso a su configuración o cuidado.

Para finalizar, se hace evidente que si bien el archivo surge como una de las estrategias de memoria que configuran los familiares tras la desaparición forzada puede llegar a ser considerado como un contenedor de otras estrategias como lo fotográfico o las narrativas, así mismo puede verse atravesado también por la posmemoria. En relación con esto, el

estado del arte se configuró como un elemento fundamental en la configuración del problema de esta investigación, ya que a partir de lo anterior se reelabora y se formula asumiendo el archivo como tema de investigación.

Capitulación

Esta tesis se divide en cuatro capítulos, en el primero se presenta la conceptualización de las categorías centrales de esta investigación: archivos, representaciones sociales y políticas de la memoria. Dentro de este capítulo, también se presenta el planteamiento metodológico de la investigación.

En el segundo capítulo se presenta una contextualización de forma nacional y regional de las condiciones socio históricas del conflicto armado colombiano, sus actores, una aproximación a la situación de la desaparición forzada en el país, y por último, se desarrollan las iniciativas sociales y oficiales en torno a los archivos que documentan las violaciones a los derechos humanos.

En el tercer capítulo, se presenta la caracterización y análisis del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga, en relación con las formas de representar a las personas desaparecidas y a la desaparición forzada, sus continuidades y transformaciones, en relación con las condiciones sociopolíticas y culturales que posibilitaron el establecimiento de estas representaciones dentro del marco temporal que establece la genealogía de Gonzalo Sánchez (2018) frente a los discursos de la memoria en Colombia.

En el cuarto capítulo, se desarrolla una caracterización de las imágenes que componen el archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga, para posteriormente, plantear los tránsitos y transformaciones a las que se han visto sometidas. También, se presentan los usos públicos que se le han dado a las imágenes que componen el archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga, las formas en que estos usos dialogan con las representaciones que se configuraron dentro de los casos o expedientes y su influencia en la configuración de unas políticas de la memoria frente a la persona desaparecida y la desaparición forzada.

Por último se presentan unas conclusiones que pretenden dar respuesta a la pregunta de investigación frente a las representaciones de las personas desaparecidas y de la desaparición forzada y su influencia en la configuración de unas políticas de la memoria frente al conflicto armado en Colombia, y unas reflexiones finales.

CAPÍTULO 1:

REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

En este capítulo se presenta la conceptualización de las principales categorías que sustentan la investigación: el archivo, las representaciones y las políticas de la memoria y la propuesta metodológica de la investigación.

1.1. Referentes teóricos

1.1.1. Archivos y producción de representaciones de sujeto

El archivo ya no existe solo como la presencia de lo ausente, ahora, además de evocar o evidenciar el pasado, hace parte de lo que configura el conocimiento de las sociedades. Esto se debe a que el archivo se ha visto transformado y ampliado en cuanto a configuración, materialidad y significados, haciéndose presentes nuevas formas de archivo que no solo abarcan los documentos escritos (pues también incluye objetos personales, video grabaciones, audios o imágenes y documentos digitales), como tampoco se restringe a espacios institucionales o gubernamentales.

Para comprender las diferentes transformaciones que ha tenido la idea de archivo, este será abordado desde tres perspectivas. En primer lugar, desde la historia y la archivística, en segundo lugar, a partir de las reflexiones generadas con “el giro archivístico” que marca un tránsito en las formas de comprender el archivo establecidas por las dos primeras. Por último, el archivo como constructor de representaciones sociales, las tres atravesadas por la idea de poder que se encuentra arraigada al archivo.

Respecto a la primera perspectiva, es necesario establecer que la historia y la archivística están “ligadas desde su nacimiento al Estado” (Suarez, 2012, p. 137), al poder y a una mirada positivista, otorgándole al archivo un carácter de verdad, además, de una idea de imparcialidad y objetividad que devienen de una concepción moderna.

Aunque, según Rufer (2016) “el Estado-nación (occidental, poscolonial, latinoamericano) tiene una relación paradójica con el archivo. Por un lado, no hay Estado sin “sus” archivos que lo legitimen y le den plena existencia en el continuo temporal. Por otro, el archivo es una amenaza latente para el Estado” (p. 91), en la medida en que el archivo se vuelve un instrumento de revelación que desde la aparición de otras voces termina por narrar las versiones que fueron silenciadas, los sujetos que fueron excluidos, reprimidos y subordinados, y aquello que parecía haber sido olvidado. Elementos que permanecían ocultos bajo la legitimidad del archivo.

Esto se debe, a que como lo afirma Rufer (2016) “los usos del archivo dentro de la disciplina histórica desde el siglo XIX remiten a la noción de “resto” como “evidencia”” (p. 87), por lo que para esta disciplina el archivo se enmarca en una noción de “prueba”, aquello que da cuenta de un acontecer y permite reafirmar su existencia. De la misma manera dentro del campo de la archivística “durante mucho tiempo se ha subrayado únicamente el carácter probatorio del documento de Archivo” (Sánchez, 2020, p. 187).

De lo anterior, se puede comprender que el archivo es definido desde esta perspectiva como evidencia de lo que se halla en el pasado, atribuyéndole legitimidad, totalidad, continuidad temporal, la presencia del ausente (Rufer, 2016), objetividad e imparcialidad (Sánchez, 2020). Principios ligados a una idea de autoridad, que hacen del archivo una institución que al contener la verdad parece ser incuestionable. Sin embargo, estas características en la actualidad resultan problemáticas, ya que como lo afirma Rufer (2016) “ya nadie sostiene (al menos no de forma confesa) que el archivo puede dar cuenta de todo” (p. 88), reconociendo que “el archivo crea silencios y reproduce secretos” (Rufer, 2021, p. 93) que reposan en la autoridad que se le ha atribuido.

Además, Sánchez (2020) reflexiona que “la gestión y preservación de los archivos no es de ninguna manera una labor neutra, sino que responde a una serie de decisiones y acciones

que en última instancia terminan por condicionar la existencia de los materiales” (p. 198), por lo que, la configuración de los archivos no se da de forma inocente y responde a los intereses de sus creadores o custodios definiendo las formas de entender el pasado, ya que como lo afirman Schwartz y Cook (2002) “a través de los archivos, el pasado es controlado” (p. 1). De esta manera, es necesario reconocer que el archivo y las instituciones que lo custodian, tienen una gran influencia en la escritura de la historia configurando formas de entender el pasado desde el presente.

Lo anterior, se relaciona con los planteamientos de Suarez (2012) quien afirma que la historia como disciplina y el archivo se hallan ligados desde su surgimiento con el nacimiento de la escritura, pero su relación no es estática, ya que el acercamiento de la historia “a las otras ciencias sociales ha aportado paulatinamente al establecimiento de marcas de ruptura y actualización (...) [que] definen en la actualidad una nueva visión del papel social de la historia, del documento y de su manejo metodológico para la construcción de los estudios históricos” (Suarez, 2012, p. 161). Otro determinante en la transformación de esta disciplina, es su relación con la epistemología que se basa en la toma de una postura reflexiva y crítica, a partir del “Giro crítico”³⁴ de la historia que se da en un momento en que esta ha emprendiendo un trabajo de redefinición de la misma.

Por otro lado, la archivística, aunque aún continúa ligada al poder en mayor medida que la historia, “auspiciando conceptualizaciones que suponen la veracidad y autenticidad de los documentos” (Suarez, 2012, p. 161), también ha tenido transformaciones dividiendo su enfoque entre lo tradicional y lo posmoderno. La archivística posmoderna, según Cordero (2020), reflexiona frente a las “potencialidades de los archivos y el papel social que deben jugar estos” (p. 36). Dando apertura a otras voces dentro de los archivos y reconociendo que la labor del archivista no es neutra.

Desde el campo de la historia y la archivística, se hace evidente que las múltiples transformaciones que han tenido las sociedades influyen en los modos de percibir los

³⁴ Este “Giro crítico” ocurre entre 1988 y 1989 bajo la influencia de la Escuela de los Annales, como “una epistemología para tiempos de incertidumbre, justamente, en un momento en que la historia ha emprendido “un trabajo de redefinición de sus proyectos y de sus prácticas” (Hartog, 2007, p. 140).

archivos, ya que, con el auge de las culturas de la memoria³⁵ y los cambios en las formas de archivar, a partir de la incursión las nuevas tecnologías; estos dejan de ser concebidos como un contenedor incuestionable de las huellas del pasado, para ser abordados desde una postura crítica frente a su contexto de creación y contenido. Lo anterior hace necesario afirmar que uno de los principales cambios que ha tenido el archivo se halla en lo epistemológico, desde su reconocimiento como “un dispositivo fundamental en la construcción del conocimiento histórico y la administración del poder político; lo cual se ha dado a llamar giro archivístico” (Sánchez, 2020, p. 83).

De esta manera, el giro archivístico, identificado como una segunda perspectiva de análisis, puede ser entendido desde Sánchez (2020) “como un cúmulo de propuestas teórico-metodológicas que en las últimas décadas han transformado el sentido en que el archivo es analizado desde diferentes disciplinas” (p.185). Esto hace que, a este, se le atribuya una gran carga teórica pasando a ser considerado un objeto de estudio que acarrea un proceso (Castillejo, 2016 y Sánchez, 2020). Por lo que, se hace preciso poner en consideración sus orígenes, los modos en que se archiva y los mediadores, esto permite replantear aquellos imaginarios positivistas que permean los archivos, como el carácter de objetividad y totalidad.

Por otro lado, el acontecer del giro archivístico no es inadvertido, ya que está ligado a una serie de factores que influyeron en esta transformación, como lo serían: la consolidación de la archivística como campo profesional y académico (en los años setenta)³⁶, la irrupción de las tecnologías como una nueva forma de configurar archivos (en las décadas de los ochentas y noventas)³⁷, la influencia de la crítica poscolonial que cuestiona las verdades

³⁵ Por culturas de la memoria nos referimos desde Huyssen (2001) a la transformación en las formas de percibir el tiempo, que se hizo evidente en un cambio de prioridades para estas sociedades, ya que el foco que antes había estado puesto en la idea de futuro y progreso da un giro hacia el pasado y la memoria.

³⁶ Esto da paso al surgimiento del archivero como experto profesional desde la consolidación de programas de educación a nivel de posgrado en estudios de archivo en universidades, fomentando la actividad académica y profesional (Cook, 2013).

³⁷ Este momento se ve marcado por el “cambio del registro de la información de soportes físicos a digitales, que los estudiosos de la Archivística tuvieron que enfrentar para las décadas de los 80 – 90 del siglo XX” (Mena, 2015, p. 25).

que se imponen desde los archivos³⁸ y la importancia de estos como parte de procesos de justicia transicional en países del Cono Sur, desde el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos (Sánchez, 2020)³⁹.

Por otro lado, estaría la influencia de dos pensadores: Michael Foucault y Jacques Derrida, que son “claves en la conceptualización del Archivo” (Sánchez, 2020, p. 193). En relación al primero, según Tello (2016) el pensamiento de Foucault está íntimamente relacionado con los archivos, siendo el primero en concebirlo fuera de lo objetual, por lo que para Foucault (2005) el archivo no es “la suma de todos los textos que una cultura ha guardado en su poder como documentos de su propio pasado...” (p. 112) sino “un sistema de enunciabilidad” (p. 112), mientras que desde Derrida en Rufer (2016) se entiende que “el archivo puede ser, por supuesto, guardián de la memoria, pero también puede ser su alter ego más traicionero” (p. 89), es decir que para Derrida (1997) este es efímero, destructible y está perseguido por la pulsión de la muerte que, “siempre habrá sido destructora del archivo, por vocación silenciosa” (p.7), esta sería una de las razones de la misma acción de archivar, resguardar el pasado del olvido, a pesar de que en mismo archivar o la “fiebre de archivo” abarca esta muerte.

Cada uno de estos elementos marca un tránsito en las formas en que el archivo es percibido, pasando de ser considerado una evidencia del pasado a ser definido como un “sistema de enunciabilidad” que rige la ley de lo que puede ser dicho (Foucault, 2005), por lo tanto, media la escritura de la historia y hace parte de la producción de conocimiento.

Por último, para establecer a los archivos como productores de representaciones, es necesario entender que “el Archivo es, ante todo, una construcción social” (Sánchez, 2020, p. 191) lo que significa que se ve mediado por un cúmulo de factores que responden al

³⁸ La crítica poscolonial se basa en “un enfoque crítico hacia los archivos coloniales durante los últimos 15 años, sería un compromiso ante la idea de leer los archivos coloniales “a contracorriente”” (Stoler, 2010, p. 478).

³⁹ Esto se da a partir de la apertura de los “archivos de la represión” en diferentes países del Cono Sur como “los archivos del terror en Paraguay o los de las policías políticas en Brasil o los de la policía bonaerense en Argentina o los archivos relacionados al campo religioso, como Clamor en Brasil y la Vicaría de la Solidaridad en Chile, despertaron y despiertan la curiosidad de periodistas, la sed de justicia de las víctimas, de organizaciones de derechos humanos y abogados, el interés investigativo de historiadores, científicos políticos, sociólogos y, por supuesto, el deseo de diversas instituciones y sus agentes en ser sus guardianes y vigías” (Da Silva Catela, 2002, p. 396).

grupo social por el que es configurado como, cultura, clase social, enfoques políticos, etc., por lo que, no cuenta con un carácter de neutralidad, “sino que responde a una serie de decisiones y acciones que en última instancia terminan por condicionar la existencia de los materiales” (Sánchez, 2020, p. 198) y las diferentes representaciones del pasado y los sujetos que se instituyen a partir de estos.

De esta manera, “la producción y preservación tanto del documento como del Archivo hacen parte de una patente voluntad por construir una representación del pasado particular, ya que el origen y operación del Archivo remite tanto a una necesidad de información como a los valores de las clases gobernantes que los gestionan” (Restrepo, 2021, p. 191). En este sentido, Sánchez (2020) establece que las formas en que se representa el pasado desde el archivo se ven mediados por las clases gobernantes, esto se debe a que como lo afirma Derrida en Stoler (2010) “no existe poder político sin el control de los archivos” (p.195). Por lo que desde la configuración y resguardo de estos se establecen formas de representar, configurando desde el discurso formas de comprender el pasado y a los sujetos, legitimando unas versiones sobre otras, acallando e invisibilizando ciertas corporalidades y, manteniendo silencios y secretos (Rufer, 2016).

Sin embargo, los archivos que devienen de los gobernantes o del Estado, no son los únicos que configuran representaciones, ya que los procesos archivísticos personales y comunitarios, también están cargados de una serie de representaciones en función de lo que se quiere recordar o los discursos que median los archivos. Según Giraldo (2019), este tipo de archivos “contribuyen a la representación de sociedades diversas y plurales, por ende, facilitan el reconocimiento de los diferentes grupos sociales de sus memorias e identidades” (p. 16). Su principal característica es la participación de la comunidad en su configuración, además de que son archivos que se crean para “ser utilizados intensamente, por ejemplo, en respaldo de las luchas por el reconocimiento de derechos, en la construcción de memorias o en el fortalecimiento de la comunidad” (Giraldo, 2019 p. 16). Por otro lado, cuando los archivos dan cuenta de hechos de violencia que se desarrollan en el marco del conflicto armado son comprendidos como archivos de derechos humanos, que de acuerdo con lo consignado en el protocolo de gestión documental de la información, son documentos y archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones de derechos humanos e

infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, por lo que, “comprenden las agrupaciones documentales de diversas fechas y soportes materiales, reunidas o preservadas por personas, entidades públicas y privadas, del orden nacional e internacional, cuyos documentos testimonian y contribuyen a caracterizar las graves violaciones de los Derechos Humanos, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y hechos relativos al conflicto armado” (AGN y CNMH, 2017, p. 21).

Del mismo modo, es de resaltar el rol de las imágenes del archivo en la configuración de una representación del pasado, ya que como lo afirma Da Silva Catela (2012) “la imagen sirve como soporte al recuerdo, cuando ese momento fue vivido por quien observa la fotografía, y como vehículo de memoria cuando se reconstruye desde el presente de identidades comunales o étnicas” (p. 77). Sin embargo, estas imágenes al igual que los archivos documentales como parte de los procesos de representación están sujetas a reinterpretaciones a partir de los usos que se les dan y los discursos que median, al igual que las condiciones socioculturales en las que se presentan.

Por esta razón, se hace presente la necesidad de analizar el archivo como un proceso más que como un objeto, ya que desde este punto de vista la indagación del archivo abarca su creación, la forma en que se ha transformado en el tiempo, las personas que los han mediado, los discursos que configuran y los lugares donde han sido resguardados, para llegar a comprender las representaciones que se establecen a partir de este. Además, dentro de esta investigación se comprende que el archivo tiene una amplia carga epistemológica, por lo tanto, permite la construcción de conocimiento y la comprensión de fenómenos sociales que se hallan no solo en su contenido, sino también en los procesos de su configuración y en los usos que se hacen de este.

1.1.2. Las representaciones, los archivos y la memoria

Las representaciones son construcciones de sentido desde el lenguaje que se establecen en las sociedades (Halla, 2013). Estas pueden partir de la expresión de ideas reales, ficcionales

o abstractas, construirse desde lo visual, lo escrito, lo discursivo o sonoro y son interpretadas por diferentes interlocutores que desde su experiencia buscan su comprensión, ya que como lo afirma este mismo autor: “El sentido *no está* en el objeto, persona o cosa, ni está en la palabra. Somos nosotros quienes fijamos el sentido de manera tan firme que, después de cierto tiempo, parece ser una cosa natural e inevitable” (p. 464). Por lo que, “el sentido es *construido por el sistema de representación*” (Hall, 2013 p. 464).

Los sistemas de representación que sitúa Hall (2013) son dos, el primero parte de la representación mental que dota de sentido el mundo de cada sujeto de forma interiorizada, dentro de este se podrían encontrar los pensamientos o los recuerdos, mientras que el segundo es el lenguaje, que es relacional y comunicativo. Se puede afirmar que ambos procesos son complementarios, dado que es necesario el lenguaje para poder comunicar y así mismo “es la cognición que del mundo tiene cada persona lo que hace posible la actuación” (Vázquez, 2001, p. 83).

La constitución de memorias, suponen un proceso representacional, ya que “recordar implica apelar a una imagen, a una impresión, instalada en su interior” (Vázquez, 2001, p. 85), que no depende únicamente de los sujetos, sino del contexto y del colectivo. Esto se debe a que, todo sujeto es social y toda experiencia es situada, lo que implica que la mayoría de los recuerdos están permeados por un colectivo. De esta manera, es el lenguaje como sistema de representación, el que media las relaciones entre los grupos y crea un puente entre el mundo de los pensamientos y el de las acciones. Por lo que, el lenguaje es considerado la “función colectiva por excelencia del pensamiento” (Halbwachs, 2004, p. 89).

Frente a la relación de los procesos de representación y el lenguaje, se hace evidente la importancia de las imágenes como parte de la configuración de representaciones a partir de un lenguaje visual mediante el cual las imágenes son asumidas como signos visuales que remiten a un sentido, es decir que “aun aquellas que tienen una semejanza estrecha con las cosas a las cuales se refieren, son signos: portan sentido y por tanto deben ser interpretados” (Hall, 2013, p. 263) desde un lenguaje compartido.

En relación con lo anterior, se entiende que para llegar a una comprensión de las formas en que los grupos sociales configuran diferentes representaciones frente a sujetos o situaciones que marcan su devenir, es necesario partir reconociendo que el representar tiene como base una amplia carga cultural, ya que como lo afirma Hall (2013) “la representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura” (p. 459). Por lo que, las formas en que se representa, no son decisión de un individuo, sino que forman parte de procesos de socialización, como bien podrían ser la alfabetización o la evangelización, que buscan dotar a las personas de unos sentidos de mundo compartidos, no necesariamente desde procesos voluntarios, haciéndose evidente las relaciones de poder que median las representaciones, tema que será abordado más adelante.

Con el fin de ampliar la discusión frente a los procesos de representación, se sitúan tres enfoques o teorías propuestas por Hall (2013) que serían: la *reflectiva*, la *intencional* y la *construccionista*. Frente a la primera, se hace referencia a la idea de que “el lenguaje funciona como un espejo que refleja el verdadero sentido tal como existe en el mundo” (p. 466), pero esta perspectiva es objeto de crítica, dado que se afirma que las representaciones no son el reflejo verídico de los sujetos, los acontecimientos o las cosas.

Por otro lado, dentro de la segunda, se “sostiene que es el hablante, el autor, quien impone su sentido único sobre el mundo a través del lenguaje” (Hall, 2013, p. 467), esta teoría tiene sentido en la medida en que se habla de representaciones subjetivas, que se ven permeadas por los pensamientos, recuerdos o sentires de los sujetos, dando paso a la representación como forma de expresión. Desde una postura similar, Moscovici (1961) establece que “toda representación es una representación de alguien. Dicho de otro modo, es una forma de conocimiento a través de la cual el que conoce se coloca dentro de lo que conoce” (p. 43). Es decir, que las representaciones que elaboran los sujetos o sociedades son el reflejo de sí mismas, en la medida en que se colocan como punto de referencia para construir y comprender el mundo.

Por último, el tercer enfoque es el que “reconoce este carácter público y social del lenguaje” (Hall, 2013, p. 467) dentro de los procesos de representación, ya que se afirma que “son los actores sociales los que usan los sistemas conceptuales de su cultura y los sistemas lingüísticos y los demás sistemas representacionales para construir sentido, para hacer del mundo algo significativo, y para comunicarse con otros, con sentido, sobre ese mundo” (Hall, 2013, 467). Este enfoque constructivista, destaca que las formas de representar y el sentido que se les atribuye devienen del lenguaje, de ahí que sus dos modelos para comprender las representaciones sean el semiótico y el discursivo. A continuación, se desarrollarán estas ideas.

El enfoque semiótico está influenciado por el pensamiento de Saussure configurándolo como el “estudio de los signos en la cultura, y de la cultura como una especie de “lenguaje”” (Hall, 2013, p. 477) y se basa en la idea de que “todos los objetos culturales conllevan sentido, y todas las prácticas culturales dependen del sentido, todos entonces deben hacer uso de los signos” (p. 478). De esta manera la semiótica percibe un mundo cargado de signos, que tienen o pueden adquirir un sentido desde lo social.

Es de resaltar que estos signos a los que hace referencia la semiótica, no se limitan a la palabra textual o hablada, ya que para Saussure en Hall (2013) la combinación entre significante y significado es lo que se conoce como signo, elementos necesarios para la construcción de sentidos dentro de las representaciones. Esta combinación puede atribuírsele a diferentes elementos de la vida social, como bien podría ser un archivo, ya que este puede ser leído desde un carácter denotativo como objeto/ significante es decir un archivo en sí mismo. Este es “el nivel simple, básico y descriptivo donde el consenso es amplio y donde la mayoría de la gente está de acuerdo con el sentido” (p. 479), pero al ser cuestionado como forma de representación desde un carácter *connotativo* “estos significantes que hemos sido capaces de ‘descodificar’ en el nivel simple mediante el uso de clasificaciones convencionales (...) para leer su sentido, entran en un código más amplio...” (Hall, 2013, p. 479), por lo que, el significante es objeto de una mirada más profunda en busca del significado. En el caso del archivo, su significado podría hacer referencia a la vida y obra de una persona, institución o una sociedad.

Por otro lado, el análisis de las representaciones desde lo discursivo, parte de comprenderlas “como fuente de la producción de conocimiento social, un sistema más abierto, conectado de modo más íntimo con prácticas sociales y asuntos de poder” (Hall, 2013, p. 482). Por lo que, se entiende que lo discursivo, no se limita a los actos de habla o escritura, sino que hace parte de un sistema determinado de relaciones sociales. Esta forma de abordar las representaciones se basa en autores como Michael Foucault, quien afirma que el campo del análisis del discurso:

Se trata de captar el enunciado en la estrechez y la singularidad de su acontecer; de determinar las condiciones de su existencia, de fijar sus límites de la manera más exacta, de establecer sus correlaciones con los otros enunciados que pueden tener vínculos con él, de mostrar que otras formas de enunciación excluye. No se busca en modo alguno, por bajo del manifiesto, la garrulería casi silenciosa de otro discurso; se debe mostrar por qué no podía ser otro lo que era, en qué excluye a cualquier otro, cómo ocupa, en medio de los demás y en relación con ellos, un lugar que ningún otro podría ocupar (Foucault, 2005, p. 45).

Frente a lo anterior, se hace evidente que las representaciones en el ámbito de lo discursivo circulan al interior de un sistema relacional, donde diferentes formas de representación se conjugan o confrontan desde la negación, supresión, normalización o afirmación de una serie de “enunciados” que se establecen sobre otros. Es así que, se comprende que el poder es una característica de los sistemas de representación, ya que a partir del reconstruir acontecimientos y hacer inteligible aquello que parece extraño o distante para un grupo social, mediante la relación o comparación de diferentes elementos con otros, se configuran formas de comprender el mundo desde una perspectiva determinada.

Además, es necesario reconocer que las diferentes formas de representación al igual que los archivos, no son neutrales, por lo que, es necesario analizar las representaciones desde el contexto de su creación y en los casos en que se hace referencia a hechos históricos revisar las condiciones que lo posibilitaron (Genschow, 2017). Por otro lado, según Hall (2013)

“las cosas significan algo y son “verdaderas” (...) *solo dentro de un contexto histórico específico*’ (p. 477), por lo que, el contextualizar las representaciones, permite obtener una mirada de las formas en que se pensaba y se dotó de sentido una serie de representaciones al momento de su creación, aunque en la actualidad carezcan de él.

Para finalizar este apartado, se considera necesario establecer que en el marco de esta investigación las representaciones se abordan desde la perspectiva *construccionista* planteada por Hall (2013) retomando especialmente los aportes de Foucault, ya que a partir de este autor se puede comprender la manera como los enunciados o formaciones discursivas mediadas por las relaciones de poder que están en juego en la configuración de los archivos instituyen sujetos y subjetividades.

1.1.3. Políticas de la memoria y del olvido

En relación con las políticas de la memoria y su abordaje, se halla en las culturas de la memoria un referente que permite comprender la activación del interés por el pasado como anhelo en lo cotidiano y como objeto de investigación.

Las culturas de la memoria se configuran a partir de la transformación en las formas de percibir el tiempo, que se hizo evidente en un cambio de prioridades, ya que el foco que antes había estado puesto en la idea de futuro y progreso da un giro hacia el pasado y la memoria. Según Huyssen (2001) esto se debe, en primer lugar, a “los cambios tecnológicos, los medios masivos de comunicación, los nuevos patrones de consumo y la movilidad global” (p. 28). Lo anterior, implica una aceleración frente a la perdurabilidad, obsolescencia y desaparición de las cosas o modos de vida, por lo que, se genera una distorsión en las formas de percibir el espacio - tiempo, dando paso a la necesidad de una estabilidad que es hallada en el pasado.

Por otro lado, “las culturas de la memoria se relacionan estrechamente, en muchos lugares del mundo, con procesos democratizadores y con luchas por los derechos humanos que buscan expandir y fortalecer las esferas públicas de la sociedad civil” (Huyssen, 2001, p.

36). Esto podría deberse a que, como lo afirma Huyssen (2001), las culturas de la memoria devienen de “la década que siguió al colapso de la Unión Soviética y al fin de la Guerra Fría, a la caída del muro de Berlín y a la reunificación alemana, al fin de las dictaduras militares latinoamericanas y del Apartheid...” (p.7). De esta manera, se comprende de dónde surge el interés por las formas en que se configura el pasado y que tras momentos coyunturales que marcan las historias de las sociedades, surge la necesidad colectiva de resguardar la memoria de lo acaecido, desde su irrupción en el presente y la conciencia de su influencia en el futuro, a partir de las políticas de la memoria.

En relación con lo anterior, las políticas de la memoria pueden ser comprendidas de diferentes maneras, como: “paradigm” o paradigma (Verovšek, 2016)⁴⁰, “gestión del pasado” (Rabotnikof, 1993)⁴¹ o “una acción deliberada” (Groppo, 2002)⁴². Estas pueden ser establecidas por: “los gobiernos o por otros actores políticos o sociales con el objetivo de conservar, transmitir y valorizar el recuerdo de determinados aspectos del pasado considerados particularmente significativos o importantes” (Groppo, 2002, p. 192). Además, de “modelar la memoria pública y construir, así, un cierto tipo de identidad colectiva” (Groppo, 2002, p. 192).

Es así como se da un arraigo al pasado, por medio de estrategias que consisten en erigir recordatorios públicos y privados (Huyssen, 2001, p. 24), desde “conmemoraciones y rituales, construcción de monumentos, preservación de determinados “lugares de memoria”, creación de instituciones encargadas de la conservación y transmisión de la memoria (archivos, museos, centros de documentación, institutos de investigación), programas escolares, toponimia, etc” (p. 193). Así mismo, “una mercantilización de la memoria” a

⁴⁰ Esta comprensión implicaría un estudio de las políticas de la memoria desde lo discursivo centrándose principalmente en “the interactive processes by which ideas are conveyed” (Verovšek, 2016, p. 164). Traducción: “los procesos interactivos mediante los cuales se transmiten las ideas” (Verovšek, 2016, p. 164).

⁴¹ Para Rabotnikof (2007) las políticas de la memoria gestionan y configuran unas formas de interpretar el pasado a partir de “medidas de justicia retroactiva, juicios históricos- políticos, instauración de conmemoraciones, fechas y lugares, apropiaciones simbólicas de distinto tipo” (p. 261).

⁴² Se podría afirmar que para Groppo (2002) las políticas de la memoria implican un actuar intencional que busca orientar la evolución de la sociedad desde el establecimiento de una identidad colectiva deseable (p. 190).

partir de su incursión en los medios de comunicación que alimentan aún más esta cultura de la memoria e incrementa la necesidad de vínculo con el pasado desde lo visual.

En relación con lo anterior, la imagen a partir de su hiperreproductibilidad y circulación, tiene una amplia influencia dentro de los modos de recordar y comprender el pasado, ya que como lo afirma Huyssen en Da Silva Catela (2012) “no hay conocimiento sin la posibilidad de ver, aun cuando las imágenes no pueden proporcionar un conocimiento total de lo ocurrido” (p. 77). De esta manera, la imagen se configura como dimensión material del recuerdo que al adquirir unos usos públicos se convierte en un medio de transmisión de memorias, ya que como afirma Feld (2010) frente a las imágenes relacionadas con la movilización de los familiares de personas desaparecidas en Argentina “la fotografía, concebida no sólo como imagen sino también como objeto, parece haber favorecido y alentado la movilización, tanto individual como colectiva, y haber permitido una gran multiplicidad de usos y discursos en torno a las experiencias del pasado” (p. 11). De esta manera, se comprende la influencia que pueden tener las imágenes dentro de la configuración de unas políticas de la memoria.

Por otro lado, estas políticas de la memoria y sus estrategias no carecen de intencionalidad, ya que, desde el lugar de poder de aquellos que las establecen, se empiezan a moldear los modos de recordar en la cotidianidad, ya que como lo afirman Barrera y Villa (2017) “las acciones de memorias también son producidas por agentes de poder, grupos políticos y económicos que construyen imaginarios sociales y narrativas del pasado, que buscan la cohesión social y la identificación con relatos históricos que definen un nosotros imaginado” (p. 154).

Esto nos lleva reflexionar frente a los lugares de poder que implican las políticas de la memoria, dado que, desde la incursión de los discursos de diferentes instituciones o colectividades políticas en lo público⁴³, se consolidan regímenes de representación del pasado que median las formas en que los sujetos y sus grupos sociales, narran, comprenden

⁴³ Desde Rabotnikof (1993) se exponen tres sentidos básicos asociados a lo público que serían: lo que es de interés común, segundo, lo que se desarrolla a la luz del día y es visible, por último, lo que es de uso común y abierto a todos. (Rabotnikof, 1993, p.79).

y se identifican con ese pasado. Pero, como afirma Rabotnikof (2007), “estas políticas de la memoria no son sólo las políticas oficiales, aunque estas tengan mayor capacidad de brindar marcos colectivos para la sociedad en su conjunto, sino también aquellas que los diferentes actores despliegan en el espacio público” (p. 261).

Frente a esto, se comprende que los grupos sociales a partir de iniciativas de memoria pública y procesos de socialización de distinto tipo, son partícipes de la configuración de políticas de la memoria, que median la identidad de las comunidades, los modos de recordar y, la construcción y difusión de unas versiones frente al pasado que pueden ser antagónicas a los discursos que se difunden desde lo estatal. Esta confrontación de memorias se considera necesaria para que puedan surgir en el ámbito público las memorias de los “otros” en contraposición o de forma complementaria a las memorias del Estado.

Por otro lado, las políticas del olvido son otra de las formas en que se hacen evidentes las relaciones de poder que median los procesos colectivos de rememoración. En este punto es necesario resaltar que el abordaje de la memoria es complejo y se ve mediado por diferentes procesos que más que confrontarse, son constitutivos, ya que se habla de unos olvidos que integran las formas de rememorar y de unas transmisiones cargadas de silencios, procesos que son determinantes en los modos de acercarse al pasado (Jelin, 2002).

De esta manera, las políticas del olvido son definidas por Groppo (2002) como la exclusión de una serie de acontecimientos o su eliminación de la memoria colectiva. Esto se daría, “evitando, por ejemplo, evocar determinados acontecimientos eliminándolos de los programas escolares, destruyendo las huellas materiales (edificios, documentos) del pasado que se pretende borrar y evitando que queden signos visibles que lo recuerden” (Groppo, 2002, p. 194), es decir, desde el borramiento de todo aquello que pueda evocar esas memorias.

Dentro de lo anterior, se hace presente una tensión entre memoria y olvido, donde lo que se recuerda es aquello que hace parte de los regímenes de enunciación, que, desde el establecimiento de unas formas de representación del pasado, automáticamente se niegan y

limitan la aparición de otros discursos. En relación con esto, Jelin (2002) afirma que esta relación común entre “memoria contra el olvido” o “contra el silencio” esconde lo que en realidad es una oposición entre distintas memorias rivales (cada una de ellas con sus propios olvidos), en verdad “memoria contra memoria” (Jelin, 2002, p. 6).

En correspondencia con el problema establecido frente a las representaciones que se producen acerca de las personas desaparecidas y la desaparición forzada dentro de los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga y su incidencia en las políticas de la memoria sobre el conflicto armado en Colombia, el marco conceptual presentado anteriormente toma como ejes teóricos los archivos, las representaciones y las políticas de la memoria.

Estos se ven mediados por unos discursos, ya que por un lado los archivos, son comprendidos como parte de un sistema de enunciabilidad que media aquello que puede ser dicho (Foucault, 2005), por otro lado, las representaciones dentro de esta investigación se sitúan desde una perspectiva *construccionista* que en una de sus líneas establece que las formaciones discursivas están mediadas por unas relaciones de poder que conforman los modos de representar a los sujetos o colectividades.

Por último, las políticas de la memoria, configuran las formas en que se recuerda o se promueve el recuerdo a partir de diferentes estrategias de socialización que buscan desde un lugar de poder establecer una mirada generalizada sobre el pasado, negando o invisibilizando otros discursos que parecen antagónicos.

1.2. Metodología

Desde el punto de vista metodológico esta investigación se elaboró retomando elementos del enfoque arqueológico – genealógico planteado por Foucault. Este deviene de una perspectiva posestructuralista, que deja de lado la estructura significado- significante como opción para dotar de sentido a los diferentes objetos de saber, ya que se asume que “la creación de significado es un proceso inacabado, un sitio de constante forcejeo –político–

donde se generan significados alternos y cuya firmeza es apenas temporal” (Gibson y Graham, 2002, p. 264).

De esta manera se comprende que los sentidos que les son atribuidos a los enunciados, por un lado, no son esenciales o una parte innata de estos, sino que “el significado se produce bajo condiciones sociales e intelectuales específicas y que el conocimiento no es un *reflejo verdadero* sino una fuerza productiva y constitutiva” (Gibson y Graham, 2002, p.265). Estas formaciones discursivas que dotan de sentido los enunciados no son estáticas, sino que se encuentran en constante redefinición. De ahí que, una de las relaciones que se establecen entre arqueología y genealogía, es que ambas buscan “escribir la historia sin referir el análisis a la instancia fundadora del sujeto” (Castro, 2018, p. 228).

Frente estas formas de relacionarse y comprender el “objeto de saber”, la arqueología se basa en la idea de que estos no anteceden al discurso, sino que por el contrario es este el que los conforma. Es decir “el objeto de un saber nunca es un dato inmediato sino el resultado de una confluencia de discursos y conceptos que funcionan como sus condiciones de posibilidad, la razón de su existencia” (Pérez, 2012, p. 470).

De esta manera la arqueología, se centra en aquello que potencia la emergencia de los discursos, desde la “exterioridad”, ya que se hace una revisión de las condiciones de posibilidad que median el que ciertos enunciados puedan ser pronunciados en un contexto determinado y así mismo, lo que permite su circulación.

Mientras que la genealogía, se fija en “la procedencia y las condiciones de emergencia de procedimientos históricamente acaecidos” (Hernández, 2010, p. 57), por lo que, se centra en acontecimientos que son puntos de referencia, marcan transiciones o en palabras de Foucault, busca “percibir la singularidad de los sucesos” (p. 1) en aquello que no aparece en la superficie de los enunciados como: “los sentimientos, el amor, la conciencia, los instintos” (Foucault, 2008, p. 1).

De ahí que, la genealogía tome por objeto “al sujeto mismo, en la medida en que es convertido en el objetivo de ciertos saberes, en el resultado de ciertos procesos de subjetivación” (Pérez, 2012, p.474). Por lo que, los sistemas de enunciabilidad como el archivo tienen un valor significativo en la medida en que es un proceso que construye a los sujetos, para el caso de este análisis al sujeto desaparecido.

En relación con lo anterior, podríamos afirmar que la arqueología y la genealogía como enfoques de investigación, aunque diferentes en cuanto a perspectiva de análisis, son complementarios. Esto se relaciona con las formas en que cada enfoque se acerca a los discursos, ya que, como lo afirma Hernández (2010) “mientras la arqueología describe el archivo de los sistemas de pensamiento que organizan las hegemonías epistemológicas de nuestro tiempo, la genealogía estudia las relaciones entre esas discursividades y su interrelación con otro tipo de procedimientos de poder que se ejercen sobre el cuerpo social” (p. 58).

De esta manera se entiende que la arqueología procede a partir de “la descripción del *archivo* de los sistemas de discursividad” (Hernández, 2010, p. 50) o como afirma Foucault (2005) “no es nada más y ninguna otra cosa que una reescritura, es decir en la forma mantenida de la exterioridad una transformación pautada de lo ha sido y ha escrito” (p. 285). En pocas palabras es mediante el proceso descriptivo que la arqueología da cuenta de las condiciones de posibilidad de los enunciados. Mientras que, la genealogía, aunque también cuenta con un carácter descriptivo, según Castro (2018) se trata más bien de un “método de interpretación” (p. 230).

Frente a lo anterior, el archivo analizado en el marco de esta investigación es el de Asfaddes seccional Bucaramanga, este se considera un archivo vivo y en movimiento que se ha visto permeado por tres momentos, que se detallarán en el siguiente capítulo:

- En primer lugar, la seccional es fundada oficialmente en 1989, sin embargo, los archivos empiezan a conformarse desde 1982 debido a los procesos de documentación que los familiares de las personas desaparecidas habían adelantado.

- Un segundo momento, se da en el 2016 cuando parte del archivo de Asfaddes Bucaramanga fue entregado al Archivo Oral de Memoria de las Víctimas (Amovi-UIS) de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y organizado por esta institución, debido a que la asociación no cuenta con las instalaciones adecuadas que garanticen la preservación y seguridad de estos documentos.

- Por último, se sitúa como un tercer momento el proceso de continuidad que le ha dado Asfaddes Bucaramanga a sus archivos hasta la actualidad, desde el seguir alimentando los acerbos que aún se contienen en la seccional.

En este punto es necesario destacar que el desarrollo de esta investigación con Asfaddes seccional Bucaramanga está mediado por la cercanía familiar que tengo con su coordinadora la cual se integró a la asociación en 1995 debido a que en 1994 su hijo fue desaparecido, esto es importante mencionarlo porque permite evidenciar el carácter situado y las implicaciones vitales que tiene esta investigación, ya que aunque se desarrolla en relación con un proceso asociativo incide en lo personal y marca una cercanía ética frente al dolor de las personas que se han visto afectadas con este crimen de lesa humanidad, de ahí, la necesidad del desarrollo de la misma.

De esta manera el archivo de esta seccional se clasifica de la siguiente manera a partir de los procesos desarrollados por Amovi-UIS:

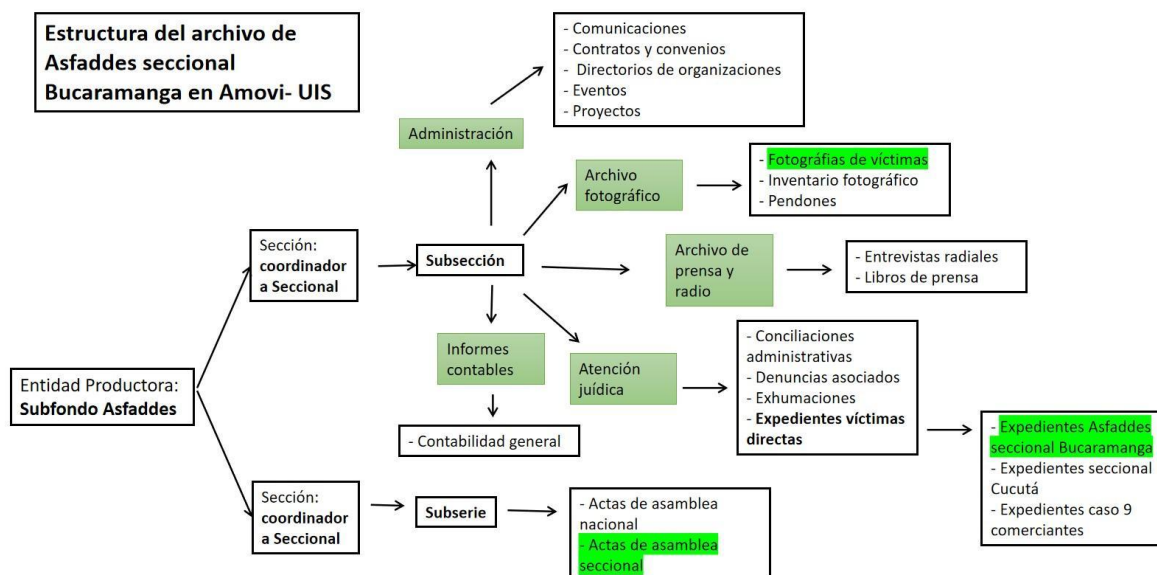


Figura 1. Estructura del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga en Amovi-UIS. Elaboración propia.

En relación con lo anterior, es necesario aclarar que el proceso de investigación se desarrolló en torno a tres subseries que serían: expedientes de Asfaddes seccional Bucaramanga (se analizaron 169 expedientes)⁴⁴ Actas de asamblea seccional (se revisaron 847 folios) y fotografías de las víctimas (se tuvo acceso a 72 fotografías). Para esto se desarrollaron dos procesos: frente a los documentos el análisis se hizo a partir de una matriz temática para el análisis documental.

#	Nombre de la Carpeta	Tipo de documento y referencias a los autores	Fecha de afiliación a la organización Asfaddes (organizar de más antiguo a más reciente)	Referencias textuales sobre el/la desaparecido y afines	Referencias textuales sobre la desaparición forzada y afines	Descripción (si existen en los documentos) de actores, condiciones socio-históricas, lugares, que permitan contextualizar las referencias textuales sobre el	Descripción de la o las imágenes que acompañan el documento (si existen)	Análisis preliminar de las representaciones del desaparecido y la desaparición y de sus contextos de producción
---	----------------------	---	--	---	--	--	--	---

⁴⁴ En relación con el análisis de los documentos consignados en los expedientes, es necesario aclarar que a los fragmentos que se citan se les hizo una modificación ortográfica en pro de una mejor comprensión.

						desaparecido o la desaparición		

Tabla 1. matriz temática para el análisis de documentos. Fuente. Creación propia.

Por otro lado, las imágenes aunque también fueron estudiadas a partir de matrices, fue necesaria la configuración de un proceso de análisis que permitiera observar las imágenes en conjunto y percibir sus conexiones, por lo que, se construyó un esquema de relaciones para el análisis visual. Del mismo modo, las imágenes a analizar aumentaron, debido a que también se incluyeron 50 fotografías de las actividades de la asociación que se encuentran en una pared de la sede de Asfaddes seccional Bucaramanga y 29 imágenes que hacen parte de los archivos de expedientes.⁴⁵

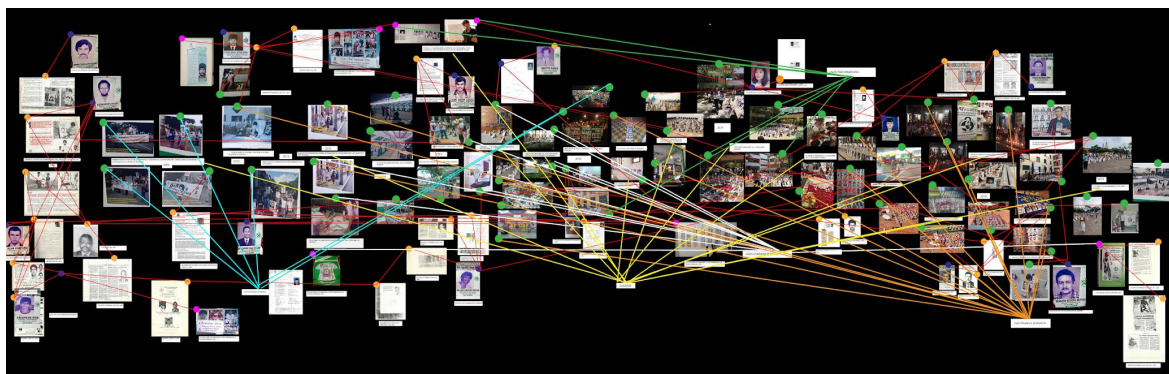


Imagen 1. Esquema de relaciones para el análisis visual. Fuente. Creación propia.

Fases de la investigación:

Fase 1- Revisión documental y análisis del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga

- Organización temporal según el actor que enuncia y análisis de la subserie de expedientes de Asfaddes seccional Bucaramanga (se analizaron 169 expedientes) a partir de los

⁴⁵ Es necesario establecer que aunque se cuenta con una amplio corpus fotográfico no se desarrolló un análisis de cada imagen, sino que de su conjunto o las particularidades.

enunciados que refieren a los desaparecidos y la desaparición forzada y/o términos afines que se registren. Para ello se utilizará la matriz temática para el análisis de documentos, esta incluye: fecha, tipo de documento, referencia textual, descripción de la imagen que acompañe al documento (sí existe), análisis preliminar de las representaciones del desaparecido y la desaparición (Ver tabla 1).

- Organización temporal y análisis de la subserie Actas de asamblea seccional (se revisaron 847 folios) desde la matriz temática para el análisis de documentos que componen el acervo histórico de la asociación, esta matriz incluye: fecha, tipo de documento, referencia textual, descripción de la imagen que acompañe al documento (sí existe), actores con los que se ha relacionado la asociación, iniciativas públicas de pasado y las interpretaciones que movilizan respecto a la desaparición forzada y los desaparecidos, por último, análisis preliminar de las representaciones del desaparecido y la desaparición.

- Organización temporal y análisis fotográfico de las imágenes de las actividades que ha llevado a cabo Asfaddes, las fotografías de las personas desaparecidas y las imágenes que componen la galería de la memoria a partir de un esquema de análisis visual que permita percibir los tránsitos y transformaciones de las imágenes, además de los usos que se le han dado (Ver imagen 1).

Fase 2- Realización de entrevistas en profundidad a dos integrantes de Asfaddes seccional Bucaramanga y a la directora de Amovi-UIS con la intencionalidad de profundizar en algunos de los aspectos relacionados con la conformación, transformaciones y usos de los archivos, además, de profundizar frente a la historia de la seccional. Tematización y análisis de las entrevistas⁴⁶.

Fase 3- De forma complementaria se desarrolló la observación participante de tres actividades de conmemoración desarrolladas por la seccional en el marco de tres procesos de conmemoración como lo serían la Semana Internacional del Detenido Desaparecido en mayo del 2022, el Día Internacional de los Desaparecidos en agosto del 2022 y la

⁴⁶ En el marco de estas entrevistas se explicó la finalidad de las mismas y las participantes firmaron un consentimiento informado.

celebración de los cincuenta años de Asfaddes realizada en la seccional Bucaramanga en diciembre del año 2022, para evidenciar los usos que se le dan a los archivos fotográficos.

Fase 4- Análisis de las regularidades, continuidades y discontinuidades de las representaciones a partir de los datos de las matrices y el esquema de análisis visual su triangulación (mediante diagramas de flujo) en función de establecer relaciones entre enunciados y a su vez plantear reflexiones más amplias en torno a los archivos, la desaparición forzada y los desaparecidos.

Fase 5- Interpretación y escritura de la tesis, confrontación de lo encontrado en las fases anteriores con diferentes posturas teóricas en relación a las categorías de análisis.

CAPÍTULO 2.

ENTRE EL CONFLICTO ARMADO, LA DESAPARICIÓN FORZADA Y LOS ARCHIVOS

En este capítulo se presentan una contextualización que apunta a comprender las condiciones socio históricas del conflicto armado colombiano, desde los hechos que antecedieron su génesis y los momentos de transformación que lo han afectado, a partir de la presentación de los actores que han mediado su emergencia y perdurabilidad, esto para establecer cuáles son las dinámicas que han hecho de este uno de los conflictos armados más prolongados del mundo.

Así mismo, se analiza el modo en que los actores del conflicto bajo el establecimiento de un control social, económico y territorial produjeron violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario DIH , para profundizar luego en la desaparición forzada.

Por último, se abordan las iniciativas sociales y oficiales en torno a los archivos que documentan las violaciones a los derechos humanos que se desarrollaron en el marco del conflicto. Enfatizando en el trabajo de Asfaddes y particularmente en la seccional Bucaramanga que es el centro de esta investigación.

Es necesario resaltar que esta contextualización, se plantea de forma nacional y regional, ya que se comprende que el conflicto armado se desarrolló de forma diferenciada dependiendo de las características sociales, económicas y políticas de cada contexto regional y local.

2.1 Conflicto armado y actores de la confrontación

El conflicto armado en Colombia es extenso e inacabado, ya que este se ha prolongado durante más de seis décadas, si se tiene en cuenta su génesis con la emergencia de las guerrillas de izquierda de los años sesenta que pretendían la toma del poder y marcan el inicio de la confrontación armada bajo estos principios. Por lo que, como se afirma en el Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022): “la guerra que vivió Colombia desde los años sesenta del siglo pasado fue una disputa por el poder político, la democracia, el modelo de Estado, la tenencia de la tierra, el control del territorio y las rentas” (p. 92).

En relación con lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022) se asume como génesis del conflicto armado la emergencia de las guerrillas de los años sesenta, sin desconocer, como antecedente lo que Sánchez (1990) denomina como “la Violencia del período “clásico”⁴⁷ (1945-65) (p. 13), en la cual

⁴⁷ De esta manera, el periodo conocido como de “la Violencia” se presenta como un momento clave en la emergencia del conflicto armado a partir de la ruptura conocida como el Bogotazo, el 9 de abril de 1948 día en que asesinaron al líder político Jorge Eliecer Gaitán. Este momento marca un antes y un después frente a las relaciones sociales y políticas, ya que la presencia de Gaitán reunía parte de los binarismos antagónicos que para el momento se confrontaban, como lo serían: la oligarquía - el pueblo, clases dominantes- clases subalternas, conservadores - liberales (Sánchez, 1990).

“la guerra se despliega como una estrategia de exclusión, [y] de supresión de lo político” (Sánchez, 1990, p. 7) marcada por la lucha por el poder bipartidista.

Es de resaltar que aunque en este momento emergieron algunos grupos guerrilleros a modo de autodefensa estos se diferencian de las guerrillas de izquierda que pretendían la toma del poder bajo unos ideales políticos, debido a que “las guerrillas de los años cincuenta surgen inicialmente como una forma de organización forzada para confrontar el terror y no como parte de un proyecto político-insurreccional para la toma del poder” (Sánchez, 1990, p. 17), pretensiones que sí asumieron las guerrillas de los años sesenta.

2.1.1 Guerrillas de primera generación: el ELN y las FARC⁴⁸

En concordancia con lo antes expuesto, la Violencia y en especial el Frente Nacional se convirtieron en un estimulante para la emergencia del movimiento guerrillero, al establecer un modelo político binario y elitista, que, sumado a la represión política de otras alternativas políticas, potenció la transformación de estas autodefensas campesinas en guerrillas móviles, es decir, “el nacimiento de las denominadas “guerrillas de primera generación” —Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL)—, entre 1964 y 1967” (Pizarro, 2006, p. 98), lo que marca un tránsito entre la lucha bipartidista hacia la lucha antissubversiva en el conflicto armado.

Esta etapa del conflicto se denomina desde Sánchez (1990) como “resistencia armada”, ya que marca la emergencia y perdurabilidad de los grupos armados dentro del contexto colombiano hasta el presente: Una de las características de esta fase del conflicto es su descentralización, en relación con la etapa anterior donde la violencia y el terror se hizo más visible dentro de la capital, a pesar de que otras regiones también se vieron afectadas, de esta manera, se comprende que el conflicto se extiende a territorios rurales y distantes.

⁴⁸ Se hace énfasis en la presentación de estas dos agrupaciones debido a que sus acciones aún tienen una influencia importante dentro del contexto del conflicto armado, ya sea por su permanencia como en el caso del ELN o la emergencia de disidencias como sería el caso de las FARC.

Frente a lo anterior, se podría decir que la primera guerrilla que se organizó fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que surgió según el CNMH (2013) en 1962 o de acuerdo con Aguilera (2006) en 1964. Esta guerrilla se estableció “en el Magdalena Medio santandereano, en una región que en los años cincuenta había sido escenario de la actividad de la guerrilla liberal” (Aguilera, 2006, p. 283) y que además, era un sector que “se sentía marginado por la dirigencia bipartidista del orden nacional” (GMH, 2013, p. 124).

De modo que, este territorio propició el encuentro entre tres experiencias de lucha y resistencia social que conforman el ELN como lo serían: la campesina, la sindicalista y la estudiantil, ya que, por un lado, se integraron campesinos guiados por la experiencia de la Violencia, el desplazamiento forzado y la herencia de las guerrillas gaitanistas del Magdalena Medio (Aguilera, 2006, GMH, 2013). Sumado a esto, se hace presente una participación de obreros sindicalistas bajo “una importante tradición de luchas obreras, debido al centro petrolero de Barrancabermeja” (Aguilera, 2006, p. 120), y por último, se da la “inserción de grupos estudiantiles radicalizados de la Universidad Industrial de Santander”(GMH, 2013, p.124) y del movimiento estudiantil Asociación de Estudiantes Universitarios de Santander (AUDESA). Esta participación de estudiantes universitarios de zonas urbanas dentro del proyecto de guerrilla rural se da motivada por la intención de repetir el reciente éxito de la revolución cubana.

Este proceso internacional fue una influencia importante dentro de la configuración del ELN y de su identidad política, al igual que la teología de la liberación (Aguilera, 2006), lo que implicó una fuerte postura moralista dentro de sus bases políticas, económicas y sociales, al tener un mayor sentido de sacrificio por parte de sus combatientes, una expansión articulada con el apoyo de la organización social y un inicial rechazo a una economía basada en el narcotráfico o el saqueo (Aguilera, 2006).

Es de resaltar que, la adopción de esta línea de pensamiento también se ve influenciada por la participación de sujetos vinculados a la iglesia católica, como sacerdotes o religiosas⁴⁹, entre los que se destaca como uno de sus líderes más notorios el sacerdote Camilo Torres, quien fue una figura importante dentro de la movilización social de la época y la estructura del ELN, al punto de que luego de su caída en combate en 1966 la agrupación se hundió en una crisis interna, lo que contribuye en su lento crecimiento durante varios años.⁵⁰ De esta manera, la situación vegetativa del ELN se mantuvo hasta los años ochenta, cuando se llevó a cabo su primer congreso en 1986 en el que se definió un enfoque basado en la unificación, una transformación dentro de su identidad política al asumirse como marxistas-leninistas, al igual que la adopción de una nueva estrategia militar basada en un modelo de guerra popular prolongada (Aguilera, 2006).

Como causa de estas transformaciones, el ELN fue la guerrilla que tuvo mayor crecimiento “en pie de fuerza y en presencia territorial en esa década” (Comisión de la verdad, 2022, p. 203), aunque, también se relaciona con un aumento en su capital económico debido a “extorsión a las compañías extranjeras encargadas de la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas” (Tawse, 2009, p. 294).

Es necesario mencionar que el sustento económico del ELN en un inicio se basó en la colaboración de la comunidad, además, de “comprar productos con los denominados bonos de esperanza revolucionaria, para ser cobrados cuando triunfara la revolución” (Aguilera, 2006, p 122), pero posteriormente esta economía se ve ampliada hacia la ilegalidad, desde la adopción del saqueo y el secuestro, además, de la extorsión, la explotación y control de

⁴⁹ Esto resulta particular, ya que años anteriores, durante la Violencia, el discurso eclesiástico había estado enfocado en la estigmatización, para motivar a los fieles a “odiar a los liberales y, en casos extremos, a matarlos” (Comisión de la verdad, 2022, p. 59). Sin embargo, durante el periodo de emergencia del ELN se hace presente un “cambio internacional en la Iglesia Católica respecto a su labor pastoral y un viraje hacia una doctrina social con opción preferencial por los pobres en los papados de Juan XXIII y Pablo VI, embrión de la teología de la liberación” (GMH, 2013, p. 124). De ahí que una de las líneas de trabajo del grupo guerrillero estuviera enfocada en la evangelización y formación política dentro de las comunidades.

⁵⁰ Otro factor influyente dentro de su limitada expansión se relaciona con las estrategias que adoptaron para la solución de problemas internos “a través de purgas, fusilamientos intrafilas o asesinatos a disidentes, que llevaron al grupo a una coyuntura crítica y a la casi extinción del proyecto armado” (Comisión de la verdad, 2022, p. 218).

la minería ilegal (Aguilera, 2006, Comisión de la verdad, 2022)⁵¹, sumado a “los ataques a la infraestructura petrolera, las campañas extorsivas a las empresas y los secuestros masivos” (Comisión de la verdad, 2022 p. 221).

De esta manera, según Aguilera (2006) “el ELN llega al límite de expansión y crecimiento, precisamente en los primeros años de la década de los noventa, para luego iniciar un proceso de estancamiento y de paulatino retroceso” (p. 128).

El ELN en el marco de su existencia se ha encontrado en diferentes momentos con el gobierno nacional para entrar en diálogo, aunque en un principio cuando Betancourt (1982-1986) inaugura los procesos de negociación para la terminación del conflicto esta agrupación no solo se niega a participar, sino que se opone a dicho proceso, debido a que lo consideraba “un limitante para el desarrollo de la lucha revolucionaria en marcha” (Mendoza, 2013, p. 285).

Sin embargo, esta postura frente a los procesos de negociación no se extiende por mucho tiempo, ya que a principios de los noventa durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994), el ELN junto con las otras agrupaciones guerrilleras de primera generación como las FARC-EP y el EPL entraron en diálogo “en las negociaciones de Caracas y Tlaxcala” (Aguilera, 2006, p. 129), que se vieron interrumpidas como consecuencia del secuestro y fallecimiento del exministro Duran Quintero a manos del EPL.

Posterior a este proceso, se dieron nuevos intentos de diálogo con el ELN, durante los gobiernos de Samper (1994-1998), Pastrana (1998-2002), Uribe (2002 -2010) y Santos (2010-2018), sin embargo, estas negociaciones “se han quedado estancadas en el punto de la «Convención Nacional», que para esta guerrilla es un ejercicio de democracia directa en la que, a la manera de una constituyente popular, diversos sectores rediseñan el régimen y el Estado” (Comisión de la verdad, 2022, p. 118).

⁵¹ Esta economía basada en la ilegalidad resulta contraria a las posturas moralistas que se habían impuesto en un principio.

En relación con los intentos de negociación mencionados anteriormente, se considera necesario retomar el último, que se dio durante el Gobierno de Juan Manuel Santos de forma paralela con las negociaciones con las FARC-EP, estas iniciaron en el 2017 y sus diálogos se llevaron a cabo en Quito y la Habana. Sin embargo, a pesar de que con las FARC-EP los diálogos fueron fructíferos llegando a la firma de unos acuerdos en el 2016, con el ELN estos no llegaron a término y se vieron suspendidos durante el gobierno de Iván Duque en el 2019, debido a un atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en Bogotá que esta guerrilla se adjudicó.

Por otro lado, dentro de este mismo periodo ante el repliegue de las FARC-EP en el marco de las negociaciones y posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, el ELN encuentra una oportunidad para expandirse territorialmente, de manera que “en años recientes, el ELN aumentó su pie de fuerza: para 2016 contaba con 2.972 integrantes (entre hombres y mujeres en armas y redes de apoyo), en 2019 pasó a 4.879 y en 2021 llegó a 5.187 miembros (2.570 hombres y mujeres en armas), según el Ministerio de Defensa” (Comisión de la verdad, 2022, p. 227). Así mismo, es de resaltar que con la entrada del gobierno de Gustavo Petro (2022- actualidad), en la segunda mitad del año 2022 se retomaron los diálogos con el ELN que habían quedado suspendidos.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se establecen oficialmente en 1965 y “tienen su origen lejano en los grupos de autodefensa campesina que impulsó el Partido Comunista Colombiano (PCC) a fines de la década de los cuarenta como respuesta a la violencia oficial” (Pizarro, 2006, p. 100), situados inicialmente en el Chaparral al sur del Tolima, bajo la influencia del comunismo prosoviético.

El tránsito de Autodefensas Campesinas a su establecimiento como grupo guerrillero se le atribuye a la toma de Marquetalia por parte de las Fuerzas Armadas, con la que se pretendía la recuperación de territorio que se encontraba fuera del control del Estado bajo “influencia comunista” (Pizarro, 2006)⁵².

⁵² Es necesario resaltar que la emergencia de las FARC se da en un periodo temporal que concuerda con un “mesianismo revolucionario que por entonces invade a toda América Latina” (Sánchez, 1990, p. 24), a partir de la

Sin embargo, el enfrentamiento en Marquetalia fuera de lograr su cometido se convirtió en parte del mito fundacional de las FARC al reafirmar su emergencia “como resultado de una agresión externa” (Pizarro, 2006, p. 103) y situar su establecimiento como un acto defensivo.

En un primer momento, tras el desarrollo de la I conferencia del grupo guerrillero en 1965 y la II en 1967, en las que se organiza oficialmente y se adopta el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, esta agrupación se caracteriza por un estado de crecimiento lento y limitado tanto en reclutamiento como en expansión territorial (Pizarro, 2006). Esto se presenta hasta 1982 cuando en la VII conferencia se plantea una transformación al nombre de la agrupación al agregarle el apelativo “Ejército del pueblo” (EP), lo que implicó un cambio en la forma de lucha que se había asumido hasta el momento “al pasar de una actitud defensiva a una ofensiva, lo cual se expresó en un acelerado crecimiento de sus frentes, una expansión en su actividad armada hacia nuevas regiones y la búsqueda de nuevas formas de financiación” (Mendoza, 2013, p. 275).

Este punto de crecimiento, se relaciona con diferentes factores represivos, políticos y económicos, ya que en primer lugar como lo afirma Mendoza (2013) previo a esta conferencia se estaban presentando acciones represivas como bombardeos, “la promulgación del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) y la consecuente represión generalizada” (p. 275).

Por otro lado, en 1982 el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) propone entrar en negociación con los grupos guerrilleros como parte de un proceso de paz al que se acogen las FARC- EP, lo que “implicó el reconocimiento del estatus político de las guerrillas” (Mendoza, 2013, p. 276), que se mantiene a pesar de que el proceso no haya avanzado, debido a que como lo afirma Sánchez (1990) “ni el conjunto del movimiento guerrillero, ni el conjunto de las clases dominantes habían madurado para una paz negociada” (p. 27).

revolución cubana y el establecimiento del movimiento guerrillero en diferentes países como Uruguay, además, del auge de la guerra fría. De ahí el interés de los Estados Unidos por involucrarse y financiar operaciones en pro del desmantelamiento del comunismo en América Latina.

Por último, dentro de este periodo las FARC contaba con una estabilidad económica que se relaciona con “la naciente bonanza de la coca, el banano y la ganadería que, a través del secuestro o la extorsión, daría origen a la sólida “economía de guerra” (Pizarro, 2006, p.104).

De esta manera, este periodo se caracteriza por un fortalecimiento económico en contraposición a su proyección social y política, ya que se hace presente un “creciente desencanto con la guerrilla o incluso del repudio social (...) [debido] indudablemente el uso generalizado y la rutinización del secuestro, sumada a las masacres y ejecuciones” (Sánchez, 1990, p. 25), que conllevan una transformación en las relaciones que las FARC habían establecido con las comunidades locales, especialmente rurales.

Por otro lado, un momento de cambio y ruptura que atravesó esta organización guerrillera en su tránsito hacia un reconocimiento como sujeto político, fue la creación en 1985 de la Unión Patriótica (UP) como parte de los acuerdos de la Uribe en 1984 que surge como un “movimiento político, auspiciado por las FARC, [que] tendría como principales portavoces a algunos comandantes de esta organización guerrillera, al igual que dirigentes nacionales y regionales del Partido Comunista y otras fuerzas menores” (Mendoza, 2013, p. 276). Sin embargo, es de resaltar que a pesar de su pronta acogida en las elecciones de 1986, este proyecto político se vio obstaculizado por la constante persecución a la que se vieron sometidos sus líderes, ya que durante este “periodo se realizaron numerosos asesinatos, masacres, atentados y desapariciones contra integrantes y simpatizantes de la UP, a tal punto que para marzo de 1990 la UP contaba entre sus víctimas a más de 1500 militantes” (Giraldo en Mendoza, 2013, p. 311).

De esta manera, como lo afirma Pizarro (2006) se hace evidente una transformación en el accionar de las FARC-EP, ya que “traumatizadas por el genocidio de la Unión Patriótica, le van a decir “adiós a la política” o, mejor aún, le van a dar una bienvenida a la política reducida en gran medida a los efectos de los actos de guerra” (p. 108). De ahí que, para los

años noventa se presente un recrudecimiento del conflicto armado y del accionar bélico de las FARC-EP.

Es de resaltar que, dentro de los gobiernos siguientes se dieron nuevos intentos por alcanzar la paz con este grupo armado, como durante el mandato de Cesar Gaviria (1990-1994) en el que se presentaron dos momentos de diálogo, el primero en Caracas en 1991 y el segundo Tlaxcala (México) en 1992 (Avella, 2015). Sin embargo, dentro de estos no se dieron grandes avances antes de su fracaso. Así mismo, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998- 2002) se presentaron nuevas posibilidades de diálogo esta vez en el Caguán en 1998, estas negociaciones tuvieron grandes avances en comparación con las precedentes, hasta el 2001 donde según Avella (2015) se da un momento de quiebre tras “los atentados de New York y Washington contra las torres gemelas y el pentágono, situación que acrecentó y priorizó la lucha contra el terrorismo” (p. 121). Por lo que, estas negociaciones se obstaculizaron e interrumpieron en el 2002, previo a la finalización del mandato de Pastrana.

Por otro lado, esta tendencia hacia la predilección de la vía del diálogo como camino hacia al fin del conflicto que había iniciado Betancourt y continuado algunos de sus predecesores tiene una transformación con el ascenso de Álvaro Uribe (2002- 2006 y 2006-2010) al poder, ya que durante su mandato “el modelo pendular (negociación-guerra total) ha cambiado de manera radical, dado que a diferencia de sus antecesores, Uribe ha colocado el debilitamiento estratégico de la guerrilla como su plan A y una eventual negociación futura como su plan B” (Pizarro, 2006, p. 106).

De acuerdo con lo anterior, a partir de la aplicación de una “política de seguridad democrática” el gobierno de Uribe logró un debilitamiento de las FARC- EP, aunque también se caracterizó por atentar contra la población civil en medio de la lucha antiterrorista. Sin embargo, se podría afirmar que el gobierno de Uribe a pesar de su renuente postura frente a una solución del conflicto negociada tras su salida del poder dejó un contexto preparado para el diálogo, ya que como lo afirma Avella (2015) el gobierno

posterior al de Uribe Vélez y las FARC-EP, se dieron cuenta de que ninguna de las partes iba a ganar la guerra.

Es así, como en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010 -2014 y 2014 -2018) se da un nuevo proceso de negociación con las FARC-EP esta vez en la Habana Cuba, donde tras cuatro años de negociación, se presenta un plebiscito “que tuvo como resultado que el 50,21% de las personas no aprobaban el Acuerdo y el 49,78% si” (Avella, 2015, p. 122), lo que da paso a una renegociación y finalmente el 24 de noviembre del 2016 se firman los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC-EP.⁵³

Por otro lado, a pesar del establecimiento de este sistema, el panorama en relación con la terminación del conflicto armado en Colombia es un tanto incierto debido a que hasta la fecha la implementación de los acuerdos durante el gobierno de Duque (2018- 2022) ha sido muy débil, además, de la creación y el accionar de disidencias de las FARC- EP bajo el nombre de la segunda Marquetalia, la continua persecución y asesinato de líderes sociales y excombatientes, y la permanencia de otra de las guerrillas de primera generación dentro del contexto colombiano como lo sería el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

2.1.2. Otros actores de la confrontación armada

Un momento de transformación dentro de las dinámicas del conflicto armado que habían impuesto las guerrillas de primera generación mencionadas, se da a partir de los años setenta, donde se hace evidente una urbanización del conflicto que hasta el momento se había desarrollado principalmente en la ruralidad en zonas descentralizadas. Este cambio se relaciona principalmente con la emergencia o el fortalecimiento de otros actores dentro del conflicto armado, como lo serían las guerrillas de “segunda generación”, el auge del paramilitarismo y del narcotráfico.

⁵³ Esta firma implicaba el cumplimiento de los siguientes puntos: el desarrollo de una reforma rural integral; garantías de participación política; cese definitivo de acciones ofensivas de ambas partes, entrega de armas por parte de las FARC-EP y reincorporación de excombatientes; acciones en pro de la solución del problema de drogas; reconocimiento de las víctimas del conflicto armado; y garantías de implementación y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos (Portal para la paz, 2018).

Las guerrillas de “segunda generación” son aquellas que surgieron durante los años setenta y ochenta bajo la influencia de “las luchas sociales de todo el continente latinoamericano” (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010, p. 44). Entre estos grupos se establece el Movimiento 19 de abril (M-19) en los años setenta y una década después emergen guerrillas como “el grupo indigenista Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Patria Libre)” (Pizarro, 2006, 104)⁵⁴.

El M-19 se fundó en 1974 tras el evidente fraude electoral en las elecciones de 1970 cuando se anunció como ganador al candidato conservador Misael Pastrana que se disputaba el poder con Gustavo Rojas Pinilla, esta situación generó rupturas dentro de la ANAPO (Alianza Nacional Popular) que “terminó dividida: el ala socialista, encabezada por Carlos Toledo Plata, se convirtió en el M-19, y la tradicionalista, encabezada por María Eugenia Rojas, hija del General, continuó la alternativa política” (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010, p. 43). Por lo que, la situación que motivó la configuración de esta guerrilla se relaciona directamente con dos de las razones que han movilizado el conflicto como lo serían la disputa del poder y la lucha por la democracia (Comisión de la verdad, 2022).

De esta manera, el M 19 durante su permanencia se caracterizó por una búsqueda del poder basado en el apoyo del pueblo, “esa es la razón de unas acciones armadas tan intrépidas, demagógicas y publicitadas” (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010, p. 44) con una amplia carga simbólica que buscaban el aumento de la popularidad del grupo.⁵⁵

⁵⁴ Se considera pertinente hacer un abordaje particular en relación con la trayectoria del M-19, ya que esta es la primera guerrilla de segunda generación que surge dentro del contexto colombiano y su emergencia generó una ruptura dentro de las dinámicas de los grupos guerrilleros existentes que se encontraban en una etapa vegetativa. Además, de que “este grupo llevó la guerra a las ciudades y a las élites económicas y políticas” (Comisión de la verdad, 2022, p. 61), lo que implicó una transformación dentro del conflicto. Así mismo, esta guerrilla se relaciona con uno de los casos de desaparición más notorios dentro del contexto nacional, como lo sería la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia.

⁵⁵ Entre estas acciones está, el robo de la espada de Simón Bolívar en 1974, la edición de un periódico, la irrupción en la programación de dos canales nacionales, la toma: al periódico El Bogotano; de medios de transporte como aviones, trenes y buses en ocasiones con pasajeros; a embajadas; iglesias, asambleas de trabajadores. Además, del fallido intento en 1984 de tomar a la población de Florencia Caquetá y la toma al Palacio de Justicia en 1985.

Así mismo, como parte su accionar militar el M19 robó armamento, realizó bombardeos y atentados, asumió la práctica del secuestro con diferentes fines como extorsivos y políticos, y llevó a cabo ejecuciones bajo la apología del “juicio popular” (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010).

Por otro lado, “desde mediados de los años setenta, el M-19 hizo presencia en zonas urbanas como Bogotá y Cali, y luego en el sur del piedemonte de Caquetá, en Putumayo y en el norte del Cauca, en el marco de las disputas por la tierra entre indígenas y terratenientes” (Comisión de la verdad, 2022, p. 218). De manera que el modelo de expansión de esta agrupación parte de las ciudades y posteriormente se erige en zonas descentralizadas.

Para los años ochenta, esta guerrilla “fue uno de los grupos insurgentes de mayor protagonismo” (Comisión de la verdad, 2022, p. 215) y se acogió a la propuesta del expresidente Betancourt (1982 -1986) de una salida del conflicto negociada desde 1983 como parte de los Acuerdos de Corinto. Sin embargo, como lo afirman Gómez, Herrera y Pinilla (2010) “ninguna de las partes tuvo una voluntad sincera” (p. 58), ya que en el marco de estas negociaciones no se redujo la ofensiva.

Por su parte el M19 al continuar con su accionar pretendió seguir ejerciendo presión al Estado en el marco de las negociaciones, mientras que recibían ataques contra sus líderes, como el asesinato de “Carlos Toledo Plata, médico y dirigente nacional del M-19” (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010 , p. 52) en Bucaramanga y el atentado contra Carlos Pizarro⁵⁶, lo que no impidió que semanas después se firmaran los Acuerdos de Corinto que implicaban una tregua. A pesar de esto, la estabilidad de los acuerdos no fue duradera, debido a la presión ejercida hacia Betancourt por amenazas de un golpe de Estado y los constantes ataques al

⁵⁶ Este atentado se desarrolló “cuando se encaminaba a la firma, en el que resultó herido junto con su compañera, quien perdió varios dedos de la mano. En ese momento se suspendió la firma de la tregua, pero después de una discusión interna del grupo guerrillero, decidieron suscribirla con una “posdata” en la que constara el atentado por parte de la Policía a Pizarro, se investigara y se garantizara seguridad a los miembros del M-19 y del EPL, que en ese momento también firmaba su acuerdo en Medellín” (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010, p. 52)

M 19, por lo que, para 1985 se rompió la tregua y se retomaron las acciones ofensivas (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010).

Lo anterior, se considera una de las causas relacionadas con los hechos de la toma del Palacio de Justicia por parte del M19 y la retoma por parte de agentes de las Fuerzas Armadas, ya que como se afirma en el Informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia (2010), el M 19 tenía la intención “de hacerle un juicio al presidente, arrasando con las Cortes” (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010, p. 106). Como consecuencia de este hecho, pero principalmente de las acciones desmedidas llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas durante el proceso de retoma del Palacio de Justicia, se relacionan “100 muertos y por lo menos once desaparecidos [que] fueron el saldo atroz de esa decisión” (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010, p. 107).

Luego de estos sucesos se recrudeció la guerra sucia y para 1989 se abrió un diálogo entre el gobierno de Virgilio Barco (1986 - 1990) y algunos grupos guerrilleros como el M 19, EPL, PRT y Quintín Lame. Para finalmente, en 1990 firmar los Acuerdos en Caloto, Cauca. La firma de estos acuerdos implicó, la dejación de armas y la garantía de participación política que se materializó con los aportes del M-19 dentro del “proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y en la formulación de la Constitución de 1991” (Comisión de la verdad, 2022, p. 215). Además, de la creación de la Alianza Democrática M-19 como movimiento político y la candidatura de Pizarro dentro de las elecciones presidenciales de 1990, que fue interrumpida por su asesinato meses después a la firma de los acuerdos. Esta situación hace evidente que a pesar de una salida negociada del conflicto y su reconocimiento como actores políticos, la persecución a sus integrantes y la guerra sucia continuaba vigente.

Por otro lado, el paramilitarismo desde el momento en que tomó mayor fuerza se convirtió en un fenómeno complejo que transformó las dinámicas del conflicto que se habían establecido hasta el momento y penetró la estructura social colombiana desde lo político y económico, pero también desde las diferentes formas de victimización que afectaron las relaciones internas de las comunidades.

Por lo que, este actor fue uno de los más fuertes e influyentes en cuanto a perdurabilidad del conflicto, además, de sus ataques contra la población civil. Sin embargo, como se afirma en el Informe de la Comisión de la verdad (2022): “el paramilitarismo no es solo un actor armado –entendido como ejércitos privados con estrategias de terror contra la población civil–, sino más un entramado de intereses y alianzas también asociado a proyectos económicos, sociales y políticos que logró la imposición de controles territoriales armados por medio del uso del terror y la violencia, y también a través de mecanismos de legitimación, establecimiento de normas y reglas” (p. 296).

De esta manera, se comprende que el paramilitarismo es uno de los actores más complejos que surgió en el marco del conflicto armado, ya que en su accionar confluyen los intereses de terceros como: agentes del Estado, terratenientes y narcotraficantes, entre otros, que pretenden el mantenimiento del “orden social” a partir del control sobre la población.

Por otro lado, aunque el paramilitarismo tiene su auge en los años ochenta los procesos que mediaron la construcción de una sólida estructura paramilitar se remontan décadas atrás, ya que por un lado, durante el periodo de la Violencia ante la ausencia de control ejercida por el Estado sobre la población se da “el uso o creación de grupos de civiles armados por parte de poderes locales, políticos y gobiernos en varias regiones del país, (...), como Los Pájaros, Los Chulavitas y, en la década del sesenta, Los Limpios” (Comisión de la verdad, 2022, p. 300).

Así mismo, también influyeron acciones del gobierno que motivaron la creación o mantenimiento de estos grupos, como en el mandato de Lleras Restrepo (1966 -1970) en el cual por medio del “Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968 ordenan la creación de grupos de defensa compuestos por civiles para tareas contrainsurgentes con salvoconductos, equipos de comunicación y entrenamiento militar” (Comisión de la verdad, 2022, p. 295). Esto también se dio durante el gobierno de Turbay (1978- 1982) en el marco del Estatuto de seguridad nacional, cuando éste “a través de su ministro de Defensa llamó a la población a que se armara” (Barón y Gutiérrez, 2006, p. 154). Por otro lado, en el gobierno de Gaviria

(1990- 1994), en contraposición a la decisión tomada por Virgilio de Barco de suspender la legalidad del paramilitarismo, se promulgó el Decreto Ley 356 de 1994 mediante el cual se regula la creación de servicios de seguridad privados denominados Convivir como un tipo de cooperativa contrainsurgente legal (Comisión de la verdad, 2022).

Esto sentó un precedente de legalidad frente al accionar de estos grupos y de apoyo por parte de agentes del Estado. Aunque resulta necesario recalcar, que estas agrupaciones no siempre gozaron de esta inmunidad, ya que como se mencionó anteriormente, durante el gobierno de Barco este tipo de asociaciones dejó de ser legal. Así mismo, “luego de quince años de total inactividad, bajo la fuerte presión internacional, el débil gobierno de Ernesto Samper comenzó por fin a combatir a las autodefensas” (Barón y Gutiérrez, 2006, p.159), debido principalmente a su relación con el narcotráfico que hizo que estas agrupaciones fueran percibidas como terroristas. Esta situación generó un desconcierto para las agrupaciones paramilitares que hasta el momento habían sido aliadas de las Fuerzas Militares.

Por otro lado, en relación con la evolución de estos grupos, es de resaltar que a principios de los ochenta se configuraron unas de las estructuras pioneras del fenómeno paramilitar, que fue el grupo: “Muerte a secuestradores” (MAS) en el que confluyen narcotraficantes, políticos, ganaderos, hacendados y fuerzas militares, que asediados por el accionar de las guerrillas y particularmente por el uso desmedido del secuestro como estrategia de financiación, deciden tomar medidas. Del mismo modo, la creación en 1980 de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam)⁵⁷ resulta influyente, ya que de estas primeras estructuras, evolucionan los grupos paramilitares. Desde el tránsito del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), como agrupación liderada por Pablo Escobar a Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) que pretendían eliminar al narcotraficante. Asimismo, la Acdegam que se había establecido en Puerto Boyacá cae en una crisis financiera lo que conlleva a un cambio de dirección hacia

⁵⁷ Como lo afirman Barón y Gutiérrez (2006) esta asociación cumple “tres funciones: (1) velar por los intereses de los ganaderos; (2) implementar un conjunto de actividades cívicas, por ejemplo, poseía droguerías y centros de salud con tarifas económicas para la población, y (3) organizar y coordinar las operaciones paramilitares” (p. 162), además, de financiar entrenamientos y adoctrinar a los campesinos desde perspectivas anticomunistas, (Verdad abierta, 2017).

Córdoba y Urabá en los años noventa con la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que además, eran una secuela de los Pepes. Las ACCU posteriormente son acogidas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997 y marcan la expansión del fenómeno paramilitar dentro del territorio nacional, hasta el momento de su desmovilización, que inició en el año 2003 (Comisión de la verdad, 2022a).

Por otro lado, es necesario hacer mención de la relación de los grupos paramilitares con la política y el narcotráfico, es decir la para-política y el narco- paramilitarismo. En primer lugar, como se afirma en el informe de la comisión de la verdad (2022a) “política y paramilitarismo también fueron en doble vía, pues muchos políticos y funcionarios a su vez buscaron a los comandantes de los grupos paramilitares para beneficiarse de su poder armado” (p. 346) y el paramilitarismo se ve beneficiado por la clase política desde la promulgación y mantenimiento de leyes que permitían su accionar dentro de la legalidad.

Por otro lado, frente a la relación del narcotráfico con el fenómeno paramilitar, se podría decir que está deviene desde sus inicios, sí se tiene en cuenta la génesis del MAS. Sin embargo, como lo afirman Barón y Gutiérrez (2006) según la versión del paramilitarismo “primero eran limpios, luego fueron corrompidos por el narco y, finalmente, recuperaron su misión original” (p. 164).

Con lo anterior se hace referencia, a que pesar de que el narcotráfico era financiador de las autodefensas, su rol dentro de la estructura era pasivo, hasta que se da la crisis financiera de Acdegam a la par que se incrementa el interés por parte de narcotraficantes de adquirir terrenos en el Magdalena Medio, lo que aumentó la participación de estos actores dentro del proyecto paramilitar desde su monopolización, pero también la implicación de los paramilitares dentro del negocio del narcotráfico. Esta alianza duró poco tiempo, ya que para 1989 se dio por terminada debido a la declarada guerra contra el narcotráfico por parte del Estado (Barón y Gutiérrez, 2006, Comisión de la verdad, 2022).

Aunque, es necesario mencionar, que la relación entre el narcotráfico y el paramilitarismo se hizo aún más notoria, cuando algunos narcotraficantes se integraron al desarme

colectivo de las AUC entre el 2003 -2006 tras las negociaciones llevadas a cabo en Santa Fe de Ralito con el Gobierno de Uribe Vélez (Barón y Gutiérrez, 2006, Comisión de la verdad, 2022, Mendoza, 2013). Es de resaltar que este proceso de negociación no dio por terminado el fenómeno paramilitar, ya que se establecieron nuevas agrupaciones como lo serían: “Los Rastrojos, Los Pachenca, Los Caparrapos o Caparros y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, y sus diversas células y facciones” (Comisión de la verdad, 2022, p. 310).

Por su parte, los grupos narcotraficantes surgieron bajo intereses distintos a los de los grupos guerrilleros, su actividad y desarrollo en el contexto generó una influencia dentro del conflicto armado al involucrarse con cada uno de los actores legales e ilegales que hacían presencia hasta el momento, desde la financiación, al igual que ser influencia en la creación de nuevos agentes del conflicto como los paramilitares. Así mismo, es necesario reconocer que estos también han sido participantes activos dentro las actividades violentas que han mediado el conflicto armado y victimizado a la población civil. De manera que, como se afirma en el informe final de la Comisión de la verdad (2022):

El narcotráfico penetró de diferentes maneras una parte de la política y se convirtió en un actor de la confrontación armada; al pasar a ser parte de la contrainsurgencia, se consolidó como un factor de degradación del conflicto armado y se convirtió en financiador de los grupos armados paramilitares y de las guerrillas en diferentes eslabones de la cadena. También se unió a sectores de la fuerza pública que se han enriquecido con él (p. 456).

En relación con lo anterior, se comprende que el narcotráfico ha sido uno de los ejes que han incentivado la permanencia del conflicto armado en Colombia y su influencia ha permeado dentro de cada uno de los ámbitos de la sociedad, ya que desde su emergencia “generó profundos cambios en la estructura social, política y económica del país” (López, 2006, 237).

Del mismo modo, es de resaltar que este fenómeno y sus diferentes etapas no se desvinculan del contexto, ya que el surgimiento del narcotráfico en Colombia en 1970 deviene de una serie de herencias y condiciones que posibilitaron su emergencia y perdurabilidad, como la experiencia vivida dentro de periodo de Violencia fue influyente, ya que como lo afirma López (2006) “los grandes capos de la primera generación de narcotraficantes, aquellos que el país conoció durante la década de los ochenta, nacieron durante esos años” (p. 239). Por lo que, los contextos de su crecimiento estaban marcados por esta violencia, además, de que esta época legó una economía débil que se fortaleció con el narcotráfico.

Del mismo modo, el que el país se estableciera como corredor estratégico para el tráfico de drogas fue influyente, ya que “desde finales de los años cuarenta, Colombia sirvió como lugar de paso de los primeros envíos ilegales de cocaína que partían de Perú y Bolivia hacia Cuba y Estados Unidos” (López, 2006, p. 238).

Así mismo, la confluencia del contrabando y el tráfico de esmeraldas es un antecedente que forjó estructuras de utilidad para el narcotráfico, ya que como lo afirma López (2006), por un lado, “las rutas y contactos establecidos por los contrabandistas fueron posteriormente aprovechadas por los narcotraficantes” (p. 238).

De esta manera, para los años setenta el contexto estaba dado para el surgimiento y desmesurado crecimiento del narcotráfico en Colombia, cuyo auge se da entre 1974 y 1982 con la bonanza de la marihuana, posteriormente se amplía el mercado hacia la producción y exportación de coca, además, de que cambia el rol de los colombianos dentro del negocio al dejar de tener a Cuba como intermediario y trabajar directamente con Estados Unidos (López, 2006). Es de resaltar que este crecimiento se debe en parte, a la falta de atención que el Estado le prestó al fenómeno en ese momento, lo que llevó a “que se fortalecieran unas organizaciones criminales cuyo poder casi no tiene paralelo en el resto del mundo” (López, 2006, p. 242).

Durante esta primera década, los recursos del narcotráfico se expandieron dentro de la economía nacional y para la siguiente (los ochenta) se convirtió en el actor más violento del conflicto, además, de que se dan una serie de transformaciones: En primer lugar, la

prosperidad de este negocio llamó la atención de los grupos guerrilleros e hizo a los familiares de los narcotraficantes objeto de secuestro⁵⁸.

Por otro lado, se establece una relación entre narcotráfico y política, es de resaltar que su incursión dentro de este ámbito, más que pretender una toma del poder como lo aspiraban los grupos guerrilleros, buscaba su control en beneficio propio para continuar con su negocio de forma impune sin que el Estado se convirtiera en un obstáculo.⁵⁹ Es de resaltar que esta forma de participación política se logró en la medida en que los narcotraficantes no fueran reconocidos públicamente como tal.

Por lo que, el fracaso de esta forma pacífica de participación política llevó a los narcotraficantes a asumir otras estrategias, como la corrupción a través de sobornos, “la financiación (...) de candidatos locales y regionales” (Mendoza, 2013, p. 244) o medidas violentas como el secuestro, tortura o asesinato a líderes políticos.

Sumado a esto, los narcotraficantes guiados por la experiencia de las recién iniciadas negociaciones de paz por el gobierno de Betancourt, pretendieron disputar su reconocimiento como actores políticos desde el diálogo con el Estado, lo anterior basados en las premisas de que “el gobierno negociaba con las guerrillas porque, primero, reconocía motivaciones políticas en su lucha y, segundo, porque no podía derrotarlas” (López, 2006, p. 245). Por lo que, el narcotráfico se convirtió en un generador de violencia difícil de confrontar.

⁵⁸ De manera que, “en 1981 integrantes del M-19 secuestraron a Marta Nieves Ochoa Vázquez, hermana de miembros de la cúpula del Cartel de Medellín” (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010, p.311). Esta acción conllevó a que los narcotraficantes crearán el grupo Muerte a Secuestradores (MAS) o Masetos considerado el primer grupo paramilitar dentro del contexto colombiano, “financiado por 200 narcotraficantes del país, (...) miembros destacados de la fuerza pública: oficiales del Ejército, la Policía y el DAS, así como ganaderos afectados por el secuestro y políticos” (Comisión de la verdad, 2022, p. 105). Como consecuencia del accionar del MAS, se da la entrega de Marta Nieves Ochoa por parte del M-19, además, de la eliminación del grupo guerrillero en Medellín hasta que se da un acuerdo entre este y los narcotraficantes del Cartel de Medellín.

⁵⁹ Esto se da en un primer momento a partir de “la participación en la política electoral de algunos de los principales capos, entre ellos y el más importante de todos, Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, quien fundó el movimiento Civismo en Marcha” (López, 2006, p. 243). Sin embargo, Escobar perdió su rol dentro de la política cuando fue expuesto como narcotraficante. Así mismo, Carlos Leder creó el partido Movimiento Latino Nacional (MLN) que fue disuelto cuando se solicitó la extradición del narcotraficante (López, 2006).

De acuerdo con lo anterior, otra de las transformaciones que se hizo presente durante los años ochenta frente al fenómeno del narcotráfico se relaciona con el rol pasivo que el Estado había mantenido. Este cambio se da principalmente bajo la influencia del gobierno de los Estados Unidos y su “guerra contra las drogas” que pasó a ejercer presión en relación con la extradición de narcotraficantes.

Frente a esto, aunque en 1979 se firmó con los Estado Unidos un tratado de extradición que entró en vigencia en 1982, el gobierno colombiano no le dio mayor importancia a su cumplimiento sino hasta 1985 cuando el asesinato del entonces ministro de justicia Rodrigo Lara en 1984 hizo evidente el poderío que había adquirido el narcotráfico y dio apertura al periodo del narcoterrorismo⁶⁰. Esta situación obligó al gobierno a tomar una postura ofensiva y empezar la aplicación de la extradición de narcotraficantes hacia los Estados Unidos (López, 2006).

Del mismo modo, para este periodo, el grupo de “los extraditables”, integrado por diferentes narcotraficantes en oposición a las extradiciones, ya se había configurado y “a comienzos de diciembre de 1984 (...) amenazó de muerte al presidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y a los ministros” (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010, p. 311)⁶¹.

Las influencia de las acciones de esta agrupación, se hicieron evidentes cuando en 1986 “la Corte Suprema declaró inexecutable la Ley 27 de 1980, por la cual se había ratificado el tratado de extradición firmado con Estados Unidos” (López, 2006, p. 246), lo mismo ocurrió en 1987 con la Ley 68 de diciembre de 1986 que surgió como un intento

⁶⁰ Es de resaltar que el narcoterrorismo, implica la configuración de la figura de los narcotraficantes como un “enemigo político” que se integra a la misma categoría de los grupos guerrilleros y no solo a la de delincuencia común, ya que atenta contra la seguridad del Estado, es una amenaza contra la estabilidad de las democracias en latinoamérica y para la sociedad norteamericana, lo anterior a partir de los discursos difundidos por los Estados Unidos (Orozco, 1990).

⁶¹ Por lo tanto, a esta agrupación según el Informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia (2010) se le atribuye la financiación de la toma al Palacio de Justicia en 1985 por parte del M-19 como estrategia para persuadir al Estado frente a la implementación de la extradición (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010) y así mismo, eliminar documentos relacionados con esto.

desesperado por parte del Gobierno que pretendía mantener las extradiciones que hasta hace poco se estaban implementando.

Lo anterior no implicó, que los narcotraficantes cesaran sus actividades violentas como medio de control social y del Estado, por lo que, para 1989 se les responsabilizó del asesinato del político liberal Luis Carlos Galán. Frente a esto, las negociaciones entre el gobierno y los narcotraficantes se vieron interrumpidas y se implementó nuevamente la extradición (López, 2010). Además, de que el entonces presidente Virgilio Barco (1987 - 1989) “mediante alocución televisada (...), le “declaró la guerra” al narcotráfico” (Orozco, 1990, p. 46).

Por otro lado, una transformación dentro de la dinámica que se había desarrollado hasta el momento entre el gobierno nacional y los Extraditables, se da a partir del gobierno de César Gaviria (1990-1994) con el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la Nueva Constitución Política dentro de la que se destacó la presencia del “artículo 35, que prohibió la extradición de los colombianos por nacimiento” (López, 1990, p. 247).

Esta garantía de no extradición llevó a que narcotraficantes como el entonces líder del cártel de Medellín Pablo Escobar se entregará a la justicia bajo condiciones privilegiadas, frente a esto, aunque disminuyeron los índices de violencia provocada por el narcotraficante, también se hicieron presentes cuestionamientos en relación con el control que el Estado tenía sobre el cartel de Medellín y Pablo Escobar que continuaba delinquiendo desde prisión. Estas dudas se hicieron razonables, cuando tras un intento de traslado Escobar se dio a la fuga⁶², lo que conllevó a que se creara la alianza: Perseguidos por Pablo Escobar o los Pepes y en 1993 agentes del Estado asesinaron a Pablo Escobar.

⁶² Ante esta situación en 1992 “una parte del Cartel de Medellín, junto al de Cali, se alió contra Pablo Escobar; en tal alianza participaron agentes de la DEA e instituciones del gobierno colombiano como el Bloque de Búsqueda de la Policía. De esas alianzas surgió una red autodenominada los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) (Comisión de la verdad, 2022, p. 412)

Es de resaltar que la muerte de Escobar no implicó el cese de actividades por parte de los narcotraficantes, aunque según López (2010), sí se le da fin a la era del narcoterrorismo, ya que las relaciones que el narcotráfico, ahora encabezado principalmente por el cartel de Cali (tras el desmantelamiento del cartel de Medellín), establece con el Estado se dan principalmente desde la corrupción.

Esta relación se hizo pública, cuando “el proceso 8.000 puso en evidencia la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) con dineros del Cartel de Cali” (Comisión de la verdad, 2022, p. 400). Lo anterior conllevó a una serie de reacciones, por un lado, se deterioran las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia, y bajo la presión ejercida por este país se da una reforma a la constitución en 1997 en la que la extradición es aprobada.

Por otro lado, el gobierno de Samper apoyó la fumigación de cultivos, aunque para 1997 Colombia se convirtió en el mayor productor de coca. Así mismo, ante los relacionamientos de este presidente con el cartel de Cali, el gobierno se propuso la erradicación del grupo narcotraficante, sin embargo, aunque esto se logró, durante este periodo se fortaleció el cartel del Norte del Valle (López, 2006, Comisión de la verdad, 2020).

Por otro lado, con la entrada del nuevo siglo durante el gobierno de Pastrana y el de Uribe se tomaron nuevas medidas en alianza con los Estados Unidos para confrontar el fenómeno del narcotráfico, pero principalmente el accionar de las FARC-EP. Lo anterior, a partir de la aplicación del Plan Colombia⁶³.

⁶³ El plan Colombia “supuso una inversión de 10.000 millones de dólares en los siguientes años y, aunque tuvo otros componentes sociales, la mayor parte de su asistencia estuvo relacionada con las áreas militar, tecnológica y de armamento; con base en este tipo de visión bélica, se implantaría en las zonas donde se encontraban las FARC-EP” (Comisión de la verdad, 2022, p. 251). Del mismo modo, como parte de este proyecto se realizaron operaciones de erradicación de cultivos, ya que “uno de los supuestos de este plan era que fumigando los cultivos de coca también se debilitaría el poder territorial de las guerrillas” (Comisión de la verdad, 2022, p. 120). Sin embargo, esto no logró detener el narcotráfico, ni disminuir la producción de drogas en Colombia, pero sí generó afectaciones dentro de las comunidades a partir de la estigmatización de los campesinos, daños en cultivos de pancoger y aumento de la violencia.

De forma paralela, durante el gobierno de Uribe se desarrollaron los diálogos con las AUC, que hicieron aún más evidentes las relaciones de las autodefensas con el narcotráfico, ya que además de que lograron ser parte de estas negociaciones, tras este proceso se fragmentaron y debilitaron las agrupaciones narcotraficantes. Ante esta situación surgieron las Bandas Criminales, para ocupar el espacio y dar continuidad a los procesos de los paramilitares y narcotraficantes.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad (2022), la permanencia del narcotráfico en la actualidad es uno de los factores clave en la persistencia del conflicto tras la firma de los acuerdos con las Farc-Ep, por lo que, reflexiona que “si Colombia no encuentra, como sociedad, una solución de fondo y negociada nacional e internacionalmente al problema del narcotráfico, el conflicto armado continuará” (p. 457).

Del mismo modo, es importante señalar que la permanencia del conflicto armado en Colombia, la emergencia de los actores, su confrontación y la propagación de la violencia, estuvieron influenciados por unas políticas hemisféricas de seguridad que se integraron a los modos en que el Estado colombiano asumió el conflicto en sus diferentes fases y le dio un tratamiento. Como ejemplo de esto, la Doctrina de Seguridad Nacional como una política de los Estados Unidos que tras la Revolución cubana convirtió a “América Latina en un campo propicio para enfrentar la subversión” (Rodríguez y Sánchez, 2009, p. 35). De manera que esta política tuvo una influencia importante en la forma en que desde América latina se configuró la lucha contrainsurge y al “enemigo interno”. En Colombia esto se hace evidente a partir de la promulgación del Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978) durante el gobierno del presidente Turbay Ayala (1978 - 1982), mediante este decreto “las instituciones militares ampliaron su autonomía en el manejo de los asuntos de orden público a niveles sin precedentes, en lo que constituyó el ejercicio más completo de asimilación colombiana de la Doctrina de la Seguridad Nacional” (Muñoz, 2006, p. 202).

Asimismo, durante los años ochenta se asume como nueva estrategia militar una “guerra de baja intensidad” “en el marco de la cual el gobierno norteamericano fusionó la estrategia antidrogas (George Bush, 1989) y la contrainsurgencia, y diseñó y ejecutó planes de ayuda económica y militar que buscaban subsanar estos dos factores de inestabilidad” (Rodríguez y Sánchez, , p. 39), entre los que estaría el desarrollo del ya mencionado Plan Colombia, entre otros.

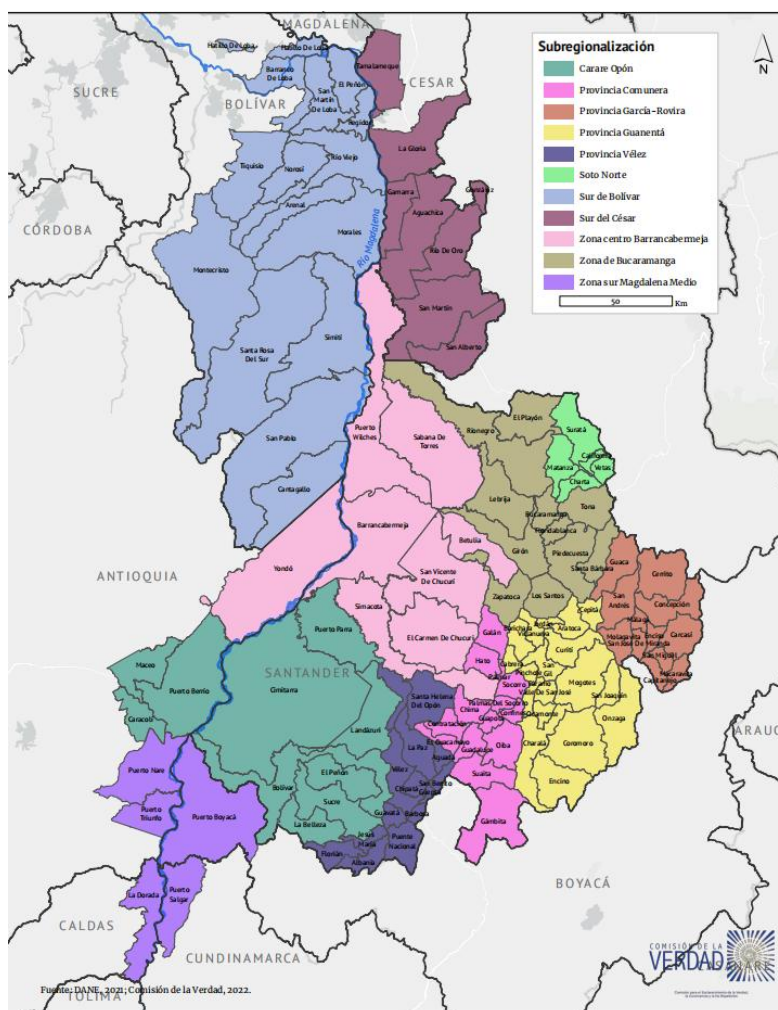
2.1.3. El Magdalena Medio Santandereano y el conflicto armado

En este punto resulta necesario recordar que el conflicto armado en Colombia se ha vivido de forma diferenciada dependiendo de las características de los territorios, de si se trata de zonas rurales o urbanas, además, de la relación centro periferia, ya que se comprende que hay lugares que debido a las diferentes condiciones del contexto, se hallan fuera del alcance, protección o control del Estado, lo que facilitó el surgimiento, irrupción y permanencia de los actores del conflicto ya mencionados. Lo anterior, no implica que las capitales hayan estado al margen de la violencia, sino que dentro de estas el conflicto armado se desarrolló bajo condiciones diferentes.

En relación con lo anterior, dentro de este apartado se profundizará en las características de la región del Magdalena Medio⁶⁴ Santandereano y la forma en que el conflicto armado se desarrolló dentro de esta zona. Esto debido a que en los archivos que serán objeto de análisis, se hizo mención a diferentes municipios pertenecientes a este sector como lugares donde habitaban las personas desaparecidas, o como escenarios de la desaparición.

De esta manera, es de resaltar que gran parte de esta región tiene un “carácter rural existiendo tres ciudades principales que son: Bucaramanga (Capital del departamento de Santander), Cúcuta (Capital de Norte de Santander) y Barrancabermeja (Principal refinería de petróleo del país). Otras ciudades de la zona se destacan por ser centros de comercio o por alojar proyectos agroindustriales o de hidrocarburos; ejemplo de ellas son Aguachica y San Alberto en el sur del Cesar: Tibú, Girón y Ocaña en Norte de Santander; Sabana de Torres, el Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, Simicota y Puerto Wilches en Santander...” (PCNM, 2008, p. 30).

⁶⁴ Esta región se denomina de esta manera debido a que tiene como eje la sección media del río Magdalena (PCNM, 2008, p. 8) y abarca municipios de siete departamentos en el corazón del país. Incluye un municipio de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Caldas, cuatro de Antioquia, quince de Bolívar y ocho del Cesar. Con los 87 municipios que conforman el departamento del Santander el territorio adquiere una extensión de casi 50.000 kilómetros cuadrados” (Comisión de la verdad, 2022b, p. 35).



Mapa 1. Magdalena medio con subregiones, Fuente, comisión de la verdad b, 2022.

De acuerdo con esto, es de resaltar que el Magdalena Medio es una región que cuenta con diferentes características que la convirtieron en un lugar clave para los diferentes actores del conflicto armado.

Por un lado, es una de las regiones con mayor riqueza en el país, debido a que cuenta con múltiples recursos como oro, petróleo, madera, hoja de coca, además, de ser una zona propicia para el desarrollo de la agricultura, ganadería y los proyectos de agroindustria de palma aceitera. Lo que conllevó, a que en esta zona se estableciera “un modelo de desarrollo extractivo, autoritario y excluyente” (PCNM, 2008, p. 31) frente a los recursos propios del territorio, basados en la desigualdad en la tenencia de la tierra, pero también a los tratos inequitativos con los pobladores que terminaron trabajando para las grandes empresas o poniendo sus terrenos al servicio de estas.

De modo que este modelo económico, también está fundamentado en “la expropiación violenta y en la violación sistemática de los derechos humanos” (PCNM, 2008, p. 31) desde las cuales se pretendía establecer control y monopolizar los recursos.

Así mismo, el Magdalena Medio “es una región estratégica que cuenta con múltiples vías de acceso tanto terrestres como fluviales y aéreas” (PCNM, 2008, p. 30), además, de que limita con Venezuela, lo que hace de esta zona un corredor estratégico para el comercio, pero también para el contrabando principalmente de arroz y gasolina, además, de la circulación de coca (PCNM, 2008).

Todos estos elementos permiten comprender las razones que hicieron de este territorio “un lugar de disputa por el poder” (PCNM, 2008, p. 36), entre diferentes actores armados como guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado, pero también ayuda a explicar el auge de un movimiento social característico de este territorio.

En primer lugar, como ya se mencionó anteriormente el ELN surgió en 1962 y “se asentó en la región de Simacota, Santa Helena del Opón y San Vicente de Chucurí” (Comisión de la verdad, 2022b, p. 56). Mientras que el EPL llegó al territorio cinco años después en 1967 y posteriormente entre 1989 y 1970 se establecieron las FARC con el cuarto frente. Por otro lado, el M19 en 1974 incursionó en el territorio, pero no logró asentarse dentro de este (Comisión de la verdad, 2022b).

Según lo expuesto en el informe de la comisión de la verdad (2022), la construcción de bases sociales y políticas de los grupos guerrilleros dentro de estos territorios se da a la par de su expansión dentro de las zonas rurales, a partir su relacionamiento con el movimiento de sindical desde la Federación de Trabajadores Petroleros (Fedepetrol), la Unión Sindical Obrera (USO) y el movimiento estudiantil, con la Asociación Universitaria de Estudiantes de Santander (Audes). Sin embargo, los grupos guerrilleros también implementaron acciones violentas como estrategias de control social y expansión territorial como bombardeos y asesinatos selectivos a presuntos informantes. Así mismo, las guerrillas establecieron un orden social dentro de las comunidades como medidas de control

territorial, además, de mediar la explotación de recursos y, la producción y venta de coca (Comisión, 2022b).

Ante esta expansión guerrillera, el “Estado implementó una serie de planes que combinaban tácticas bélicas y cívico militares” (Comisión de la verdad, 2022, p. 65) que aunque lograron un repliegue significativo de las guerrillas en el territorio, también implicaron la victimización de la población civil y del movimiento sindical, estudiantil y obrero desde su estigmatización y persecución. Además, se dio lugar a la criminalización de la movilización social, que tuvo como consecuencia, asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamiento de personas pertenecientes a estas organizaciones por parte de Agentes del Estado y grupos paramilitares. Lo anterior, bajo la idea de eliminar las bases sociales de los grupos guerrilleros. Es de resaltar que dentro de estos hechos victimizantes, la estrategia paramilitar entró en aplicación.

De esta manera, el paramilitarismo fue uno de los principales actores que influyó en el establecimiento de las dinámicas del conflicto armado en el Magdalena Medio, es importante mencionar que a diferencia del discurso que “justifica” su emergencia como parte de la lucha contra insurgente, “estos grupos no aparecen en una zona únicamente para contrarrestar la presencia de la guerrilla sino casi siempre para controlar las fuentes de recursos económicos existentes” (PCNM, 2008, p. 31) y como ya se mencionó, esta región cuenta con gran variedad de estos. Es así, como “los centenares de muertos y miles de desplazados que ha provocado la presencia paramilitar, coinciden con el asentamiento de los proyectos empresariales extranjeros” (PCNM, 2008, p.35) en torno a la explotación de recursos como el petróleo, el oro o la producción de aceite de palma.

De acuerdo con esto, la entrada del paramilitarismo en el Magdalena Medio se basa en el interés de “las élites agrarias (ganaderas y palmeras principalmente) y aquellas vinculadas con la explotación petrolera [que] buscaban protegerse de los secuestros, extorsiones, robos, amenazas y asesinatos de las guerrillas, pero también apoderarse de la tierra” (Comisión de la verdad b, 2022, p. 91), intenciones que compartían los narcotraficantes, quienes durante los años setenta habían demostrado interés por el territorio desde la compra de propiedades.

Frente a esto, se puede comprender que, si bien el auge paramilitar en el Magdalena Medio se relaciona con la lucha contrainsurgente, entre sus intenciones también se encontraba la apropiación y control territorial por parte de sectores privilegiados que ya tenían recursos a su disposición. De ahí, que el movimiento sindical⁶⁵ y campesino haya sido uno de los más golpeados en el marco del conflicto armado, ya que como lo afirma la Comisión de la verdad (2022) “incluso antes de la formación de las guerrillas comunistas, (...) el sector sindical era considerado por las compañías petroleras y las autoridades militares y civiles como un foco subversivo y comunista” (p. 71).⁶⁶

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es necesario hacer mención de las dinámicas actuales del conflicto dentro de este territorio, que están marcadas por la presencia de nuevos actores y disputas por el territorio, debido a que con la desmovilización de las AUC en 2002 y la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, se hacen presentes vertientes de estos grupos o la expansión de los ya presentes que buscan apoderarse de los territorios liberados por el Bloque Magdalena Medio de las FARC-EP. De esta manera, en este territorio actualmente (2022) existe “presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, Los Caparros, las Águilas Negras y la incursión de grupos pos FARC o disidencias” (Comisión de la verdad, 2022, p. 180).

⁶⁵ En relación con lo anterior, el movimiento sindical en el Magdalena Medio, surge en 1920 con la creación de la Unión Sindical Obrera (USO) en Barrancabermeja que agrupa “los trabajadores de la industria del petróleo en el país” (PCNM, 2008, p. 286) debido a que “mientras que los rendimientos de las empresas se multiplicaban y sus empleados extranjeros gozaban de comodidades y beneficios, los obreros y su familias vivían en condiciones muy difíciles” (Comisión de la verdad, 2022b, p. 41). Es de resaltar que, este ha sido uno de los sindicatos que “ha marcado en gran parte la historia del movimiento obrero colombiano” (PCNM, 2008, p. 286), desde su labor guiada principalmente hacia “defender el uso de recursos naturales, las conquistas de los trabajadores, el bienestar de los pobladores y la dignidad nacional” (PCNM, 2008, p. 286).

Posteriormente, el movimiento sindical en el Magdalena Medio se reproduce con la creación en 1963 de la organización sindical en torno a la industria de la palma africana del Cesar donde los trabajadores de Indupalma se reunieron para crear Sintraindupalma y Sintraproaceites, debido a que las empresas aceiteras redujeron los salarios y aumentar las horas de trabajo “con el fin de mantener e incrementar la productividad a consta de la dignidad de los trabajadores” (PCNM, 2008, p. 307).

⁶⁶ La magnitud de la violencia ejercida contra los sindicalistas se hace evidente en las cifras, ya que “entre el 1º de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2006, (...), se registraron 8.105 casos de violaciones a la vida, la integridad física y la libertad personal de trabajadores afiliados a sindicatos colombianos. La lista se compone de 2.245 homicidios (140 por año, en promedio), 3.400 amenazas de muerte, Movimientos Sociales 1.292 desplazamientos forzosos, 399 detenciones arbitrarias, 206 hostigamientos, 192 atentados, 159 secuestros, 138 desapariciones, 37 casos de tortura y 34 allanamientos ilegales de oficinas y viviendas” (Delgado, 2007, p. 2).

Así mismo, la presencia de estos grupos y sus disputas por el territorio han generado un aumento en los índices de violencia y persecución dirigida principalmente a líderes sociales, ambientales, defensores de derechos humanos, presidentes de JAC (Junta de Acción Comunal), entre otros (Comisión de la verdad, 2022b), por lo que, las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario se mantienen vigentes dentro del territorio.

2.2 Desaparición forzada

En Colombia el conflicto armado y sus actores han establecido a la violencia dentro de la cotidianidad de las comunidades, ya que este “durante décadas ha tenido como víctima principal a la población civil, porque se ha desarrollado en medio de ella y porque controlar a la población se convirtió en la manera de tener poder sobre el territorio y el país” (Comisión de la verdad, 2022, p.135). De esta manera, este ejercicio de violencia generalizado, se traduce en violaciones a los derechos humanos que al darse en el marco de un conflicto armado implican infracciones al DIH⁶⁷, que han afectado a 8.775.884⁶⁸ personas aproximadamente, de acuerdo con cifras del Proyecto JEP-CEV-HRDAG⁶⁹.

En relación con lo anterior, como se afirma en el Informe *Hasta la guerra tiene límites* de la Comisión de la Verdad (2022) en el que se hace referencia a las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario DIH, los principales perpetradores de estas violaciones fueron el Estado, grupos guerrilleros, paramilitares, grupos narcotraficantes, grupos posdesmovilización y terceros o civiles, que cometieron estos hechos victimizantes bajo diferentes intencionalidades como lo serían: financiamiento,

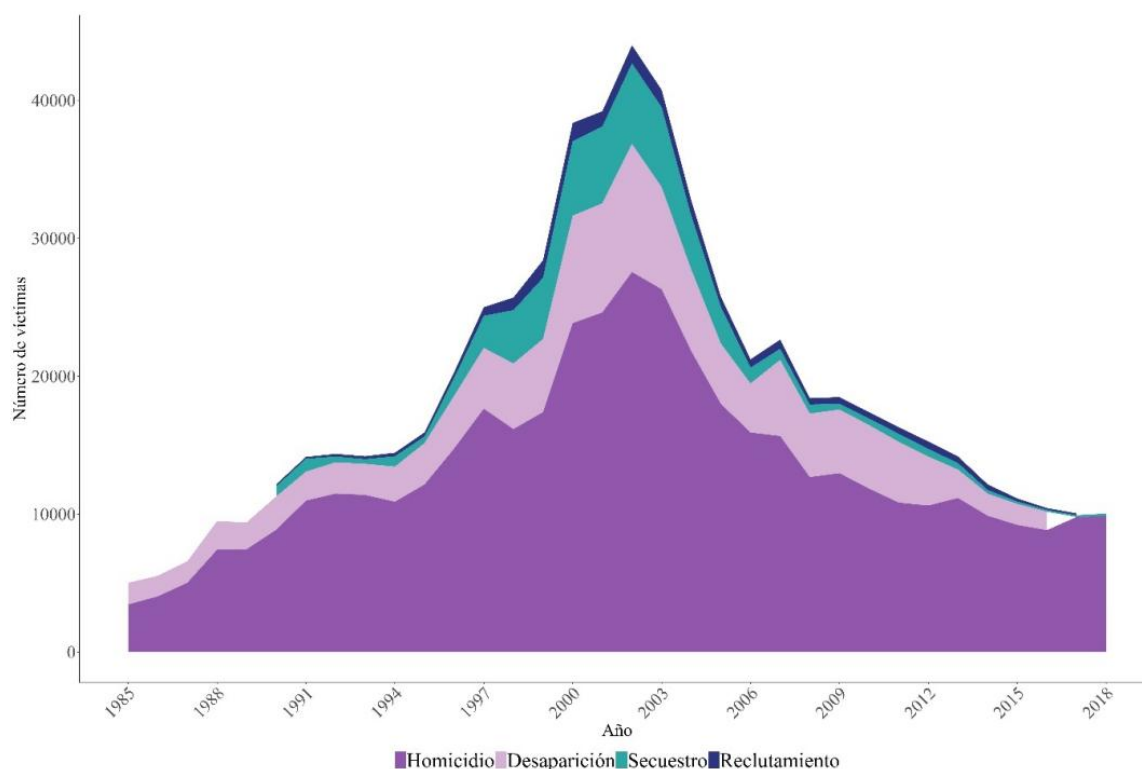
⁶⁷ En relación con los derechos humanos y el DIH, es de resaltar que estos se diferencian, ya que “el DIH se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que el derecho de los derechos humanos está vigente en todo momento, tanto en tiempo de paz como de guerra” (CICR, 2010).

⁶⁸ Estos datos fueron obtenidos a partir del análisis y depuración de las “112 bases de datos aportadas por 42 instituciones del Estado, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil” (Comisión de la verdad, 2022)

⁶⁹ Este proyecto fue desarrollado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos y con este se pretende “conocer el universo de víctimas de cinco violaciones de derechos humanos: homicidios, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento y desplazamiento forzado” (JEP, 2022)

control social sobre la población civil, reconfiguración violenta del territorio, exterminio físico y simbólico del enemigo político, obstrucción a la solución política del conflicto y ganar la guerra (Comisión de la verdad, 2022c).

De esta manera, según lo consignado en este informe dentro del periodo abordado por la comisión (1985- 2015), las principales violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que se dieron en el marco del conflicto armado fueron: “homicidios (masacres, los asesinatos selectivos [y] atentados); ataques indiscriminados; desaparición forzada; amenazas al derecho a la vida; secuestro; detenciones arbitrarias; tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; violencias sexuales; reclutamiento de niñas, niños y adolescentes; trabajo forzoso; desplazamiento forzado; despojo de tierras; confinamiento; ataques a bienes protegidos; pillaje y extorsión” (Comisión de la verdad, 2022c, p. 32).



Grafica 1. Relación temporal de víctimas de violaciones a los derechos humanos 1985 - 2018, Fuente, Comisión de la verdad, 2022c.

En relación con lo anterior y con lo expuesto en la gráfica 1, se hace evidente que cada una de las violaciones a los derechos humanos y al DIH que ocurrieron en el marco del conflicto, son particulares en cuanto a sus perpetradores, número de víctimas y las afectaciones que generan, ya que estas implican desde daños físicos, emocionales o económicos, hasta la pérdida de la misma vida de personas, familias o comunidades.

De esta manera, entre estas violaciones una de las prácticas más aberrantes ejercida por los actores de la confrontación y que se propagó de forma desmedida resultó ser la desaparición forzada que ha dejado 121.768 víctimas de acuerdo con cifras del proyecto JEP-CEV-HRDAG.

De acuerdo con la Comisión de la verdad (2022c) la desaparición forzada es comprendida como: “la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera sea su forma, o de su carácter legal o ilegal, seguida de la negativa a reconocer tal privación de la libertad y a revelar la suerte o el paradero de la o las personas” (p. 169)⁷⁰.

De igual modo, es importante reconocer que dentro de esta investigación la desaparición forzada es comprendida como un fenómeno complejo que se basa en la cosificación de las personas a partir de la ausencia tanto del cuerpo del desaparecido, como de pruebas y respuestas frente a lo sucedido, de esta manera, este es un crimen difícil de comprender y asimilar en especial si se tiene en cuenta la inicial negación que asumió el Estado frente al crimen y que a la sociedad Colombiana le tomó un largo tiempo llegar a establecer una comprensión pública de la desaparición forzada.

De manera que es un crimen difícil de comprender y de probar debido a que no solo consiste en el ocultamiento de una persona o personas, sino que también se basa en la eliminación de las pruebas y el silenciamiento de los testigos. Este crimen desde sus inicios ha estado mediado por diferentes intencionalidades, ya que como lo afirma Gómez (2019)

⁷⁰ En relación con lo anterior, se reconoce la existencia de diferentes postulados que se relacionan con la desaparición como lo sería la conceptualización de la “desaparición social” desarrollada por Gatti (2017) que hace referencia a la ampliación de la categoría hacia unas “nuevas desapariciones” asociadas con “catástrofes sociales ordinarias” (Gatti, 2017, p. 26). Es decir que en este caso “el desaparecido es ausencia, invisibilidad, falta de representación, imposibilidad de palabra y de nombre, es identidad rota y exclusión; es cuerpo disociado, mala muerte y mala vida” (Gatti, 2017, p. 29). De acuerdo con esto, este tipo de desaparición se configura en relación con unos regímenes de percepción del otro donde se suprime su existencia y se le condena a vivir excluido en medio de la frontera como un “nadie”, un fantasma que nadie ve pero todos saben que existe.

son varios los propósitos que han movilizad la aplicación de la desaparición forzada en Colombia entre los que están:

(1) Castigar y dejar mensajes aleccionadores tendientes a inhibir ideologías y prácticas políticas y sociales; (2) generar terror y así ganar y ejercer control, debido al potencial simbólico de este delito, y (3) ocultar crímenes, eliminando los cadáveres de las víctimas y borrando evidencias, para así dificultar que los delitos cometidos sean juzgados o para manipular y tergiversar las cifras” (p. 57).

Estas motivaciones se pueden vincular con los diferentes actores del conflicto, ya que como menciona el CNMH (2016) el uso de la desaparición forzada se relaciona con el lugar que representan estos actores dentro de la legalidad, ya que estos hechos pueden ser perpetrados por sujetos que se encuentran dentro del marco legal y hasta ejercen su control, también por agrupaciones ilegales con apoyo o aval de la legalidad o grupos ilegales que pretenden que sus acciones no llamen la atención.

Del mismo modo, las razones de los actores del conflicto para recurrir a la desaparición forzada corresponden con la evolución y las transformaciones de este fenómeno en Colombia, ya que “aunque [esta práctica] surge con ocasión de la lucha partidista, consigue un desarrollo sistemático y maximizado a partir de la década de los setenta con la aparición de las luchas insurgentes de la guerrilla y la respuesta drástica del Estado” (CNMH, 2014, p. 56). Por lo que, de esta manera se comprende que el auge de la desaparición forzada en Colombia se enmarca en la lucha contrainsurgente bajo el accionar de los agentes del Estado, que da entrada a décadas de estigmatización y persecución con el fin de “inhibir ideologías, prácticas políticas y sociales” (CNMH, 2016, p. 162) principalmente de izquierda⁷¹.

De acuerdo con lo anterior, resulta necesario mencionar que el hecho al que se le atribuye la proliferación de este crimen durante los años setenta y ochenta, es “la implementación

⁷¹ De ahí que, la primera denuncia hecha bajo estas condiciones fuera la de “la militante de izquierda Omaira Montoya ocurrida el 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla” (GMH, 2013, p. 59).

del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982)” (Comisión de la verdad, 2022, p. 153), que consistió en:

Un marco legal que consolidó la autonomía de las Fuerzas Armadas dentro del Estado en la lucha contra el “enemigo interno” y la represión de expresiones políticas disidentes, no solo por la extensión en las facultades extraordinarias dadas a los miembros de las FFMM para sus procedimientos, sino por la creciente criminalización de libertades y derechos que no solo fueron restringidos sino convertidos en delitos (CNMH, 2016, p. 37).

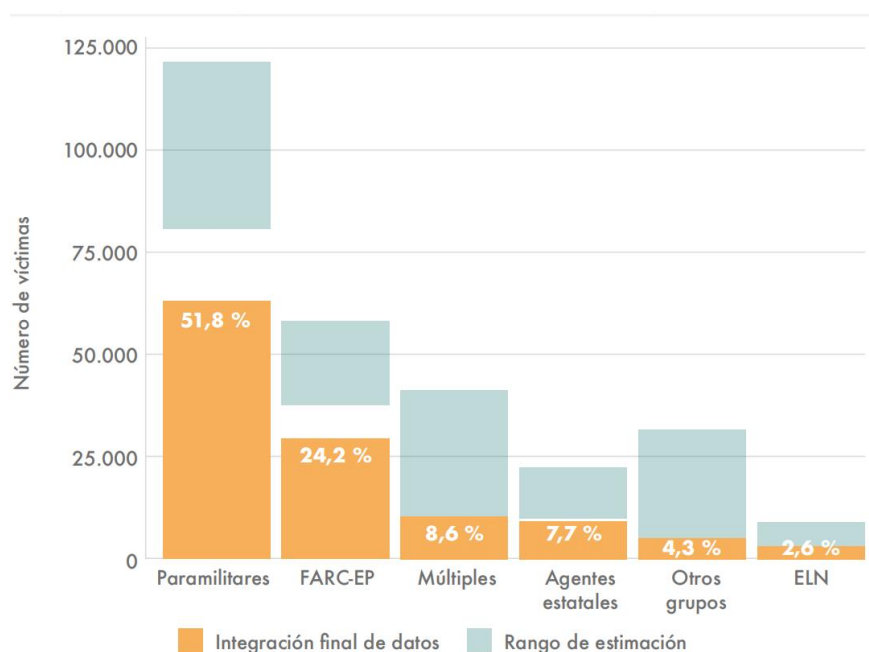
Aunque no fue sino hasta el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) cuando la desaparición forzada como modalidad represiva se hizo más explícita, esto a pesar de las intenciones públicas que expresaba el gobierno frente a una terminación del conflicto basada en la negociación, ya que “mientras disminuía la represión de los grupos alzados en armas por la vía judicial y con ello el número de presos políticos. Por el otro lado, comenzó el fenómeno de las desapariciones forzadas y asesinatos por motivaciones políticas” (ASFADDES, 2003, p. 28).

De esta manera, dentro de este marco temporal la desaparición forzada estuvo dirigida principalmente a líderes sindicales, campesinos, estudiantes, militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda, y miembros de las organizaciones de defensa de los DD.HH (CNMH, 2016) o personas señaladas de tener algún tipo de relación con grupos guerrilleros.

Es así como, durante los años ochenta la desaparición forzada tomó mayor fuerza y se hizo aún más visible su aplicación selectiva desde casos como el del colectivo 82 que hace referencia a la detención desaparición de 14 personas entre marzo y septiembre de 1982 (Asfaddes, 2003), también desde la toma y retoma del Palacio de Justicia en la que desaparecieron once personas en 1985, así mismo, la persecución y desaparición de los miembros del partido político Unión Patriótica (UP) desde 1986, de modo que según cifras de la comisión de la verdad (2022c) se reconoce la desaparición de 1.024 militantes de la UP.

De mismo modo, “a medida que la guerra se profundizó y degradó, amarrándose a ciclos legales e ilegales que retroalimentaron su funcionamiento, la desaparición forzada dejó de ser monopolio del Estado y pasó a hacer parte de los repertorios de violencia de grupos armados ilegales, como las guerrillas y los grupos paramilitares” (CNMH, 2016, p. 37).

Frente a lo anterior, con la emergencia del paramilitarismo se dio el recrudecimiento de fenómeno, además, de que este actor se convirtió en el mayor perpetrador de este crimen dentro del contexto colombiano, en coacción con agentes del Estado, ya que de acuerdo con las cifras de la Comisión de la verdad (2022^a) el número de desapariciones que se le atribuyen a este actor asciende a 63.029 que corresponde a un 52% de las víctimas de este crimen como se puede observar en la gráfica 2.



Gráfica 2. Número de víctimas de desaparición forzada según actor entre 1985 y 2016.

Fuente: Comisión de la verdad, 2022c, p. 190.⁷²

Asimismo, los grupos guerrilleros también han “tenido una participación relevante en la ejecución de este delito, con plena intencionalidad, o como consecuencia del secuestro o el

⁷² Frente a las cifras de desaparición forzada en Colombia, es necesario aclarar que “si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de desaparición forzada puede llegar a 210.000 víctimas” (Comisión de la verdad, 2022).

reclutamiento forzado” (CNMH, 2016, p. 19), a estas agrupaciones según el CNMH (2016) se les atribuyen 29.410 desapariciones, lo que corresponde a un 24, 2% de los casos.

De acuerdo con las cifras presentadas anteriormente, la irrupción del paramilitarismo dentro de las regiones implicó un aumento en la desaparición, pero también una transformación del crimen, ya que los paramilitares empezaron a desaparecer de forma colectiva, desde comunidades, familias o grupos de particulares⁷³.

Por otro lado, a pesar de que el crimen se ha perpetrado desde los años setenta, no fue sino hasta 1991 con la promulgación de la Constitución Política que la desaparición forzada “se eleva constitucionalmente como [transgresión a] un derecho fundamental” (CMNH, 2014, p. 111).

De esta manera, “el capítulo I del título II, De los derechos fundamentales, consagró en el artículo 12: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”” (CMNH, 2014, p. 110). Esto abrió las puertas para que años después se creara la Ley 589 del 2000⁷⁴: tipificación del genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, y tras la reforma al Código Penal en el 2002 mediante el artículo 165 del 2002 se reafirmara que:

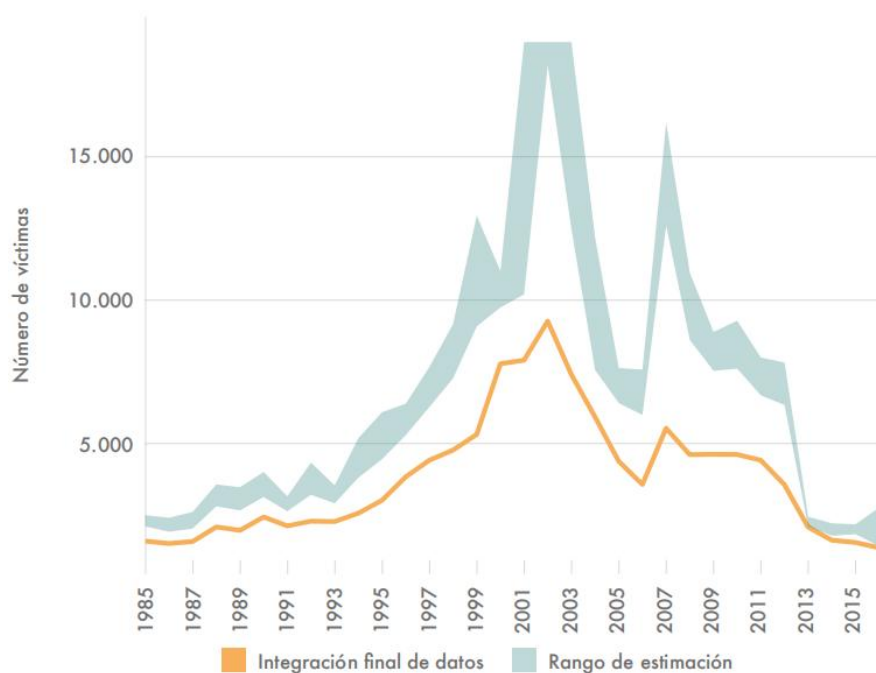
El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión...” (Código Penal, 2002, p. 160).

⁷³ De esta manera, una de las comunidades que se vio afectada por el accionar del paramilitarismo fue la de Trujillo Valle, cuando “entre 1986 y 1994, (...) sufrieron las consecuencias de las violencias desatadas por el accionar de grupos paramilitares, narcotraficantes y agentes del estado. Más de 300 personas perdieron la vida a causa de la tortura, la desaparición forzada o la pena moral” (García, 2019, p. 52).

⁷⁴ A través de esta ley se da “origen a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Artículo 8), el Registro Nacional de Desaparecidos (Artículo 9), la Administración de los bienes de las personas víctimas del delito de desaparición forzada (Artículo 10), el Registro de personas capturadas y detenidas (Artículo 12) y el Mecanismo de Búsqueda Urgente (Artículo 13)” (CNMH, 2014, p. 43).

Esto se configura como un gran logro para los familiares de las personas desaparecidas y las ONG que desde hace décadas y seis proyectos de ley fallidos buscaban el reconocimiento del crimen de desaparición forzada, que antes de esto era confundida con el secuestro. Sin embargo, de acuerdo con, Arboleda (2019) la forma en que se enuncia dentro del Código Penal al perpetrador del crimen como “particular” “desvirtúa el carácter de la desaparición como crimen de Estado” (Arboleda, 2019, p. 73). A pesar de que en una segunda parte se menciona que “a la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél,...” (Código Penal, 2002).

Además, la tipificación del crimen no implicó que este dejara de ser cometido o que disminuyeran las cifras, ya que como se puede observar en la Gráfica 3, entre el año 2001 y el 2010 se dio el mayor número de desapariciones forzadas en Colombia.



Gráfica 3. Víctimas de desaparición forzada entre 1985 y 2016. Fuente. Comisión de la verdad, 2022c, p. 183.

Este aumento en el número de desapariciones, se relaciona con la transformación del fenómeno de la desaparición forzada en Colombia, a partir del descubrimiento de los casos

de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado o “falsos positivos” que se dieron principalmente entre el 2002 y el 2008, durante los dos gobiernos de Uribe Vélez y su política de seguridad democrática. En este momento se empiezan a “privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, particularmente ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas que fueron asesinadas en estado de indefensión y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate” (Comisión de la verdad, 2022, p. 497).

De esta manera, la política gubernamental incentivó el reporte de bajas de guerrilleros a cambio de beneficios para los agentes de las fuerzas militares que cumplieran con esta tarea, lo que conllevó a que jóvenes de zonas vulnerables del país fueran detenidos o engañados con promesas de empleo, llevados a otras ciudades, asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, en los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado estaban involucradas diferentes instituciones, como la justicia penal militar, la Fiscalía y el CTI, a través del encubrimiento, la legalización de cadáveres, la falsificación de pruebas y la implantación de evidencia (Comisión de la verdad, 2022).

Frente a esto, aunque estas desapariciones forzadas se dan en el marco de la lucha contrainsurgente, no se llevan a cabo con la intención de eliminar el enemigo interno, ni con el objetivo de establecer de un control social o el ocultamiento del crimen, por el contrario, estos casos se caracterizan por la visibilidad y exposición de las persona como guerrilleros(as) dados de baja en combate con la intención de manipular o inflar cifras, de esta manera, el cuerpo no es desaparecido materialmente sino alterado en su identificación - cuando se inhuma en fosa clandestina- para parecer como guerrillero o delincuente dado de baja en combate (CNMH, 2016, p. 151). Sin embargo, estos casos se reconocen como desapariciones forzadas, debido a que existe un periodo de desaparición entre el momento en el que se llevan a las personas y cuando aparecen como guerrilleros dados de baja en

combate, asimismo, el que los cuerpos fueran inhumados como N.N. en fosas comunes implica que algunos permanezcan desaparecidos.

Luego de que los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado enfocados en jóvenes de Soacha se hiciera público, se hizo evidente que en otros territorios del país se estaban dando casos de desaparición forzada bajo la misma modalidad. De esta manera, actualmente (2022) la JEP lleva el macro caso 03 que corresponde a Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado del cual se desprenden seis subcasos de zonas priorizadas que serían Meta (274 casos entre 2002 y 2008), Casanare (248 casos entre 2002 y 2008), Huila (274 casos entre 2002 y 2008), Antioquia (1611 casos entre 2002 y 2008), Norte de Santander (298 casos entre 2002 y 2008) y Costa Caribe (538 casos entre 2002 y 2008).

En la actualidad (2022), aunque se siguen presentado casos de desaparición forzada, la cifra ha disminuido de forma significativa, ya que entre el 2011 y el 2020 se han presentado 2.357 casos de desaparición forzada (OMC), lo que contrasta con los 36.221 casos de desapariciones de la década anterior.

Por otro lado, resulta necesario resaltar la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, esta es una institución extrajudicial que “fue convenida mediante el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Estado colombiano y las Farc-Ep el 24 de noviembre de 2016, en respuesta a la solicitud de los familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones civiles que participaron en los diálogos de paz en La Habana (Cuba)” (UBPD, 2022). De esta manera, tras los acuerdos de paz y su implementación, en Colombia ahora se cuenta con una institución encargada de buscar y dignificar a las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

2.2.1. La desaparición forzada en el Magdalena Medio santandereano

En relación con el Magdalena Medio santandereano, resulta importante recordar que esta es una región que cuenta con múltiples recursos que la convirtieron en un lugar propicio para

el desarrollo de la industria, pero también en un escenario donde conviven la movilización sindical, campesina y estudiantil, el paramilitarismo, grupos guerrilleros, el narcotráfico y el contrabando.

De esta manera, es de resaltar que como se afirma en el informe de la comisión de la verdad (2022b) que “partes del Magdalena Medio, al igual que otras regiones del país, históricamente han sido estigmatizadas como “zonas subversivas”, desencadenando graves violaciones contra los derechos humanos de la población, especialmente de los integrantes de sindicatos y otras organizaciones sociales y políticas” (p. 191).

Por lo que, durante los años ochenta y noventa la represión antisindical ejercida por agentes del Estado tomó mayor fuerza recurriendo en primer lugar, a “los allanamientos, detenciones, acusaciones y sindicaciones de militancia subversiva; en (...) segundo [lugar], a las amenazas, torturas, desapariciones y asesinatos; también los paramilitares atribuían a los sindicalistas y a sus dirigentes relaciones o participación en grupos guerrilleros” (PCNM, 2008, p. 284). De esta manera, entre 1986 y 1990 fueron desaparecidas 353 personas relacionadas con algún sector social (PCNM, 2008).

Por otro lado, a pesar de que la desaparición forzada en la región en el marco de la lucha contrainsurgente liderada por el Estado y el paramilitarismo estuviera enfocada en sujetos relacionados con la movilización social, estudiantil y campesina, es de resaltar que la población civil en general se convirtió en foco de sospecha, de señalamiento y en algunos casos de desaparición.

De esta manera, la magnitud de la desaparición forzada dentro de este territorio se puede apreciar dentro del mapa 2 que presenta el número de víctimas estimadas de desaparición forzada de forma regional y comparativa, por lo que, permite precisar el nivel de afectación que se presentó en los departamentos que abarca el sector de Santander en el que presentaron 4.868 entre 1985 y el 2016 y el departamento que se vio más afectado fue Antioquia con 28.029 desapariciones.



Mapa 2. Víctimas de desaparición forzada por departamento entre 1985 y 2016, Fuente. JEP-CEV-HRDAG, 2022.

Uno de los casos de desaparición forzada que tomó mayor notoriedad dentro la región, por tratarse de un caso de desaparición colectiva y que representa la magnitud del fenómeno dentro del territorio, además, del poderío de los actores armados que predominaban en el sector, es el de la desaparición de 19 comerciantes de Bucaramanga en 1987 que se desplazaban entre el Magdalena Medio santandereano y antioqueño. En primer lugar, fueron desaparecidas 17 personas que fueron interceptadas por paramilitares, pero en medio del proceso de búsqueda fueron desaparecidos dos comerciantes más. Del mismo modo, para 1990 “en enero, perdieron la vida en La Rochela, Santander, 11 miembros de una comisión judicial de investigación de la que formaban parte magistrados y detectives. (...)”

(Amnistía Internacional en Asfaddes, 2003, p. 62), designados para investigar el caso de los 19 comerciantes del Magdalena Medio.

Por otro lado, una transformación en el fenómeno de la desaparición forzada dentro de la región se da entre 1991 y 1994 cuando se instaura la mal llamada “limpieza social” por parte del paramilitarismo, a partir de lo cual “se incrementa la represión en los barrios populares de las principales ciudades, donde los jóvenes fueron asesinados [o desaparecidos] al ser acusados de ser colaboradores de las milicias urbanas de las guerrillas o por pertenecer a grupos marginados social o económicamente, como indigentes, los delincuentes, las trabajadoras sexuales, los drogadictos, e.t.c.” (PCNM, 2008, p. 40).

Asimismo, como ya se mencionó en el apartado anterior, otro caso que involucra la desaparición de personas en estado de vulnerabilidad y que además, implica una transformación del fenómeno dentro de la región se da cuando en “2008 se conoció el caso de 19 jóvenes del municipio de Soacha y de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, que habían aparecido en una fosa común en Ocaña, Norte de Santander, tras ser ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate por parte del Ejército”(Comisión de la verdad, 2022). A pesar de que estos fueron los primeros casos de los que se tuvo conocimiento, esta modalidad de desaparición se extendió a lo largo del país, como un crimen caracterizado por la visibilidad de los cuerpos, ya que las instituciones del Estado ocultaban la identidad de las personas para hacerlas pasar por guerrilleros o integrantes de grupos delictivos. De esta manera, se encubría la identidad de las personas desaparecidas desde la legalización de los cadáveres al registrarlos e inhumados como N.N ... Sin embargo, para los familiares estas personas estaban desaparecidas, ya que estos jóvenes salieron de sus casas, motivados por promesas de empleo y no habían vuelto a tener noticias de ellos.

Para finalizar, aunque resulta difícil plantear un diagnóstico actual frente a la desaparición forzada dentro de esta región, “tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el narcotráfico y otras economías de guerra han sido el motor de la violencia contra líderes sociales que defienden la lucha pacífica por la tierra, el desarrollo rural integral y la protección de la naturaleza” (Comisión de la verdad, 2022b, p. 190).

En relación con lo anterior, se comprende que la desaparición forzada se ha extendido en la región del Magdalena medio en el marco del conflicto armado y de la lucha contra la subversión tomando como población objetivo actores políticos y sociales, además, de personas en condición de vulnerabilidad. De esta manera, en contextos como el descrito anteriormente en los que se presentan hechos victimizantes y principalmente la desaparición forzada, se hacen necesaria la configuración de procesos de documentación desde lo oficial, comunitario y familiar como una estrategia para probar los hechos, rememorar a la persona desaparecida, disputar el pasado y demandar justicia.

2.3 Iniciativas oficiales y sociales de archivo sobre el conflicto armado

En primer lugar, los archivos relacionados con el conflicto armado en Colombia que dan cuenta de las diferentes violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al DIH ocurridas dentro de este periodo, son denominados como archivos de derechos humanos. Este tipo de archivos son de gran importancia para la construcción de una versión de pasado que reconozca los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, los actores presentes, su influencia dentro de su perdurabilidad en el tiempo y expansión territorial, además, de los modos de victimización adoptados y las comunidades afectadas.

De esta manera, estos archivos son elementos influyentes dentro de procesos de reparación desde el esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia como instrumento probatorio, búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria colectiva y su uso público como parte de conmemoraciones. De ahí la necesidad de que las instituciones encargadas de la administración de los archivos en Colombia garanticen su protección, acceso y difusión.

En especial cuando en el marco del conflicto armado se han hecho presentes acciones que atentan con el archivo que pretenden la eliminación de una parte del pasado o mantener impunes a los actores armados. Como consecuencia de esto, en Colombia también se han hecho presentes momentos de transformación en materia de archivo donde se ha establecido su protección a través de la creación de instituciones encargadas de su

administración, y de normativas, protocolos y políticas públicas que establecen los debidos procesos para la gestión de los archivos de derechos humanos que hacen referencia al periodo del conflicto armado en Colombia. Esto será desarrollado con mayor profundidad a continuación.

2.3.1. Iniciativas oficiales de archivo

En relación con las iniciativas oficiales de archivo, resulta importante destacar desde Espinosa (2021) que “antes del 2000 gran parte del trabajo de documentación y archivos sobre derechos humanos lo realizaron las organizaciones sociales e iniciativas de la sociedad” (p. 4). De esta manera, se comprende que aunque se habla de un conflicto de larga data (que para este trabajo se asume desde la emergencia de las guerrillas de primera generación)⁷⁵, no es sino hasta el inicio del nuevo siglo cuando el archivo de derechos humanos empieza a cobrar mayor importancia desde procesos de documentación oficiales, como el desarrollado por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, que se establece veinte años después de los hechos, cuyo trabajo de documentación se materializa en un informe que pretende: “dar a conocer de manera integral, para el aprendizaje de las nuevas generaciones, para el estudio y evaluación de la sociedad y la institucionalidad colombianas y para conocimiento de la comunidad internacional, un panorama amplio de la dolorosa verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia...” (Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, 2010, p. 21).

Del mismo modo, se resalta que el interés oficial e institucional por los archivos de derechos humanos deviene de las negociaciones desarrolladas entre las AUC y el gobierno nacional, que se reconoce como “uno de los primeros momentos en que se incluyó a los

⁷⁵Es importante destacar dos procesos pioneros en la documentación, el estudio de la violencia y las violaciones a los derechos humanos en Colombia, como lo serían la publicación en 1962 del tomo I del libro “la Violencia en Colombia” que empezó a gestarse en el auge de este periodo a manos del Cura Párroco Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna (Flores, 2013). El objetivo del libro fue “servir de plataforma académica y expresión de denuncia para revelar etnográfica y sociológicamente sus manifestaciones en las regiones. A partir de un acopio de material de archivo de prensa de la época y entrevistas a expertos” (Jaramillo, 2012, p. 35). Así mismo, en 1987, se publicó el libro “Colombia: violencia y democracia” que desarrolló la Comisión de Estudios sobre la Violencia a cargo de Gonzalo Sánchez (Jaramillo, 2013).

archivos de derechos humanos en la legislación nacional” (Espinosa, 2021, p. 6), además, de que se hace evidente una preocupación por la administración, custodia y acceso frente a este tipo de documentos.

Esto a partir de la Ley 975 de 2005 o Ley de justicia y paz, mediante la cual “se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” (Fiscalía General de la Nación, 2010, p. 12). En esta ley a partir de “sus artículos 56, 57 y 58 se establecen los aspectos del deber de memoria del Estado, donde se advierte sobre la necesidad de adoptar medidas de preservación de los archivos, junto con las medidas para facilitar el acceso a los archivos por parte de las víctimas” (Flores, 2013, p. 41).

Es así como los archivos de derechos humanos son reconocidos en Colombia como un elemento importante para alcanzar la justicia y la verdad, pero también para la reparación de las víctimas en el marco de procesos de justicia transicional. De esta manera, esta ley medió la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)⁷⁶ y del Grupo de Memoria Histórica que estuvo inicialmente adscrito a esta comisión. Es importante reconocer la labor de documentación desarrollada por estas instituciones, ya que según Espinosa (2021) “esta experiencia sería pionera en los trabajos de archivos de derechos humanos desde el Estado colombiano” (p. 6), lo que se ve materializado en el informe ¡Basta ya! (2013) en el que se integran la revisión de “archivos locales y nacionales que las comunidades y organizaciones (...) facilitaron; la consulta de expedientes judiciales y de archivos de los medios de comunicación; el acercamiento al extenso acervo de investigaciones académicas que sobre la guerra y la paz se han realizado en nuestro país y, especialmente, los cientos de testimonios generosamente aportados por las víctimas...” (GMH, 2013, p. 16) con el fin de construir un relato sobre el conflicto armado en Colombia.

⁷⁶ Esta comisión tiene entre sus funciones “garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos” (Fiscalía General de la Nación, 2010, p. 22).

Posteriormente, durante el gobierno de Santos (2010-2018) se da la creación e implementación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” (Acción social, 2011, p. 9). La promulgación de esta ley reafirma el interés del Estado frente a los archivos de derechos humanos principalmente a partir de su artículo 144. “De los archivos sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”, mediante el cual se le encarga al “Centro de Memoria Histórica” (cuya emergencia está reglamentada por la misma ley y termina por acoger el Grupo de Memoria Histórica) el “acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones” (Acción social, 2011, p. 66) a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Asimismo, al Centro Nacional de Memoria Histórica se le encarga la creación y administración del Museo de la memoria (que hasta la fecha se encuentra en construcción)⁷⁷ como una estrategia para fortalecer la memoria histórica y colectiva relacionada con los hechos de violencia enmarcados dentro del conflicto armado.

Por otro lado, esta institución junto con el Archivo General de la Nación se han encargado de la configuración de medidas de regulación en materia de archivos de derechos humanos que en Colombia eran inexistentes, esto a través de la creación del Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno y la Política pública de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado ambas publicadas en el 2017. La publicación de estos documentos es un paso importante en relación con la administración de archivos de derechos humanos en Colombia, ya que a través de estos se dictan unos principios de

⁷⁷ De acuerdo con la revista Semana (2023), “en pleno mes de enero de 2023, dicha construcción está atrasada, aunque ya lleva contruidos seis niveles, pero no ha sido entregada a las víctimas, ni a Bogotá; ello pese a que debió haber sido terminada y entregada en el mes de octubre del año pasado, (2022). Y lo peor del caso es que, según parece, tiene graves fallas en su estructura que recibiría a miles de visitantes” (Semana, 2023).

protección, custodia, acceso y divulgación que garantizan sus usos como parte de la construcción de la memoria histórica del país, pero también son una garantía para las víctimas.

Otro proceso de negociación que acogió a los archivos de derechos humanos como parte de sus procesos fue el desarrollado entre las FARC- EP y el gobierno nacional, en el que como parte de sus acuerdos se establece la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia , Reparación y No Repetición (SIJVRNR) con el que se pretende la “implementación de medidas restaurativas y reparadoras para esclarecer la verdad sobre el conflicto armado y propiciar la transformación de los factores que incidieron en él como fundamentos de una convivencia pacífica y digna para las víctimas” (CEV, JEP y UBPD, 2019, p. 1). Es de resaltar que este sistema se integra por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD).

De acuerdo, con los objetivos de este sistema se comprende la importancia que cobran los archivos de derechos humanos para el desarrollo de estas labores, así mismo, como afirma Espinosa (2021) para “las instituciones del sistema son trascendentales la documentación existente en los archivos comunitarios y de las propias víctimas” (p. 12), lo destaca los aportes de los procesos de documentación desarrollos por estas en el marco del conflicto armado.

Del mismo modo, son importantes los archivos de las instituciones estatales que estuvieron relacionadas con el conflicto, con los cuales se puede identificar el rol del Estado dentro de este. De ahí, que por primera vez “a una comisión⁷⁸ se le otorgan facultades para acceder a todo tipo de información, inclusive información reservada” (Cordero, 2020, p. 11).

⁷⁸ Por comisión se hace referencia a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).

Esto evidencia la importancia que se le ha dado a los archivos de derechos humanos en el esclarecimiento de la verdad, además, de la garantía de que las instituciones encargadas de esto tienen un amplio alcance en relación con el acceso a los archivos. Sin embargo, en el marco de las negociaciones con las FARC no se acordó la entrega de sus documentos para ser parte de este sistema, ni tampoco se priorizó su protección y acceso como archivos de derechos humanos.

Por otro lado, una discusión importante en la actualidad (2023), posterior a la publicación de los informes de la comisión de la verdad, se relaciona con el hecho de que “al corpus de los archivos de derechos humanos del país, se suma el trabajo de archivo de la propia Jurisdicción Especial para la paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidos y la Comisión de la Verdad” (Espinosa, 2021, p. 12). De manera que cobran importancia cuestionamientos en relación con el futuro de la administración y custodia de estos archivos, como: “¿Cuáles instituciones y organizaciones serán los custodios finales de estos archivos? ¿Qué sucederá con estos archivos tras el cierre del sistema? ¿Cómo lograr que se conviertan en archivos vivos útiles para las propias organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos?” (Espinosa, 2021, p. 12).

Asimismo, en el panorama actual (2023) durante la reciente ascensión al poder del presidente Gustavo Petro y la reanudación los diálogos con el ELN y el gobierno nacional, resulta importante establecer la necesidad de que en futuros acuerdos con esta guerrilla se establezca la disposición de sus documentos como archivos de derechos humanos al servicio del esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

2.3.2. Iniciativas sociales

En primer lugar, es necesario resaltar que los primeros procesos relacionados con archivos de derechos humanos devienen de la sociedad, desde iniciativas familiares, comunitarias o de organizaciones defensoras de derechos humanos, que se dieron a la tarea de documentar lo que estaba sucediendo en el marco del conflicto armado en Colombia.

De esta manera, se destaca el archivo de Fabiola Lalinde denominado “Operación Cirirí” que empezó a desarrollarse cuando “el 4 de octubre de 1984, luego de haber sido capturado en la vereda Verdúm, ubicada en el municipio de Jardín (Antioquia), Luis Fernando Lalinde Lalinde [quien] fue torturado, desaparecido y ejecutado” (CNMH, 2014, p. 85). De esta manera, su madre Fabiola Lalinde empieza un exhaustivo proceso de documentación que da cuenta de cada uno de sus movimientos en relación con el proceso de búsqueda de su hijo y de su vida familiar.

Este archivo fue donado en el 2018 a la Universidad Nacional con sede en Medellín y configura el fondo Lalinde y familia, que es reconocido como “uno de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado más importantes del país, clasificado por la UNESCO como Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe” (Universidad Nacional, 2018)

Por otro lado, se destaca el archivo comunitario creado por la Asociación de Familiares de Víctimas de los Hechos Violentos de Trujillo (Afavit). La comunidad de Trujillo creó la asociación como una organización en función de la defensa de los derechos humanos, debido a que su comunidad se vio gravemente afectada por el accionar de grupos de narcotraficantes, agentes del Estado y grupos paraestatales en su territorio entre 1986 y 1994, lo que conllevó a que varias personas perdieran la vida o fueran desaparecidas, además, de daños morales (García, 2019).

De esta manera, años después como parte de esta asociación se da la construcción del Parque Monumento a las Víctimas como la estrategia que el Estado colombiano adoptó para resarcir a las víctimas frente a las graves violaciones a los derechos humanos. En relación con lo anterior, el archivar se configura como una parte importante dentro de los procesos de Afavit y del Parque Monumento, ya que como lo afirma García (2019) este archivo “trasciende los soportes tradicionales y se conjuga con cada uno de los elementos que configuran este lugar diseñado para conmemorar los hechos violentos y homenajear a las víctimas” (García, 2019, p. 67). Además, de que se reconoce como un ejercicio de

archivo comunitario, debido a que su construcción se da a partir de los aportes de sus diferentes miembros.

Por otro lado, resulta importante mencionar las labores del proyecto Colombia Nunca Más (PCNM), que surge en 1996 bajo el liderazgo de diferentes organizaciones de derechos humanos con el objetivo de “aportar en la lucha contra la impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en Colombia, entre 1966 y 1998, desde la perspectiva de la recuperación de la memoria histórica” (PCNM, 2008). De acuerdo con esto, se destacan las labores de documentación desarrolladas por su equipo de trabajo que conlleva a que este proyecto tenga “una base de datos con uno de los archivos más completos de violaciones a derechos humanos en Colombia” (Espinosa, 2021, p. 5).

Asimismo, dentro de los informes producidos en el marco de este proyecto se hace un análisis diferencial del conflicto armado desde una mirada regional, a partir de una metodología que se “enfoca hacia una zona determinada, y (...) procura entrar en contacto con fuentes más cercanas a los hechos: archivos regionales, locales, testigos e investigadores de la región...” (PCNM, 2008, p. 16), entre otros. Frente a esto, se hace mención del informe Crímenes de Lesa Humanidad en la Zona Quinta (2008) en el que se presentan los hechos victimizantes “cometidos en los municipios que se encontraban bajo la jurisdicción de la Quinta Brigada del Ejército durante los años que van de 1966 a 1998” (PCNM, 2008, p. 29), dado que dentro de esta zona se recogen la totalidad de los municipios de Santander y Norte de Santander, once municipios del sur de Bolívar y seis del sur del Cesar, es decir, que la zona quinta abarca gran parte del Magdalena Medio. Por lo que, este informe es un insumo importante en la comprensión de las dinámicas del conflicto armado dentro de estos territorios, pero principalmente de la forma en que se dieron los crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, en relación con los archivos de derechos humanos correspondientes en particular a Santander, resulta importante destacar la labor de Amovi- UIS (Archivo Oral de Memoria de las Víctimas de la Universidad Industrial de Santander), creado en el 2013 como parte del proyecto de la investigación “Puesta en marcha de un archivo oral de

memorias en el área metropolitana de Bucaramanga verdades no contadas: el conflicto armado colombiano desde la memoria de las víctimas”. De esta manera, Amovi- UIS surge “desde la academia, apoyado y financiado por Colciencias y la Universidad Industrial de Santander y asesorado por la Corporación Compromiso” (Amovi- UIS, 2022). Este archivo se encarga de recoger la voz de las víctimas, salvaguardar los archivos de derechos humanos correspondientes al conflicto armado y construir conocimiento en torno a este desde procesos de investigación. En relación con lo anterior y según información obtenida a través de una entrevista a la Directora de Amovi- UIS, se comprende que este archivo:

Está protegido por medidas cautelares de la JEP [lo que] hace entonces que nosotros (Amovi- UIS) tengamos mayor obligación de tener estos archivos perfectamente cuidados, perfectamente organizados y que puedan ser soporte, todos nuestros archivos de las investigaciones de la JEP, porque yo (Directora de Amovi- UIS) he presentado siete informes de violaciones de derechos humanos y de graves casos a la JEP... (Entrevista a la Directora de Amovi -UIS, 27/05/2022).

De manera que estos archivos, al estar al servicio de la JEP y ser insumo en construcción de informes referentes a las violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto, contribuyen a procesos justicia, verdad y reparación a nivel local y nacional.

2.3.3. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos - Asfaddes

Como parte de las organizaciones interesadas en la conformación de archivos de derechos humanos, se encuentra la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), que además es la primera asociación de familiares de víctimas de desaparición forzada que se establece en Colombia en 1982, con la misión de “exigir al Estado Colombiano la erradicación de la Desaparición Forzada, como delito de lesa humanidad, la superación de la impunidad, el respeto por la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, a través de la consolidación de procesos formativos, jurídicos y de atención sicosocial a las víctimas” (Asfaddes, 2022).

Esta asociación es de carácter nacional, por lo que, cuenta con sedes denominadas “seccionales” en Cundinamarca, Armenia, Bucaramanga, Barrancabermeja, Neiva, Cúcuta, Medellín, Aguachica, Popayán y la sede a nivel nacional que se halla en Bogotá. Cada una de estas seccionales se fue creando a medida que la desaparición forzada se extendió en diferentes regiones del país, lo que motivó a que los familiares de las personas desaparecidas se organizaran.

Como hito fundacional de Asfaddes se presenta el caso del Colectivo 82 que hace referencia a la desaparición forzada de 12 estudiantes de la Universidad Nacional y Distrital, un obrero independiente y un dirigente campesino por parte de unidades del F2 entre marzo y septiembre de 1982 (Asfaddes, 2003). Este se sitúa como el primer momento de encuentro entre familiares de personas desaparecidas quienes “gracias a la orientación del padre Javier Giraldo y con la asesoría de Eduardo Umaña Mendoza, consolidaron ASFADDES” (Arellana, 2019, p. 88).

De esta manera, una de las acciones públicas de la asociación fue la Marcha de los Claveles Blancos en 1983, con la que se pretendía contrarrestar el silencio por parte del Estado frente a los casos de desaparición forzada y así mismo, hacer visibles a las personas desaparecidas, e interpelar a sociedad civil (Asfaddes, 2003).

De esta manera, los familiares congregados en Asfaddes comenzaron a salir cada jueves, siguiendo el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, quienes ya se encontraban en la etapa final de la última dictadura militar, hasta 1984 cuando la persecución, el hostigamiento y las amenazas conllevaron a su suspensión (Asfaddes, 2003, Arellana, 2019).

Del mismo modo, otra de las iniciativas públicas desarrolladas por la asociación que inició en 1998 y que se ha convertido en una de las más representativas del movimiento de víctimas, es la Galería de la memoria, a través de la cual se planteaba “trabajar un espacio público de reconstrucción de memoria histórica del delito de la detención desaparición” (Asfaddes, 2003, p. 106). En relación con lo anterior, en un primer momento la forma en

que la Galería pretendía reconstruir el pasado era a partir de la exposición de elementos relacionados con las personas desaparecidas como fotografías, escritos o ropa que los familiares prestaban. Pero el uso de estos elementos se redujo con el tiempo cuando la asociación empezó a utilizar los característicos retablos con los rostros de las personas desaparecidas acompañados con los datos de la desaparición y los logos de Asfaddes.

De manera que estos retablos son ubicados en el espacio público y tienen un carácter itinerante, por lo que, a partir de la Galería de la memoria se hacen evidentes unos usos públicos del archivo fotográfico de la asociación.

En relación con el tema de los archivos, Asfaddes desde sus inicios le ha dado gran importancia a la documentación de los casos desde la construcción de un dossier por parte de los familiares que buscan a su ser querido. En relación con estos procesos, en el libro: “Veinte años de historia y lucha” publicado por la asociación (2003) se enuncia que la labor de los familiares de las personas desaparecidas “tenía que reflejarse en un escrito que recogiera la historia de su lucha por su ser querido, las cartas dirigidas a las autoridades, las respuestas recibidas, los poemas, las misas, todo lo que cada familiar hiciera” (p. 81). Por lo que, en un inicio los dossier fueron contruidos por cada familiar y posteriormente pasaron a configurar el archivo de la asociación.

Por otro lado, es preciso indicar que Asfaddes “es una organización sin ánimo de lucro cuyo financiamiento se da a través de convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales y también a partir de donaciones” (Entrevista a participante del proyecto: los archivos de la ausencia, 2022). De esta manera, “el año 2017 se inició un convenio de cooperación con la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), este convenio pretendía organizar el archivo de Asfaddes mediante un proceso de limpieza, clasificación y rotulación de información, esto se hizo en el archivo de derechos humanos, el administrativo, el de los casos y el jurídico” (Entrevista a participante del proyecto: los archivos de la ausencia, 2022). De esta manera, el archivo de Asfaddes nacional recientemente se vio permeado por un proceso organización, en el que integrantes de la asociación fueron capacitados en materia de archivos para desarrollar los procesos de limpieza, clasificación documental y la creación de una base de datos de sus propios

documentos. Del mismo modo, como parte de este proyecto se adaptó un espacio dentro de la sede nacional de Asfaddes que garantice la integridad de los archivos.

2.3.4. Asfaddes Seccional Bucaramanga

De acuerdo con lo expuesto en apartados anteriores, la desaparición forzada empieza a ser usada en Colombia como herramienta represiva durante los años ochenta y se extiende por las diferentes regiones del país incluyendo Santander, donde se empezaron a hacer frecuentes los casos de desaparición forzada dirigida principalmente a sindicalistas, estudiantes de la UIS, líderes campesinos, docentes y comerciantes.

Esta situación conlleva, a que los familiares de las personas desaparecidas en sus procesos de búsqueda se encontrarán, como lo afirma una de las fundadoras de Asfaddes seccional Bucaramanga:

Mi hermano ... fue desaparecido en la ciudad de San Gil el día 16 de junio de 1986. Entonces ahí empezamos una búsqueda independiente, como familiares empezamos nosotros a buscarlo en la morgue [...] entonces donde nos informaban nosotros íbamos y a raíz de eso empezamos a conocer más gente que estaba padeciendo la misma figura de la desaparición. Entonces empezamos a reunirnos. El sindicato de la UIS nos prestó la sede aquí en la 14, empezamos cada 15 días o cada mes veníamos y hablábamos de nuestros familiares y de toda la problemática, y así llegamos un día a Bogotá y ahí conocimos más y que no era solamente aquí en Santander sino que era a nivel nacional (Entrevista a una de las fundadoras de Asfaddes Seccional Bucaramanga, 26/05/2022).

De esta manera, Asfaddes seccional Bucaramanga inicia con la juntanza de familiares de personas desaparecidas del territorio que tras reunirse con integrantes de Asfaddes en Bogotá decidieron liderar la creación de una sede de la organización en 1989 que acogiera a los familiares de Santander.

La constitución y el mantenimiento de la seccional no fue algo sencillo debido a la persecución a la que se veían sometidos y a la estigmatización que recibían por parte de agentes del Estado, lo que conllevó, a que en un primer momento no lograran arrendar una oficina para el funcionamiento de la sede. De igual forma, se destaca que a partir de 1992 el hostigamiento y las amenazas a la seccional y sus integrantes aumentaron, y varios defensores de derechos humanos de Bucaramanga fueron detenidos. Además, del robo de información e intervenciones telefónicas (Asfaddes, 2003, Contreras y Lozada, 2021).

A pesar de todo lo anterior, la seccional continúa con su proceso, apoyando a los familiares, realizando procesos de acompañamiento, denuncia y conmemoración. Además, de continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas a partir de actividades como campañas de toma de muestras a los familiares de la seccional por parte de Medicina Legal. En la actualidad, la seccional cuenta con dos casas en comodato como sede y más de cincuenta familiares activos.

En relación con las iniciativas públicas agenciadas por la seccional se destaca el uso de la Galería de la memoria que cuentan con un carácter itinerante al ser exhibida en diferentes lugares como por ejemplo el parque principal de Floridablanca Santander, Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento en Bucaramanga, la Universidad Industrial de Santander (UIS), entre otros espacios. Por otro lado, también realiza la exposición “Zapatos desgastados” que según la Coordinadora de la seccional en un artículo de la Unidad de Víctimas “representan los cientos de pasos dados por los desaparecidos, y de los zapatos desgastados por los familiares para buscarlos y entregarlos dignamente” (Unidad de Víctimas, 2017), del mismo modo, se destaca el proyecto de “colchas por la memoria” desarrollada por integrantes de la seccional, que consiste en la elaboración de piezas textiles en relación con las personas desaparecidas.

Para el año 2017 Asfaddes seccional Bucaramanga decidió entregarle sus archivos en custodia a Amovi UIS, esto debido a que, como afirma la Coordinadora de la seccional de Asfaddes, tras un periodo de no tener una sede “cuando conseguimos la casa, la casa estaba muy deteriorada entonces no reunía las condiciones para tener ese archivo primero por

seguridad, segundo porque ese barrio ha sido azotado por el habitante de la calle y tratan de hacer incendios...” (Entrevista a la coordinadora de Asfaddes seccional Bucaramanga, 30/05/2022). Además, de que como lo afirma la Directora de Amovi UIS esta es “una casa de muy baja seguridad, una casa en donde tienen riesgos las víctimas, pero además del riesgo de las víctimas tenía un grandísimo riesgo el archivo. Entonces viendo por algunas fotografías el estado en el cual estaba el archivo de abandono porque pues Asfaddes no puede estar haciéndolo todo sin recursos y sin personal, no porque no quisieran sus archivos sino que no tenían como, entonces estaba como un fondo acumulado como llamamos nosotros los archivistas...” (Entrevista a la Directora de Amovi UIS, 27/05/2022).

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar las diferentes problemáticas que se exponen en las entrevistas frente al cuidado de un archivo de derechos humanos debido a la ausencia de una infraestructura que garantice su seguridad. Una situación similar, atraviesa la seccional Medellín que al no contar con una sede, los familiares resguardan los archivos en sus casas (Mesa, 2019), lo que implica un riesgo para los familiares y para los archivos dado su contenido.

Esta problemática se relaciona con la falta recursos o apoyos hacia las organizaciones de derechos humanos que garanticen la proyección de sus miembros, pero también de archivos que al ser de derechos humanos deberían regirse bajo los principios del Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos, e infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, como el de protección y salvaguarda de los archivos. Sin embargo, las condiciones bajo las que trabajan las organizaciones de derechos humanos en muchas ocasiones limita sus gestiones, lo que resulta problemático, ya que se corre el riesgo de que estos archivos sean dañados de forma permanente o sean robados.

CAPÍTULO 3

REPRESENTACIONES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS Y DE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN LOS ARCHIVOS DE ASFADDES SECCIONAL BUCARAMANGA

En este capítulo se presenta la caracterización y análisis del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga, en relación con las formas de representar a las personas desaparecidas y a la desaparición forzada, sus continuidades y transformaciones, en relación con las condiciones sociopolíticas y culturales que posibilitaron el establecimiento de estas representaciones dentro del marco temporal que establece la genealogía de la enunciación de la memoria en Colombia que propone Gonzalo Sanchez (2018).

Teniendo en cuenta esto, si bien se comprende que los casos o expedientes que componen el archivo, se configuran de forma intencional desde Asfaddes seccional Bucaramanga como estrategia de documentación frente a la desaparición forzada, es de resaltar que este se ve permeado por las voces de diferentes actores: los familiares, Asfaddes seccional Bucaramanga, las instituciones del Estado y la prensa; entidades que producen una serie de documentos a partir de los cuales se pueden reconocer unas representaciones que devienen de los contextos de producción del archivo, por lo que, los discursos que movilizan estos actores son eje dentro del análisis. De esta manera en este capítulo, se presenta una caracterización del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga, para posteriormente desde una mirada arqueológica - genealógica abordar las representaciones de las personas desaparecidas y de la desaparición forzada.

3.1. Caracterización del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga

Hacia el 2016 Asfaddes seccional Bucaramanga decidió entregar sus archivos en custodia al Archivo Oral de Memoria de Las Víctimas de la Universidad Industrial de Santander (Amovi- UIS), debido a que la sede de la asociación no contaba con una infraestructura adecuada para mantener seguro este acervo.

Tras la entrega del archivo este fue objeto de una serie de procesos como: identificación del tipo de documentos, clasificación, preparación (depuración, limpieza, corrección de plano y foliación), digitalización y captura, y carga de datos en el Archivo Digital (Contreras y Lozada, 2021). Es de resaltar que este trabajo fue desarrollado por dos estudiantes de la

Escuela de Historia de la UIS con la asesoría de la directora de Amovi UIS (actual directora del Archivo General de la Nación) quienes documentaron el proceso como parte de su pasantía y proyecto de grado.

En relación con lo anterior, la clasificación y organización de estos documentos se desarrolló de acuerdo con el principio de procedencia y orden natural que corresponde al archivo entregado, que pasó a ser parte del Fondo Amovi- UIS como Subfondo Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Asfaddes.

Este subfondo cuenta con dos secciones, la primera: Sección coordinadora nacional, que divide el archivo en cinco subsecciones: Administración, Archivo fotográfico, Archivo prensa y radio, Atención jurídica e informes contables. Es de resaltar que la subsección de Atención jurídica, se divide en tres subseries: Expedientes Asfaddes Seccional Bucaramanga, Expedientes Asfaddes seccional Cúcuta y Expedientes caso de los 19 comerciantes (Contreras y Lozada, 2021), lo anterior, se expone en la figura 2.

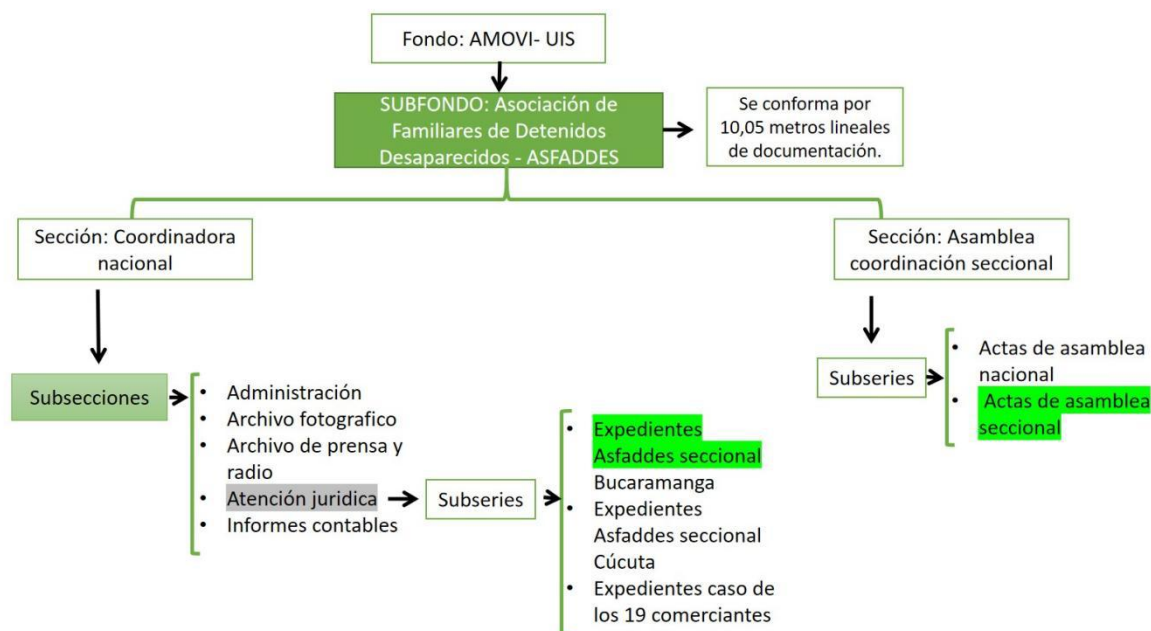


Figura 2. Esquema sobre la clasificación del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga. Fuente. Elaboración propia.

Por otro lado, la segunda sección que corresponde al subfondo Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Asfaddes se denomina Asamblea de coordinación seccional y

dentro de este se contienen las subseries: Actas de asamblea nacional y Actas de asamblea seccional que contienen actas y casetes.

De acuerdo con lo anterior, en este capítulo se presenta la caracterización y análisis de la subserie Expedientes Asfaddes seccional Bucaramanga en el que se contiene la información de los casos o *dossier* de las personas desaparecidas cuyos familiares están o estuvieron asociados.

En primer lugar, esta parte del archivo se compone de 350 casos de personas desaparecidas, de los que se revisaron 169 carpetas creadas entre 1982 y 2016, fecha de corte que se ha establecido debido a que en este año se hace la entrega de esta parte del archivo a Amovi-UIS y “la segunda entrega fue el 20 de febrero del 2020 correspondiente a la documentación administrativa de la entidad” (Contreras y Lozada, 2021, p.53).

El acceso a esta parte del archivo fue facilitada y mediada por la coordinadora de Asfaddes seccional Bucaramanga y el límite en cuanto al número de casos analizados se vio determinado por los procesos de organización que el archivo estaba atravesando.

En cuanto a la estructura y organización de la subserie correspondiente a los casos y expedientes revisados, estos se guardan en carpetas digitales separadas y ordenadas de forma alfabética por el primer apellido de la persona desaparecida, y en su interior se resguardan los documentos o en algunos casos se hacen presentes otras carpetas debido al volumen de la información, ya que aunque hay casos que solo tienen un documento, hay otras que contienen hasta 150 folios distribuidos en varias carpetas que corresponden a la misma persona desaparecida.

De esta manera, dentro de las carpetas que corresponden a los expedientes o casos de personas desaparecidas se hallaron los siguientes documentos: formatos, acciones en favor de la persona desaparecida o de sus familiares, documentos de identidad, fotocopias de medios impresos, fotografías o fotocopias de fotografías, hojas de vida o diplomas y documentos de carácter religioso. Por lo que, a continuación se presenta la tabla 1. donde se detallan las características del corpus documental que compone el archivo analizado.

Nombre	Autor	Primera aparición en el	Contenido y/o transformaciones
--------	-------	-------------------------	--------------------------------

		archivo	
Tipo de documento: Formatos			
Solicitud de afiliación a Asfaddes	Asfaddes Nacional	<p>Primera versión: 1985</p> <p>Segunda versión: 1995</p>	<p>Dentro de estos formatos se pide información sobre: la persona que solicita la afiliación, la persona desaparecida, datos de la detención desaparición y acciones de seguimiento como medidas locales, administrativas y otras, tomadas en favor de la víctima.</p> <p>Es de resaltar que a partir de 1995 se hace evidente la circulación de un nuevo formato de solicitud de afiliación a Asfaddes, que se diferencia de la primera versión debido a que en este formato se solicitaba mayor información sobre la familia de la persona desaparecida, desde el cuestionar: si quedan hijos a cargo del familiar que solicita la afiliación, su ocupación, nivel de formación, si requiere asistencia médica y sus deseos de trabajar o estudiar, entre otras cosas.</p> <p>Mientras que en la segunda versión, la información solicitada se centra en el nombre y apellido del denunciante, profesión, lugar y fecha de nacimiento, dirección, teléfono y vínculo con el desaparecido. Además de indagar por los datos del desaparecido como apellidos y nombres, identificación cédula, estado civil, profesión o actividad del desaparecido (actividad política, religiosa, sindical, humanitaria, líder, campesino, periodística, otra). También se cuestiona por datos de la detención desaparición y entes o instancias donde se ha denunciado el caso.</p>
Formatos Asfaddes o Base de datos nacional	Asfaddes Nacional	1984	<p>Este formato indaga por datos del caso, datos del denunciante, datos del desaparecido, rasgos físicos del desaparecido, núcleo familiar del desaparecido, hechos, presuntos responsables, violaciones a los derechos humanos dentro de su comunidad o dirigidos a familiares, e información sobre el proceso de investigación (Aunque en algunos casos está incompleto y solo están presentes las dos primeras hojas del formato que corresponden a los datos de la persona desaparecida y sus familiares).</p>

Formato nacional para la búsqueda de personas desaparecidas SIRDEC (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres)	Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses	2008	Este es un formato impreso que es diligenciado directamente en la página del SIRDEC. Este formato solicita información de la persona desaparecida como domicilio, seguridad social, información financiera, antecedentes judiciales, descripción morfológica, señales particulares, prendas de vestir, datos relativos a la desaparición, presunción de responsabilidad, fotografías y acciones de seguimiento del caso.
Ficha premortem	Sin información	Sin información	En este formato se registra información de la persona desaparecida, principalmente en relación con características físicas como complexión, cabello, fracturas óseas, información de hospitales, clínicas, médicos y odontólogos donde hubiere sido tratado, cráneo, radiografías o fotografías, dentadura, vestimenta, hábitos y de forma breve datos del denunciante.
Informe sobre desaparición forzada o involuntaria de una persona	Naciones Unidas Centro de Derechos Humanos	1987	De acuerdo con lo consignado en el instructivo de este formato, este tiene el objetivo de ser enviado al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos. Dentro de este, se solicita información sobre la persona desaparecida, la desaparición, presuntos responsables, medidas tomadas en favor de la persona desaparecida e identidad de la persona u organización que envía la información.
Ficha datos jóvenes desaparecidos asesinados extrajudicialmente	Sin información	Sin información	Este formato pide diligenciar datos sobre la persona desaparecida como nombres, cédula, estado civil, también lugar y fecha sobre la desaparición, lugar donde fue hallado, lugar donde fue sepultado, lugar donde se realizó la necropsia, profesión del desaparecido, lugar de la denuncia, estado de la investigación, presuntos responsables, nombre de los padres, y relato de los hechos.
Información víctima de ejecución extrajudicial Nodo nororiental colombiano	Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- Nodo Nororiental	Sin información	Dentro de este formato se solicita la siguiente información: datos de la víctima: estudiante, líder social, persona con antecedentes, campesino, mujer, personas desempleadas, actores armados y desmovilizados, habitante de calle, Otros; hechos denunciados: tipo de violación, fecha y hora de los hechos, responsables de los hechos, descripción

			de los hechos; perfil de las víctimas; acciones adelantadas; respuestas del Estado; tuvo inconvenientes para acceder a la justicia y daños causados a la familia de la víctima o comunidad.
Ficha KADEX	Comité Ejecutivo SES (Sindicato de educadores de Santander)	Sin información	Este formato solicita la siguiente información: datos personales del educador, municipios donde laboró, grado del escalafón, vinculación laboral, afiliado a sindicato de educadores de Santander, actividad que desarrollaba en la organización sindical, amenazado, breve relato. Del mismo modo, pregunta si el educador fue detenido, desaparecido (a) (secuestrado (a)), torturado, asesinado. También indaga por los datos de los familiares y la dependencia económica del educador.
Ficha técnica para la búsqueda de personas desaparecidas	Fiscalía y Medicina Legal	2002	De acuerdo con lo consignado en este formato, su objetivo es “obtener información útil para la búsqueda de las personas desaparecidas entre los cadáveres sometidos a necropsia médico legal reportados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses”. En este formato se indaga por: datos de la persona que busca al desaparecido, datos personales del desaparecido, hechos, descripción física del desaparecido, características faciales, señales particulares, descripción de las prendas que portaba la persona desaparecida. Además, cuenta con un diagrama de cuerpo femenino y masculino para ubicación de señales particulares.
Solicitud de búsqueda urgente de personas presuntamente desaparecidas ley 589/2.000(ART 13)	Sin información	2002	De acuerdo con lo consignado en el documento, este está diseñado para dirigirse a jueces o fiscales, con el objetivo de que su despacho active este mecanismo y realice las acciones necesarias para dar con el paradero de la persona desaparecida. De esta manera en este formato se solicita la siguiente información: Identificación plena de la persona desaparecida, narración de la forma en que desapareció la persona y datos de la persona con la cual se puede ampliar la información.
Tipo de documento: Acciones en favor de la persona desaparecida o de sus familiares			
Habeas Corpus	Familiares de las personas desaparecidas	1992	Este documento se dirige a juzgados y es una acción pública que se rige bajo el Artículo 30 de la Constitución Política

			de Colombia, donde se determina que ante la privación de la libertad o detención ilegal se tiene el derecho a invocar ante cualquier autoridad el Habeas Corpus (Constitución Política de Colombia, 1991).
Derechos de petición	Asfaddes y los familiares de las personas desaparecidas	1995	<p>Este derecho está consignado en la Constitución Política de Colombia en el Artículo 23 en el que se afirma que toda persona puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y así mismo recibir una pronta respuesta o solución (Constitución Política de Colombia, 1991).</p> <p>En cuanto a la estructura, en primer lugar, se escribe a quién va dirigido, posteriormente se presenta la organización o la persona que envía el derecho de petición, se describen los hechos y, por último, se hace la petición. Es de resaltar que según lo observado en el archivo estos tienen el objetivo de solicitar información frente el estado de la investigación o la activación del mecanismo de búsqueda urgente.</p>
Respuestas a derechos de petición	-Fiscalía, -Procuraduría, -Personería -Unidad nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses o -Alcaldías	2007	Estos documentos corresponden a las respuestas a los derechos de petición interpuestos por Asfaddes y los familiares de las personas desaparecidas, en los que se da cuenta de los procesos de investigación.
Acción urgente o Denuncia urgente	Asfaddes	1990	Dentro de estos documentos se escriben los datos personales y características físicas de las personas desaparecidas, y la descripción de los hechos.
Denuncias y Declaraciones	Familiares Asfaddes	1988	Este tipo de documento hace referencia a las denuncias interpuestas por los familiares de las personas desaparecidas ante instituciones como la Fiscalía, la Personería, Policía Judicial, Defensoría

			<p>del Pueblo, C.T.I y Notarías. Su contenido se caracteriza por presentarse a modo entrevista donde uno de los agentes de la institución correspondiente cuestiona al familiar o a quien interpone la denuncia frente a la persona desaparecida y los hechos de la desaparición.</p> <p>Estas denuncias desde Asfaddes también están dirigidas a instancias internacionales como Amnistía Internacional y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM).</p>
Certificados o constancias	Fiscalía, Personería, Defensoría del pueblo, Policía, Gaula, JAC, ANUC, Dirección política de la Alianza Democrática M-19, UP, Asfaddes, hospitales, fundaciones, empleadores o la comunidad.	1988	<p>Estos documentos tienen varios tipos de emisores, por un lado, son emitidos por instituciones del Estado y tienen el objetivo de certificar o dar constancia que dentro de la institución correspondiente se está adelantando un proceso de investigación o que los familiares interpusieron la denuncia. También se presentan como autores organizaciones políticas, estas pretenden dar cuenta de la participación de las personas desaparecidas dentro de sus actividades. Además, aparecen certificaciones de hospitales o fundaciones donde se da constancia de que la persona desaparecida o sus familiares recibieron algún tipo de servicio por parte de la entidad. Así mismo, cuando estos documentos se producen por los empleadores o la comunidad pretenden dar cuenta de la personalidad o labor de la persona desaparecida.</p>
Cartas	Familiares, Asfaddes Nacional, Asfaddes seccional Bucaramanga, Fiscalía, C.T.I, Procuraduría, Ministerio de Educación, Personería, CREDHOS, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,	1985	<p>Los remitentes de estas cartas también en ocasiones son sus receptores. Entre los asuntos de estas se encuentra:</p> <p>Denuncias de seguimientos o amenazas, dar a conocer casos de desaparición, ampliar información sobre hechos de desaparición, solicitar solidaridad para los familiares de las personas desaparecidas que atraviesan situaciones difíciles, solicitud de apoyo económico, solicitud de información del estado de casos de desaparición, averiguaciones sobre detenciones, averiguaciones sobre la identidad de cuerpos N.N. , entregas de restos óseo, solicitar pagos de los</p>

	Reiniciar, Banco Colmena, Hospitales, Fundación para las víctimas de la violencia, Director de Unidad de Víctimas, Alcaldías, educadores		salarios que se le deben a la persona desaparecida, solicitud de entrega de pensiones a familiares, solicitar créditos educativos, solicitud de documentación para proceso de muerte presunta, solicitud de fotocopias de necropsias, citaciones a versiones libres, información sobre traslados de los casos o asignación de este a algún despacho fiscal.
Historia clínica o carta dental	Centros médicos	Sin información	Dentro de estos documentos se consigna información médica de las personas desaparecidas.
Acta de levantamiento o protocolo de necropsia	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	1998	En este documento se describe el procedimiento de levantamiento y necropsia realizado a cadáveres correspondientes a personas desaparecidas.
Solicitud de muerte presunta	Familiares	2007	Con este documento los familiares de las personas desaparecidas solicitan se lleve a cabo el proceso correspondiente para que se declare la muerte presunta por la desaparición de su familiar.
Copia registro civil de defunción y acta de defunción por muerte presunta	Registraduría	2000	Con estos documentos se declara la muerte de la persona desaparecida, ya sea porque aparecieron sus restos o sus familiares solicitaron la muerte presunta.
Tipo de documento: Documentos de identidad			
Fotocopias de documentos de identidad	Registraduría	Sin información	Con esta documentación se hace referencia a fotocopias de documentos de identidad como cédula de ciudadanía, registros civiles o tarjetas de identidad de las personas desaparecidas o de sus familiares
Carnet de las personas desaparecidas	Instituciones educativas Cooperativa de recicladores Bello Renacer Fuerzas Militares de Colombia	Sin información	Estos documentos evidencian que las personas desaparecidas estuvieron o estaban al momento de la desaparición afiliados a estas instituciones.
Tipo de documento: Referentes a la ocupación o formación de la persona desaparecida			
Hoja de vida	Asfaddes	Sin información	Es de resaltar que esta hoja de vida está construida en función de la desaparición,

			es decir que, dentro de esta, aunque se solicita información personal y laboral de la persona desaparecida, también se describen los hechos de la desaparición.
Fotocopias de diplomas	Instituciones educativas Fuerzas Militares	Sin información	Estos documentos evidencian el nivel de estudio o tipo de formación de la persona desaparecida.
Tipo de documento: Fotocopias de medios impresos			
Periódico	Vanguardia Liberal de Bucaramanga El Tiempo Diario Occidente de Cali El País de Cali La Opinión de Cúcuta El Frente de Bucaramanga	1987	Dentro del archivo se encontraron recortes de prensa de noticias relacionadas con personas desaparecidas, secuestradas o asesinadas, también sobre bajas en combate de integrantes de grupos guerrilleros y ejecuciones extrajudiciales. Así mismo, se hacen presentes noticias sobre la situación de violencia dentro de los territorios, además, de homenajes o fechas de conmemoración.
Capítulos de libro	Sin información	Sin información	No hay información sobre el nombre del libro, ni el autor de este, dentro de la carpeta solo aparece la fotocopia de un fragmento con el título "... y ... El enigma de los nombres falsos".
Cartillas	Colectivo de Solidaridad en Defensa de los Derechos Humanos Unión Sindical de Trabajadores de Santander Familiares	1988 1989 1988	Cartilla con el título: "¡¡Defendamos la vida!! ¡¡Abajo las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales!!" Estas cartillas aparentemente son editadas en función del primero de mayo y en ellas se expone la situación sindical de Santander y las violaciones a los derechos humanos. Este documento se titula: "Homenaje a un chucureño desaparecido" y dentro de esta se recopilan fotografías de un desaparecido importante dentro de San Vicente de Chucurí, testimonios, cartas y poemas de sus amigos y familiares.
Tipo de documento: Fotografías o fotocopias de fotografías			
Fotografías tipo documento	Sin información	Sin información	Estas son imágenes tamaño 3x4 tipo documento de identidad fondo azul o blanco, también aparecen fotocopias

Fotografías familiares o de grupo Fotografías desarrollando alguna actividad			ampliadas de las mismas a blanco y negro. Las fotografías familiares o de grupo son imágenes en las que aparecen las personas desaparecidas con otras personas, ya sea de tipo familiar, tomadas aparentemente en un estudio fotográfico, escenas de fiestas familiares o fotos con otras personas. También se hacen presentes imágenes donde aparece la persona desaparecida trabajando.
Fotografías de cadáver	Sin información	Sin información	Estas son fotografías tomadas a un cuerpo desde diferentes ángulos, donde se hacen evidentes las marcas y heridas del mismo. No se conoce la procedencia de estas imágenes, pero aparentan ser del levantamiento del cuerpo
Tipo de documentos: Religiosos			
Partidas de bautismo o de matrimonio	Parroquias	Sin fechas	Estos documentos son prueba del nacimiento de las personas desaparecidas o de sus hijos, también, de los matrimonios y de la duración de esta convivencia.

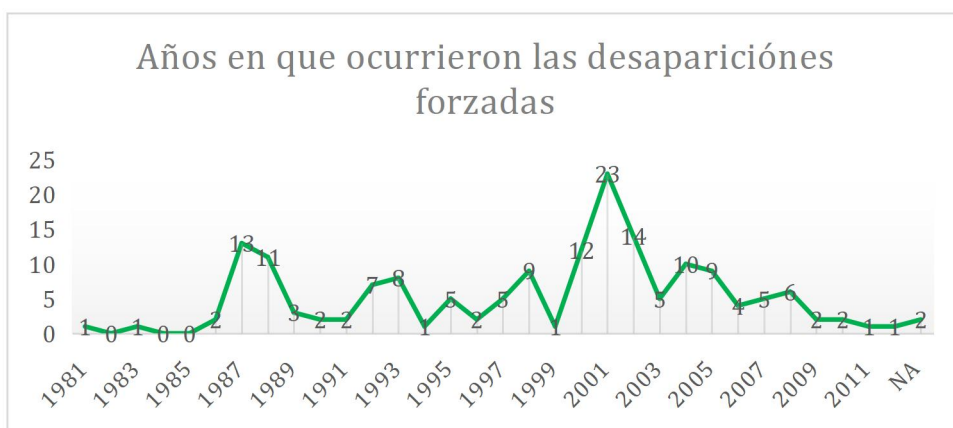
Tabla 2. Descripción de los documentos que integran los expedientes o casos del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga. Fuente. Elaboración propia.

Frente al cuadro anterior, se puede comprender que la subserie de expedientes de Asfaddes seccional Bucaramanga cuenta con varios tipos de documentos, diferentes fuentes y se ve permeado por múltiples voces como las de los familiares de las personas desaparecidas, desde su rol de asociados y denunciantes de la desaparición. En este sentido en los documentos analizados se hicieron presentes en su mayoría como denunciantes mujeres, ya que, de los 169 casos analizados, 97 fueron denunciados por mujeres, 20 por hombres y en 52 casos no se registra esta información. De esta manera, las denunciantes fueron esposas o compañeras en un 24%, madres en un 22 %, hermanas en un 9%, por último, hijas con un 2%. En contraposición con los hombres denunciantes los padres y hermanos aparecen en un 5% cada uno, mientras que los hijos tienen un 1%. Establecer estas cifras es importante para entender quiénes son los que han configurado la representación de los desaparecidos desde lo familiar y cuáles son sus lugares de enunciación.

Por otro lado, se hacen presentes entidades gubernamentales como: Procuraduría, Defensoría del pueblo, Personería, Fiscalía, alcaldías, notarías, Instituto Nacional de Medicina Legal, entre otros. Además de ONGs como: Asfaddes, Naciones Unidas, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y sindicatos como USITRAS.

Por último, se resalta la recurrente aparición de recortes de prensa dentro de las carpetas de expedientes lo que configura a los medios de comunicación impresa en un actor importante dentro de la construcción de representaciones de las personas desaparecidas.

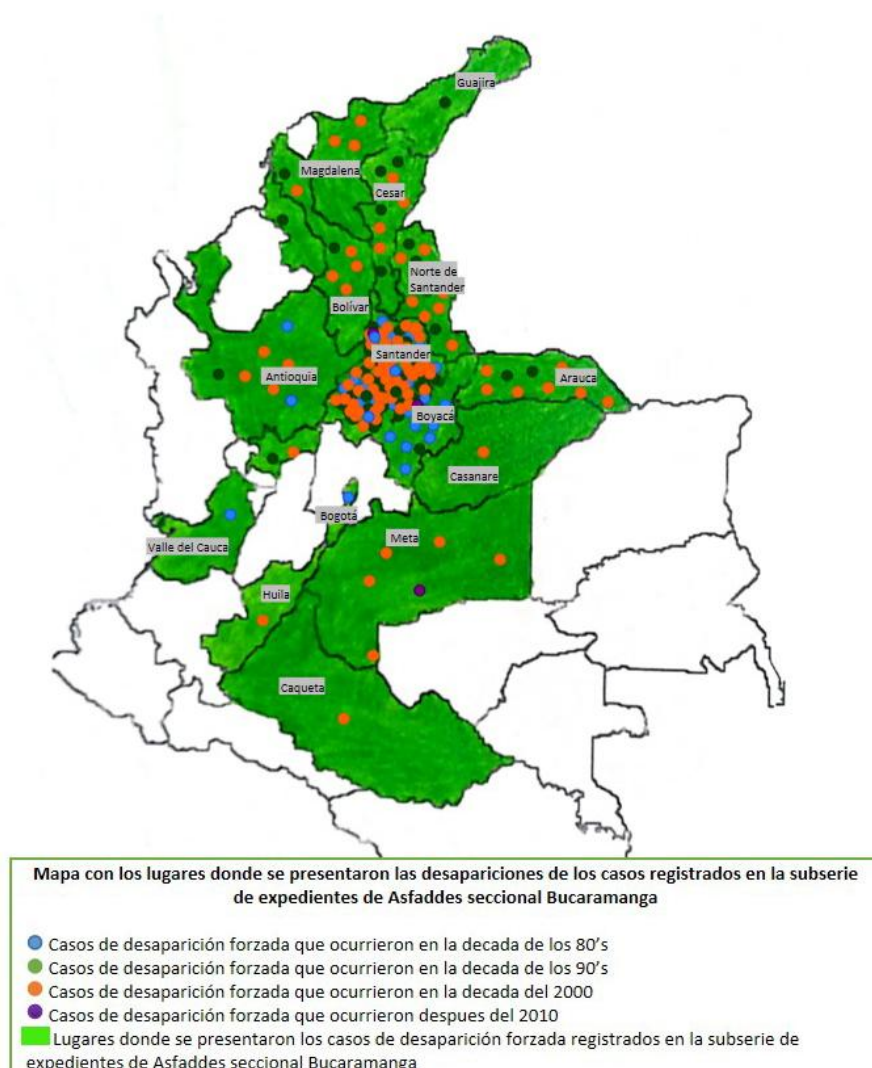
Por otro lado, en relación con los casos de desaparición analizados que corresponden a esta subserie, es de resaltar que dentro de estos las desapariciones se dieron entre 1981 y 2012. De acuerdo con esto, como se evidencia en la Gráfica 4 durante ese periodo se hacen presentes momentos de disminución y aumento frente a las denuncias de desapariciones forzadas hechas en la seccional, con su pico más alto en 2001 con 23 casos (en relación con los 169 analizados).



Grafica 4. Años en que ocurrieron las desapariciones forzadas según los expedientes. Fuente. Elaboración propia.

Así mismo, las denuncias de desaparición forzada hechas en Asfaddes seccional Bucaramanga corresponden a unos territorios específicos como se puede ver en el mapa 3. Frente a esto, es necesario reconocer que, aunque la seccional abarca principalmente los casos de desaparición forzada de Santander según lo consignado en los expedientes, también se recibieron casos que se relacionan con otros departamentos. Esto se debe a que,

algunas personas, aunque residían en Santander fueron desaparecidas o sus cuerpos aparecieron en otros territorios, ya sea porque se encontraban de viaje o fueron trasladados por quienes perpetraron el crimen. Así mismo, se hacen presentes casos donde los hechos se dieron en los lugares donde vivían las personas desaparecidas con sus familias, pero tuvieron que desplazarse a Bucaramanga, lugar donde denuncian la desaparición y se integran a Asfaddes. Por otro lado, también hay familiares que ante la ausencia de seccionales de Asfaddes en su territorio se trasladan hasta la más cercana para pedir ayuda a la Asociación. De ahí, que los casos consignados dentro de esta seccional estén situados en territorios tan variados.



Mapa 3. Lugares donde se presentaron las desapariciones de los casos registrados en los expedientes. Fuente. Elaboración propia.

El mapa anterior hace un cruce espacio temporal que presenta dónde ocurrieron las desapariciones, pero también en qué periodos, esto resulta importante, ya que permite vislumbrar desde los casos analizados la magnitud de la desaparición forzada dentro de los territorios y el establecimiento de una periodización a partir de la emergencia de la seccional. Esto permite comprender en qué periodos se registraron más casos desde un punto de vista regional, lo que podría relacionarse con las diferentes etapas del conflicto armado a partir del surgimiento y permanencia de grupos armados en estos territorios o la aplicación de políticas de seguridad del Estado dentro de los mismos. Como ejemplo de esto, se evidencia que las marcas de color naranja exponen el aumento de la desaparición forzada en el territorio durante la década del 2000, que se puede relacionar con el accionar paramilitar, pero también con la aplicación de la Política de Seguridad Democrática que entró en vigencia durante los dos gobiernos de Uribe Vélez (2002- 2010) y la revelación de los casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado mal llamados: “falsos positivos”.

De acuerdo con lo anterior, se podría afirmar que las representaciones de las personas desaparecidas y de la desaparición forzada presente dentro de esta parte del archivo se ve influenciada, por los cambios en la dinámica misma del conflicto y sus actores, y por el lugar enunciativo de quien narra, es decir, los actores que configuran y ponen en circulación estas representaciones en la subserie de expedientes de Asfaddes seccional Bucaramanga, ya que, aunque esta seccional configuró estos archivos, en los documentos se hallan diferentes productores o autores como: los familiares de las personas desaparecidas, las instituciones del Estado y la prensa.

Finalmente, es importante señalar que en estos archivos no solo se construyen representaciones en torno a las personas desaparecidas, sino también frente a sus familiares, la asociación y los victimarios⁷⁹.

A partir de esto, como estrategia para entablar una lectura y análisis de las representaciones de las personas desaparecidas y de la desaparición forzada en esta parte del archivo, se

⁷⁹ Aunque esta investigación se centra en las configuraciones discursivas sobre las personas desaparecidas, es necesario mencionar que las representaciones de estos otros actores (los familiares, la asociación y los victimarios) se presentan de forma tangencial dentro de los análisis.

toma la genealogía de la enunciación de la memoria desarrollada por Sánchez (2018) como eje, ya que esta establece una periodización en cuanto a la “enunciación de la memoria social del conflicto armado en Colombia” (Sánchez, 2018, p. 97). Esto resulta necesario debido a que como lo afirma el autor “la memoria en Colombia no surge como un campo autónomo, no es un objeto de trabajo en sí mismo, sino que aparece de forma subsidiaria, inmersa en la denuncia y movilización por la defensa de los derechos humanos” (Sánchez, 2018, p. 97), lo anterior permite comprender que la construcción de los discursos de la memoria en Colombia ha ido de la mano de la defensa de los derechos humanos y se relaciona con la emergencia y el trabajo desarrollado por procesos asociativos como Asfaddes.

De ahí, la importancia de asumir esta periodización, que concuerda con el surgimiento de la seccional y con la configuración de su archivo, además, porque establece una serie de momentos importantes dentro del conflicto en función de la memoria, lo que permite comprender las condiciones que posibilitaron la emergencia de las representaciones en torno a las personas desaparecidas y la desaparición forzada dentro de los archivos, sus transformaciones y su cruce con las voces de los actores que han configurado tales discursos.

Por otro lado, es necesario mencionar que se tuvo acceso a las Actas de asamblea seccional, cuya revisión fue facilitada y supervisada por la directora de Amovi- UIS y la coordinadora de Asfaddes seccional Bucaramanga. De acuerdo con esto, se hizo la revisión de los 847 folios contenidos dentro de esta subserie, que datan entre 1989, fecha de la constitución de la seccional, hasta 2015.

De este modo, la revisión de esta parte del archivo se dio bajo la intención de complementar la contextualización histórica de la seccional y de la desaparición forzada dentro del territorio que abarca. Además, su análisis contribuye en la comprensión de las formas de representación de la persona desaparecida y de la desaparición forzada que se producen dentro de la seccional. Del mismo modo, permite identificar los actores que han mediado los archivos y los usos públicos que se le han dado.

3.2 Representaciones de las personas desaparecidas y de la desaparición forzada

En este apartado se presentan y analizan las representaciones de las personas desaparecidas, de la desaparición forzada y sus transformaciones a partir de la periodización que Gonzalo Sánchez (2018) configura en relación con la enunciación de los discursos de la memoria social del conflicto armado en Colombia, que consta de cuatro momentos⁸⁰:

- Primer momento: Derechos humanos como punto de partida, este concuerda con la emergencia de la movilización social por la defensa de los derechos humanos posterior al Frente Nacional, durante el gobierno de Turbay. Cuando se empieza a relacionar la movilización social con la insurgencia, lo que conlleva a la persecución de este sector social (Sánchez, 2018).

- Segundo momento: La paz como horizonte, este se caracteriza por la movilización social agenciada por el establecimiento de la constitución política de Colombia donde “paz y derechos humanos se constituyen, así, en el marco dentro del cual se realizarán predominantemente los ejercicios de memoria relacionados con el conflicto armado” (Sánchez, 2018, p. 102).

-Tercer momento: Víctima como sujeto de la memoria y la justicia transicional, este se relaciona con la emergencia de la víctima como sujeto de derecho y como agente en la construcción de memorias a partir de dos procesos, por un lado, la posición negacionista del conflicto armado asumida por el gobierno de Uribe Vélez, por el otro, la promulgación y aplicación de la Ley 975 del 2005 o Ley Justicia y Paz.

-Cuarto momento: La nueva institucionalidad de las víctimas y la paz, este parte por la promulgación de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el año 2011 cuando entran en diálogo y disputa los diferentes agentes de memoria en la construcción de una versión del pasado (Sánchez, 2018).

⁸⁰ Es de resaltar que dentro de la genealogía que presenta Gonzalo Sánchez es posible reconocer un quinto momento que se relaciona con el proceso de negociación de paz entre las Farc-Ep y el gobierno de Juan Manuel Santos, a partir del cual “el tema de la memoria se convirtió en un tema de sociedad, en la medida que se reconoce que las negociaciones de paz despertaron el interés de todos los involucrados en la guerra, como contendientes, financiadores, promotores, para intentar poner en la escena pública su propio relato” (Sánchez, 2018, p. 110). Sin embargo, este momento no se articula como parte del análisis debido a que la delimitación temporal del archivo revisado es anterior a este periodo.

En relación con esto, dentro de este apartado se desarrollan los puntos anteriores en relación con los actores que enuncian las representaciones de las personas desaparecidas y la desaparición forzada dentro de la subsección de expedientes de Asfaddes seccional Bucaramanga que serían: los familiares, la misma Asfaddes, instituciones del Estado y la prensa.

Por otro lado, es importante mencionar que, aunque se asume esta periodización, los límites temporales entre las formas de representar a las personas desaparecidas y la desaparición forzada en algunos casos son borrosos, ya que hay representaciones que se expanden de forma transversal, pero toman mayor fuerza durante algunos periodos.

3.2.1. Primer momento: Emergencia del movimiento por los derechos humanos

La enunciación de los discursos de la memoria social del conflicto armado en Colombia está ligada a la emergencia de la defensa de los derechos humanos, el surgimiento de las organizaciones sociales, el auge de las movilizaciones populares y la participación democrática de la oposición (Sánchez, 2018 y Proyecto Colombia Nunca Más, 2008), en “un momento histórico en el que los derechos fundamentales estaban siendo violentados por causa de la equiparación que se había hecho entre los movimientos sociales y la insurgencia, en un gobierno (el del presidente Turbay)” (Sánchez, 2018, p.97) y en el que las desapariciones forzadas se hicieron recurrentes.

Este gobierno implementó el Estatuto de Seguridad Nacional como una estrategia para la lucha antsubversiva que se acogió a los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional⁸¹, tomando como una de sus herramientas represivas la desaparición forzada, esto en el marco de una “guerra sucia” entendida desde Margil en Rodríguez y Sánchez (2009) como “la confrontación adelantada por el Estado con su aparato militar o con el auspicio y apoyo de grupos paraestatales, contra los opositores políticos, sin importar si estos han estado vinculados o no con la lucha armada” (p. 46).

⁸¹ La Doctrina de Seguridad Nacional “como desarrollo de una teoría extranjera de contención al comunismo, incidió en el manejo político criminal que los Estados Latinoamericanos dieron a algunas manifestaciones sociales de protesta” (Escobar, 2006, p. 186).

Por lo que, como lo afirma Sánchez (2018) “el Estado trataba con violencia la amplia movilización popular de campesinos, a los estudiantes, a los activistas populares y a los obreros sindicalizados” (p. 97). De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar, la importancia de la identidad política de quienes estaban siendo objeto de las violaciones a los derechos humanos. Por lo que, este elemento resulta influyente en los modos de configurar a las personas desaparecidas, la cual operó ya desde el reconocimiento y visibilización, ya desde la negación o el desconocimiento de su identidad política como militantes, líderes estudiantiles o sindicalistas.

Familiares

En relación con lo anterior, es necesario reconocer que este primer momento se caracteriza por la emergencia de la movilización social por los derechos humanos y la organización de colectividades, en el que los familiares de las personas que eran objeto de estas violaciones, empezaron a tomar un protagonismo importante en la construcción de memorias frente al conflicto armado. En especial en los casos de desaparición forzada, ya que la voz de los familiares se convierte en la voz testimonial de los hechos ante la ausencia de la víctima directa.

De esta manera, como lo afirma Espinosa (2019) “son la familia y el activismo, los pilares con que apareció la voz pública, la denuncia y posteriormente las sanciones judiciales de la desaparición forzada” (p. 404). De ahí la importancia de estos sujetos en la configuración del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga, pero también en la construcción de representaciones de las personas desaparecidas.

De acuerdo con esto, en relación con las representaciones que se establecen de las personas desaparecidas desde las voces de sus familiares se resalta que, según Sánchez (2018) en este primer momento “la aparición de las víctimas como sujetos activos en la denuncia y demandas al Estado se realiza reafirmando la identidad política de las víctimas” (p. 100), como se detalla en los siguientes casos del archivo analizado:

[...] vivía en San Vicente de Chucurí, militante de la U.P. en este pueblo, debido a la situación social que se vive en este pueblo, decidió instalar su negocio en Bogotá. Allí se encontraba junto a su compañera ... y sus tres pequeños hijos. Posteriormente

en vista de la desaparición de ... ella se traslada nuevamente a San Vicente al lado de sus padres (Formatos Asfaddes, caso 115, 1988).

Actividades que desarrollaban antes de su desaparición. Era sindicalista del SES, era de afiliación liberal (Fila) Era estudiante en la Universidad de Pamplona - Tecnología Escolar a distancia (Queja interpuesta por el padre de ... ante la oficina Investigadora de la Procuraduría regional de Bucaramanga, caso 315, 1988).

De acuerdo con lo anterior, resulta importante resaltar que el reconocimiento de las actividades políticas de las personas desaparecidas dentro de los expedientes también se condicionó en algunos casos a la narración de una identidad política perseguida, esto se debe a que, como lo afirma Sánchez (2018) “las primeras organizaciones de derechos humanos ponen en primer plano la identidad política como la identidad amenazada por la represión o las violaciones que se quieren denunciar a través de la divulgación de la existencia de militantes-víctimas” (p.99). Lo anterior, también se proyecta dentro de los discursos familiares al aceptar los compromisos políticos y sociales de la persona desaparecida en la medida en que se narra la persecución, como por ejemplo en el caso 270:

PREGUNTADO: Díganos cuánto tiempo llevaba su hermano en el sindicato y si durante todo este tiempo había recibido amenazas. CONTESTÓ: Él llevaba en el sindicato como tres años, pero las amenazas y seguimientos han sido desde hace dos años para acá (Denuncia interpuesta ante la Fiscalía Judicial por parte de la hermana de ..., Caso 270, 1989).

No obstante, lo anterior, persiste también otro modo de tratar el tema de las filiaciones políticas de las personas desaparecidas en este primer momento por parte de sus familiares, que tienen que ver con el desconocimiento de las actividades que realizaban, esto, por ejemplo, se detalla en el caso 182:

‘La señora..., manifiesta que su hija al terminar el bachillerato salió de su residencia con destino a Bogotá. “De eso hace más de cuatro años y en los últimos meses me dijo que estaba empleada en un almacén de Cali. La última vez que vino a la casa

nuestra en Yumbo fue el primero de junio pasado". Y continúa "ella es una persona sencilla y cordial. Le gusta leer y casi siempre está de buen humor. **Nosotros nunca hemos notado que tenga ideas raras...**" (Fotocopia de recorte de prensa con el título: "Queremos saber dónde están nuestros hijos" (El énfasis es mío), Casó 182, 1987).

Frente a este caso, es de resaltar que fueron detenidas y desaparecidas cuatro personas señaladas de ser combatientes del M-19 según un comunicado emitido en 1987 por la organización guerrillera con el título "El M-19, responsabiliza a los comandantes de la tercera división, tercera brigada y policía metropolitana", aunque según otros documentos de esta carpeta estas personas se habían acogido a la amnistía. De esta manera, la referencia que hace la madre de una de las personas desaparecidas a "ideas raras" se entendería como su pertenencia al M-19 o ideas políticas de izquierda.

En relación con lo anterior, es necesario reflexionar frente a los modos en que los familiares configuran las representaciones de la persona desaparecida en este caso en relación con sus filiaciones políticas o militancias, ya que estas formas de nombrar o relatar podrían estar condicionadas por las instancias donde interponen las denuncias y sus discursos, no necesariamente desde la coerción, sino a partir de la influencia ejercida por el contexto en el que se enuncian los hechos en el marco de unos procedimientos y cuestionamientos específicos, ya sea desde Asfaddes o instituciones del Estado donde los diálogos se entablan bajo unos guiones de entrevista que parecen salidos del ámbito judicial. Así mismo, es de resaltar que el contexto nacional en que se configuran estas representaciones pertenecen al primer momento situado por Sánchez (2018) cuando se reconoce al Estado, sus instituciones y a grupos paraestatales como perpetradores de los hechos de desaparición y se expone a ciertas identidades políticas como guerrilleras o en este caso asociadas con: "ideas raras".

De esta manera, es posible señalar que "la violencia desatada por el Estado colombiano tenía unos destinatarios particulares y buscaba arrasar con aquellos sectores sociales de oposición que impedían la instauración de un orden económico determinado y que gracias

al apelativo de auxiliares de la guerrilla fueron convertidos en blanco de la guerra sucia...” (PCNM, 2008, p. 36).

Del mismo modo, frente a las denuncias interpuestas por los familiares y las organizaciones de derechos humanos ante instancias internacionales “la política oficial del Estado colombiano de alterar la realidad fue muy lejos en este periodo, al punto de afirmarse oficialmente ante la ONU que las personas denunciadas como víctimas eran personas que “se iban para la guerrilla” (Asfaddes, 2003, p.43), además, de que bajo esta misma línea el gobierno cuestiona la credibilidad de los denunciantes.

Por lo que se entiende la predilección de algunos de los familiares por asumir una voluntad de silencio para evitar el relacionamiento de su familiar desaparecido con grupos que desde los aparatos del Estado eran asumidos como insurgentes o guerrilleros.

En relación con lo anterior, es necesario reflexionar frente a lo que no se dice, es decir cuando aquel espacio donde se pregunta sobre las actividades políticas o humanitarias de las personas desaparecidas está vacío en los formatos diligenciados por los familiares, ese silencio que se inscribe en el papel con el que no se reconoce, se desconoce o se niega la existencia de una identidad política. Esto no quiere decir que en cada espacio que los familiares no diligenciaron haya algo oculto⁸².

De este modo, es importante mencionar que este primer momento aunque se caracteriza por el reconocimiento de una identidad política, esta es presentada desde la militancia, liderazgo estudiantil o sindical, pero dentro de los archivos no se reconoce una identidad guerrillera en el discurso familiar, esto podría deberse, por un lado, a que no se hicieron denuncias dentro de esta seccional relacionadas con personas desaparecidas adscritas a un grupo guerrillero en este momento o al ocultamiento de esta identidad política al momento

⁸² Es necesario reconocer a partir del antecedente argentino, que así como algunos familiares configuraban la representación de su familiar desaparecido desde sus valores “otros ignoraban sus adscripciones políticas, mientras otra porción ejerció un silencio estratégico sobre ellas dada la culpabilización y la estigmatización dictatorial a todo compromiso político, en especial si estaba vinculado a las organizaciones revolucionarias” (Crenzel, 2010, p. 70).

de diligenciar los formatos por parte de sus familiares debido a las características del contexto ya mencionadas.

En relación con las representaciones de la desaparición forzada, Gatti (2017), a partir de la experiencia argentina, afirma que la aplicación del concepto de detenido – desaparecido implica cuatro grandes hitos, estos son: “1) la constitución de la categoría misma en la experiencia de quienes padecieron de cerca la desaparición forzada cuando aún no se disponía de términos para nombrarla; 2) el ascenso de esta categoría al estatuto de tipo jurídico- penal del derecho internacional en materia de derechos humanos; 3) y 4) su circulación y expansión abiertas” (p. 16)

A partir de esto es posible comprender las representaciones de la desaparición forzada en Colombia, toda vez que entran en diálogo con la genealogía de Sánchez (2018), en la medida en que se asumen como fases en la comprensión del fenómeno de la desaparición forzada dentro de un contexto, en este caso el colombiano.

De esta manera, las primeras formas de representación de la desaparición forzada se relacionan con el primer hito planeado por Gatti (2017) ya que se basan en la experiencia individual de los familiares, al hablar de esta como algo demasiado difícil de experimentar, que traumatiza o es horrendo, estas son expresiones que devienen de la cotidianidad quebrantada que afecta emocionalmente a los familiares. Por lo que, ante la ausencia de una definición clara frente a lo que estaban experimentando “los familiares advierten un sinsentido y una transformación de significados frente a la vida tal y como la conocían antes de la ocurrencia de los hechos. Actividades y vivencias propias de la cotidianidad adquieren una connotación distinta, ya que se experimentan desde un lugar emocional y mental diferente a partir de la incertidumbre” (Comisión de la verdad, 2022c, p. 173)⁸³. Frente a esto, se comprende que las primeras representaciones de la desaparición forzada

⁸³ Además, es necesario reconocer que de acuerdo con los datos de la Comisión de la verdad (2022c) frente a las personas que compartieron sus testimonios con esta comisión “el 41% manifestó que se rompió su núcleo familiar después de los hechos” (Comisión de la verdad, 2022).

elaboradas por los familiares parten de su experiencia, pero principalmente desde sus sentimientos.

Asfaddes

Para comprender las representaciones que configura Asfaddes seccional Bucaramanga dentro de los expedientes de los casos de personas desaparecidas, para este primer momento, es necesario establecer desde Sánchez (2018) que la “emergencia de los trabajos de memoria y el activismo en defensa de los derechos humanos” (p. 97) están ligados y son complementarios en sus procesos. Así mismo, como ya se mencionó anteriormente el momento que potenció este surgimiento se da en un escenario de violencia y violaciones a los derechos humanos principalmente enfocada en sectores sociales con filiaciones políticas de oposición.

De acuerdo con lo anterior, bajo estas condiciones políticas y sociales surgió Asfaddes en 1982, cuando “las madres y hermanas del conocido como ‘Caso Colectivo 82’ empezaron a denunciar la ausencia de sus hijos” (Arrellana, 2019, p.88). Este caso abarca la desaparición de “12 estudiantes de la Universidad Nacional, un obrero independiente y un dirigente campesino desaparecidos forzosamente por unidades del F2 (organismo de la policía nacional) conjuntamente con un narcotraficante” (Asfaddes, 2003, p.28), situación que hace evidente la persecución a la que eran sometidos ciertos sectores de la sociedad. Así mismo, Asfaddes surgió inspirado “en la experiencia de la asociación de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina que para entonces vivían la etapa final de la dictadura militar y sus consecuencias” (Asfaddes, 2003, p. 29).

Bajo circunstancias similares se hace necesaria la apertura de una sede de la asociación en Bucaramanga en 1987, debido a que las desapariciones forzadas estaban aumentando en esta zona del país, especialmente dirigida contra estudiantes, líderes sindicales, comerciantes, campesinos, militantes y poblaciones vulnerables, entre otros.

A partir de este contexto es posible situar cuáles son las representaciones que se han configurado en los expedientes de Asfaddes seccional Bucaramanga. En primer lugar, estas se manifiestan desde el atribuirle a las personas desaparecidas ciertas actividades políticas

dentro de la configuración de formatos (como el de solicitud de afiliación o Formadatos) a partir de incluir un listado de opciones para que los familiares marquen con una “x”. De esta manera, en el Formadatos de Asfaddes o en el de Base de datos nacional, en el apartado de “Actividad” se dan las siguientes opciones: “Actividad social, Sindical, Religiosa, Política, Humanitaria, Solidaria, Defensor”, de igual modo el primer formato de Solicitud de afiliación a Asfaddes se presentan opciones similares: “Profesión o actividad del Desaparecido: Comerciante, Actividad política_ Religiosa_ Sindical_ Humanitaria_ Líder campesino_ periodística _ otra”.

En relación con otras instituciones se hace presente el formato de “Naciones Unidas centro de derechos humanos”. Informe sobre desaparición forzada o involuntaria de una persona” donde se muestran opciones como: “actividades: (sindicales, políticas, religiosas, humanitarias/de solidaridad, periodísticas, etc.)”.

De igual modo, en el formato de “Información víctima ejecución extrajudicial”. Nodo nororiental colombiano” se presentan los siguientes ítems: “Estudiante (), Líder Social (), Persona con antecedentes (), Mujer (), Personas Desempleadas (), Actores armados y desmovilizados (), Habitante de la calle () Otros (), Trabajador Informal ()”.

Se considera que la aparición de estas actividades dentro de los formatos se desprende del contexto político y social en el que se configuran las entidades a las que corresponden y la situación con la cual están relacionados que sería la desaparición forzada. Por lo tanto, se puede asumir que la estructuración de estos formatos deviene de un momento en el que la violencia se enfocaba en la persecución de ciertos actores sociales, ya que como lo afirma la Comisión de la verdad (2022c) entre 1985 y 1990 las desapariciones forzadas aumentan en 54% debido al incremento de la participación política de organizaciones de izquierda y la movilización por la paz, por lo que, las víctimas de desaparición forzada son principalmente líderes, militantes y simpatizantes. Asimismo, se resalta que entre 1986 y 1990 fueron desaparecidos 137 sindicalistas (Comisión de la verdad, 2022c). De ahí, la necesidad de cuestionar a los familiares frente las actividades de las personas desaparecidas, además, de que fue la desaparición de estos actores la que motivó la emergencia de Asfaddes.

De esta manera, el construir una representación de la persona desaparecida desde sus actividades sociales y políticas, hace evidente el contraste que establece Sánchez (2018) entre las Madres de la Plaza de Mayo y Asfaddes, ya que las primeras en un inicio ocultaron y negaron las militancias políticas de sus familiares desaparecidos, mientras que en el caso Colombiano, según Sánchez (2018) las denuncias de las violaciones a los derechos humanos se dan “reafirmando la identidad política de las víctimas” (p. 100).

Este contraste se hace evidente en los formatos que cuestionan de forma directa por las actividades de las personas desaparecidas, y en el énfasis que se hace en algunos casos en relación con las filiaciones políticas, como se detalla a continuación:

fue víctima del delito de desaparición forzada cuando se desempeñaba como PRESIDENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UIS SINTRAUNICOL en Bucaramanga, ... (Derecho de petición dirigido a la Fiscalía general de la nación y la Fiscalía quinta especializada de Bucaramanga por parte de Asfaddes, Caso 270, 1989).

Sin embargo, el que la asociación esté dispuesta a reconocer las filiaciones o actividades políticas y sociales de las personas de desaparecidas, no implica que todos los familiares denunciante también, ya que como se señaló en el apartado anterior los familiares asociados a Asfaddes seccional Bucaramanga también tienden a negar o en efecto desconocen las filiaciones políticas, militancias o actividades relacionadas.

Otro de los modos de representar a la persona desaparecida desde Asfaddes se relaciona con la preferencia a referirse a la persona desaparecida desde apelativos masculinos y a los familiares que denuncian desde lo femenino, esto podría deberse a que, como lo afirma Gloria Gómez (Coordinadora nacional de Asfaddes) en una entrevista que retoma Espinosa (2018), una de las principales características de los desaparecidos de este primer momento era que “las víctimas eran hombres, porque eran tiempos donde el liderazgo sólo era reconocido en los hombres y las mujeres estaban aún relegadas al segundo plano, de compañeras de vida, de amas de casa” (p. 396). De esta manera, desde ciertos documentos consignados en los expedientes se hace evidente esta marcación de género entre persona desaparecida- hombre y persona que busca - mujer. Como ejemplo se sitúan los siguientes formatos:

En la primera versión (1982) del formato de solicitud de afiliación a Asfaddes, se refiere lo siguiente: “Relación con el desaparecido:..., Hijos a su cargo:..., Edad:..., Estudian:..., Ocupación actual:..., Preparación laboral:..., vivienda:..., Asistencia médica:..., desea estudiar: ...trabajar...”, dentro de este formato se hace evidente una configuración de la persona que busca como mujer esposa o compañera de la persona desaparecida y madre desde el cuestionamiento de “hijos a su cargo”.

Por otro lado, en el formato Base de datos nacional y Formadatos Asfaddes que son prácticamente el mismo, en el apartado de “NÚCLEO FAMILIAR DEL DESAPARECIDO” luego de preguntar los nombres de los padres de la persona desaparecida, número de hermanos y de hijos se relaciona el ítem de: "Nombre de la esposa (o) (compañera) (o)". Mientras que en el formato de documentación falsos positivos se pide específicamente "nombre esposa".

Por otro lado, en el formato de Datos premortem, llama la atención el apartado de "Vestimenta: (al ser detenido)" que en la parte inferior del título dice: "en mujeres buscar equivalente" y se sitúan prendas como: "ZAPATOS, CALCETINES, PANTALONES, CALZONCILLOS SLIP, CINTURON CAMISETA, CAMISA, SWETER, CHALECO, CHOMPA, CHAQUETA", dentro del mismo apartado se enumeran las prendas y se mencionan ciertas características entre estas el “género” de la prenda. Lo que se busca resaltar de este apartado es que desde un inicio se sitúan prendas de uso generalmente masculino pidiendo su equivalencia en prendas atribuidas a lo femenino como el decir “CALZONCILLOS” en lugar de ropa interior.

Esta serie de ítems que configuran una representación de la persona desaparecida como hombre y al familiar denunciante como mujer, podría deberse a que como lo afirma Arellana (2019) las personas que fundaron Asfaddes “eran amas de casa, de familias trabajadoras, obreras y campesinas de origen humilde que enviaban a sus hijos a estudiar en las universidades públicas con la idea de mejorar sus condiciones de vida” (p 88). Lo anterior haciendo referencia a las madres de los 12 estudiantes que hacen parte del “caso colectivo 82” o como lo afirma Espinosa (2018) “en las denuncias de desaparición forzada la voz protagonista en ASFADDES y “autorizada” para hablar del desaparecido es la madre, desde la narrativa personal testimonial del sufrimiento por el hijo” (p. 407).

Sin embargo, desde la forma en que se solicita la información, estos formatos no están dirigidos a madres, sino a esposas o compañeras. En relación con lo anterior, se puede afirmar que bajo esta diferenciación por género se empezaron a configurar los formatos de Asfaddes y que estos se distribuyeron por las seccionales a medida que estas se creaban.

Otro factor a resaltar dentro de esta configuración del familiar denunciante como mujer – esposa- madre, se relaciona con las cifras, ya que de acuerdo con lo encontrado al interior de los expedientes revisados el 94.8% de las personas desaparecidas son hombres y solo un 5.2% son mujeres, por lo que, son las madres, esposas y compañeras las mayores denunciantes de la desaparición forzada. Esto también podría deberse a que como lo afirma Enciso (2017) “comúnmente son los hombres quienes van a la guerra y por esta razón son ellos, mayoritariamente, quienes pierden la vida en medio del conflicto armado y sufren diferentes tipos de violencias entre ellas, la desaparición forzada” (p. 29), lo anterior no quiere decir que las mujeres no sean objeto de violencia dentro del conflicto o que no sean o hayan sido un actor activo dentro del conflicto.

En relación con lo anterior, frente a los procesos de documentación agenciados por Asfaddes seccional Bucaramanga a partir de la construcción y el diligenciamiento de formatos, Bernasconi (2018) reflexiona desde los modos de registro desarrollados durante la dictadura en Chile (1973 - 1990) que “la propia gestión cotidiana de los procesos de registro y asistencia de la población afectada está impregnada de valuaciones que son también micro-prácticas políticas: definiciones, descripciones y categorizaciones, clasificaciones de víctimas, victimarios, entre otras” (p. 77), que determinan las formas en que la sociedad asume el pasado. De igual modo, la autora afirma que el desarrollo de estos “actos documentales” corresponde con la necesidad de afrontar un problema, desde el nombrar y describir los hechos para convertirlos en algo que puede ser pensado, gestionado y comprendido.

Por otro lado, una de las primeras representaciones que configura Asfaddes frente a la desaparición forzada se presenta dentro del nombre de la asociación, al enunciarse como “familiares de detenidos desaparecidos”, énfasis que también se hizo evidente dentro del formato de solicitud de afiliación al indagar por los “Datos de la detención- desaparición”. Esta enunciación no se da de forma inocente, sino que está ligada a un amplio contexto

político y social, que nos lleva al momento en que se acuñó por primera vez este término que “nació en los centros clandestinos de detención argentinos” (Gatti, 2017, p. 22) y se configuró a partir de un “proceso de invención social” (p. 17). Por lo que, el término detenido- desaparecido buscaba darle nombre a aquello que no encajaba en ninguna categoría preconcebida, ya que “desaparecido” o “persona desaparecida” es una categoría abierta a múltiples circunstancias como “guerras, catástrofes, desplazamiento de refugiados o secuestros, pero también incluyen las personas que se han perdido, menores huidos o posibles víctimas de secuestros” (p. 26).

De esta manera, si para identificar lo que estaba sucediendo durante la dictadura en Argentina fue necesario enfocar la categoría de “desaparición” al sumarle la palabra “detención”, según Anstett (2017) con esta relación se hace referencia a “secuestros acompañados muchas veces por torturas, ejecuciones sumarias y, además, cosificación de los cadáveres, en una modalidad particular de lucha contra posibles opositores” (p. 36).

En relación con el caso Colombiano, a partir de la genealogía de la memoria del conflicto armado elaborada por Sánchez (2018), se pueden situar en un primer momento las condiciones bajo las que los familiares empiezan a configurar una comprensión y representación de la desaparición forzada, ya que esta toma visibilidad y se incrementa en un contexto (similar al argentino) caracterizado por la persecución política de ciertos sectores de la sociedad que pasaron a ser considerados como subversivos y una amenaza para el Estado. De esta manera, según Asfaddes (2002) los familiares sabían que se trataba de desapariciones forzadas como mecanismo de represión y no de casos aislados como lo quería hacer creer el gobierno, comprensión alimentada por la experiencia internacional de los países del Cono Sur.

De esta manera, se comprende que la representación de la desaparición forzada configurada por Asfaddes como “detención - desaparición” sitúa todo un contexto socio- histórico de violencia ejercida por el Estado en el marco de la lucha contrainsurgente o la denominada guerra sucia, así como el ejercicio de poder aplicado sobre los desaparecidos al negarles sus derechos, todo esto contenido en un solo enunciado.

Instituciones

En relación con las voces que permearon el archivo desde lo gubernamental se hacen presentes instituciones como: Fiscalía, Policía, Personería, Juzgados, Secretaría municipal, Procuraduría, Alcaldías, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), Defensoría del pueblo, Instituto Nacional de Medicina Legal, entre otros, esto desde la emisión de certificaciones, derechos de petición o sus respuestas.

Como ya se pudo observar en las representaciones de las personas desaparecidas configuradas por sus familiares y Asfaddes desde la perspectiva de la genealogía propuesta por Sánchez (2018), un primer momento, en el escenario de la memoria y la desaparición forzada en Colombia se da en el marco de la lucha antsubversiva liderada por el Estado, sumado a los procesos de “la denuncia y movilización por la defensa de los derechos humanos” (Sánchez, 2018, p. 97). Este es un momento que se ve marcado por la persecución y la aplicación de violencia enfocada a ciertos actores aparentemente peligrosos para el proyecto de Estado. En concordancia con lo anterior, dentro de este primer momento, estas instituciones se presentan principalmente como receptores de documentos más que como sus productoras, asimismo es necesario resaltar que la mención de las instituciones del Estado dentro de los formatos se da de dos formas: En primer lugar, se basan principalmente en atribuirles la responsabilidad de la desaparición, por ejemplo, en el Formatos en el apartado donde se exponen los hechos de la desaparición y se cuestiona por los presuntos responsables aparecen los siguientes listados: “Agentes del Estado: Militares, Armada, Fuerza aérea, Policía, Gaula, CTI, DAS, INPEC, Dijin, Sijin, Otro cuál. Grupos Insurgentes: FARC, ELN, Bateman Cayón, ERP, EPL, Fuerzas Combinadas, Paramilitares, Autodefensas, Limpieza Social, Delincuencia Común, Otro cuál” (Formatos Asfaddes). Para este periodo es evidente una tendencia por parte de los familiares a señalar a Agentes del Estado como perpetradores del crimen, como se manifiesta en el caso 107 de 1983 donde en el apartado de “presuntos responsables de la desaparición” del Formatos se señala a la Dijin, o en el caso 228 de 1984 cuando este mismo apartado se señala a Agentes del estado: Militares y a Grupos insurgentes: Paramilitares.

Este señalamiento también se hace explícito en otro tipo de documentos, en los que se hace una descripción de los hechos de la desaparición como se presenta en el documento de Hoja de vida en el caso 228:

Los militares expresaron que necesitaban llevarlo al puesto de Garavito para realizar una investigación, un señor preguntó porque lo llevaban y le respondieron que necesitaban hacer una averiguación que le avisaran a la familia y que al día siguiente regresaría en el primer Johnson sano y salvo. Mientras hacía esas diligencias el Ejército llegó a la casa, dañó todas las pertenencias y se llevó la plata que teníamos para el regreso para Barranca, se llevaron todas las fotografías de la familia” (Hoja de vida, caso 228, 1984).

Por otro lado, la segunda forma en que se hacen presentes las instituciones del Estado dentro de los casos revisados, es como entidades receptoras de la denuncia, como se refiere en el caso 270 de 1989 cuando en el apartado de “Ante qué autoridades o instancias ha denunciado el caso” del formato de solicitud de afiliación se escribe: “F2, policía, Das, Procuraduría, Derechos Humanos ONG” (Solicitud de afiliación Asfaddes, caso 270, 1989).

También, se hacen presentes documentos que son registro de las denuncias presentadas por los familiares ante estas entidades, como en el caso 270 en el que aparece la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Judicial en 1988, o en el caso 315 en el que se hace presente una queja y su ampliación en la oficina Investigadora de la Procuraduría regional de Bucaramanga también en 1988. De esta manera, en este primer momento estos documentos son las fuentes desde las cuales se pueden percibir y comprender las representaciones de las personas desaparecidas configuradas por estas instituciones desde aquello que se le pregunta a los familiares.

En relación con lo anterior, dentro de estos documentos se hace evidente el reconocimiento del sindicalismo como una identidad política perseguida, desde las preguntas que se hacen dentro de los diálogos o entrevistas con los familiares, donde en primer lugar se cuestiona frente a la profesión o actividades de la persona desaparecida como en el caso 315:

Actividades que desarrollaba antes de su desaparición. Era sindicalista del SES, de afiliación liberal (Fila) Era estudiante en la Universidad de Pamplona - Tecnología

Escolar a distancia. (...). PREGUNTADO: Manifieste al despacho que tiempo tiene de ser ... de ser profesor en esa Escuela. Contesto: Seis (6) años” (Queja interpuesta por el padre de ... ante la oficina Investigadora de la Procuraduría regional de Bucaramanga, Caso 315, 1988).

A continuación, se pregunta por la relación de la persona desaparecida con grupos sindicalistas:

PREGUNTADO: Manifieste al despacho si ... es activista, es decir, dirigente o miembro de la junta Directiva del Sindicato al cual pertenece. CONTESTÓ: No. (...) (Queja interpuesta por el padre de ... ante la oficina Investigadora de la Procuraduría regional de Bucaramanga, Caso 315, 1988).

Del mismo modo, posteriormente se cuestiona a los familiares frente antecedentes de la desaparición como amenazas, allanamientos o detenciones:

PREGUNTADA: Diga si usted sabe que ... hubiese retenido por alguna autoridad en caso afirmativo cuál. CONTESTÓ: No sé. (...). PREGUNTADA: Diga si anteriormente a la desaparición usted se enteró que en casa de familiares o en la suya propia hubiesen habido allanamientos retenciones. CONTESTÓ: NO. (Ampliación de queja por parte de la madre de ... ante la Procuraduría, Caso 315, 1988).

15. Si no hubo retención o arresto previo, ¿qué circunstancias anteriores se conocen? CONTESTÓ: Él lo único que comentó era que estaba en la búsqueda del muchacho ... que había desaparecido días antes” (Queja interpuesta por el padre de ... ante la oficina Investigadora de la Procuraduría regional de Bucaramanga, Caso 315, 1988).

En relación con lo anterior, es importante que durante este primer momento se hizo evidente una fuerte represión antisindical que pretendía amedrentar a los integrantes de estos grupos para reducir sus exigencias laborales, la cual estuvo a cargo tanto de agentes del Estado como de grupos paramilitares, a partir de acciones como “allanamientos, detenciones, acusaciones y sindicaciones de militancia subversiva [así como] amenazas, torturas, desapariciones y asesinatos” (Proyecto Colombia Nunca Más, 2008, p. 284).

Por lo que, el que estas instituciones indagaran por las relaciones de las personas desaparecidas con sindicatos, en este primer momento que se caracteriza por la represión sindical, y posteriormente, cuestionaran si la persona desaparecida había sido amenazada, detenida o si habían tenido allanamientos, podría configurar más que la representación de un sindicalista perseguido, la de un sujeto señalado, ya que “el imaginario contrainsurgente que buscó siniestramente asimilar la actividad sindical a la insurgente, tiene en la práctica del allanamiento una forma de concretarse. En los allanamientos a los dirigentes sindicales se buscan armas, o sencillamente se colocan verdaderamente en las residencias armas, documentos, municiones, etc., con lo que se busca inculpar a los sindicalistas” (PCNM, 2008, p. 284). De esta forma, al realizar este tipo de cuestionamientos se está tratando de establecer una conexión entre la persona desaparecida, el sindicalismo y la insurgencia, además, de que se plantea una duda frente a la desaparición, en especial si se tienen en cuenta preguntas como:

PREGUNTADO: Diga si ... suele ausentarse con frecuencia de su trabajo o de su casa de habitación sin dar aviso. CONTESTÓ: Hay días que se queda por fuera de la casa, pero más de dos días no lo hace. PREGUNTADO: Diga si usted tiene conocimiento que su hijo ... hubiese tenido enemistad con alguna persona. CONTESTÓ: "Con ninguna" (Queja interpuesta por el padre de ... ante la oficina Investigadora de la Procuraduría regional de Bucaramanga, Caso 315, 1988).

Este tipo de cuestionamientos, ponen en duda la desaparición desde el manifestar que la persona pudo haberse marchado, se encuentra en otro lugar o acostumbra a irse, esto podría relacionarse con una de las versiones oficiales del Estado frente a las desapariciones según la cual estas personas no habían sido desaparecidas sino que se habían marchado para ser parte de grupos guerrilleros o “la mayoría de las desapariciones reportadas, correspondían a “muertes en combates realizados en las montañas”” (Asfaddes, 2003, p. 42).

Del mismo modo, como lo afirma Gómez (2019):

Las fuentes oficiales y extraoficiales —desde la Fiscalía hasta algunos medios— difunden de forma permanente que la desaparición de un líder o una lideresa, o de un sindicalista, o de un agente social, tiene que ver más con “lo personal” o con “lo criminal” que con lo político: un enredo de amor, una venganza personal, una deuda

no cancelada, un ajuste de cuentas entre clanes criminales... todas las excusas son buenas para desvincular una desaparición forzada de los victimarios intelectuales y de las razones de fondo que la motivan” (Gómez, 2019, p. 56).

De acuerdo con esto, las representaciones configuradas por las instituciones del Estado frente a las personas desaparecidas en este primer momento, presentan una tensión entre un sindicalista perseguido por el Estado y un sindicalista acusado por éste. Asimismo, las instituciones del Estado, son asumidas dentro de los casos como perpetradores de la desaparición o como entidades para interponer la denuncia. En relación con esto, aunque las instituciones que produjeron los documentos, son entidades públicas del Estado, no son las mismas que los familiares señalaron como perpetradoras del crimen, es necesario reflexionar cuáles fueron los roles que asumieron estas instituciones frente a la desaparición forzada y las personas desaparecidas, y en qué medida esto implicó su encubrimiento y complicidad con los mecanismos de desaparición, ya que como se afirma en el informe de la Comisión de la Verdad (2022c) “la institucionalidad y la sociedad misma refuerzan la intencionalidad de la desaparición cuando su respuesta es la negación o la invisibilización del crimen: «desaparecer al desaparecido». Esto hace que recaiga sobre la víctima la sospecha y se le atribuya la responsabilidad de los hechos, así como el peso del estigma” (Comisión de la verdad, 2022c, p. 172). Lo anterior se ve reflejado dentro de las cifras de la comisión (2022c), ya que a partir de los testimonios recogidos por esta se presume que el 13% de los familiares tuvo obstáculos para presentar la denuncia, un 19% fue víctima de estigmatización y un 10% de discriminación.⁸⁴

Por otro lado, en relación con las representaciones de la desaparición forzada configuradas por las instituciones gubernamentales, es necesario mencionar que estas se destacan por su ausencia, es decir que, dentro de los documentos producidos por estas instancias durante este periodo, no se establece una comprensión de la desaparición forzada. Esto podría deberse a que como ya se mencionó en este primer momento, el gobierno y sus instituciones asumen una postura negacionista frente a los hechos de desaparición y a las denuncias entabladas por los familiares y las organizaciones de derechos humanos, además,

⁸⁴ Lo anterior en relación con las “1.405 respuestas de familiares de desaparecidos a la pregunta de revictimización” (Comisión de la verdad, 2022c, p. 195).

de que ante instancias internacionales la respuesta del Estado era acusar a las personas desaparecidas de guerrilleras o afirmar que estas eran inexistentes y con sus denuncias solo se pretendía desacreditar al gobierno (Asfaddes, 2003).

Sin embargo, a pesar de que no se habla de desaparición forzada, si se mencionan asesinatos u homicidios, como se presenta a continuación:

[...] con base en la denuncia Penal formulada por Usted, el (2) de abril de 1984, ante la oficina Seccional de la Procuraduría General de la Nación, de Barrancabermeja, toda vez que se logró demostrar que ningún miembro de las Fuerzas Militares, intervino en los hechos que culminaron con la muerte de su hijo ... (Informe resultado trámite una queja enviado por la Procuraduría delegada para las FF.MM al padre de..., caso 128, 1984).

En relación con lo anterior, aunque la versión de las instituciones desconozca que en este caso se dio una desaparición, desde los documentos producidos por los familiares y Asfaddes se identifica que la persona en cuestión estuvo desaparecida antes de que se hallara su cuerpo. Esto se debe a que la desaparición forzada tiene la particularidad de relacionarse con otras violaciones a los derechos humanos, como tortura, secuestro, homicidio o reclutamiento forzado. De esta manera, los límites entre la desaparición forzada y otros crímenes se tornan borrosos lo que puede invisibilizar el hecho, como se pudo evidenciar en el caso anterior.

Por otro lado, es importante mencionar que el reconocimiento del homicidio o como se enuncia textualmente dentro del documento “los hechos que culminaron con la muerte” por parte de esta institución (Procuraduría), por encima de la desaparición forzada podría deberse a que para este momento esta violación a los derechos humanos no estaba tipificada como crimen, mientras que el homicidio si, lo que además justificaría la ausencia de una representación de la desaparición forzada por parte de las instituciones del Estado durante este periodo.

Prensa escrita:

En este punto es necesario resaltar que encontrarse con fragmentos de periódicos dentro de las carpetas de los casos fue algo recurrente, a pesar de que este tipo de documentos cuente

con su propia subsección como archivo de prensa y radio⁸⁵, ya que estos hacen parte del proceso de la construcción del dossier o carpeta de cada persona desaparecida, con la que se pretendía hacer el seguimiento de cada una de las acciones desarrolladas en favor de la víctima, por lo que, la prensa principalmente regional desde el periódico “Vanguardia Liberal”⁸⁶ se convirtió para los familiares en una herramienta de denuncia constante de los hechos de desaparición, pero también de búsqueda, en la medida en que dentro de estos también se publicaban casos de cuerpos encontrados o NN.

Del mismo modo, los periódicos le permitieron a la asociación estar al tanto de los casos de desapariciones, comprender lo que estaba sucediendo en el contexto, la magnitud de la desaparición forzada y las transformaciones del fenómeno. Por lo que, es necesario reconocer que la prensa escrita enuncia y configura una serie de representaciones de la desaparición forzada y de las personas desaparecidas y que, además, tiene una influencia en los modos en que los familiares de las personas desaparecidas y Asfaddes comprenden y elaboran la situación, ya que como lo afirma Butler (2006) “junto con la experiencia de la violencia surge un marco para poder pensarla... Parece crucial prestarle atención a este marco, desde el momento en que él es el que decide, de manera forzosa, lo que puede escucharse, si una postura va a ser tomada como una explicación o como una absolución, si seremos capaces de percibir la diferencia y de aceptarla” (p. 28).

De esta manera, los medios de comunicación y como parte de estos, los periódicos, contribuyen a la configuración de un marco interpretativo que construye una realidad de la guerra o para este caso de la desaparición forzada, ya que este “no simplemente contiene o exhibe lo que contiene, sino que participa activamente en una estrategia de contención, produciendo y haciendo cumplir de un modo selectivo lo que se contará como realidad”

⁸⁵ Es de resaltar, que en la consulta de las Actas de consejo de la seccional y los diálogos entablados por sus integrantes dentro de estas se pudo observar que, la compra y archivación de periódicos fue una actividad que se desarrolló dentro de la seccional desde sus inicios a partir del “...archivar la noticia por ciudades, fechas y recortar lo concerniente a Derechos Humanos para luego empastarlo...” (Acta 17 de octubre de 1991). Lo que resultaba importante, ya que como se expresa en una reunión del Consejo de Asfaddes seccional Bucaramanga el periódico “la vanguardia es un auxiliar para las funcionarias, la señora... afirma que gracias a la prensa en la seccional ha tenido información ya que aquí se archivan por días...” (Acta 20, sin fecha).

⁸⁶ Este es un periódico regional que fue fundado en Bucaramanga en 1919 por Alejandro Galvis Galvis un periodista y político de corte liberal, por lo que, con esta publicación se pretendía “difundir el pensamiento liberal, en una época en la que los ideales conservadores dominaban el país” (Vanguardia Liberal web, 2019).

(Butler, 2011, p. 15), ante unos espectadores que a partir de esta, configuran unas formas de comprender y reaccionar. De acuerdo con esto, a continuación, se presentan las representaciones de las personas desaparecidas y de la desaparición forzada configuradas por la prensa, principalmente desde fragmentos del periódico “Vanguardia Liberal” durante el primer momento referido por Sánchez (2018).

De esta manera, desde la genealogía que plantea Sánchez (2018), se hace evidente que dentro de los discursos que se enuncian en los artículos de prensa revisados, se mantiene la configuración de las personas desaparecidas desde su identidad política, es decir a partir del afirmar que “Profesores, sindicalistas, estudiantes, obreros, amnistiados de la subversión, militares, artistas, delincuentes comunes, vagabundos, todos ellos hacen parte de la larga lista de desaparecidos en Colombia” (Fragmento de prensa, caso 270, 1989). Es de resaltar que, dentro de este fragmento, aunque se nombran a sujetos con claras filiaciones políticas, también se reconoce a las personas desaparecidas desde otras profesiones, actividades o condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la representación predominante de las personas desaparecidas dentro de los periódicos presentes en los casos relacionados con este primer momento se basa en la identidad política desde el exaltar principalmente a los sindicalistas. Esto se hace evidente en el siguiente recorte.



Imagen 2. Recorte del periódico Vanguardia Liberal del 2 de junio de 1988, Fuente. Caso 270

Dentro de este recorte del periódico Vanguardia Liberal publicado el 2 de junio de 1988, se habla de la desaparición de cuatro personas en Bucaramanga que fueron efectuadas días

antes de la publicación, es de resaltar que la primera forma de referirse a las personas desaparecidas en este documento se da a partir de su actividad política o profesión, ya que se escribe: “dos presidentes de sindicatos de Bucaramanga fueron reportados como desaparecidos, mientras que otro activista y una auxiliar de enfermería quedaron en poder de presuntos miembros de las fuerzas armadas” (Recorte del periódico Vanguardia Liberal del 2 de junio de 1988, Caso 270). De esta manera, en el artículo se presentan los hechos que mediaron las desapariciones y se mencionan casos de desaparición que se dieron anteriormente, principalmente relacionados con docentes.

En relación con lo anterior, llama la atención que la persona presentada como “otro activista” es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Electrificadora de Santander, de manera, que de las cuatro personas desaparecidas tres son sindicalistas, asimismo, dentro del artículo se dedica un apartado central para hablar de la desaparición de este “activista” y el pronunciamiento que hicieron los directivos de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander (USITRAS).

De esta manera, se hace evidente un interés particular frente a las personas desaparecidas sindicalistas, por lo que, esta se configura como la representación predominante y recurrente dentro de los recortes de prensa. Esto podría deberse, a que el sindicalismo fue uno de los objetivos de la lucha contrainsurgente durante este período, asimismo, a que estos recortes fueron encontrados en carpetas de personas desaparecidas sindicalistas, del mismo modo, es importante recordar la relación inicial que tuvo Asfaddes seccional Bucaramanga con el Sindicalismo, ya que como lo afirma una de las fundadoras de la seccional en entrevista el primer lugar de reunión que tuvieron fue una oficina que el sindicato de la UIS les prestaba.

Sin embargo, esto podría deberse también a que, como lo afirma Espinosa (2018) las “primeras víctimas de derechos humanos reconocidas fueron habitantes urbanos y de clase media (estudiantes y trabajadores sindicalizados no los trabajadores más precarizados sino los organizados y con trabajos formales) incluso los mismos abogados, claramente se visibilizan porque son más “ciudadanos” que los campesinos e indígenas” (p. 473). Lo anterior, podría ser un factor determinante en la necesidad de presentar a las personas

desaparecidas como sindicalistas o dicho de otro modo de exaltar a los sindicalistas sobre otros desaparecidos.

Frente a lo anterior, se hace evidente la forma en que ciertos casos de personas desaparecidas que eran líderes sindicales generan mayor movilización social a diferencia de casos donde sólo los familiares desarrollan procesos de búsqueda, memoria y conmemoración, esto debido “a la “jerarquización” de las víctimas donde ciertas víctimas que ocupaban papeles más protagónicos en la vida social son más importantes en el duelo social público” (Espinosa, 2018, p. 472).

En relación con lo anterior, dentro de los periódicos se hace evidente la configuración de unas vidas que merecen un duelo público y prolongado, como en el caso 301 que hace referencia a la desaparición de un joven ciclista promesa de su región, cuya desaparición implicó la publicación de varios artículos, el desarrollo de marchas y carreras ciclistas en su honor. Lo anterior se evidencia en el siguiente recorte:



Imagen 3. Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “En Zapatoca Exaltan ciclista desaparecido” sin fecha, Fuente. Caso 301 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga.

Este artículo se titula “En Zapatoca Exaltan ciclista desaparecido” escrito por Luis Jesús Parra Rueda (sin fecha), dentro de este se hace un resumen de la carrera ciclistica desarrollada en homenaje a la persona desaparecida que era un deportista (ciclista) de San Vicente de Chucurí.

De esta manera, se resaltan las formas de referirse a la persona desaparecida como: “joven ciclista”, “el deportista” o “nuestro deportista”, es decir en este caso se configura una representación a partir de las actividades que desarrollaba esta persona, que le dan un lugar de importancia dentro de la comunidad como deportista. Del mismo modo, también se caracteriza a la persona desaparecida como “joven”, por lo que, la relación entre estos dos elementos implica su configuración como una promesa del deporte con un futuro prometedor o un proyecto de vida truco. Además, al decir “deportista chucureño” desde la mención del gentilicio se le configura como un representante de la comunidad.

Frente a lo anterior es importante no perder de vista que, “la desaparición forzada de personas que ocupaban lugares de liderazgo y de sostén espiritual ocasiona daño moral a nivel colectivo, dado que la incertidumbre frente al paradero y estado de la víctima y el vacío que provoca su ausencia afecta no solo a la familia sino a todo el colectivo o comunidad” (CNMH, 2016, p. 281), de ahí la necesidad de desarrollar procesos de duelo públicos y colectivos.

Sin menoscabo de lo anterior, también es necesario reflexionar desde Butler (2011) sobre la forma en que “los marcos que presentan y sitúan en primer plano las vidas por las que es posible llevar duelo funcionan para excluir otras vidas como merecedoras del dolor” (p. 19). De esta manera, así como hay vidas de personas desaparecidas que acarrear un duelo público, procesos de denuncia, memoria y conmemoración colectivos, también se hacen presentes otras vidas cuya desaparición es justificable o que ni siquiera aparecen dentro del marco de representación que establecen los medios, ya que como lo afirma Butler (2011) “el marco está siempre excluyendo algo, siempre dejando algo fuera” (p. 15).

Esta tensión entre vidas que deben ser protegidas, merecedoras de duelo y vidas descartables o que son excluidas del marco de representación, se hace evidente dentro del siguiente documento:



Imagen 4. Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “En comunicados el ELN: condicionan liberación del senador Jorge Sedano” 1990. Fuente. Caso 247 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga.

Este recorte fue publicado en 1990 con el título “En comunicados el ELN: condicionan liberación del senador Jorge Sedano” y se habla del pronunciamiento emitido por el ELN en el que se atribuyen el secuestro de un senador y su secretario y se exponen las condiciones que plantea este grupo guerrillero para la liberación de las dos personas. Lo que llama la atención de este recorte de prensa, es que se expone que tras la desaparición de un militante del ELN en manos de la Quinta Brigada del Ejército esta organización guerrillera secuestró a dos figuras públicas del Estado colombiano como lo serían un senador y su secretario, condicionando su liberación a que se creará una comisión especial de búsqueda integrada por “representantes de la Cruz Roja Internacional, de la Oficina de Investigaciones Especiales y Defensa de los Derechos Humanos... Procuraduría Nacional, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, del Colectivo de Abogados José Avelar Restrepo y de la Asociación de Familiares de Desaparecidos -Asfaddes-”, también se solicitó “...un pronunciamiento del ex presidente Misael Pastrana Borrero⁸⁷ en contra de la guerra sucia, de las desapariciones y las torturas, atribuidas a militares. (...)” (Fotocopia de recorte de prensa con el título: "Condenar guerra sucia pide ELN a Misael Pastrana", Caso 247, 1990), sumando a estas condiciones, la aparición con vida de su compañero.

Además, en el artículo se afirma que según la Dirección Nacional del ELN: “se ha intensificado el accionar contra miembros de esta agrupación subversiva, las torturas y

⁸⁷ En relación con la solicitud de un pronunciamiento del ex presidente Misael Pastrana Borrero por parte del ELN, no se tiene clara la razón que tuvo esta organización guerrillera para pedir la intervención de este expresidente en particular, ya que su gobierno se desarrolló entre 1970 y 1974.

desapariciones forzadas” (Fotocopia de recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título: "En comunicados del ELN Condicionan la liberación del senador ...", Caso 247, 1990).

En relación con lo anterior, se comprende desde Butler (2006) que los marcos configuran unos modos de comprender la realidad y establecen unas categorías sociales entre unas vidas que son dignas de ser vividas, de protección y ante su ausencia de un duelo público y colectivo, asimismo, este marco determina que vidas se hallan fuera, por lo tanto, son seres que nunca merecieron estar vivos, seres desechables.

Por otro lado, se hacen presentes otras vidas descartables que son de utilidad dentro del marco, que según Butler (2006) son “población objetivo”, es decir “gente que ha sido agrupada dentro de un marco y por un marco, que se han convertido en el foco (...) y cuyo estatus de objeto depende fundamentalmente de una máquina que enfoca su realidad, circunscribiendo tanto su precariedad como su carácter desechable” (p. 15).

En relación con lo anterior, para este caso, la máquina que enfoca la realidad en un marco se materializa en la prensa desde aquello que se escribe o se deja de escribir. De esta manera, los grupos guerrilleros son representados dentro del marco en la medida en que son configurados como victimario, enemigo y objeto de exterminio en medio de la guerra, es decir como una vida desechable debido a que pone en riesgo el origen social, político y económico de otros. Pero no se les representa como sujetos de derecho. De esta manera, el acto del ELN de secuestrar a dos figuras públicas que están dentro de este marco como vidas que merecen protección, hace que tome visibilidad o que aparezca dentro de este marco de representación, la otra cara, la del militante de esta organización guerrillera que fue desaparecido por agentes del Estado. Del mismo modo, que se tomen acciones y haya pronunciamiento público en relación con esta desaparición y las desapariciones de las que eran objeto los integrantes del ELN.

De acuerdo con lo anterior, se considera importante reflexionar que los recortes de prensa hacen parte de un proceso de selección donde sólo una parte de las noticias publicadas pasan a conformar el archivo o los casos, en especial si se tiene en cuenta que dentro del archivo de Asfaddes hay una subsección completa dedicada a noticias de prensa y radio. De esta manera, se establece que dentro de este informe no se hace un análisis de la prensa o de

las publicaciones del periódico Vanguardia Liberal, sino de los discursos que hacen parte de los recortes que fueron seleccionados para integrarse a los casos.

Por otro lado, otra de las formas de representar a las personas desaparecidas dentro de la prensa escrita en este primer período se presenta a continuación:

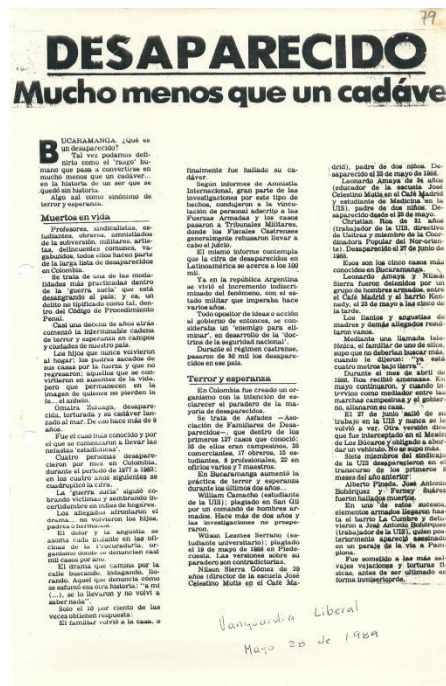


Imagen 5. Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “DESAPARECIDO. Mucho menos que un cadáver” 1989. Fuente. Caso 270 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga.

En primer lugar, se presenta un fragmento del periódico titulado: “DESAPARECIDO” del 28 de mayo de 1989, dentro de este artículo se plantea una perspectiva de la desaparición forzada y de las personas desaparecidas, se mencionan los primeros casos de desaparición, además, de abordar el antecedente argentino y la magnitud del fenómeno en Latinoamérica, la creación de Asfaddes, y para finalizar se hace una breve presentación de cinco casos considerados: “los más conocidos en Bucaramanga”.

De esta manera, el primer elemento que llama la atención de este artículo es la relación que se plantea entre el título y el subtítulo que dice: “Mucho menos que un cadáver”, ya que

esta frase en cinco palabras entabla una definición de la persona desaparecida que se hace aún más clara cuando en el primer párrafo del artículo se escribe: “¿Qué es un desaparecido? Tal vez podamos definirlo como el ‘rastreo’ humano que pasa a convertirse en menos que un cadáver... en la historia de un ser que se quedó sin historia. Algo así como sinónimo de terror y esperanza” (Fragmento de prensa, caso 270, 1989).

Ante esta definición, resulta necesario recurrir a Claudia Feld (2010), quien hace un análisis de las representaciones que se configuraron dentro de la prensa gráfica argentina en la primera etapa de la postdictadura cuando se estableció un show mediático donde predominaba el horror sostenido (Feld, 2010). De esta manera, la autora afirma, en relación con los procesos de excavación que se establecieron como parte de este show mediático, que “el primer elemento a señalar es que la figura que se construye es la de cadáver o los cadáveres en plural, los cuerpos, pero no se habla de “muertos”. De este modo, los medios de comunicación prolongan en su discurso la privación de la humanidad (...) y prolongan la privación de la muerte que implicó la modalidad de la desaparición forzada” (p.34). De esta manera, si hablar de cadáveres implica la deshumanización de las personas desaparecidas presentadas como un cuerpo sin identidad privado de una muerte, ¿qué implica su representación como “menos que un cadáver”? De acuerdo con lo anterior, se entiende que el cadáver es lo que se encuentra de la persona desaparecida, es decir lo que “aparece”, son “cadáveres, huesos, cráneos, prendas personales, restos” (Feld, 2010, p. 31), pero en el artículo citado, no se habla de cuerpos hallados sino desaparecidos, por lo que, el definirlos como menos que un cadáver podría implicar este estado de pérdida.

De este modo, esta enunciación de la persona desaparecida como “menos que un cadáver” se relaciona con que el “acto de desaparecer a una persona resulta tan atroz, entre otras circunstancias, porque no concreta la muerte, ni permite la vida, y de esta manera niega la condición de ser humano” (CNMH, 2016, p. 268), por lo que, se podría decir que este discurso prolonga la deshumanización de las personas desaparecidas.

Del mismo modo, dentro del artículo también se afirma que el desaparecido es “un ser que se quedó sin historia” (Fragmento de prensa, caso 270, 1989), entonces se comprende que ser menos que un cadáver define a una persona sin cuerpo, identidad e historia.

Sin embargo, dentro del artículo, cuando se presentan “los cinco casos más conocidos en Bucaramanga”, se escriben nombres de las personas desaparecidas, se habla de sus profesiones y se les denomina desde sus relaciones familiares, esto implicaría el reconocimiento de rasgos identitarios, que los define como seres humanos y no como cadáveres, lo anterior, se relaciona con la tensión presentada por Feld (2011) con la que se afirma que la desaparición deja “identidades sin cuerpos y cuerpos sin identidades”, ya que los familiares en sus procesos de búsqueda destacaban rasgos identitarios, aunque estos con la desaparición les fueron arrebatados dejando solo cuerpos o cadáveres.

En relación con las representaciones de la desaparición forzada, los artículos citados anteriormente permiten percibir una serie de transformaciones frente a las formas de nombrar y comprender, ya en uno de los primeros fragmentos propuestos publicado el 2 de junio de 1988, desde el título se hace evidente la dificultad para comprender los acontecimientos al decir “Extrañas desapariciones en Bucaramanga” (Recorte del periódico Vanguardia Liberal titulado: Extrañas desapariciones en Bucaramanga, Caso 270, 1988), sin embargo, llama la atención que a pesar de la extrañeza que expresa este título, dentro del artículo, se mencionan unas desapariciones que anteceden los cinco casos presentados, además, de que se señalan a unos presuntos responsables desde afirmaciones como: “...quedaron en poder de presuntos miembros de las fuerzas armadas,...”, “...presuntos agentes de los cuerpos de inteligencia del Estado...”, “... fue aprehendido por efectivos de la Quinta Brigada del Ejército” (Recorte del periódico Vanguardia Liberal titulado: Extrañas desapariciones en Bucaramanga, Caso 270, 1988). De esta manera, se comprende que la extrañeza referida dentro del artículo más que relacionarse con los hechos de desaparición donde aparecen unas descripciones y presuntos responsables, podría deberse a que se señalan a agentes del Estado como perpetradores, en tanto se supone que estos sujetos e instituciones deberían proteger a los ciudadanos.

Del mismo modo, lo extraño de la situación también podría relacionarse con la ausencia de una comprensión del fenómeno, ya que dentro de este artículo en ocasiones se habla de secuestro o secuestrados, esto podría deberse a que, como lo afirma Gatti (2017), las primeras comprensiones del fenómeno parten de la experiencia y el secuestro es un crimen que se basa en la privación de la libertad de los sujetos, por lo que, es comprensible que en

un primer momento se confundiera la desaparición con un secuestro. Además, aún no se encontraba tipificada la desaparición forzada como crimen.

Del mismo modo, un año después, el 28 de mayo de 1989 se publicó un artículo en el que se afirma que la desaparición forzada es “una de las modalidades, más practicadas dentro de la “guerra sucia” que está desangrando el país; y es, un delito no tipificado como tal, dentro del Código de Procedimiento Penal” (Recorte presenta con el título: Desaparecido, Caso 270, 1989).

De esta manera, dentro de este artículo se establece una comprensión del fenómeno como modalidad represiva avalada o desarrollada por el Estado en coacción con grupos paraestatales en el marco de la lucha contrainsurgente. Del mismo modo, se entiende la desaparición forzada como delito, que debería estar consignado dentro del código penal. Lo anterior, plantea una transformación de las formas de comprender y configurar el fenómeno dentro de este periódico, ya que se pasa de relacionarlo con el secuestro, a establecer la desaparición públicamente como un crimen.

Este cambio frente a la comprensión del fenómeno dentro del Vanguardia Liberal podría deberse a que “el primer intento fallido de tipificación de la desaparición forzada como delito tuvo lugar en 1988, mediante el proyecto de ley número 224, que fue presentado por el entonces Ministro de Justicia, Guillermo Plazas Alcid. El proyecto no fue aprobado por el Congreso” (CNMH, 2014, p. 99). Sin embargo, se reconoce que este primer intento eleva el tema de la desaparición forzada a estamentos judiciales, logrando que sea debatido, a pesar de su no aprobación, lo que pudo implicar una transformación pública dentro de las formas de comprender el fenómeno.

A modo de balance de este periodo, se destaca que los discursos de los actores presentados anteriormente tienen un punto de confluencia en la representación de la persona desaparecida como un actor político o una persona poseedora de una identidad política que se sitúa desde la persecución o el señalamiento. Del mismo modo, se presenta la configuración de una persona desaparecida hombre, y una persona que busca; mujer-esposa- madre.

Frente a las representaciones que se elaboraron de la desaparición forzada dentro del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga para este primer periodo, siguiendo los planteamientos de Gatti (2017) en este momento la desaparición forzada se configura a partir de la experiencia de aquellos que la vivencian de forma directa, esto debido a la ausencia de una comprensión pública y oficial del fenómeno. Sin embargo, cuando en Colombia las desapariciones forzadas empezaron a tomar mayor frecuencia y visibilidad, otros países latinoamericanos, ya habían tenido una experiencia similar, hallando formas para nombrar y entender el fenómeno como detención- desaparición. De manera que, el antecedente internacional en relación con la experiencia de los familiares de las personas desaparecidas, se convirtió en la forma de comprender lo que estaba pasando, ante la ausencia de una postura oficial por parte del Estado colombiano, que la mayoría de las veces operó bajo la negación de los hechos de desaparición, la estigmatización de las víctimas y el rechazo del primer proyecto de ley sobre desaparición forzada en 1988.

3.2.2. Segundo momento: La Constitución Política de 1991

De acuerdo con lo expuesto por Gonzalo Sánchez en su genealogía de los discursos de la memoria social del conflicto armado, este segundo momento se caracteriza por la construcción de memorias del conflicto armado alrededor de la paz, esto debido principalmente a “la consagración constitucional de la paz en 1991 como un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento” (p. 103). De esta manera, se comprende que este momento está marcado por el establecimiento de la Constitución Política de Colombia de 1991.

Frente a lo anterior, es necesario mencionar que este es un logro importante para los familiares de las personas desaparecidas y en particular para Asfaddes, ya que la promulgación de esta constitución estuvo mediada por su movilización, además, de que esta asociación se integró al proceso como ponente ante los delegados constituyentes (Asfaddes, 2003). De esta manera, se consiguió un reconocimiento público de la desaparición forzada dentro del marco legal por parte del Estado a partir del Artículo 12. de la Constitución Política de 1991 en que se escribe “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. De esta manera, se reconoce que

existe la desaparición forzada y se establece que es una violación a los derechos humanos.⁸⁸ Sin embargo, esto no detuvo que se siguieran presentando desapariciones forzadas, ni que la cifra de personas desaparecidas disminuyera.

Familiares

De acuerdo con lo anterior, este segundo momento plantea una serie de transformaciones frente a las formas de representar a las personas desaparecidas, debido a que: “al amparo tanto de la normativa del DIH y del discurso de la paz y la reconciliación, esta etapa se caracteriza por la apelación o reconocimiento de la figura de la víctima en su dimensión como afectado y como perteneciente a la población civil, desplazando la centralidad de la identidad política” (Sánchez, 2018, p. 104). En relación con lo anterior, dentro de los archivos analizados, aunque en un primer momento predominaba la representación de las personas desaparecidas en torno a sus identidades políticas, principalmente desde el reconocimiento de una persecución en el marco de la lucha antisubversiva, en este segundo momento el discurso se transforma, ya que las personas desaparecidas son presentadas como civiles. De esta manera, los discursos de los familiares de las personas desaparecidas operan en dos sentidos, por un lado, a partir de la tendencia a afirmar que sus familiares desaparecidos no tenían ninguna relación con agrupaciones de carácter político o filiaciones políticas, y por el otro, desde la normalización de estos sujetos.

Frente a los enunciados que afirman que las personas desaparecidas no tenían filiaciones políticas, es importante entender que esto no implica que la persona desaparecida tuviera estas filiaciones y sus familiares las ocultaran a partir de su negación, sino que con esto se pretende destacar el modo en que dentro de los discursos familiares se hizo reiterativa como una forma defender o apelar a la inocencia de la persona desaparecida, por lo que, la identidad política de estas tiene una menor relevancia dentro de este segundo momento.

⁸⁸ El ascenso de la desaparición forzada al ámbito constitucional cobra mayor relevancia cuando se tiene en cuenta que un año antes de su promulgación fue rezada la Ley 30 de 1990, la cual fue el segundo proyecto de ley referente a la desaparición forzada que se presentó en este caso por el entonces Ministro de Gobierno Horacio Serpa (CNMH, 2014). De esta manera, la “aplicación inmediata por disposición del artículo 85 constitucional, sentó las bases para [el] posterior desarrollo legislativo e interpretación a la luz de los instrumentos internacionales [de la desaparición forzada], de conformidad con las nuevas disposiciones introducidas por la Constitución de 1991” (CNMH, 2014, P. 110).

Esto se hace evidente dentro de formatos de Asfaddes y en las denuncias interpuestas por los familiares, como se presenta a continuación:

“La familia de ... manifestó que ... no tenía antecedentes judiciales, no militaba en ningún partido político y tampoco poseía deudas pendientes” (Recorte prensa con el titular: "Desaparecen un trabajador", caso 12, 1992).

“Nunca lo vi que simpatizara con grupos al margen de la ley, pero el que le trabajó sólo tres meses si tiene nexos y problemas judiciales que indujeron la desaparición” (Formadatos, caso 314, 1994).

“No le conocimos problemas personales con los compañeros de trabajo ni amenazas y no se le conoció vínculos con alguna organización por fuera de la ley” (Carta escrita por hermana de ... a secretaria general de Asfaddes en Bogotá, caso 179, 1995).

En relación con lo anterior, se hace evidente la forma en que desde sus discursos en defensa de la persona desaparecida los familiares equiparan este tipo de actividades con aquellas “al margen de ley” o “fuera de la ley”. Del mismo modo, en el caso 314 se exculpa a la persona desaparecida al decir que esta no tenía ninguna relación con estos grupos, pero una persona cercana sí, por lo que, se les atribuye la desaparición de estas relaciones.

Esto puede comprenderse como una consecuencia de los discursos Estatales que operaban en el primer momento que equiparaban y señalaban a militantes, sindicalistas, estudiantes, activistas, y defensores de derechos humanos, entre otros; con grupos guerrilleros o sus auxiliares, por lo que, se afirmaba que su desaparición se relacionaba con esto.

Por otro lado, estarían los casos en los que se acepta parcialmente una militancia como en el caso 3 donde al diligenciar la solicitud de afiliación de Asfaddes en el apartado de “Profesión o actividad del desaparecido” se marca “Actividad política” y se escribe “militante M19” (Solicitud de afiliación a Asfaddes, Caso 3, 1993), por lo que, desde el

momento en que los familiares se acercan a Asfaddes para interponer la denuncia establecen que tienen conocimiento sobre las filiaciones políticas de la persona desaparecida, pero en documentos relacionados con otras instancias, el familiar hace énfasis en una militancia condicionada al pasado, al decir que la persona desaparecida hizo parte del M-19 pero se acogió a la amnistía:

...él había sido militante del M-19 que ellos se habían amnistiado cuando el M-19 se desmovilizó y se reinsertó a la vida civil cuando estaba de comandante o del director Carlos Pizarro León Gómez... (Denuncia interpuesta por el hermano de ... el día después de su desaparición ante el personero delegado para los derechos humanos, defensa del menor y la familia, Caso 3, 1993).

Del mismo modo, dentro de este mismo documento los familiares niegan haber tenido conocimiento de la militancia de la persona desaparecida hasta el momento de su desmovilización:

Para serle sincero supimos cuando de esto Domingo (Cauca), el M-19 hacia entrega de sus armas en el año /89, nos enteramos por televisión y porque él llamó después y habló con la muchacha que tiene como novia que lo esperara que estaba en Sto. Domingo (Cauca) en esa cuestión, en ese momento fue que en la casa se supo de que él era militante del M-19; ..." (Denuncia interpuesta por el hermano de ... el día después de su desaparición ante el personero delegado para los derechos humanos, defensa del menor y la familia, Caso 3, 1993).

El énfasis que se hace frente al condicionamiento al pasado de la militancia en el M-19 de la persona desaparecida, a partir del afirmar que al momento de la desaparición ya se había amnistiado, puede entenderse como una medida para evitar la justificación de la desaparición. Igualmente, el asegurar que la familia no tenía conocimiento de las actividades de la persona desaparecida dentro del M-19, sino hasta el momento en que participo en la amnistía, puede comprenderse como una estrategia de los familiares para evitar señalamientos, estigmatización o discriminación por parte de la sociedad y de las instituciones gubernamentales donde pusieron la denuncia.

De esta manera, se comprende que dentro del segundo momento planteado por Sánchez (2018) “ante el discurso de los victimarios que intenta crear culpables, se erige la voz de las víctimas que reclama que se reconozca la inocencia de quien ha sido sometido a la desaparición forzada” (CNMH, 2016, 280).

Sin embargo, la configuración de esta inocencia se basa en presentar en menor medida las identidades políticas, mientras se exaltan otros valores de los desaparecidos a partir de la “normalización” o “romanización” de estos dentro de los relatos de los familiares, que se sitúan como medios para contrarrestar el señalamiento y la estigmatización de la persona desaparecida y sus familiares, así como establecer una presunción de inocencia.

En relación con lo anterior, en la subsección de casos se hizo evidente esta tendencia desde lo familiar, a partir de lo diligenciado en el apartado de “NÚCLEO FAMILIAR DEL DESAPARECIDO” en dos formatos que serían el de la Base nacional de Asfaddes y el Formatos de Asfaddes que aparecen por primera vez dentro del archivo en 1984, de esta manera dentro de este subtítulo se cuestiona por “Biografía (pasado- presente, personalidad)” de la persona desaparecida, dando pie a esta caracterización donde se hace evidente esta necesidad de “normalizar”. Se propone “así, una idea de un desaparecido cercano a todos, común a la vida de cualquiera, que se vinculaba normalmente con sus semejantes. Se trata de un desaparecido “normalizado”” (Hancevich y Soler, 2010, p.102). De esta manera la representación de la persona desaparecida, desde lo familiar, laboral o a partir de sus virtudes genera identificaciones y simpatías desde la idea de que puede llegar a ser cualquier sujeto cuya cotidianidad se vio quebrantada.

En relación con los expedientes de Asfaddes seccional Bucaramanga esto se da, por un lado, desde la familiaridad, al destacar a la persona desaparecida como padre, hijo, esposo, hermano..., o como persona trabajadora que se desempeñaba un oficio o una profesión, como se puede observar dentro del siguiente fragmento:

Biografía (pasado - presente, personalidad): nacido en Rionegro el 12 de marzo de 1966, estudió hasta segundo de bachillerato; trabajaba para ayudar y sostener a su

mamá y a sus hermanos; llegó a b/ga en 1983 vivía con sus abuelos maternos, y en el 1991 se casa con ... con quien tuvo un hijo y trabajaba manejando una camioneta haciendo acarreo hasta el 3 de agosto de 1993, cuando fue desaparecido (Base de datos nacional Asfaddes, Caso 132, 1993).

En relación con este apartado de “Biografía (pasado - presente, personalidad)”, de acuerdo con la coordinadora de la seccional de Bucaramanga la intención de ponerlo dentro de los formatos se debía a que esta

“era la manera de nosotros saber si el caso era un caso político, caso de persecución política, porque dentro de su personalidad aparecía, era líder social, era presidente de la junta de acción comunal, ayudaba a los campesinos, ayudaba en la construcción de caminos veredales, entonces eso era lo de un líder social y también como para nosotros poder tener presente en los aniversarios, conmemoraciones, que ellos tenían un núcleo familiar, porque hay unos que aparecen solos, y por lo tanto nosotros sustentábamos que ese desaparecido le hacía falta, que había dejado un vacío dentro de ese núcleo familiar” (Entrevista a la coordinadora de Asfaddes seccional Bucaramanga, 30/05/2022).

Frente a lo anterior, se comprende que este apartado tenía dos propósitos, por un lado, se afirma que la organización pretendía el reconocimiento de una identidad política perseguida, por el otro, como lo establece el título del apartado buscaba identificar el núcleo familiar de la persona desaparecida. De acuerdo con esto, en este segundo momento, los familiares deciden centrarse en el rol que cumplía la persona desaparecida dentro de la familia.

De esta manera, como se pudo observar una de las formas de configurar a las personas desaparecidas desde la normalización era presentándola desde su lugar dentro de su núcleo familiar o a partir de sus virtudes como “buen hijo”, “buen padre”, “buen hermano”, esto se debería a que, como lo afirman Hancevich y Soler (2010) “dentro de este escenario de cotidianidad, los relatos presentan la vida de los desaparecidos impregnadas por un fuerte romanticismo, el recuerdo de ellos siempre adquiere características bellas, noveladas y armoniosas” (p. 102), como se puede evidenciar a continuación:

Biografía (pasado-presente, personalidad): Un hombre trabajador de mucho Amor y entrega hacia sus hijos y hogar, pacífico y caballero velaba mucho por el bienestar de su familia” (Formatos de Asfaddes, Caso 311, 1991).

Biografía (pasado presente, personalidad): Era buen esposo, buen padre de familia, no tenía enemigos era muy responsable (Formatos de Asfaddes, Caso 12, 1993).

En relación con lo anterior, este énfasis en la normalización de la persona desaparecida, desde lo familiar, laboral o las virtudes de esta persona, se comprenden como una forma de lidiar con los discursos que señalaban a las personas desaparecidas de ser guerrilleros, pero también puede deberse a que, el auge de la “limpieza social” en el Magdalena Medio Santandereano liderada por grupos paramilitares se da en los noventa, como una práctica que pretendía la eliminación de grupos sociales marginados, indigentes, delincuentes, trabajadores sexuales, homosexuales o drogadictos, pero también de militantes políticos de izquierda (Proyecto Colombia Nunca Más, 2008). De esta manera, el presentar a la persona desaparecida como alguien “normalizado” y principalmente como alguien “productivo” para la sociedad, pretendería salvaguardar la imagen de esta y su familia, ya que los señalamientos y acusaciones “son actos que producen daño moral, en tanto afectan el buen nombre, la honra y la dignidad de las víctimas, de sus familias y de sus allegados, pudiendo alterar significativamente los lazos sociales, las oportunidades laborales y en general afectando el transcurso normal de la vida” (CNMH, 2016, p. 279).

Por otro lado, a partir del reconocimiento de la desaparición forzada como violación a los derechos humanos, se favoreció el establecimiento de la persona desaparecida como sujeto de derecho, de allí que, otra de las representaciones producidas por los familiares que se relacionan con este período, parte de la deshumanización de las personas desaparecidas en medio del conflicto, ya que a medida que a las instituciones del Estado (encargadas de salvaguardar los derechos de los ciudadanos) se les permite pasar de forma selectiva sobre los derechos humanos, se le arrebató la humanidad a las víctimas a partir del ocultamiento de todo lo que implica la persona, es decir desde su cuerpo hasta su identidad. De esta manera, dentro del discurso familiar se configura la tensión entre las representaciones de la persona desaparecida desde su identidad como sujetos normalizados y su cuerpo como

objeto de violencia. Es necesario resaltar que esta representación se ve mediada por Asfaddes y también por los discursos de medicina legal.

Esta tensión partiría de que “los cuerpos ‘aparecen’ sin identidad: no sólo porque no tienen nombre, sino porque esa muerte que no se menciona lo ha vaciado de su calidad de seres humanos” (Feld, 2010, p. 34). Esto puede relacionarse, por un lado, a que el mismo mecanismo de la desaparición forzada implica la deshumanización de unos sujetos que pasan a ser objeto de guerra en el marco de la lucha antisubversiva que busca el ocultamiento no sólo de una persona, sino también el exterminio de una identidad política; que inicia arrebatando a las personas el primer rasgo de identidad con que se dota a los sujetos y que es en sí mismo un derecho: el nombre.

De esta manera se da la representación de las personas desaparecidas como N.N. siglas que significan “nomen nesio” en latín o “No nombre”, por lo que, el nombre se convierte en uno de los primeros rasgos identitarios arrebatados por la desaparición forzada reduciendo a una persona a un cuerpo sin identidad. De esta manera se genera una fragmentación en la representación de las personas desaparecidas, ya que “por un lado, los familiares de los desaparecidos podían dar cuenta de la identidad de quienes buscaban (mostraban las fotos, decían los nombres, contaban las historias de vida) pero no lograban encontrar los cuerpos; por otro lado, esas mismas marcas identitarias habían sido sustraídas de los cuerpos enterrados en los cementerios” (Feld, 2010, p.32) bajo el apelativo de N.N. como se puede evidenciar en el siguiente fragmento:

Después de transcurrir 16 años de búsqueda no solo de ... sino de todos los desaparecidos me encontré con la noticia fatal de que mi hijo podría ser un NN hallado en el municipio del Palmar muy cerca de donde desapareció... (Derecho de petición dirigido al procurador general de la nación por parte de la madre..., Caso 314, 1995).

Del mismo modo, el N.N se convierte en una posibilidad o en la esperanza de encontrar al familiar desaparecido entre aquellos cuerpos sin identidad, como se hace evidente en los siguientes fragmentos:

y a la vez por intermedio de ustedes me colaboren con los demás organismos del Estado como en la policía judicial en casos de cadáveres N.N. en la procuraduría provincial donde solicite una investigación etc... (Solicitud emitida por parte del hermano de ..., pidiendo información sobre la gestión adelantada por la Fiscalía frente a la desaparición de su hermano. Este documento está dirigido a la Fiscalía 21 especializada de Bucaramanga, Caso 3, 1993)

Con todo respeto me permito solicitar a usted, si su despacho ha realizado alguna retención o detención a nombre del señor ..., o sí ha realizado levantamiento de cadáveres a nombre de este señor o de N.N. Con las siguientes características. (Carta dirigida por el personero de Puerto Wilches al Juez promiscuo municipal de Santander, inspector de policía, estación de policía, Caso 176, 1993).

Otra forma de representar a la persona desaparecida en relación a esta tensión parte de la inseguridad y la desconfianza, que es mediada por la esperanza de que la persona desaparecida aún siga con vida o que el cuerpo que fue sometido a torturas y se recibió deforme y descompuesto no sea el de su familiar, es por decirlo de alguna manera una negación a la idea de que su ser querido haya atravesado una situación como esa, debido a que “la violencia ejercida pone en entredicho la posibilidad de la víctima de reconocerse y de sus familiares y cercanos de reconocer al otro, de saberle la misma persona que fue desaparecida” (CNMH, 2016, p. 275).

En relación con lo anterior, se proponen los fragmentos de los casos 312 y 328:

Esto lo corroboré dos veces en compañía de una familiar y no sabía que hacer me encontraba embrutecida con lo que tenía frente a mis ojos. Usted no sabe la magnitud del dolor que esto tiene para mí. Me he enterado por parte de compañeros de trabajo, de la tortura a que fue sometido; que fueron arrancados sus dedos por pedantescos su cabello también fue cortado con todo y cuero y que también fue violado... (...). Cuando nos hemos reunido con los cuatro hermanos de mi esposo pensamos, que él era una persona trabajadora, cumplidora de su deber como padre y esposo, pobre y honrado que se daba a querer de todas las personas que conocían, por su trabajo respeto buen comportamiento hijo de padres campesinos. Su señora madre no sabe nada de lo sucedido hasta el momento puesto que es una persona de

avanzada edad que si llega a saberlo se moriría también. Como puede ver SEÑOR PROCURADOR este interrogante nos tiene muy mal a todos; a mis hijos, familiares y amigos todos los días que van pasando nos preguntamos qué pasó. Luego de que yo vi el macabro espectáculo, en lo que convirtieron a mi esposo; ahora me pregunto si del día 18 de diciembre jueves en que fue asesinado, hasta el sábado que fue encontrado en estado de descomposición total DOS DÍAS y tres noches, ¿se puede descomponer tan rápido un cuerpo? Por otro lado, pienso que mi esposo puede estar vivo en manos de delincuentes que lo necesitan para algo. Su ropa pudo haber sido quitada y colocada al cuerpo que nos entregaron. O puede estar muerto en otro lugar. El niño ha contado dos versiones diferentes, como si lo estuvieran manipulando para que cuente cosas que no son o que oculte la verdad. (...) SEÑOR PROCURADOR: Pido la exhumación del cadáver que se encuentra en el cementerio jardines de paz ZIPAQUIRA... para una prueba de A.D.N y así saber si era mi esposo (Carta dirigida al Procurador General de la Nación por parte de la Esposa de..., Caso 312, 1998).

El 15 de octubre del año 1.997 la llaman de la Cruz Roja para que reconozca el cadáver. ... fue a la morgue y por la ropa parecía ser el, pero estaba en descomposición y no se le notaba la cara y solo hasta el 20 de octubre se lo entregan. (...) Fue sepultado en Girón Santander era muy raro porque siempre le robaban la lápida, le colocaban el nombre y se lo borrraban. Los restos los sacaron del cementerio de Girón y le tomaron fotos y se dieron cuenta que posiblemente los huesos no corresponden al desaparecido ... porque los dientes aparecen con calzas y él tenía la dentadura perfecta. (Hoja escrita a mano, Caso 328, 1997).

En relación con lo expuesto anteriormente, se hace evidente la dificultad que tienen los familiares de las personas desaparecidas para reconocerlas en el cuerpo que se les es entregado, debido al estado de descomposición, además, de las constantes dudas. Del mismo modo, se presenta una dificultad para asimilar los tratos a los que pudo haber sido sometida esta persona entre los que se encuentra la descripción de la tortura y la violencia sexual, por lo que, el negarse a reconocer el cuerpo como el de su familiar desaparecido, podría deberse al “dolor y sufrimiento que experimentan los familiares y allegados al tener

conocimiento de las formas en que se ejerce violencia contra quienes se encuentran desaparecidos...” (CNMH, 2016, p. 275).

Frente a los discursos configurados por los familiares en relación con la desaparición forzada, se destaca que en este momento los límites que la diferencian de otros crímenes continúan siendo difusos, debido, por un lado, a su relación otros crímenes, ya que “se desaparece también para ocultar la dimensión de los crímenes cometidos, para borrar evidencias y así dificultar los procesos de investigación y judicialización” (CNMH, 2016, p. 26), por otro lado, a la tardía tipificación de este crimen dentro del código penal, ya que durante este periodo fueron varios los intentos por tipificar la desaparición forzada como delito, entre los que estarían: el proyecto de ley 152 de 1992, un año después se presentaron el 277 y el 331 de 1993, posteriormente el 129 de 1997, luego en 1998 se presentaron otros tres proyectos de ley que serían el 222 de 1998, el 20 de 1998 y 142 de 1998 (CNMH, 2014)⁸⁹. Por lo que, en ese momento, era común referirse a la desaparición forzada como secuestro:

“... con el fin de ampliar la denuncia formulada en el Municipio de Oiba ante la Fiscalía Local, por el delito de SECUESTRO en la persona de ... y contra desconocidos.” (Ampliación de denuncia por parte de la madre de Sepúlveda ante la Fiscalía General, Caso 314, 1994).

“...fue secuestrado y posteriormente desaparecido sin que hasta la fecha se sepa de su paradero y sin que se obtuviera pruebas de supervivencia o se pidiera nada a cambio, hechos ocurridos en la finca ... municipio la Esperanza Norte de Santander. (Derecho de petición dirigido al tribunal administrativo de Santander enviado por la esposa de ... en representación de sus tres hijos, Caso, 226, 1996).

"(...) Hasta las 12:30 llamaron de la empresa porque había ido a trabajar y le informaron que lo habían secuestrado, hasta la fecha no han tenido ninguna noticia sobre él" (Formatos Asfaddes, Caso 215, 1998).

⁸⁹ En relación con lo anterior, los proyectos de Ley 20 de 1998 presentado al Senado y 142 de 1998 a la Cámara si prosperaron y fueron aprobados como la Ley 589 de 2000 mediante la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura (CNMH, 2014).

Esta relación que establecen los familiares entre lo que les está sucediendo y el secuestro, podría deberse a que tanto este como la desaparición forzada en su primer momento son similares, ya que inician con la detención, ocultamiento y privación de la libertad de una persona, lo que marca una diferencia, sería que en el secuestro se “condiciona la liberación o la seguridad e integridad personal de las víctimas a la satisfacción de exigencias económicas, políticas, militares y de control territorial, entre otras” (Comisión de la Verdad, 2022c, p. 228). De esta manera, en relación con lo expresado por los familiares en el caso 226 y 215 desde el momento de la detención no se tiene información de la persona.

En relación con la periodización establecida por Sánchez (2018), durante el proceso de la constituyente y debido a la desmovilización de algunos grupos armados, disminuyó temporalmente la aplicación del crimen, sin embargo, con el cambio de la estrategia militar de las FARC y el ELN, aumentó el delito del secuestro entre 1995 y 2005. Por lo que, en este momento la preocupación del gobierno se centró en este crimen y no en la desaparición forzada, esto podría deberse, en parte, a que los sujetos objeto de secuestro eran personas o familiares de personas con poder político y económico. La preocupación del Estado frente a la perpetración del crimen durante este periodo se hace evidente con la expedición de “la Ley 40 de 1993 que creó el estatuto nacional contra el secuestro. En 1995, el presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) designó al primer zar antisequestro...” (Comisión de la verdad, 2022, p. 229).

De esta manera, el secuestro dentro de este periodo era un crimen que sí estaba tipificado, e implicó modificaciones dentro del Código Penal de 1980 con la promulgación de la Ley 40 de 1993 en un momento en el que los proyectos de ley frente a la desaparición forzada no obtuvieron gran resonancia. Además, el secuestro fue un crimen que obtuvo la preocupación y movilización del Estado, por lo que, se entendería que, ante la falta de visibilidad de la desaparición forzada dentro del marco legal, fuera de su presencia dentro de la constitución política, los familiares al acercarse a hacer la denuncia por desaparición enunciaran que lo que les estaba pasando era un secuestro debido a la similitud del crimen.

Así las cosas, “la ausencia absoluta de represión legal frente a la creciente práctica de la desaparición forzada trajo como consecuencia la asimilación al delito de secuestro simple y, en el peor de los casos, a la inhibición en las investigaciones y juzgamientos, lo que

constituyó un detrimento en la lucha contra este crimen y una invisibilización de las víctimas” (CNMH, 2014, p. 111), además, de una dificultad en el establecimiento de las cifras reales de ambos crímenes que permitieran comprender su magnitud.

ASFADDES:

En relación con las representaciones que configura Asfaddes frente a las personas desaparecidas dentro de este segundo periodo, es de resaltar que si bien en un momento anterior era evidente la intención de la asociación de destacar las identidades políticas de las personas desaparecidas, a partir de la información que se solicitaba dentro de los formatos, en este punto el énfasis en este tipo de identidades se desdibuja de forma gradual pasando de reconocer la identidad política de las personas desaparecidas a pesar de los discursos familiares, a desconocerla de acuerdo con estos discursos en pro de la normalización. Del mismo modo, se exalta el estado de indefensión de las personas desaparecidas al momento de la detención como una forma de probar su inocencia.

De esta manera, es importante establecer la influencia que tienen los discursos familiares sobre Asfaddes, ya que son la principal fuente de información frente a los rasgos físicos e identitarios de las personas desaparecidas y los hechos que mediaron la desaparición a partir de lo consignado dentro de los formatos. De esta manera, si los familiares enuncian a una persona desaparecida normalizada sin identidad política, se comprende que los discursos de Asfaddes lo repliquen.

Sin embargo, Asfaddes no siempre acogió las interpretaciones de los familiares que negaban, ocultaban o desconocían las filiaciones políticas de las personas desaparecidas, esto se hizo evidente en el caso 197 de 1991 donde aparecen dos formatos de solicitud de afiliación diligenciados, en el primero en el apartado “profesión o actividad del Desaparecido” se escribe “Agricultor” y en “actividad: campesino”, mientras en un segundo formato se destacan “actividades sindicales: ANUC, políticas”. Asimismo, en el documento de hoja de vida de la persona desaparecida en el apartado de “sector social” se deja en blanco.

De esta manera, se hace evidente que en un primer momento los familiares desconocían u optaron por ocultar las actividades políticas de la persona desaparecida, mientras que en un

comunicado emitido por Asfaddes a los ocho días de la desaparición, se reconoce que esta persona hacía parte de la ANUC, que estuvo preso por razones políticas y también la persecución a la que estaba sometido:

A este comunicado agregamos que el compañero ... fue preso político en septiembre/89 a enero/90, saliendo en libertad condicional con presentaciones ante juzgados y que solo pudo hacerlo en dos ocasiones debido al hostigamiento y persecución tuvo que ausentarse de la región (Comunicado emitido por Asfaddes, Caso 197, 1991).

Del mismo modo, dentro del archivo se hace presente una constancia de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Santander emitida en 1992, documento en el que se afirma la pertenencia de la persona desaparecida a este grupo. En relación con lo anterior, se hace evidente el reconocimiento de una identidad política perseguida a pesar del desconocimiento o negación inicial que establecieron los familiares. Sin embargo, en años posteriores el énfasis en la identidad política de las personas desaparecidas se desdibujó, de acuerdo con los discursos familiares en pro de la normalización, como se presenta en el siguiente fragmento:

La presente es para informarle sobre el caso de El señor ... desapareció desde el 14 de enero del presente año, empleado de la empresa Indupalma, se desempeñaba como celador. El señor no tenía vínculos con algún grupo de Izquierda y nunca ha estado detenido, la señora...(esposa) colocó la denuncia a la Fiscalía de San Alberto, pero hasta el momento no le han contestado (Memorando dirigido a secretaría general de Asfaddes por parte de directivo de Asfaddes 27/04/1995, Caso 111, 1995).

Sin embargo, a pesar de la afirmación que dice que la persona desaparecida no tenía algún vínculo con “grupos de izquierda”, dentro los formatos de solicitud de afiliación, se señala que era sindicalista, lo que concuerda con datos encontrados en el informe Zona Quinta del Proyecto Colombia Nunca Más en el que se afirma que: “el 14 de enero de 1995 el

sindicalista y trabajador de Indupalma... fue desaparecido por hombres vestidos de civil en San Alberto” (p. 316).

El negar la pertenencia de la persona desaparecida a un “grupo de izquierda” podría deberse a la persistencia de los discursos estatales y contrainsurgentes que relacionaban a las personas militantes de izquierda o sindicalistas con grupos guerrilleros.

Otra de las formas de configurar a las personas desaparecidas que se identificaron en los discursos de Asfaddes se basa en el estado de indefensión de las víctimas al momento de la detención, como se evidencia a continuación:

HECHOS: El día 10 de Marzo de 1.996 nuestra Asociación denunció la desaparición del señor ..., de quien se tiene conocimiento el día 17 de enero de 1.996, ... se encontraba en la casa junto a su familia, aproximadamente como a las 12 de la noche la casa fue rodeada por personas vestidas con prendas militares y fuertemente armadas, los cuales intentaban tumbar dos puertas, ante esto ... prefirió abrir la puerta pues estaban los niños pequeños, las personas entraron a la casa encerrando a la esposa e hijos en un cuarto, les dijeron que fueran a salir hasta el otro día, a ... se lo llevaron como estaba en pantaloneta, descalzo y sin camisa, desde ese momento no se tiene conocimiento de su paradero (Derecho de petición dirigido a la Fiscalía Local de San Alberto Cesar enviado por directivo de Asfaddes Bucaramanga, 1998, 230).

En el relato anterior, se presenta a una persona indefensa que fue detenida en su casa, a media noche cuando se encontraba junto a su familia, por lo que, se afirma que tuvo que ceder a la detención para protegerla. El reconocer el estado de indefensión de las víctimas al momento de la desaparición, se debe a que como lo afirma Crenzel (2010) para el caso argentino: “estas descripciones sugerían la posibilidad de que, de haber existido cargos contra ellas, estas personas hubieran podido ser detenidas legalmente” (p. 69). Por lo que, el representar a la persona desaparecida como indefensa reafirmaría su inocencia ante acusaciones o señalamientos posteriores.

Del mismo modo, el CNMH (2016) afirma que “respecto a las acusaciones que los actores armados han elaborado para justificar la desaparición, es necesario enfatizar que el reconocimiento de las víctimas no se basa en su inocencia, sino en el estado de indefensión en que se encuentran cuando sus derechos son vulnerados” (p. 280), es así, como se comprende que los señalamientos o acusaciones en contra de la persona desaparecida no justifican la desaparición, ni median su reconocimiento como víctima. Sin embargo, el discurso del CNMH (2016) es posterior a este segundo momento y de acuerdo con esta época, los familiares y en este caso Asfaddes tienden a probar la inocencia de la persona desaparecida a partir de la negación u ocultamiento de la identidad política de las personas desaparecidas o su reconocimiento, mediado por la persecución, normalización, romantización o la narración de su estado de indefensión.

Del mismo modo, el que en este momento se configure a las víctimas como civiles normalizados y que se desplacen sus adscripciones políticas, se debe a que como lo afirma Sánchez (2018) en este segundo momento “humanizar la guerra y reconstruir el tejido social son las tareas primordiales a las que se abocan numerosas organizaciones sociales de diferente naturaleza articuladas alrededor del discurso de la paz o de la regulación de la guerra” (p. 104). De esta manera, al representar a una persona desaparecida normalizada e indefensa, cuya vida cotidiana fue tomada por sorpresa por la desaparición, implica una elaboración del crimen donde cualquiera puede ser desaparecido, ya no solo militantes o sindicalistas, quienes además se hallaban en medio de una campaña de desprestigio al ser señalados como guerrilleros o ser colaborador de un grupo insurgente.

Por otro lado, frente a las representaciones de la desaparición forzada elaboradas por Asfaddes, si bien en los discursos familiares se hace evidente una confusión entre la desaparición forzada y el secuestro, debido a que sus límites son borrosos, y a la ausencia de la tipificación de la desaparición como crimen; en este segundo momento, desde Asfaddes se marca una tensión entre estas violaciones a los derechos humanos. Esto debido a que la asociación pretende establecer una comprensión pública de la desaparición forzada, en un momento en el que los discursos frente al secuestro como crimen y violación a los

derechos humanos tenía mayor acogida. Lo anterior, se pudo evidenciar dentro de las actas de consejo de Asfaddes seccional Bucaramanga:

...desde allí nos dirigimos hasta el parque Luis Carlos Galán, en la cual iba a intervenir doña..., en el cual en su intervención agradece que se le haya brindado un espacio y les hace una aclaración a los organizadores que no es lo mismo un secuestro que un Desaparecido, y que no se debe fijar todo en un secuestro como en el caso del avión de Avianca que todo es propaganda y que la violencia abarca otros problemas más, e invita a los organizadores y estudiantes a que trabajen por la Desaparición forzada para ver si al fin nos aprueban el Proyecto de Ley contra la Desaparición Forzada de personas (Acta 007- 25/09/1999).

Lo anterior, resume la intervención de la coordinadora de Asfaddes de la época en una marcha desarrollada el 10 de septiembre de 1999 que partió de la UIS y se dirigió hacia el parque Luis Carlos Galán en la ciudad de Bucaramanga. En relación con la intervención de la coordinadora de Asfaddes se destaca que en su discurso expresa públicamente que la desaparición forzada no es un secuestro, “que la violencia abarca otros problemas”, es decir, otros crímenes o violaciones a los derechos humanos. Por lo que, se podría afirmar que el equiparar la desaparición forzada con un secuestro implica una invisibilización del crimen y dificulta su tipificación. De esta manera, desde Asfaddes se invita a los presentes particularmente a los estudiantes a “trabajar” por la tipificación de la desaparición forzada, en función de la aprobación del proyecto de ley en curso.

Es así como otra de las formas de configurar la desaparición forzada elaborada por Asfaddes dentro de este momento es como delito, a pesar de que aún no estaba tipificado, como se presenta a continuación:

Dichos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades de la época, sin embargo, a la fecha y luego de insistir en reiteradas oportunidades ante la Fiscalía general de la nación para ubicar las investigaciones correspondientes por los hechos denunciados y teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra tipificado el delito

de la desaparición forzada, al día de hoy no existe investigación penal vigente por la desaparición del señor... (Derecho de petición interpuesto por directivo de Asfaddes y dirigido a la Fiscalía, Caso 182, 1999).

Frente a lo anterior, se hace evidente que Asfaddes reconoce la desaparición forzada como delito a antes de que está fuera asumida como tal públicamente, esto podría deberse a que esta asociación apoyó el proceso construcción del proyecto de ley sobre la desaparición forzada durante este periodo:

e) PROYECTO DE LEY SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS (...) Se informa que está cursando por sexta vez este proyecto los familiares deben leerlo y hacer las aclaraciones o algo que consideren que debe estar escrito y no esté (Acta 002- 8/03/1997)

De esta manera, se comprende que la representación que configura Asfaddes de la desaparición forzada como delito, deviene del momento en que se empezó a elaborar el primer proyecto de ley rechazado sobre esta violación a los derechos humanos en 1988 y a las versiones posteriores, ya que estos documentos aunque no son aceptados, dentro de su contenido establecen unas formas de comprender y representar a la desaparición forzada como delito que devienen de una postura colectiva que se propaga desde las ONG, como se evidencia en un comunicado del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de 1991: “hacemos un llamado a toda la sociedad y en especial a la clase política, a fin de aunar esfuerzos y voluntades para apoyar efectivamente la lucha por los Derechos Humanos y a frenar de una vez por todas el aberrante delito de la desaparición que deja a las familias y compañeros de las víctimas, en total indefensión e impotencia” (Comunicado de Comité de Defensa de los Derechos Humanos, caso 147, 1990). En relación con lo anterior, se comprende que a pesar de que la desaparición forzada como “delito” no sea una parte integral de la versión oficial del Estado dentro del ámbito jurídico en este periodo, esta representación ya estaba inmersa dentro del pensamiento colectivo.

Instituciones:

Este segundo momento, presentado por Sánchez (2018) está marcado por el establecimiento de la constitución política de 1991, la movilización por la paz y la regulación de la guerra, pero también como lo afirma la Comisión de la Verdad (2022c) por el fortalecimiento del aparato Estatal y paraestatal, ya que “se adoptó la Estrategia Nacional contra la Violencia en 1991 por parte del gobierno de César Gaviria, la cual implicó un rediseño de las Fuerzas Militares, la modernización de su sistema de inteligencia con la reorganización de las redes de inteligencia y la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada en 1994 (conocidas como Convivir)” (p. 182). De ahí, que se diera un incremento de las desapariciones forzadas, que ya no tienen como único perpetrador al Estado, sino que también a los grupos paramilitares en coacción (Comisión de la Verdad, 2022c).

En relación con las representaciones elaboradas por las instituciones gubernamentales frente a las personas desaparecidas, es de resaltar que se encontraron pocos documentos, ya que, aunque había muchos derechos de petición remitidos por los familiares y Asfaddes a estas instituciones, fueron pocas las respuestas que se anexaron al archivo. Por lo que, en relación con los documentos analizados en este momento las representaciones elaboradas por las instituciones, se configuran desde el señalamiento y la acusación de la persona desaparecida como perpetrador de un crimen, como se presenta dentro del siguiente fragmento:

Respecto a las investigaciones que se adelantan en contra de su esposo ..., quien, según afirma la signaria, fue desaparecido hace siete (7) meses luego de los allanamientos y la persecución por parte de los cuerpos del Estado, se ordena remitirlas a la procuraduría Departamental Norte de Santander para lo pertinente, (...). Respecto del señor ..., debe informarse que existe en su contra la investigación radicada bajo el número..., por los delitos de rebelión y conexos, dentro del cual se ha librado orden de captura (Oficio dirigido a la esposa de ..., por parte de la Procuraduría provincial de Cúcuta, Caso 238, 1996).

Este documento es entregado a los familiares posterior a la desaparición forzada y en este se enuncian los múltiples allanamientos realizados a la casa de la persona desaparecida anteriores al hecho, además, de la vigilancia constante de agentes del Estado en el sector en el que vivía, esto se debe a que en su accionar “también, en cada unidad, oficiales y

suboficiales de inteligencia se encargaban de perseguir a personas consideradas enemigas y concebidas, por ello, como blancos de su acción. Los funcionarios B-2 (de inteligencia) y B-3 de otras brigadas, con jurisdicción territorial sobre el lugar del crimen, eran eventualmente asociadas al «operativo» de eliminación” (Comisión de la Verdad, 2022c, p. 183). En relación con lo anterior, se comprende que la persona desaparecida era objeto de persecución y vigilancia por parte de agentes del Estado y posterior a la desaparición se le presenta como perpetrador de un delito.

Frente a esto, los familiares se ven desconcertados debido a que el documento en mención, les fue entregado meses después de haber interpuesto la denuncia por la desaparición y que durante el proceso de búsqueda o en los allanamientos, no se informara de una orden de captura:

La fiscal que está a cargo de la investigación de ..., nos mostró una orden de captura por sedición y rebelión fechada el 14 de abril de 1.995, Pensamos nosotros que después de 8 meses de desaparecido ... se nos muestra esta orden de captura si nosotros todo el tiempo estuvimos exigiéndoles sobre los allanamientos y cuestionamientos que le tenían a él... (Carta dirigida al Comité de Presos Políticos por parte del hermano..., Caso 283, 1995).

De esta manera, se hace evidente un señalamiento por parte de la Fiscalía hacia la persona desaparecida desde la acusación de cometer un delito, en este caso de rebelión que, si bien no implica una detención, ya que este documento se da conocer posterior a la desaparición si puede terminar justificándola, ya que como lo afirma el CNMH (2016), estos señalamientos ponen en entredicho la responsabilidad de la persona desaparecida sobre su propia desaparición, sin que esta persona tenga la posibilidad de que se lleve sobre su caso un debido proceso, o de defenderse legalmente sobre estas acusaciones. Asimismo, estos señalamientos generan un estigma sobre la persona desaparecida y sus familiares, al igual que un daño moral, al atentar contra el buen nombre de la persona desaparecida.

En relación a la enunciación de la desaparición forzada dentro de los discursos de las instituciones gubernamentales, nuevamente se da la relación con el secuestro, frente a lo cual se destacan los siguientes fragmentos:

...para ello le informo que esta Unidad de Fiscalía no adelanta investigación por la desaparición o secuestro del señor ... (Oficio de la Fiscalía general de la nación enviado a Dirección seccional de fiscalías en Santiago de Cali, Caso 182, 1992).

Por medio de la presente me permito dar informe sobre la desaparición y secuestro por elementos uniformados el día cuatro (4) de agosto del presente año del señor ... (Oficio enviado por el Personero municipal de Puerto Wilches a la Policía Cuerpo Técnico Judicial, Caso 176, 1993).

Se destaca que en los documentos citados no se presenta una confusión entre la desaparición y el secuestro, sino que en el caso 182 al decir “desaparición o secuestro” implica que sólo una de las situaciones se está desarrollando, como si no se tuviera la seguridad de cual, mientras que en el caso 176 se escribe “desaparición y secuestro”, por lo que, se estarían dando los dos hechos. Sin embargo, al decir “desaparición” y no “detención - desaparición” o “desaparición forzada”, no se le da al hecho un carácter de privación de la libertad u ocultamiento de la persona en cuestión, ya que una desaparición como se pudo comprender desde Gatti (2017) si bien puede darse en ámbitos de conflicto armado como el colombiano, también abarca otro tipo de situaciones como desastres naturales o migración. Asimismo, se destaca la forma en que en el caso 176 se afirma que la persona fue desaparecida por “elementos uniformados”, sin clarificar si se trata de agentes del Estado, paramilitares o grupos guerrilleros, de manera, que la desaparición pudo ser perpetrada por cualquiera de estos.

A partir de lo anterior, es necesario resaltar que el que los familiares enuncien la desaparición forzada en relación con el secuestro, no implica lo mismo a que lo hagan entidades gubernamentales, en especial cuando estas son las señaladas de cometer las desapariciones, ya que como se hace evidente en las cifras de la Comisión de la Verdad (2022c) el secuestro en el marco del conflicto armado se le atribuyó principalmente a grupos guerrilleros que lo usaban como medio para obtener recursos económicos, además, de tener fines políticos. De manera que, entre 1990 y el 2018 se contabilizan 50.770 secuestros de los cuales se le atribuyen a las FARC el 40% y al ELN un 19%, mientras que a los grupos paramilitares se les responsabiliza de cometer un 24% (Comisión de la Verdad, 2022).

Por lo que, el que desde estas instituciones se relacionen los casos de desaparición forzada con secuestros implica una negación de su responsabilidad en la aplicación del crimen y así mismo, se manipulan las cifras tanto de secuestros como de desaparición forzada (Comisión de la Verdad, 2022c).

En relación con lo anterior, también es necesario tener en cuenta que para este periodo debido a la ausencia de una tipificación del crimen⁹⁰, la forma en que los casos de desaparición forzada prosperaban dentro del ámbito legal era si se denunciaban como secuestro simple⁹¹. Sin embargo, presentar las desapariciones forzadas como secuestro también tiene repercusiones negativas, ya que “en los casos en que se ha abierto investigación por secuestro, se encontraron, además, casos archivados por prescripción de la acción penal, aun cuando la persona sigue desaparecida” (CNMH, 2014, p. 83).

Prensa

Como ya se había mencionado desde Butler (2006) los medios de comunicación o en este caso la prensa escrita, en concreto el periódico *Vanguardia Liberal*, se configuran como marcos representativos de la realidad, que muestran lo que debe ser visto y las formas de entenderlo, a medida que se excluye otra información, ya sea por desconocimiento o de forma premeditada, ya que todo marco es excluyente. Del mismo modo, acudiendo a los planteamiento de Hall (2013) se entiende que los medios de comunicación son comprendidos como parte de los “aparatos ideológicos” que permiten la reproducción social, debido a que “la primera de las grandes funciones culturales de los medios modernos de comunicación [es]: el suministro y construcción selectiva del conocimiento social, de la imaginaria social por cuyo medio percibimos los “mundos”, las “realidades vividas” de los otros y reconstruimos imaginariamente sus vidas y las nuestras en un

⁹⁰ De esta manera, “la falta de tipificación legal de la desaparición conlleva en ocasiones la imposibilidad de continuar las investigaciones sobre desapariciones forzadas cuando éstas recaen en despachos judiciales cuyos jueces no asimilan este hecho al secuestro. (...) Así se califica el delito y el proceso sigue su curso. Pero esta interpretación no cuenta con el consenso del poder judicial y por esta razón se encontraron casos en que el juez ordena el cierre de la investigación, tomando como fundamento la falta de tipificación de la desaparición forzada como delito” (CNMH, 2014, p. 83).

⁹¹ Dentro del Código Penal de 1980, mediante los Artículos 268 y 269 se marca una diferenciación entre secuestro extorsivo y secuestro simple. El segundo de estos hace referencia a los casos de secuestro donde no se condiciona la libertad a “un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político” (CNMH, 2014, p. 65).

“mundo global” inteligible, en una “totalidad vivida” (Hall, 2013, p. 251). De esta manera, se comprende que los medios de comunicación tienen la tendencia a configurar un “otro”, frente al cual “un nosotros” se relaciona, de esta manera, es necesario cuestionarse dentro de los fragmentos de prensa analizados ¿quién es ese “otro”? De acuerdo con lo anterior, se comprende que el “otro” no es aquel sujeto excluido del marco, sino que él que está dentro de este bajo el único objeto de ser la otredad. En los fragmentos de presa encontrados en los casos, se hace presente la asociación de las personas desaparecidas con grupos guerrilleros, como se evidencia a continuación:

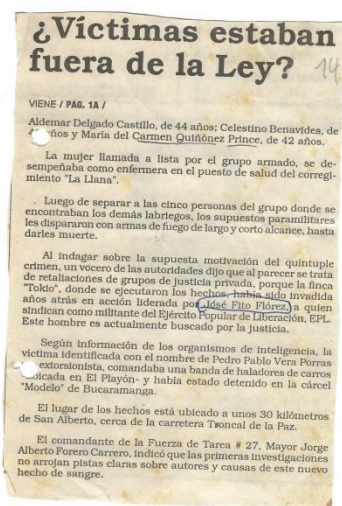


Imagen 6. Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “¿Víctimas estaban fuera de la ley?”. Fuente. Caso 111 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga.

Este es un fragmento del periódico Vanguardia Liberal publicado el 24 de abril de 1995 con el titular: “¿Víctimas estaban fuera de la ley?”, en este documento se hace referencia a las víctimas de la masacre de San Alberto⁹², cuyo homicidio se justifica al afirmar que “al parecer se trata de retaliaciones de grupos de justicia privada, porque la finca ..., donde se ejecutaron los hechos, había sido invadida años atrás en acción liderada por ... a quien sindicaron como militante del Ejército Popular de Liberación, EPL. Este hombre es buscado

⁹² La masacre de San Alberto hace referencia a los hechos ocurridos el 22 de abril de 1995, donde “los paramilitares citaron a una reunión a los parceleros de la recuperación de tierra de la finca denominada Tokio de la vereda Los Tendidos corregimiento de la Llana del municipio de San Alberto, (...) después de haberles dichos varias palabras de advertencia el paramilitar, que estaba dirigiendo la reunión comenzó a llamar una por una a las personas y se las iba enviando al verdugo...” (CNMH, 2018, p. 215). En total fueron asesinadas cinco personas en el desarrollo de estos hechos.

por la justicia” (Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el titular, “¿Víctimas estaban fuera de la ley?”, Caso 111, 1995), del mismo modo, se señala a otra de las víctimas de haber estado preso y coordinar una “banda de haladores de carros”.

En relación con lo anterior, la persona señalada de haber liderado la invasión de este terreno, que según los datos del periódico militaba en el EPL y era buscada por la justicia, es la persona desaparecida a la que hace referencia el caso 111. Contrario a esta información, se resalta que esta persona no hacía parte del EPL, sino que era sindicalista y trabajador de Indupalma, además, esta persona fue desaparecida el 14 de enero de 1995 cuatro meses antes de los hechos de la masacre.⁹³ Asimismo, dentro de este caso no se hacen presentes documentos emitidos por entidades estatales que señalen a esta persona de haber cometido un crimen o ser guerrillero. De esta manera, dentro de este recorte de prensa no se configura una representación de la persona como víctima de desaparición forzada, sino como militante del EPL buscado por la justicia.

Por otro lado, una versión de los hechos que se contrapone a lo expuesto dentro del artículo frente a la toma de tierras por parte del EPL es presentada por el CNMH (2018) en el informe “Y a la vida por fin daremos todo... Memorias de las y los trabajadores y extrabajadores de la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar”, ya que dentro de este documento se afirma que “el sindicato (Sintraproaceites) también ayudó a organizar el personal que clamaba tierras para poder trabajar y se logró por medio de ocupación, tomas o recuperación de tierras. La parcelación de las Malvinas, La Fragua, Los Cedros, La Carolina y Tokio, así se logró tierras para los campesinos trabajar. El Incora negociaba los predios con sus dueños y les pagaba” (p.175). De esta manera, dentro de este documento se clarifica que las tierras donde se desarrollaron los cinco asesinatos hacen parte de las tomas lideradas por el sindicato y no por un líder del EPL. En relación con lo anterior, la

⁹³ Del mismo modo, en el informe del CNMH (2018) “Y a la vida por fin daremos todo... Memorias de las y los trabajadores y extrabajadores de la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar” se afirma que “el 6 de enero de 1995 mientras prestaba los servicios de vigilancia en la plantación de Indupalma en San Rafael de Lebrija, fue desaparecido el trabajador ...” (p. 214), hechos a los que hace referencia el caso 111.

“confusión” de la prensa frente a la ocupación de las tierras, podría deberse a que para este periodo se mantiene la equiparación de los sindicatos con grupos guerrilleros.⁹⁴

Frente a lo consignado dentro del artículo en relación con la masacre, se hace evidente la justificación de los hechos, ya que al señalar a los perpetradores como “grupos de justicia privada”, se comprende que estos por medio de sus acciones estarían haciendo “justicia” por la invasión de una finca privada, en especial si se tiene en cuenta que para este momento se estaba desarrollando uno de los periodos de legalidad de los grupos paramilitares con el establecimiento de las Convivir⁹⁵ en 1995 como “servicios de vigilancia y seguridad privada”, una medida para proteger los intereses de las élites regionales y empresas privadas del accionar de los grupos guerrilleros. Estos grupos paramilitares estaban avalados por el Estado y adquirirían legitimidad dentro de los territorios más afectados por la acción guerrillera.

De esta manera, se comprende que la forma en que se presentan los hechos, a las víctimas de la masacre de San Alberto y a la persona desaparecida señalada de militar en el EPL dentro del artículo, tiende a justificar el accionar de los “grupos de justicia privada”.

En relación con lo anterior, como lo afirma Butler (2006) “cuando una vida se convierte en impensable o cuando un pueblo entero se convierte en impensable, hacer la guerra resulta más fácil” (p. 19), es decir que es más sencillo pensar su muerte que su vida, por lo que, al afirmar a una comunidad como invasora, militante o guerrillera se le excluye de este marco de representación al descartarla como una vida que debe ser protegida.

Por último, aunque dentro de los recortes de prensa se hallaron formas de representar a las personas desaparecidas, no se encontraron representaciones de la desaparición forzada.

⁹⁴ En San Alberto, Cesar, durante este periodo se hizo presente una fuerte represión dirigida a los sindicatos acompañada del relacionamiento de estos con grupos guerrilleros, ya que “en la década de los 90 les pareció poca la violación de todos los derechos humanos y aparecieron los paramilitares dirigidos por Roberto y Juancho Prada residentes en San Martín, Cesar, pero además el gerente de Indupalma doctor Rubén Darío Lizarralde Montoya no se quedó atrás y por varios medios escritos a nivel nacional señaló al sindicato Sintraproaceites de ser la correa de transmisión de las organizaciones guerrilleras que operaban en la zona” (CNMH, 2018, p. 141).

⁹⁵ El papel de estos grupos “fue central para el entramado paramilitar porque sirvieron de articulación entre sectores del empresariado, el Estado y los grupos paramilitares, lo que posibilitó la legitimidad y la financiación de estos, por vías legales” (Comisión de la verdad, 2022, p.307).

A manera de balance sobre este segundo momento, en relación con la representación de las personas desaparecidas dentro de los casos de Asfaddes seccional Bucaramanga, se destaca que el reconocimiento de la identidad política de estas personas aunque permanece, toma una menor relevancia en la media en que se destacan otras características de la personalidad de estas personas en pro de su normalización y configuración como civiles.

Del mismo modo, se da una fragmentación entre el cuerpo y la identidad de las personas desaparecidas, al situar unas identidades normalizadas y unos cuerpos objeto de violencias. Por otro lado, desde los discursos oficiales de las instituciones del Estado, las personas desaparecidas son objeto de señalamiento y acusación como perpetradoras de un crimen, al igual que desde la prensa donde se justifica el accionar paramilitar.

En relación con la desaparición forzada se destaca la relación y tensión que se establece entre la desaparición forzada y el secuestro, lo anterior debido a la ausencia de una legislación para darle un tratamiento a la primera, ya que durante este periodo se presentaron cuatro proyectos de ley que fueron rechazados. De esta manera, la forma en que los casos de desaparición forzada lograban tener una repercusión dentro del ámbito judicial, era si estas se denunciaban como secuestro simple, ya que este crimen tenía un mayor desarrollo penal. Sin embargo, esto implica una serie de dificultades para el reconocimiento y la tipificación de la desaparición forzada, así como para el establecimiento de unas cifras que permitan establecer la magnitud del fenómeno, además, se limita el reconocimiento de los perpetradores debido a que el secuestro se le atribuía principalmente a grupos guerrilleros, desdibujando la responsabilidad del Estado y los grupos paraestatales.

3.2.3. Tercer momento: Negación oficial del conflicto armado y negociaciones con los grupos paramilitares

De acuerdo con la genealogía de la enunciación de la memoria del conflicto armado, elaborada por Gonzalo Sánchez (2018) este tercer momento está determinado por dos escenarios políticos, por un lado, se resalta la postura negacionista frente al conflicto armado asumida por los dos gobiernos de Uribe Vélez (2002-2010), por el otro, el proceso de negociación con los grupos paramilitares, su desarme y la puesta en marcha de un

proceso de justicia transicional a partir de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz en el año 2005⁹⁶. Estos hechos generan inconformidad entre las víctimas, ya que limitan su reconocimiento, el acceso a la verdad y a la justicia. Por lo que, en este momento se da la configuración de las víctimas como sujetos de derecho a partir de su autorreconocimiento colectivo, es decir que como afirma Sánchez (2018) durante este periodo “pese a la inexistencia de una institucionalidad que les diera cauce a sus reclamos o las reconociera en su rol de víctimas, estas se reconocieron entre sí y a sí mismas como víctimas e iniciaron la reclamación de sus derechos” (p. 106).

Del mismo modo, con la entrada del nuevo siglo se hacen presentes una serie de transformaciones dentro de las formas de comprender y representar a la desaparición forzada y a la persona desaparecida. El primero de estos, es la tipificación de la desaparición forzada como delito dentro del código penal⁹⁷. Por otro lado, tras haber logrado establecer una comprensión pública del fenómeno, se hace presente una transformación que evidencia el recrudecimiento de la práctica de la desaparición forzada en el marco de la Política de Seguridad Democrática, impuesta por el gobierno de Uribe, cuando se dan a conocer las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas “falsos positivos”, que fueron llevadas a cabo por las fuerzas militares.

Familiares:

En relación con los discursos y las representaciones configuradas por los familiares en el marco de este tercer momento, es necesario mencionar que dentro de los cuatro momentos propuestos por Gonzalo Sánchez (2018), se hicieron presentes representaciones que se desarrollan de forma transversal, pero que toman mayor fuerza en un momento particular debido a las condiciones que impone el contexto. De esta manera, en este punto se hizo

⁹⁶ Ley 975 del 2005 o Ley de justicia y paz: “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” (Ley 975 de 2005, p.1).

⁹⁷ La tipificación de la desaparición forzada en Colombia fue un proceso largo que tomó más de una década, ya que el primer proyecto de ley se presentó en 1988 y en la década de los noventa “no se evidenciaba un avance serio para tipificar la conducta, más allá de la presentación continua de proyectos de ley tramitados e incluso aprobados por el Congreso, pero que terminaban en fracaso por la objeción presidencial” (CNMH, 2014, p. 126). De esta manera, durante el periodo anterior fueron presentados cinco proyectos de ley, de los cuales fueron aprobados la Ley 20 de 1998 por el Senado y 142 de 1998 por la Cámara dando como resultado la tipificación del crimen mediante la ley 589 de 2000 (CNMH, 2014).

recurrente la representación de la persona desaparecida como sostén económico de la vida familiar, situación que implica la configuración de un nuevo orden dentro del colectivo debido a la transformación de los roles que tenían los integrantes de este antes de la desaparición, como se evidencia a continuación:

Nos hemos visto seriamente afectados en la parte económica ya que él aportaba la mayor parte del sustento familiar; hecho que ahora me corresponde solamente a mi (su cónyuge) (Base de datos nacional de Asfaddes, Caso 189, 2001).

6. Daños Causados a la Familia de la Víctima y la Comunidad?... dejó 1 niño y 1 niña menores de edad y él era el sustento económico del hogar (Información víctima ejecución extrajudicial. Nodo nororiente colombiano, Caso 254, 2007).

Soy hermano de ... desaparecido el 9 de octubre de 1.992 en Bucaramanga, y quiero solicitarle una ayuda económica para poner un negocio de reparación de zapatos, ya que me corresponde sostener a mi anciana madre de 64 años, pagar arriendo y conseguir alimentación. En vista que nosotros dependíamos económicamente de mi hermano ... me veo en la necesidad de buscar qué hacer para sostener a mi señora madre. Vivimos en una pieza donde debemos pagar \$20.000 mensuales y atender a mi madre cuando se enferma del corazón para llevarla donde el médico y comprarle las medicinas (Carta dirigida a la directora de la Fundación Apoyo a las Víctimas de la Violencia, Caso 194, 2009).

De esta manera, “la desaparición forzada implica el detrimento económico y de calidad de vida, particularmente cuando quien es desaparecido desempeñaba las tareas de proveedor económico para el hogar” (CNMH, 2016, p. 306). Lo que implica una serie de transformaciones dentro de la vida familiar tras la desaparición, ya que se da una reorganización de los roles de sus integrantes donde unos se ven en la obligación de tomar el lugar de proveedor de la familia que tenía la persona desaparecida.

Asimismo, es importante resaltar que la representación de la persona desaparecida- hombre como sostén económico de la familia, se relaciona con los roles de género socialmente impuestos, que los configuran como proveedores del colectivo, ya que como se evidenció en los expedientes, la mayoría de las denunciantes son mujeres principalmente madres,

esposas o compañeras que tuvieron que asumir la responsabilidad económica de la familia, tras la desaparición.

De igual modo, como lo afirma Espinosa (2019) estas mujeres “pasan así, de su condición "primaria" de ser madres a la "secundaria" de ser militantes políticas” (p. 459) al salir de este ámbito doméstico - privado a la plaza pública para denunciar la desaparición de su familiar y exigir que aparezca.

Por otro lado, los hijos, hijas o hermanos de la persona desaparecida también, pasan a asumir la responsabilidad por sus familias lo que implica “un verdadero daño al proyecto de vida, pues trunca proyectos e impide la realización de aspiraciones y anhelos sobre los que se sustentaba el presente” (CNMH, 2016, p. 108). Es así como, esta representación de la persona desaparecida, proyecta una serie de cambios y transformaciones dentro del ámbito familiar que implican dificultades, deterioro en la calidad de vida y carencias.

Del mismo modo, es importante resaltar que dentro de este periodo se presentaron a Asfaddes seccional Bucaramanga cuatro casos de desaparición forzada de mujeres, de los cuales solo se encontró información relacionada con las víctimas en dos. De esta manera, se destaca que estas mujeres son presentadas por sus familiares dentro de los documentos como “amas de casa” con niveles estudios bajos al diligenciar en el apartado de “estudios realizados: primaria”. En relación con lo anterior, la representación de las mujeres dentro de este periodo, también se articula a los roles de género socialmente establecidos y se plantea una dualidad, entre la representación de hombre desaparecido- proveedor del hogar y mujer desaparecida- cuidadora de este.

De forma paralela, otra representación de las personas desaparecidas que se configura dentro de este tercer momento y que fue apropiada por los familiares dentro del archivo, es la de “falso positivo” este término hace referencia a ejecuciones extrajudiciales que se enfocaron en “jóvenes de zonas vulnerables del país, detenidos ilegalmente, asesinados y hechos pasar como miembros de la insurgencia por la acción de agentes corruptos del Estado que pretendieron sumarlos ignominiosamente a las estadísticas de guerrilleros dados de baja, con el fin de obtener privilegios dentro de la institución militar” (CNMH, 2016, p. 18). En relación con los casos del archivo analizado lo anterior se materializa desde los siguientes relatos:

El día 27 de Enero del año 2005 salieron a las 3 de la mañana del barrio San Valentín al norte de Bucaramanga ... quienes salieron en un taxi que luego fue hallado abandonado... El día sábado 29 de enero de 2005 salió la noticia en el diario Vanguardia liberal que el ejército dio se baja a cuatro supuestamente extorsionistas en la vía Girón- Zapatoca ... Esposa de ... fue a la quinta brigada donde estaban los cuerpos y se encontró con un amigo llamado ... que estaba prestando el servicio militar y le preguntó qué pasaba y ella le contó que ... estaba muerto el soldado fue y miró y le dijo que le estaban tomando fotos uniformándolo y poniéndole plata y armas en ese momento llegó mi hermano... quien es soldado profesional y entró ... a ver los cuerpos pero ya les habían quitado el camuflado, ... al ver lo sucedido comenzó a gritar y a discutir con los soldados porque no se lo dejaban ver, el grupo de asesinos les contestó que ellos los habían matado y que iban hacer. A las seis de la tarde los sacaron para la morgue y el lunes los entregaron para darles cristiana sepultura (Documentación falsos positivos, caso 233, sin fecha).

...tenía como dos meses larguitos de vivir ahí y trabajaba en Granada, era desplazado de la vereda de Puerto Gaitán del municipio de San Juan Arama (Meta), estaba recibiendo la ayuda humanitaria que brinda la Cruz Roja Internacional (...). El ejército da la información que era que lo había dado de baja colocando un minado, pero eso para mí es un montaje del ejército pues el único muerto fue él solo, no hubieron más muertos, también porque mi hijo no cargaba arma de ninguna clase, donde lo encuentran muerto lo encuentran con un revólver en la mano izquierda y él era derecho, ahí unas mechas detonantes en un sitio de una carretera abandonada, si lo vieron solo supuestamente colocando explosivos por qué no lo capturaron en vez de asesinarlo, mi hijo fue una víctima más de ellos que hacen pasar por guerrilleros para mostrar resultados... (CREDHOS Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos en Barrancabermeja (Santander), Caso 253, 2007).

...se encontraba en la finca... y según testimonio pasó el ejército que luego se escucharon unos disparos que simulaban una emboscada; por la cual afirmaron que había caído en combate lo cual no fue realidad no es cierto porque no hubo cruce de

disparos ni existían gente a su alrededor dando como resultado un falso positivo (Documentación falsos positivos, 207, 2009).

...el día 11 de febrero del 2005 se hallaba como siempre vendiendo caramelos en el sector Cll 31-32 y 33 hasta la carrera 20 cuando fue abordado por una camioneta blanca que pertenece a organismos del Estado, subido a la fuerza con otros muchachos y desapareció por once días hasta que su madre lo halló como NN en el municipio de Bucaramanga en la morgue como dado de baja en combate ... tenía antecedentes de drogadicción y enfermedades que no le permitían caminar largos trechos, por lo que, es claro que es caso de Falso Positivo (Formatos de Asfaddes, Caso 217, sin fecha).

Lo anterior, permite evidenciar la forma en que se empiezan a establecer unos modos de comprender y de nombrar lo que estaba sucediendo, ya que como se pudo observar en un primer relato, los familiares describen los hechos, en el segundo relato se establece una comprensión al afirmar que la persona desaparecida “fue una víctima más de ellos que hacen pasar por guerrilleros para mostrar resultados...”, y en el tercer y cuarto relato se hace evidente la apropiación social del término “falso positivo”.

En relación con lo anterior, esta forma de referirse a los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, se debe a que los cadáveres de “combatientes de grupos ilegales” se nombraban como “positivos” en el argot militar; de ahí el nombre coloquial y eufemístico de esta modalidad de crimen como “falsos positivos” (Comisión de la Verdad). Sin embargo, lo que generó que se estableciera una apropiación colectiva del término para hacer referencia a las ejecuciones extrajudiciales, se debe a que como lo afirma una de las madres que integra el colectivo de las madres de Soacha en el documental “Retratos de familia” del 2013:

Esto fue el día de la exhumación de nuestros cuatro muchachos, eso fue lo que activó lo de los mal llamados falsos positivos, cuando el ministro Santos es la primera entrevista que el da y él confirma que hay batallones que exigen resultados y que él esperaba que fueran positivos más no falsos positivos, entonces a partir de esa frase que él dijo quedamos las madres de Soacha las de los falsos positivos (Cardona, 2013, 1:08:37).

En relación con lo anterior, para abordar las representaciones de las personas desaparecidas que configuraron los familiares a partir del término “falso positivo” es necesario situar el marco temporal en el que se configura, ya que si bien como lo afirma Gómez (2009) “los famosos “falsos positivos” no comenzaron con la ‘Seguridad Democrática’ de Uribe. Se puede afirmar que ahí se masificaron, pero asesinar civiles y presentar a la víctima como guerrillero dado de baja ha sido una práctica recurrente en las fuerzas militares” (p. 60)⁹⁸, como se hace evidente en el Caso 203 de 1993 del archivo de expedientes:

Descripción de los hechos: El día 7 de julio de 1993 ... se desplazaba hacia la vereda del ... a negociar cebolla para vender en Bogotá, (...) Aparecieron 4 en una fosa común, el ejército dio la noticia que en combate dieron de baja a 4 guerrilleros de la Farc (Formatos de Asfaddes, Caso 203, 1993).

Los hechos descritos anteriormente tuvieron lugar en los años 90’s una década antes de que los casos de “falsos positivos” no solo se masificaran, sino que tomarán mayor visibilidad, principalmente dentro de los medios de comunicación⁹⁹, como resultado de la movilización de familiares y organizaciones de derechos humanos¹⁰⁰. Lo que implicó, que otras familias se integrarían a Asfaddes para denunciar desapariciones forzadas que se dieron en años anteriores bajo la misma modalidad, como en el caso 126 que hace referencia a la desaparición de tres personas en el 2001, cuyos familiares se asociaron a Asfaddes en el 2009:

⁹⁸ Lo anterior concuerda con las cifras de “uno de los informes analizados [por la JEP]... del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) que aportó las revistas Noche y Niebla. En estas se documentan 1.741 crímenes de víctimas de ‘falsos positivos’ ocurridos entre 1984 y 2011” (JEP, 2022).

⁹⁹ Los casos de ejecuciones extrajudiciales se dieron a conocer “en agosto de 2008, [cuando] diversos medios de comunicación hicieron público a nivel nacional e internacional el presunto homicidio de 11 jóvenes del municipio de Soacha, Cundinamarca, cuyos cuerpos habrían sido inhumados como N.N. y reposan en fosas comunes del cementerio de Ábrego, en inmediaciones de Ocaña, Norte de Santander, a pesar de que sus familias los habían reportado días atrás como desaparecidos” (CNMH, 2014, p. 161).

¹⁰⁰ Lo anterior a partir de acciones como la configuración de una Galería de la memoria en Soacha con el apoyo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), entrevistas a medios internacionales gracias al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), así como la participación de los familiares en la marcha del 26 marzo, de esta manera, los familiares empezaron a recibir el apoyo de diferentes organizaciones como el MOVICE, la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), la Comunidad Claretiana y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otros. (CNMH, 2014).

...llegaron el día 3 de julio del 2001 al centro abasto de Girón a las 3AM,... el mismo día como a las 5AM en el sector de la limonera nos informaron que a los tres se los llevaron en una camioneta, ese día no llegaron, el día 6 en horas de la mañana por la radio se supo que habían sido dados de baja 4 guerrilleros esta misma noticia salió en el periódico Vanguardia Liberal como NN sin identificar (Formadatos de Asfaddes, caso 126, 2009).

Del mismo modo, otra de las situaciones que mediaron que los casos de “falsos positivos” tomarán mayor visibilidad es la irrupción del conflicto armado en el ámbito urbano, ya que como lo afirma Rodríguez (2020): “al tiempo que crecieron los casos reportados, se produjo también el incremento en aquellos que provenían de ciertos tipos de víctimas de zonas urbanas, ejecutados lejos de sus lugares de vivienda, en zonas del conflicto” (p. 40).

Esto contribuyó a que se hicieran públicos los casos, ya que “con los jóvenes del campo o de zonas de guerra era en cierta forma más fácil hacerlos aparecer como guerrilleros, pero cuando ya fueron grupos de muchachos de ciertos barrios empezó a ser cada vez más insostenible la degradación que se ocultaba” (Rodríguez, 2020, p. 40). En relación a esto, los casos de “falsos positivos” representan la ejecución extrajudicial de poblaciones vulnerables como:

agricultores, menores, personas desempleadas, indigentes, personas con adicción a las drogas, personas con discapacidad mental, líderes comunitarios, personas con antecedentes penales o que habían cometido delitos menores, guerrilleros o paramilitares desmovilizados y, en algunos casos, presuntos colaboradores de la guerrilla o guerrilleros que habían sido detenidos o se habían rendido (Human Rights Watch en Cataño, 2012, p.91).

De esta manera, se puede afirmar que estos son casos en los que las Fuerzas Militares tenían conocimiento de las condiciones de las víctimas, por lo que, estas ejecuciones, aunque, se dan en el marco de la lucha contrainsurgente, no pretenden la eliminación del enemigo interno, sino que se ejecutaron para alterar resultados desde la elaborada puesta en

escena de combates u operaciones militares que terminan con la vida de supuestos guerrilleros que en realidad eran civiles¹⁰¹.

En relación con lo anterior, se comprende que aunque según el archivo desde 1993 se estaban dando desapariciones forzadas bajo esta modalidad, no fue sino hasta el 2008 que los casos de ejecuciones extrajudiciales adquirieron visibilidad, debido a que se hace pública la desaparición de 11 jóvenes de Soacha que aparecieron en Ocaña como dados de baja en combate, mismo año en el que el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos en su primera intervención frente al tema denominó lo ocurrido con el término “falso positivo” que fue apropiado socialmente y se convirtió en una forma recurrente de hacer referencia a estos casos. De esta manera, el uso del término dentro de los archivos de los casos en relación con los discursos familiares se da por primera vez en el 2009 dentro de los documentos consignados en el caso 207.

Frente a lo anterior, la forma en que los familiares configuraron su discurso en torno a las personas desaparecidas en relación con los casos de “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales se da, por un lado, al probar la inocencia de la persona desaparecida a partir de la “normalización” y la narración del estado de su indefensión al momento de la detención.

Además, se presenta una variante que desdibuja la imagen del desaparecido como sujeto ideal (que se presentó en el momento anterior), ya que en lugar de presentar virtudes, los familiares en defensa de la persona desaparecida, admiten que estas tenían problemas físicos, de drogadicción o trabajaban raspando coca. Como en el Caso 217 en el que para probar la inocencia de la persona desaparecida se pone en evidencia sus problemas de drogadicción y que vivía en la calle, lo anterior a partir de la aparición de certificaciones de centros de rehabilitación, además de una carta firmada por 106 personas dentro de la carpeta del caso:

¹⁰¹ Esta situación se le atribuye al establecimiento de la Directiva Ministerial 029 del 2005 “que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones” (Ministerio de Defensa Nacional, 2005), ya que dentro de este documento se establecen los beneficios y recompensas por las bajas en combate. Aunque como ya se mencionó, se tiene conocimiento de casos de ejecuciones extrajudiciales que anteceden la fecha de la promulgación de esta directiva.

...las personas que firman son personas que conocieron de cerca y por mucho tiempo a mi hermano ..., con C.C. No. ... de Bucaramanga, como un joven con problemas de drogadicción, problema que tuvo desde los 14 años de edad hasta el día en que lo mataron, convirtiéndolo casi en un indigente a pesar de la ayuda de su familia (Carta firmada por 106 personas, Caso 217, 2005).

Por otro lado, una forma de configurar la representación de la persona desaparecida como “normalizada” en el marco de las ejecuciones extrajudiciales es a partir de hacer énfasis en lo laboral:

Él se fue para esa fecha con ... a la ciudad de Bogotá a trabajar vendiendo galletas y dulces, hasta la fecha no se ha vuelto a saber nada de ellos (SIRDEC, Formato nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, Caso 173, 2003).

Se venía a Bucaramanga a trabajar la temporada en zapatería, el salió de trabajar a las 4 de la tarde se encontró con dos amigos más y subieron para el parque centenario a tomar tinto, de este parque se llevaron a los 3 y luego como a los dos días llamaron de la Fiscalía de Ocaña que había sido hallado como dado de baja en combate y se trasladó a Bucaramanga y fue sepultado en Girón (Información víctima ejecución extrajudicial. Nodo nororiente colombiano, Caso 212, 2008).

Además, en algunos casos la desaparición estuvo mediada por la esperanza de un trabajo, esto se debe a que una estrategia para llevarse a las personas fue “...con falsas promesas de ofertas de empleo, ... Cuando llegan a su destino las ultiman y las hacen pasar por miembros de grupos alzados en armas, colocándoles uniformes, fusiles y demás prendas militares” (Cataño, 2020, p. 83), como ejemplos los siguientes:

A la casa llegaron 2 amigos y lo convidaron a un trabajo para Pto Santander y nunca regresó (Recorte de prensa con el título: Más desaparecidos, Caso 294, 2002).

Relato de los hechos (describir circunstancias de tiempo, modo y lugar de los acontecimientos): yo tengo un hijo que se llama ..., él vivía conmigo en Bucaramanga, él trabaja en construcción y otras veces vendiendo frutas o lo que saliera, y en el mes de septiembre del 2004 me dijo que se iba para Caldas, porque había salido una propaganda en la televisión que necesitaban recogedores de café, y se fue, el me

llamo como a los 8 días y me dijo que estaba bien que había conseguido trabajo recogiendo café (....) (Cuerpo técnico de investigación, Caso 131, 2004)

En relación con lo anterior, se hace evidente que las representaciones que configuran los familiares para hablar de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales se basan en la construcción de jóvenes inocentes, desde el probar que no se trataba de guerrilleros, sino de jóvenes de poblaciones vulnerables, que eran personas productivas para la sociedad, que se ganaban la vida de una forma honesta o que se hallaban en busca de oportunidades laborales, esto podría deberse a que esta modalidad de desaparición implica la exhibición del cuerpo de la persona como guerrillero dado de baja en combate.

Frente a las representaciones de la desaparición forzada elaboradas por los familiares, en momentos anteriores se hizo evidente una dificultad en relación con las formas de nombrar lo que les estaba sucediendo, es decir que en el primer y segundo momento planteado por Sánchez (2018) los familiares configuraron su discurso a partir de su experiencia o relacionaron esta violación a los derechos humanos con el secuestro debido a sus similitudes, ya que la desaparición forzada aún no estaba concebida como crimen dentro del Código Penal, lo que implicaba una serie de obstáculos al momento de interponer la denuncia.

Por lo que, en este tercer momento, se considera un gran logro para la sociedad que “finalmente el Congreso de Colombia, tras seis intentos fallidos desde 1988, aprobó la Ley 589 de 2000 tipificado como delito las desapariciones forzadas...” (Asfaddes, 2002, p. 115), dando a comprender el crimen como el sometimiento a otra persona a la “privación de la libertad cualquiera que sea su forma, seguida de su ocultamiento y la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley...” (Asfaddes, 2002, p. 115). Sumado esto en el mismo año en el nuevo Código Penal se establece el Artículo 165 que insta una pena para quien cometa el crimen. Lo anterior implica una reelaboración de los discursos de los familiares, como se hace evidente a continuación:

... denuncié en ese momento el caso por secuestro porque no existía la ley que tipifica la desaparición forzada, ..." (Derecho de petición dirigido al Procurador General de la Nación por parte de la madre de... Sepúlveda 314, 2009).

El fragmento anterior, permite comprender el modo en que la tipificación de la desaparición forzada en el marco legal, contribuyó a clarificar la comprensión que tenían los familiares de las personas desaparecidas frente al crimen, y lograr bajo el amparo legal de la nueva jurisdicción demandar esta violación a los derechos humanos ante las instancias gubernamentales competentes.

Por otro lado, en relación con las representaciones que establecieron los familiares de las personas desaparecidas frente a la desaparición forzada, es de resaltar que como lo afirma la Comisión de la Verdad (2022) este crimen generalmente está acompañado de otras violaciones a los derechos humanos. Por lo que, dentro de este tercer momento, “la desaparición forzada se empleó como mecanismo para encubrir las ejecuciones extrajudiciales” (Comisión de la Verdad, 2022). De esta manera, frente a los casos de “falsos positivos” es común que se hable únicamente del hecho como una ejecución extrajudicial¹⁰² y no se haga referencia a una desaparición forzada. Esto se debería a que, estos casos tienen la particularidad de que operan a partir de la visibilidad del cuerpo, es decir que se desarrollan en la medida en que el cuerpo es presentado como guerrillero dado de baja en combate, sin embargo, estos casos implican una desaparición forzada desde el momento en que estas personas son llevadas hasta el lugar donde son ejecutadas, posteriormente, se desaparece la identidad de la víctima al ser presentada como guerrillera y N.N. Del mismo modo, tras la aparición pública del cuerpo como guerrillero, se da nuevamente una desaparición cuando esta es inhumada en una fosa común y su cuerpo no es entregado a los familiares o solo se entrega una porción del cuerpo, quedando una parte desaparecida.¹⁰³

¹⁰² De igual modo, el denominar estos casos como “ejecuciones extrajudiciales” también resulta problemático, ya que como lo afirma Cataño (2020) “el derecho colombiano repudia la pena de muerte bien sea por vía judicial o extrajudicial” (p. 102) así los señalados sean culpables o inocentes.

¹⁰³ En relación con el macro caso 03 de la JEP sobre Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado se resalta que “6.402 personas fueron presentadas en el país como guerrilleros dados de baja en combate cuando no lo eran” entre 2002 y 2008 (JEP, 2022).

Asfaddes:

Una de las características del tercer momento planteado por Sánchez (2018), es la postura negacionista del conflicto armado interno que asume el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002- 2006 y 2006 - 2010), desde el cual se afirma que la guerra en Colombia es causa del “terrorismo”¹⁰⁴ liderado por los grupos al margen de la ley. Por lo que, al “no existir” un conflicto armado, las víctimas del mismo fueron invisibilizadas y sus derechos vulnerados al ser equiparadas con los grupos al margen de la ley o presentadas como promotoras del terrorismo desde el discurso del gobierno.

Lo anterior, a partir de la intervención del presidente Uribe en una ceremonia militar el 9 de septiembre del 2003¹⁰⁵ en la que afirma que estas organizaciones son “politiqueros al servicio del terrorismo” (El país, 2003), estas palabras generaron un descontento dentro de la seccional como se presenta en el siguiente fragmento:

9- Pronunciamento frente al discurso del presidente Uribe: ...No estamos de acuerdo nos puso en la mira a nosotros. Que se está deslegitimando el trabajo...voy hacer una observación, dijeron que iban a revisar todas las ONG y ahí puede caer ASFADDES, y una sugerencia que hago para todas las seccionales es que saquen copias de seguridad y las dejen fuera de las casas de cada uno, de todos los papeles, de todos los archivos que tengan en el computador, ... (Acta 004- 27/09/2003).

De acuerdo con esto, se hace evidente que este fue un momento en el que la seccional se sentía insegura debido al señalamiento del que fueron objeto todas las ONG. Del mismo

¹⁰⁴ La asimilación de los grupos guerrilleros como terroristas se da debido a que “los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 impactaron de manera contundente el devenir del conflicto armado colombiano. El primer paso que dio Estados Unidos fue incluir a las FARC-EP, el ELN y las AUC dentro de los grupos terroristas internacionales a comienzos de octubre de 2001. (...) Sumado a esta guerra contra el terrorismo que lideró Estados Unidos con actores diversos, la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia en Colombia logró que se capitalizara el descontento nacional frente al actuar de las guerrillas y la situación internacional para librar una guerra sin cuartel contra las FARC-EP” (Comisión de la Verdad, 2022, p. 356.) De esta manera, el gobierno de Uribe configuró una perspectiva donde el conflicto armado era inexistente y la violencia era parte el terrorismo ejercido por los grupos al margen de la ley.

¹⁰⁵ El periódico La Patria en una noticia con el título “Uribe acusa al sector de las ONG de servir al terrorismo” recoge la intervención del presidente de la siguiente manera: ‘El presidente Álvaro Uribe acusó ayer a un sector de las ONG de derechos humanos de servir al terrorismo, luego de que un colectivo de esas entidades lo acusara de autoritario y de haber profundizado la guerra en su primer año de gobierno. Uribe dijo en una ceremonia militar que existe un grupo de ONG al que definió como “politiqueros al servicio del terrorismo”, que “se escudaban cobardemente en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y la ciudadanía le han quitado”’ (La Patria, 2003).

modo, dentro de la Ley 975 del 2005 o Ley de justicia y paz no se reconoce a las víctimas de desaparición forzada, ni de crímenes de Estado como objeto de reparación al no incluirlas “entre los beneficiarios de la asistencia humanitaria” (Vargas, 2014, p. 68).

De esta manera, según Sánchez (2018), para las víctimas este es un momento en el que ante la falta de reconocimiento por parte del Estado “se reconocieron entre sí y a sí mismas como víctimas e iniciaron la reclamación de sus derechos” (p. 106). El fortalecimiento del movimiento de víctimas podría relacionarse con la creación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)¹⁰⁶ en el 2005, como “un proceso organizativo en el que confluyen más de 200 organizaciones de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazados, así como organizaciones acompañantes y defensoras de derechos humanos” (MOVICE, 2015).

Por lo que, fueron estas y las organizaciones de derechos humanos las encargadas de denunciar las vulneraciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. De esta manera, una de las representaciones presentes dentro de los discursos de Asfaddes seccional Bucaramanga, frente a la configuración de los “falsos positivos” se relaciona con su reconocimiento como personas jóvenes. Esta representación se hace evidente a partir de la “Ficha datos jóvenes desaparecidos asesinados extrajudicialmente”. Sin embargo, en los archivos relacionados con los “falsos positivos” se hacen presentes personas que no necesariamente son jóvenes como en el caso 254 donde padre e hijo son desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente por fuerzas del Estado:

... y su hijo ... trabajaban como celadores del barrio Kennedy de Bucaramanga salieron a las 5 pm a trabajar normalmente pero el día siguiente a la hora de llegada que era entre las 7 y 8 de la mañana no llegaron a la casa y entonces empezó la zozobra (...). Al día siguiente ósea el 19 de Marzo de 2007 había un soldado en la quinta brigada y llamó a la mamá que vivía en el barrio los colorados que le dijo que ... estaba muerto cuando llegue a la quinta brigada por mi esposo y mi hijo no

¹⁰⁶ Como parte de la creación del MOVICE confluyen dos procesos, por un lado, el Proyecto Colombia Nunca Más que inició en 1996 como proceso pionero en el reconocimiento e investigación de los crímenes de Estado en el que participaron inicialmente 17 organizaciones de derechos humanos entre las que estaría Asfaddes. Otro proceso fundacional del MOVICE, fue el II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y genocidio en el que participaron 230 organizaciones (MOVICE, 2015).

me dejaron entrar me preguntan que si eran de la guerrilla o paracos también me preguntaron que si yo iba a demandar y les respondí que no, que dejaba en las manos de Dios y ellos me respondieron más me vale (Documento con el título: EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, Caso 254, 2007).

De esta manera, se comprende que se estableció una representación de las personas desaparecidas bajo esta modalidad de ejecución extrajudicial como jóvenes, a pesar de que se presentaran casos de personas de mayor edad. Esto podría deberse a que los primeros casos que se hicieron públicos se relacionaban con personas jóvenes de esta manera se podría afirmar que estos formatos se crearon bajo esta premisa. Del mismo modo, representar a las personas desaparecidas como jóvenes bajo esta modalidad de desaparición podría comprenderse como una forma de apelar a su inocencia, además, de que implica un proyecto de vida interrumpido.

En relación con las representaciones de la desaparición forzada configuradas por Asfaddes seccional Bucaramanga, en primer lugar, es importante señalar que el que se empezaran a hacer evidentes los casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” generó una ruptura dentro de Asfaddes seccional Bucaramanga, principalmente frente a los modos en que había comprendido la desaparición forzada, tal y como lo enuncia la Coordinadora de esta seccional al decir:

Los falsos positivos en cierto momento también tuvo un sin sabor en Asfaddes, porque para nosotros cuando una persona se la llevan, la desaparecen por veinticuatro horas luego aparece asesinada es por un seguimiento que le hicieron ¿cierto?, aparecen como NN, le quitan el nombre, los torturan, los dejan lejos de su casa como para que no los encuentren tan rápido y causar más dolor (Entrevista a la Coordinadora de Asfaddes seccional Bucaramanga, 30/05/2022).

Lo anterior hace referencia, a las modalidades de desaparición forzada a las que se había enfrentado la asociación en su trayectoria hasta el momento, por lo que, ante esta nuevas modalidades de desaparición, surge “ese sin sabor de que ese no era un desaparecido, pero para nosotros [Asfaddes] sí era un desaparecido...” (Entrevista a la Coordinadora de Asfaddes seccional Bucaramanga, 30/05/2022).

En relación con esto, es importante resaltar que esta seccional al notar esta transformación dentro del fenómeno de la desaparición forzada, empieza a configurar unas estrategias para

documentar estos casos que se escapan de las formas en que hasta el momento se había comprendido:

Pues yo a todo evento iba con mi agenda, que apareció alguien de desaparición, de una vez lo llamaba, ¿me puede regalar el teléfono?, yo soy esto, me presentaba, (...) en todos los eventos que yo iba, iba recopilando, pero aparte de eso como por prensa salía yo también estaba pendiente de la prensa e iba compilando todo” (Entrevista a la Coordinadora de Asfaddes seccional Bucaramanga, 30/05/2022).

Del mismo modo, como parte de las estrategias de documentación se hace evidente la aparición de dos nuevos formatos de Asfaddes dentro del archivo que serían el de “Documentación falsos positivos” y la “Ficha de datos de jóvenes desaparecidos asesinados extrajudicialmente” como documentos en los que se consigna la información de estos casos. De esta manera, se comprende que ante esta transformación del fenómeno en primer lugar, la seccional configura procesos para documentar los casos y entender lo que estaba sucediendo y a partir de allí empezar a desarrollar procesos de denuncia frente a esta nueva situación y establecer una comprensión pública:

Nosotros organizamos una marcha solo de los falsos positivos, pero apoyada por todos los de Asfaddes y fue una marcha que destapó la olla podrida de lo de Ocaña, esa primera marcha, que eso no lo reconocen, la primera marcha de los falsos positivos se hizo en Bucaramanga... (Entrevista a la coordinadora de Asfaddes seccional Bucaramanga, 30/05/2022).

En relación con lo anterior, como ya se mencionó en el apartado anterior las desapariciones forzadas en el marco de “los falsos positivos” generaron un “sin sabor” dentro de la Asociación, debido a que “el cuerpo no es desaparecido materialmente sino alterado en su identificación -cuando se inhuma en fosa clandestina para aparecer como guerrillero o delincuente dado de baja en combate” (CNMH, 2016, p. 151). De manera que en este caso la desaparición opera a partir de la visibilidad del cuerpo. Sin embargo, estos casos son desapariciones, debido a que, entre el momento en que esta persona es extraída o se va de su casa por una promesa de empleo hasta que su cuerpo es exhibido públicamente como guerrillero hay una desaparición forzada. Asimismo, se da lugar al ocultamiento de la identidad de esta persona a partir de presentarlo como guerrillero muerto en combate o dado de baja. Por último, es de resaltar que estos cuerpos fueron enterrados como N.N. en

fosas comunes y hasta el momento hay familias que no han encontrado los restos de la persona desaparecida y ejecutada extrajudicialmente o solo les fue entregada una parte del cuerpo.

De esta manera, se comprende que para Asfaddes los casos de “falsos positivos” son desapariciones forzadas, y se reconoce el trabajo de denuncia desarrollado por la seccional para establecer un reconocimiento público de lo que estaba sucediendo.

Instituciones:

En relación con las instituciones gubernamentales, este tercer momento está marcado por la tipificación de la desaparición forzada como delito y el establecimiento de unas “medidas de política pública, tales como los mecanismos de registro de personas capturadas y detenidas¹⁰⁷, [la] Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas¹⁰⁸ (instalada formalmente el 25 de octubre de 2005) y el registro nacional de personas desaparecidas y búsqueda urgente” (CNMH, 2014, p. 129). De esta manera, se establecieron unos mecanismos y unas instituciones en función de la desaparición forzada y la búsqueda de las personas desaparecidas, por lo que, se comprende que con este nuevo marco legal se les da un reconocimiento a los sujetos que en periodos anteriores habían sido negados, invisibilizados y estigmatizados por el Estado. De acuerdo con esto, en relación con las representaciones de las personas desaparecidas configuradas por las instituciones del Estado dentro de este tercer momento se exalta que el término “ciudadano” empezó a tornarse recurrente:

Comendidamente me permito remitir a su despacho, fotocopia del Formato para Búsqueda de Desaparecidos, radicado No... a nombre del ciudadano, ... siendo reportarte...; así como la denuncia No, el C.T.I., instaurada por la misma persona,

¹⁰⁷ Este “es un sistema de información referencial de datos suministrados por las entidades intervinientes de acuerdo con sus funciones, que constituye una herramienta de información veraz, oportuna y útil para identificar cadáveres sometidos a necropsia Medicolegal en el territorio nacional, orientar la búsqueda de personas reportadas como víctimas de desaparición forzada y facilitar el seguimiento de los casos y el ejercicio del Mecanismo de Búsqueda Urgente” (CBPD, 2012), de esta manera, uno de los aplicativos del registro al que tienen acceso las entidades es el SIRDEC, este se hizo recurrente dentro del archivo a partir de la impresión de los datos consignados.

¹⁰⁸ “La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD) es un organismo mixto, nacional y permanente, creado mediante la Ley 589 del 2000, con el fin de apoyar y promover la investigación del delito de desaparición forzada...” (CBPD, 2022)

por el hurto del vehículo..., en el cual se desplazaba la persona antes mencionada como presunto desaparecido (Carta dirigida a directivo de Asfaddes Bucaramanga por parte de la sección de criminalística CTI en Bucaramanga, Caso 189, 2001).

Bajo la radicación ..., se adelanta investigación preliminar por la muerte violenta del ciudadano ... hijo de ..., nacido en Bucaramanga ... (Constancia emitida por El suscrito fiscal diecisiete seccional delegado ante los jueces penales del circuito de Bucaramanga, caso 187, 2006).

PRUEBAS: 1. ...informar cuales fueron los militares que participaron en la muerte de los ciudadanos ..., ... 2. Solicitar a Medicina Legal, copia de la necropsia e informe de balística de las personas muertas... (Documento de la Procuraduría regional de Santander, caso 254, 2007).

Es de resaltar que la configuración de la representación de las personas desaparecidas como “ciudadanos” implica la reivindicación de estos sujetos, que fueron señalados, excluidos y deshumanizados a partir de la desaparición forzada, como seres humanos con derechos (que pasarían de ser objetivo del Estado a objeto de protección), ya que como lo afirma Espinosa (2019) “para tener derechos (incluidos los derechos humanos) hay que ser ciudadano” (p, 472). Por lo que, esta palabra cobra mayor relevancia al venir del lugar de enunciación del aparato Estatal que ha sido señalado como uno de los principales victimarios en articulación con grupos paramilitares en el marco de la lucha contrainsurgente. De igual forma, el aparato estatal ha operado como encubridor desde la negación de las desapariciones o deslegitimación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo, según lo señalado por Espinosa (2019) se comprende que el referirse a las personas desaparecidas como “ciudadanos” tiene múltiples implicaciones que hacen de la “ciudadanía” un término excluyente, ya que “esta relación entre ciudadanía y el perfil de víctima que se consolida, estaría ligado a la ‘jerarquización’ de las víctimas donde ciertas víctimas que ocupaban papeles más protagónicos en la vida social son más importantes en el duelo social público” (p. 472). De esta manera, se comprende que el configurar esta representación no es un acto inocente, ya que al igual que en el proceso de configuración de un archivo, siempre se está excluyendo algo.

Por lo que, es necesario preguntarse ¿qué es lo que excluye la representación de “ciudadano” ?, según Agamben en Butler (2006): “un sujeto privado de sus derechos de ciudadano ingresa en una zona de indiferenciación, ni está vivo en el sentido en que vive un animal político -en comunidad y ligado a leyes- ni está muerto y por lo tanto afuera de la condición constitutiva del estado de derecho” (p. 97). En relación con lo anterior, se comprende que este “no ciudadano” se halla al margen del Estado, pero aun así se somete a este.

En relación con las representaciones de la desaparición forzada producidas desde las instituciones gubernamentales que se hallaron en el archivo analizado, se destaca un punto de corte que se sitúa en el segundo hito propuesto por Gatti (2017) que hace referencia a la inmersión del concepto de desaparición forzada dentro del ámbito jurídico y penal, ya que desde estos actores se da una primera enunciación de la desaparición forzada como “secuestro” y en este momento se presenta un punto de quiebre al enunciarla como "Delito: Desaparición forzada ART 165 CP”:

Tanto por el lugar como por la época de la ocurrencia de la DESAPARICIÓN FORZADA ART. 165 C.P. del que fue (fueron) víctima(s) ... se puede establecer preliminarmente que puede ser atribuible al accionar del grupo que finalmente se conoció como bloque, Catatumbo de las autodefensas... (Carta del fiscal 8 de la unidad de justicia y paz dirigida a la madre de ... con el asunto: Reconocimiento de víctima No. 2590, Caso 173, 2010).

Esta transformación dentro de las formas enunciar la desaparición forzada cambia con su tipificación y su inmersión en el Código Penal en el año 2000, que hace que dentro de los documentos principalmente de la Fiscalía se escriba "Delito: Desaparición forzada ART 165 CP”. Esto implicó no sólo el reconocimiento del delito, sino también de la pena establecida dentro del Código Penal enfocada en “el particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, ...”, pero también al “servidor público, o el particular que

actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel...” (Código Penal Colombiano, 2000, Art. 165)¹⁰⁹.

De esta manera, aunque esta pena abarca a los trabajadores públicos adscritos a entidades estatales, reconociendo que estos pueden llegar a ser autores del crimen, no reconoce al Estado como uno de los principales perpetradores, por lo que, el modo en que se escribió la ley generó inconformidades, ya que “desvirtúa el carácter de la desaparición como crimen de Estado, estableciendo que es un delito común que puede ser cometido por cualquier persona y no una conducta que compromete la responsabilidad de agentes estatales” (Arboleda, 2019, p. 71). Esto se debe a que como lo afirma el CNMH (2014) “la realidad social colombiana, con múltiples actores violentos potencialmente ‘desaparecedores’, exige un tipo penal con un sujeto activo más amplio que el tradicional” (p. 135), es decir el Estado, del mismo modo, se afirma que para el momento de la promulgación de la ley “la desaparición forzada responde a toda suerte de móviles siniestros e incluso abiertamente apolíticos, a los cuales el tipo penal debe adaptarse para que la potestad punitiva del Estado guarde coherencia con la realidad social” (p. 136). De esta manera, se hace evidente una transformación dentro del discurso, en que se afirma que el Estado, no es el único perpetrador del crimen y que ya no solo se desaparece con fines políticos. Esto antes de que se hicieran públicas las ejecuciones extrajudiciales que se estaban cometiendo desde hace décadas por parte de agentes del Estado.

Por otro lado, dentro de los documentos citados anteriormente, de forma particular en el caso 187 y 254, no se habla de desaparición forzada sino de “muerte violenta” o “muerte”, esto se debería a que estos casos hacen referencia a las ejecuciones extrajudiciales, de manera, que como ya se mencionó este hecho implicó una transformación dentro del fenómeno de la desaparición forzada, por lo que, se entiende que para estas instituciones en este momento los “falsos positivos” no eran reconocidos como personas desaparecidas.

Prensa:

¹⁰⁹ Lo que se diferencia de las formas en que se había definido la desaparición forzada internacionalmente como en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en la que se define la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado...” (Naciones Unidas, 2022).

En relación con las representaciones configuradas por la prensa escrita en particular desde lo consignado dentro del periódico regional *Vanguardia Liberal*, es importante destacar que en este tercer momento se convirtió en una herramienta para reconocer los casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, como se puede evidenciar en el siguiente fragmento:

Relato de los hechos: (...) el día 6 de julio don ... avisó por la emisora que cuatro presuntos guerrilleros habían sido dados de baja. Mi madre compró el *Vanguardia* y en la página judicial comprobó la noticia que sus hijos estaban como NN. (Documentación falsos positivos, Caso 126, Sin fecha).

De esta manera, cuando en la prensa se presenta a unos guerrilleros caídos en combate y sus familiares los reconocen, pueden reafirmar su identidad, probar su inocencia, recuperar el cuerpo de su familiar antes de que sea inhumado como N.N en una fosa común (como se evidenció en algunos casos) y exigir justicia. Del mismo modo, la recurrencia en la publicación de este tipo de noticias les permitió a los familiares y a las ONG defensoras de derechos humanos comprender que no se trataba de casos aislados o “confusiones”, sino de ejecuciones extrajudiciales como una estrategia que implicaba a varios agentes de las Fuerzas Militares.

En relación con lo anterior, a partir de los fragmentos del periódico *Vanguardia Liberal* que se encuentran dentro de los casos, se pueden ubicar dos recortes que hacen evidentes las transformaciones en las formas de comprender las ejecuciones extrajudiciales configuradas y difundidas por este periódico, ya que en primer lugar, dando seguimiento a los discursos elaborados por las fuerzas militares, dentro de sus artículos se habla de “guerrilleros” o “delincuentes” dados de baja en enfrentamientos, como se presenta en el siguiente recorte de prensa:



Imagen 7. Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “Murieron seis presuntos ilegales en combates contra el Ejército”. Fuente. Caso 258 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga sin fecha.

Este artículo se titula “Murieron seis presuntos ilegales en combates contra el Ejército” en su contenido se afirma que “Tres hombres que pertenecerían a bandas delincuenciales y venían intimidando a la población civil (...) murieron en un enfrentamiento que sostuvieron con el Ejército”, esto según la versión del comandante de la Quinta Brigada, además, se agrega que en “operaciones adelantadas por la Quinta Brigada hubo un combate (...), donde murieron dos posibles integrantes de la cuadrilla 37 de las FARC. Así mismo las tropas hallaron un campamento (...) murió un presunto ilegal del ELN” (Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título: Murieron seis presuntos ilegales en combates contra el Ejército, caso 258, sin fecha).

El recorte de prensa presentado anteriormente expone una primera versión de los hechos, antes de que se hicieran públicas las ejecuciones extrajudiciales, en la que se exalta la labor del Ejército y a partir de unas cifras al decir que “murieron seis presuntos ilegales” se destaca un resultado frente a la lucha contrainsurgente.

Sin embargo, esta versión no duró mucho tiempo, ya que, en artículos posteriores, ya se habla de “falsos positivos”:



Imagen 8. Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “Familiars de víctimas de presuntos ‘falsos positivos’ saldrán a marchar”. Fuente. Caso 258 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga sin fecha.

En relación con lo anterior, se propone como ejemplo el artículo titulado: “Familiars de víctimas de presuntos ‘falsos positivos’ saldrán a marchar” en este se habla de la impunidad que han tenido los casos de ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de respuestas para los familiares de cuatro casos reconocidos, por lo que, se convoca a una movilización que partiría de la Quinta Brigada hasta el parque García Rovira. También se menciona que se contará con la participación de organizaciones defensoras de derechos humanos. Posteriormente, dentro del artículo bajo el subtítulo “cuatro casos denunciados” se enuncia que estos, ya habían sido presentados dentro del periódico en fechas pasadas: “Otros tres casos sobre presuntos ‘falsos positivos’ fueron también reseñados en este medio periodístico el pasado 9 de noviembre...” (Recorte de prensa del periódico Vanguardia Liberal con el título: Familiars de víctimas de presuntos “falsos positivos” saldrán a marchar, caso 258, sin fecha).

Es de resaltar que los “otros tres casos” señalados dentro del artículo, hacen referencia a los “tres hombres pertenecientes a bandas delincuenciales” presentados en una publicación anterior, por lo que, se hace evidente una transformación en el discurso del periódico frente

a estos casos que pasó de presentar a “guerrilleros” o “delincuentes” a hablar de “presuntos falsos positivos”.

Sin embargo, el apelativo “presuntos” usado por la redacción marca una sospecha o duda frente a los casos, mientras que al referirse a los “tres delincuentes” dados de baja por el Ejército no se habla de presunción, esto probablemente se debe a que en primer artículo se presenta la versión del comandante de la Quinta Brigada, mientras que en el otro la de los familiares y organizaciones. Asimismo, como lo afirma Gonzalo Sánchez (2018) en este tercer momento ‘las víctimas, aunque adquirieron progresivamente mayor presencia en el escenario político, se las siguió abordando básicamente como sujetos de dolor, y continuaron siendo “puestas bajo sospecha como posibles colaboradoras de la guerrilla”’ (p. 108), en especial si se tiene en cuenta el discurso propagado por Uribe para este periodo.

En relación con las representaciones de la desaparición forzada configuradas por los recortes del periódico *Vanguardia Liberal* y que forman parte del archivo, durante este periodo se hace presente su representación como un “delito complejo” a partir del siguiente artículo:



Imagen 9. Recorte del periódico Vanguardia Liberal con el título “En 428% crecieron las desapariciones precisa informe de la defensoría”. Fuente. Caso 121 archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga 2003.

Lo anterior, es una fotocopia de un recorte de prensa escrita con el título: “En 428% crecieron las desapariciones precisa informe de la defensoría”. En este artículo se hace referencia a dos casos de desaparición forzada, se mencionan los hechos y las acciones públicas que se han desarrollado en el marco del proceso de búsqueda a pesar de las cuales no se ha obtenido ninguna respuesta frente a su paradero. Posteriormente, se abordan las cifras de desaparición presentadas por la Personería de Bogotá en un informe en el que se afirma que ha habido un aumento significativo del 428% entre 1999 y 2002, crecimiento que se iguala con el nivel de impunidad de los casos de desaparición forzada.

Del mismo modo, se hace referencia a la tipificación de la desaparición forzada como crimen dentro del código penal y se presentan una serie de factores, que según el informe de la personería, que retoma el artículo; hacen de este un crimen complejo a pesar de su reciente presencia dentro del marco legal, estos factores serían: que muchos casos han sido reportados ante la Fiscalía como secuestro y la falta de conocimiento de la legislación por parte de los funcionarios, también, se destaca que:

Aparte de luchar contra los esfuerzos de sus autores para no dejar evidencia alguna que permita descubrir el paradero de la víctima y las circunstancias en que ocurrieron los hechos, los testigos temen suministrar información a las autoridades, revela el informe (En 428% crecieron las desapariciones precisa informe de la defensoría, Caso 121, 2003).

En relación con lo anterior, se hace evidente una transformación en las formas de comprender y representar la desaparición forzada, ya que se hace mención de la tipificación de crimen dentro del código penal, lo que implica su configuración como un delito diferente al secuestro. Sin embargo, este crimen se enuncia como “complejo”, lo que permite comprender que a pesar de que esté tipificado sigue siendo difícil de entender para las víctimas y para los funcionarios, debido a que sus características implican la ausencia de información frente a los hechos, lo se traduce en procesos de investigación lentos y un alto índice de impunidad.

Desde una mirada transversal al archivo en relación con los momentos anteriores, se puede afirmar que en este tercer momento se dan una serie de transformaciones y articulaciones que se ven reflejadas dentro del archivo, además, de la coexistencia de múltiples miradas y formas de presentar a la persona desaparecida y a la desaparición forzada que devienen de dos acontecimiento particulares: en primer lugar, este periodo se ve marcado por la tipificación de la desaparición forzada en Colombia, lo que implica el establecimiento de una comprensión oficial del hecho victimizante como delito y de las personas desaparecidas como ciudadanos por parte de las instituciones del Estado.

En segundo lugar, en este momento también se da una transformación dentro del fenómeno que genera una ruptura frente a las formas en que se había nombrado la desaparición forzada y a las personas desaparecidas en el archivo, esto a partir de la configuración de estas como “falsos positivos” en el discurso familiar y de Asfaddes.

Por otro lado, desde el discurso familiar se establece una mirada de la persona desaparecida como proveedor, lo implica una reconfiguración de las dinámicas familiares y de los roles de género tras la desaparición.

Del mismo modo, es necesario afirmar que a pesar de la transformación del fenómeno, hay representaciones que se mantienen como la normalización de la persona desaparecida al hacer énfasis en lo laboral como formas probar su inocencia, aunque se hace presente una variante desde el reconocimiento de los problemas físicos, cognitivos o de drogadicción en los casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, por lo que, se desdibuja la imagen de la persona desaparecida como sujeto ideal. En el marco de estos casos también se mantiene el señalamiento público de las personas desaparecidas como guerrilleros o integrantes de grupos al margen de la ley.

3.2.4. Cuarto Momento: Ley de víctimas y restitución de tierras

El cuarto momento, al que hace referencia Gonzalo Sánchez (2018) en la genealogía de la memoria del conflicto armado en Colombia se desarrolla durante la implementación de la Ley 1448 o Ley de víctimas y restitución de tierras del 2011 “Por la cual se dictan medidas

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” (Acción social, 2011, p. 9). De acuerdo con lo anterior, se entiende que una de las primeras transformaciones que se da dentro de este período es la aceptación pública de la existencia de un conflicto armado y sus consecuencias, para de esta manera configurar medidas de reparación a las víctimas. Del mismo modo, se destaca que este momento se caracteriza por el protagonismo de las víctimas como sujeto social, político y constructor de memorias.

En relación con lo anterior, esta ley que implica la reparación de las víctimas, impuso una serie de condicionamientos para acceder a la justicia, que resultaron determinantes frente a las formas de representar a las personas desaparecidas y a la desaparición forzada.

Familiares:

Frente a las representaciones de las personas desaparecidas dentro de los discursos familiares, se han hecho presentes transformaciones y continuidades que se relacionan con el contexto social y político en el que las familias enuncian a la persona desaparecida. Una de estas continuidades se relaciona con el énfasis en lo laboral de la persona desaparecida, es decir, la representación de esta persona como trabajadora, que tenía una profesión o que los hechos de la desaparición se dieron mientras se encontraba desarrollando una actividad relacionada con lo laboral:

Estaba trabajando en una finca en Briceño y llegaron unos hombres armados y se llevaron a varias personas entre ellos a mi ..., y desde eso está desaparecido, se supo que algunas de las personas las mataron, pero no se sabe qué pasó con los cuerpos. (SIRDEC- Formato Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Caso 246, 2011)

Mi hermano ... estaba trabajando en el área rural en el corregimiento la india del municipio de Landázuri el 18 de junio de 1989 y ese día llegaron hombres armados a donde él se encontraba y se lo llevaron y nunca más supimos de él. (...). no tenía problemas con nadie. Nadie lo había amenazado, el comentario era que se los habían llevado de la finca las autodefensas. Nunca he recibido pruebas de

supervivencia y no había denunciado por miedo. Yo todavía estoy huyendo (Fiscalía general de la nación- Formato único de noticia criminal, Caso 231, 2012).

Datos sobre los hechos: Manifiesta la denunciante que su señor padre llamado ... salió de la casa ubicada en la ... con un muchacho que era su compañero de trabajo en obras de construcción para un hotel a entrevistarse con unas personas que necesitaban obreros para una obra fuera de la ciudad. Mi padre solo dijo que iba a ver el trabajo para ver si lo hacía cuando terminara la obra que estaba haciendo en Colseguros A norte, (...). (Fiscalía General de la Nación- Formato único de noticia criminal, Caso 190, 2012).

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en relación con los momentos de la genealogía que preceden, se comprende que el configurar a la persona desaparecida a partir de lo laboral responde a una tendencia que pretende la “normalización” de la persona desaparecida, esto debido a que los familiares se hallan en un contexto en el que priman los señalamientos hacia esta por parte de agentes del Estado y de la sociedad en el marco de la lucha contrainsurgente. De esta manera, la “normalización” de la persona desaparecida se convierte en una estrategia que les permite a los familiares probar la inocencia de esta persona, es decir, que esta no hacía parte de ningún grupo contrainsurgente o desarrollaba actividades fuera de la ley.

De acuerdo con esto, las condiciones que mediaron la configuración de la persona desaparecida en este cuarto momento como persona “normalizada”, se relacionan con la delimitación que se hace de las víctimas dentro de la Ley Víctimas y Restitución de Tierras, ya que “a través de sus instituciones, como la Unidad para las Víctimas, determinó qué tipo de víctimas serían aceptadas en el Registro Único de Víctimas, que las contabilizaría desde 1985 y que no contemplaría a combatientes de grupos insurgentes, así estuviesen en estado de indefensión, (...) y las reconocería como tal, les daría un estatus” (Arellana, 2019, p. 95)¹¹⁰. Por lo que, a través de estas políticas de reparación “el sujeto víctima deriva también

¹¹⁰ Mediante las disposiciones que establece la Ley de víctimas y restitución de tierras, en el Artículo 3, parágrafo 5 se especifica que “La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente Ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos...” (Artículo 3, Ley de víctimas y restitución de tierras).

de la acción estatal” (Espinosa, 2019, p. 22), es decir, que el Estado y sus instituciones configuraron quienes son las víctimas, quienes son los victimarios y cuáles son los hechos victimizantes.

De esta manera, la justicia condicionó a los familiares a probar la inocencia de las personas desaparecidas para obtener un reconocimiento como víctima y acceder a la reparación. Por lo que, se comprende que, al poner límites en la categoría de víctimas, esta se torna excluyente desde la negación de otros sujetos e identidades victimizadas que se han visto afectadas en el marco del conflicto y que fueron asumidas como insurgentes, como personas que tenían militancias o actividades políticas ligadas a grupos armados, que bien podrían ser objeto de reparación.

Por otro lado, frente las representaciones de la desaparición forzada, llama la atención que hasta este momento las formas de configurar esta violación a los derechos humanos se daban a partir la experiencia de los familiares y la equiparación del crimen con el secuestro, esto hasta el ascenso de la desaparición forzada como crimen dentro del código penal. Sin embargo, en este cuarto momento se hace presente una particularidad en las formas de configurar la desaparición forzada dentro de los discursos familiares, esto a partir de su relacionamiento con el reclutamiento forzado de menores:

El sábado, 7 de junio de 1990, como a las diez de la mañana, llegaron varios hombres armados, quienes se identificaron como de las FARC, a la finca ..., donde vivíamos mi papá, mi mamá, y todos los hijos (se mencionan seis personas). Como mi hermano ... era el más grande, se lo llevaron y hasta el día de hoy no hemos vuelto a tener noticias de él. Cuando se lo llevaron tenía 15 años, No hemos recibido pruebas de supervivencia. Cuando se llevaron a mi hermano, mi mamá y mi papá no se encontraban en la casa, ellos estaban en el campo trabajando. No quiero agregar nada más (Formato de denuncia penal de la Fiscalía, Caso 255, 2012)

En relación con lo anterior, como lo afirma la Comisión de la Verdad (2022c), “el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados infringe el derecho internacional humanitario y las leyes nacionales también lo prohíben” (p. 346). Sin embargo, las cifras del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado ascienden a 30.000.

De esta manera, frente a lo consignado en el documento, el reclutamiento forzado de menores puede configurarse como una forma de desaparición, debido a que se presentan casos en los que familiares de los niños reclutados pierden todo contacto con ellos, dadas las condiciones de los contextos en los que habitan, al carácter móvil de las guerrillas o paramilitares, además, del desplazamiento forzado al que se someten muchas familias en el marco del conflicto. Por otro lado, también hay casos en los que las personas reclutadas pierden la vida durante su pertenencia en una de estas agrupaciones y los familiares no pueden acceder a los cuerpos, por lo que, están desaparecidas.

En relación con lo anterior, el fragmento citado en el caso 255 se configura como una particularidad dentro de las formas de representar la desaparición forzada, debido a que esta es la primera y única vez que se presenta esta relación dentro del archivo analizado, además, de que es una denuncia tardía que se da veintidós años después de la desaparición.

Esto podría relacionarse con los límites de la representación dentro los discursos sociales, ya que cuando se configura un sistema de representaciones dentro de los discursos como parte de estos se hace evidente la afirmación de unos enunciados, pero también la negación, supresión, normalización de otros, es decir que siempre se queda algo o alguien por fuera, aquellas vidas que no deben ser lloradas, ni son merecedoras de duelo. De esta manera, dentro los momentos anteriores las formas de representar se vieron limitados por la lucha contrainsurgente, por lo que, se comprende el temor de los familiares al denunciar el caso.

En relación con lo anterior, se hace evidente la dificultad de concebir o configurar la representación de una identidad guerrillera o insurgente como víctima. Esto se relaciona con las formas en que se ha construido la representación de los guerrilleros dentro de medios de comunicación, ya que como lo afirma Estrada (2021):

La-el guerrillero se ha producido como una vida descartable, en tanto al ser enmarcada y emplazada en un discurso funcional a la guerra, sólo emerge cuando ésta -la guerra- lo necesita representar como enemigo, como diferente, terrorista o asesino, en resumen, como una figura del Otro que encarna la maldad y cuando esta figura no es necesaria se realiza sobre ella un ejercicio de borradura, negándole la posibilidad de ser legible a los ojos del mundo (p. 49).

De esta manera, esta condición de vidas monstruosas que no aparecen dentro del régimen visual como víctimas, se extiende a la idea de no ser dignos de búsqueda o al no reconocimiento de la desaparición, debido al estigma que ha construido la representación social del guerrillero o el excombatiente que invisibiliza el crimen del reclutamiento forzado al presentar a seres monstruosos o “máquinas de guerra”¹¹¹, que nunca fueron infantes y que deben ser eliminados en pro de la seguridad de la población civil, esta situación hace que los familiares se abstengan de buscarlos por temor al estigma social o a otras represalias¹¹².

Asfaddes

En el periodo anterior, frente a la ausencia de un reconocimiento oficial de las víctimas de desaparición forzada y crímenes de Estado, estas se identificaron entre sí y fortalecieron sus procesos con la creación del MOVICE, lo que conlleva a que en este cuarto momento “las víctimas pasaran a ser el actor central no armado en contra de la guerra. Más aún, se convirtieron en el soporte principal de la paz” (Sánchez, 2018, p. 109).

En relación con esto, frente a las representaciones de las personas desaparecidas construidas por Asfaddes para este momento se destaca la configuración del término “víctima” para referirse a las personas desaparecidas, como se destaca en el siguiente fragmento:

Fue víctima del delito de desaparición forzada cuando se desempeñaba como
PRESIDENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UIS
SINTRAUNICOL en Bucaramanga, la última vez que fue visto salía de su casa para

¹¹¹ Esto a partir de frases como la de Diego Molano Ministro de Defensa durante el gobierno de Iván Duque (2018 – 2022) que intentó justificar un bombardeo a un campamento de las FARC-EP en que se encontraban menores diciendo que “los niños guerrilleros ‘son máquinas de guerra’” (Uprimny, 2021). Por lo que, se desaparece su condición de infantes y se les vuelve objetivo militar.

¹¹² En relación con la configuración del reclutamiento forzado de menores con la desaparición forzada, me parece pertinente traer a colación algunos fragmentos de la experiencia que tuve en el marco de mi pasantía con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) durante el 2022. Debo resaltar que esta pasantía se basó principalmente en el acompañamiento a unos talleres dirigidos a familiares de víctimas de desaparición forzada (entre los que se encontraban familiares de niños o adolescentes reclutados forzosamente). De esta manera, durante estos talleres se hicieron evidentes las dificultades que atraviesan los familiares de personas reclutadas en su proceso de búsqueda, ya que algunos de los participantes señalaron que al momento de interponer una denuncia o pedir apoyo estatal frente a la desaparición o reclutamiento, recibieron malos tratos por parte de los funcionarios, lo que los lleva a sentir desconfianza hacia las instituciones.

el trabajo (Derecho de petición dirigido a la Fiscalía general de la nación y la Fiscalía quinta especializada de Bucaramanga por parte de Asfaddes, Caso 270, 2011).

Este fragmento, permite evidenciar la forma en que se establece la palabra “víctima” para referirse a la persona desaparecida en este momento, ya que los familiares relacionados con el caso 270 se afiliaron a Asfaddes en 1989 iniciando el proceso de documentación (que es interrumpido en los noventa cuando los familiares se ven obligados a retirarse de la asociación debido a la persecución), pero no es sino hasta este momento que se representa a la persona desaparecida como víctima. Esto se podría relacionar, con la Ley de víctimas y restitución de tierras, ya que “mediante estos procesos y procedimientos surge una identidad, deriva del Estado tanto por la responsabilidad directa o indirecta en la causa victimizante como porque el Estado interviene y normativiza su constitución, y finalmente, determina la producción de subjetividades” (Espinosa, 2018, p. 22).

De esta manera, mediante la promulgación de esta ley, se reconoce la existencia del conflicto armado, pero también se valida la existencia de unas víctimas lo que interviene dentro de los procesos de subjetivación de los familiares y Asfaddes, ya que empiezan a enunciarse como tal, esto no quiere decir que antes no se reconocieran como víctimas, sino que hasta este momento empiezan a usar la palabra “víctima” para autodenominarse:

Asfaddes es una ONG de derechos humanos con estatus consultivo ante la ONU que trabajaba el tema de la desaparición forzada de personas y quienes la integramos somos todos víctimas (Carta dirigida al alcalde de Granada por parte de la coordinadora de Asfaddes y la hermana de ..., Caso 27, 2012).

El autorreconocimiento de los familiares de las personas desaparecidas como víctimas, se debe a que ante ‘la “ausencia” del desaparecido, la figura de la víctima es definida como sus “familiares” a diferencia de otros crímenes de derechos humanos donde la víctima es el “sobreviviente”’ (Espinosa, 2019, p. 412). Además, dentro de las disposiciones que establece la Ley de víctimas y restitución de tierras se reconoce a los familiares como tal, al afirmar que “también son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta

de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad” (Acción social, 2011, p. 9).

Por otro lado, en relación con las formas de representar la desaparición forzada dentro de los discursos de Asfaddes para este momento, se destaca su configuración como “modalidad represiva”, esto podría deberse a que la aplicación de la desaparición forzada en Colombia en sus inicios se dio como una herramienta “para castigar a un opositor político y para reprimir e impedir la organización, (...) propagar el terror y ejercer el control territorial” (CNMH, 2016, p. 26). De ahí que en uno de los documentos pertenecientes al archivo de casos desde Asfaddes se diga que se busca: “promover espacios de intercambio de experiencias y reflexión para la comprensión de la modalidad represiva de la Desaparición Forzada, ...” (Documento con título: Contexto del proyecto, planteamiento del problema, Caso 190, 2012)¹¹³.

De esta manera, dentro de estas hojas se presentan los objetivos, justificación y planteamiento del problema de un proyecto de atención psicosocial enfocada en los familiares asociados a Asfaddes, en el que se afirma que: “con la puesta en marcha de la ley 1448 que creíamos que era la salvación para las víctimas de desaparición forzada, que fueron excluidas en anteriores leyes (ley 975)¹¹⁴, observamos que es igualmente difícil obtener el acompañamiento psicosocial a los familiares antes, durante y después como lo estipulan los protocolos de entregas dignas en los restos de los desaparecidos” (Documento con título: Contexto del proyecto, planteamiento del problema, Caso 190, 2012).

Con lo anterior, se comprende el contexto en el que se plantea el proyecto, sin embargo, se podría afirmar que la representación de la desaparición forzada como “modalidad represiva” deviene del Proyecto Colombia Nunca Más que inició en 1996, ya que Asfaddes fue una de las de las 17 organizaciones que hizo parte de este proyecto (Movice, 2015), en el que se abordan de forma regional los crímenes de lesa humanidad y se establece una

¹¹³ Este documento corresponde a la formulación de un proyecto de Asfaddes y aunque este aparece en la carpeta del caso 190, no se relaciona de forma particular con este, por lo que, se podría considerar que este documento fue trasapelado y corresponde al archivo administrativo de la organización, ya que solo aparecen dos hojas que corresponden al proyecto.

¹¹⁴ Esto debido a que la Ley 975 del 2005 o Ley de víctimas y restitución de tierras “no incluyeron las víctimas de desaparición forzada entre los beneficiarios de la asistencia humanitaria, razón por la que se debió acudir a la declaración de muerte presunta” (Vargas, 2014, p. 68).

comprensión de “modelo de represión” al afirmar que con este término se hace referencia a “la estrategia que en un periodo determinado articula el Estado, y asume el conjunto del establecimiento, y que define en lo fundamental el marco en el cual se producen los crímenes de lesa humanidad y el conjunto de las violaciones a los derechos humanos” (p. 39), para este caso, la desaparición forzada.

De esta manera, Asfaddes al pretender establecer una comprensión pública de la desaparición forzada como “modalidad represiva” se opone a afirmaciones como las de CNMH (2014) donde se dice que para el momento en que se tipifica la desaparición forzada este crimen ya no se aplica bajo intereses políticos y tampoco es de uso exclusivo del Estado, sino que dentro del contexto, se han diversificado los perpetradores. Por lo que, al representar la desaparición como “modalidad represiva” desde Asfaddes se sigue comprendiendo la desaparición forzada como un crimen que pretende la represión del opositor político, especialmente, por parte del Estado.

Instituciones:

Dentro de este cuarto momento, se hacen evidentes una serie de transformaciones en el discurso de las instituciones gubernamentales en relación con las personas desaparecidas, esto debido al nuevo marco legal que establecieron la Ley de Justicia y Paz (2005) que marca la emergencia de los procesos de justicia transicional que se mantienen hasta este período y por otro lado, estaría la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras (2011) con la que se da “la construcción de la población afectada por la violencia como víctima sujeto de derecho y, especialmente, acreedora de verdad, justicia y reparación” (Sánchez, 2018, p. 105).

Lo anterior, se hace evidente en los discursos institucionales a partir de la construcción de una “víctima certificada”. Esta configuración se debe a que los documentos desde los que se hace esta enunciación son certificados que devienen de los procesos de la Ley de Justicia y Paz, ya que son emitidos por alguna seccional de la Unidad Nacional de Fiscalías Para la Justicia y Paz que es una instancia creada por esta ley:

La suscrita investigadora criminalístico VII adscrito a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz con sede en Bucaramanga. CERTIFICA: Que

consultada la base de datos del Sistema de Información de Justicia y Paz. SIJYP, se encontró registro de hechos atribuibles al margen de la ley, reportado por el señor (a) ..., por el Homicidio de ... en hechos ocurridos el 18 de enero de 1988 en la Finca... (Certificado emitido por la suscrita investigadora criminalístico VII adscrito a la unidad nacional de fiscalías para la Justicia y Paz con sede en Bucaramanga, Caso 270, 2012).

Certifica que revisado los libros radicadores existentes en esta unidad de Fiscalía se encontró la siguiente información ... -delito: homicidio- víctima: ... - ocurrido: 09 de junio de 2002 en sitio...- jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucurí Sder. (Certificado expedido por El suscrito asistente del fiscal de San Vicente de Chucurí, Caso 284, 2012).

Por otro lado, se hacen presentes certificaciones que legitiman la condición de víctima de las personas desaparecidas y sus familiares:

La dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional con sede en Bucaramanga. Certifica: Que consultada la base del sistema de información de Justicia y Paz SIJY, se encontró registro de hechos atribuibles a Grupos Organizados al Margen de la Ley..., siendo víctima indirecta por el delito de homicidio de su hijo ..., hechos ocurridos en el mes de septiembre de 2003, en el municipio de Girón Departamento de Santander (Certificado expedido por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional con sede en Bucaramanga, Caso 101, 2014).

La dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional con sede en Bucaramanga. Certifica: Que consultada la base del sistema de información de Justicia y Paz SIJY, se encontró registro de hechos atribuibles a Grupos Organizados al Margen de la Ley..., siendo víctima indirecta por la desaparición por el delito de DESAPARICIÓN FORZADA de su cónyuge ... y a su Hijo... Hechos ocurridos el día 09 de abril del año 2005 en corregimiento Bella Uribe Regencia del Municipio de Montecristo, Departamento de Bolívar" (Certificado de la Dirección de fiscalía nacional especializada de justicia transicional con sede en Bucaramanga, Caso 225, 2015).

En relación con lo anterior, se hace evidente la presencia de documentos cuya intención es la de “certificar víctimas” y marcarlas entre víctimas directas o víctimas indirectas, para así mediar su acceso a la reparación.

Del mismo modo, se destaca que dentro de la Ley de víctimas y restitución de tierras se “decidió un valor para la vida en gramos de oro y a algunas [víctimas] las ‘recompensó al tasar esa vida en pesos, unos gramos por los daños tangibles a los que fueron sometidos las víctimas durante su cautiverio y otros por los intangibles, los morales, causados a sus familiares” (Arellana, 2019, p. 95). Esta situación implicó el surgimiento de fraudes por parte de:

Gente que se hizo pasar por víctima en los listados oficiales y no oficiales para recibir ayudas, mercados y subsidios, información que se utilizó después para negar la autenticidad de los relatos de sufrimiento y dolor de las verdaderas víctimas. Varias de esas familias tuvieron que firmar un documento en el que confirmaban la “muerte presunta” de las víctimas de desaparición forzada para recibir las ayudas humanitarias (Arellana, 2018, p. 96).

De ahí que dentro del archivo analizado se encontraran documentos referentes a procesos de muerte presunta de personas desaparecidas:

...DECLARÓ la Muerte Presunta por Desaparecimiento del señor ..., identificado con la C.C.... Expedida en Bogotá D.C. Cuyo último domicilio fue Barrancabermeja". (Oficio emitido con la referencia "Proceso de MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO emitido por el Juzgado segundo promiscuo de familia Barrancabermeja dirigido al Registrador municipal del Estado civil, Caso 245, 2012).

Me dirijo a usted para solicitarle una constancia para el proceso de mi padre ..., en la que se exprese que este caso está en la Asociación, que se ha hecho las respectivas averiguaciones del paradero de mi papá, pero que hasta el momento no se tiene indicios. Esta constancia es para anexar a la demanda del proceso de Muerte Presunta que actualmente llevamos en la seccional, ..." (Carta dirigida a la secretaria general de Asfaddes, Caso 182, 2013).

En relación con lo anterior, se configura la representación de la persona desaparecida como “presuntamente muerta”, lo que resulta problemático debido a que los familiares se ven obligados a asumir la muerte de la persona desaparecida, al menos en el marco legal, para poder acceder a justicia y reparación, y son conminados a renunciar a la esperanza de encontrar a su familiar desaparecido. Del mismo modo, con la declaración de la muerte presunta se desconoce el carácter permanente del delito y la obligación del Estado de encontrar a las personas desaparecidas (CNMH, 2016).

De esta manera, la declaración de muerte presunta “acarrea el fin de la personalidad jurídica, la extinción de la patria potestad, y la sucesión mortis causa de los derechos patrimoniales del desaparecido, y en mayor grado de afectación la revictimización de la familia al dar por muerte un ser querido que se ignora su paradero, y su condición de vivo o muerto” (Vargas, 2014, p.16). Lo anterior, es uno de los mayores problemas que genera la expedición del certificado de muerte presunta de una persona desaparecida, debido a que en que el Artículo 97 del código civil¹¹⁵, que reglamenta el uso de esta medida, como lo afirma Vargas (2014) no se tenía prevista su aplicación en casos de desaparición forzada, ya que este “es un mecanismo para la administración o disposición de bienes por parte de los familiares, casos en los que no media una violación a los derechos humanos, que en la desaparición forzada es evidente; (...), y resalta que el certificado de defunción podría percibirse como cesación de la obligación del estado en continuar la búsqueda bien sea del cadáver o de la persona” (p. 68)

En relación con lo anterior, la coordinadora de Asfaddes seccional Bucaramanga afirma que “la muerte presunta es una debilidad para Asfaddes, iba en contra de Asfaddes y del desaparecido, porque al hacer la muerte presunta ya sale un certificado de defunción, es como si estuviera muerto, pero para nosotros no está muerto porque no está el cuerpo, no está el duelo...” (Entrevista a la Coordinadora de la seccional de Asfaddes Bucaramanga, 30/05/2022). Frente a esto, se comprende que la representación de la persona desaparecida como “presuntamente muerta” implica el entorpecimiento del proceso de duelo y de búsqueda, así como la revictimización de los familiares.

¹¹⁵ En el Artículo 97 del código civil se plantean las condiciones para la declaración de muerte presunta y se refiere que “si pasaren dos años sin haberse tenido noticias del ausente, se presumirá haber muerto éste...” (Artículo 97, Código civil)

Por otro lado, es de resaltar que a pesar de que en el período anterior se dio la tipificación del crimen de desaparición forzada, dentro de este periodo si bien en los certificados se hace referencia a la desaparición forzada, también se habla de homicidios, como se pudo evidenciar en el caso 101, esto podría deberse a que hay casos de desaparición que no se prolongan por mucho tiempo, por lo que, se asume el homicidio más no la desaparición.

Otra forma de representar la desaparición forzada dentro de este periodo por parte de las instituciones del Estado se basa en definirla como “hecho victimizante” como se presenta a continuación:

Esta unidad procedió a estudiar su solicitud y de acuerdo con la documentación aportada, así como la información acopiada, decidió incluir a ... identificado con cédula de ciudadanía No... y ... identificado con cédula de ciudadanía... en calidad de víctima directa y por el hecho victimizante de desaparición forzada" (Respuesta a derecho de petición interpuesto por la personería municipal de Vélez a la unidad para las víctimas, caso 26, 2012).

Por lo anterior y a la luz del principio de Buena Fe, se concluyó que el (los) hecho(s) victimizante(s) de Desaparición Forzada, declarados por el (la) deponente se enmarcan dentro del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, por lo cual es viable jurídicamente incluir a ..., en el Registro Único de Víctimas- RUV (Resolución emitida por Directora técnica de registro y gestión de la información de la unidad para la atención y reparación integran a las víctimas, caso 26, 2013).

En relación con los fragmentos presentados, estos son documentos que devienen de instituciones relacionadas con la aplicación de la Ley 1448 de 2011 o Ley víctimas y restitución de tierras, del mismo modo, al revisar el documento que recoge dicha ley, llama la atención que dentro de este es recurrente el uso las palabras “hecho victimizante” o “hechos victimizantes” para hacer referencia a las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado y por los cuales las víctimas son objeto de reparación. De esta manera, si una persona se asume víctima “como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, ocurridas a partir del 1° de enero de 1985 en el marco del conflicto armado, (homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, violaciones sexuales y otros delitos contra la integridad sexual, secuestro, despojo de tierras, minas

antipersona y otros métodos de guerra ilícitos, ataques contra la población civil)” (Ley de víctimas y restitución de tierras, 2005, p. 5), se comprende que estos serían los hechos victimizantes a los que hace referencia dicha ley.

Es importante señalar que dentro de las carpetas de los casos que se relacionan con este cuarto momento, no se hacen presentes recortes de prensa, lo que podría estar relacionado con el auge de los medios digitales y la circulación de noticias por plataformas digitales, ya que en “la última década [entre 2010 - 2019] la audiencia de Internet de los medios de comunicación en Colombia ha aumentado 252%” (La República, 2019), mientras que el consumo de los medios impresos ha disminuido en 28% en la era digital. De esta manera, los discursos y representaciones que movilizaba la prensa cambian de escenario.

En función de lo anterior, se comprende que las representaciones de las personas desaparecidas y de la desaparición forzada que se configuraron en este cuarto momento, se relacionan de forma particular con un acontecimiento que sería la promulgación de la Ley 1448 o Ley de víctimas y restitución de tierras, ya que a partir de esta se propaga en el discurso familiar, asociativo e institucional el término “víctima”, desde el definir qué sujetos entran dentro de la categoría y quienes son excluidos. Por lo que, se establecen unas representaciones de las persona desaparecidas como “víctimas normalizadas”, “víctimas certificadas” y otras “presuntamente muertas”, del mismo modo, también se da el reconocimiento de los familiares de las personas desaparecidas como “víctimas indirectas”. Por otro lado, dentro de los documentos que corresponden a este momento se hizo presente una particularidad dentro de las formas de enunciar a la persona desaparecida y a la desaparición forzada desde el reconocimiento del reclutamiento forzado como una forma de desaparición que es invisibilizada al reconocer, que los integrantes de grupos al margen de la ley también pueden llegar a ser víctimas.

Otra ruptura dentro de este momento, se relaciona con la ausencia de documentos de prensa, lo que implica una transformación frente a los modos de documentar los casos de desaparición forzada en la era digital.

Para concluir el capítulo, se afirma que a lo largo de esta periodización se ha podido comprender que el archivo, es un ejercicio de “poder - saber” que contiene una serie de discursos desde los cuales se configuran unos sistemas de representación frente a unos

sujetos y unas formas de pasado, que se ven mediados por unos acontecimientos, continuidades, transformaciones y borraduras.

En relación con esto Hall retomando el discurso de Foucault afirma que:

Las cosas significan algo y son “verdaderas”, decía, solo dentro de un contexto histórico específico. Foucault no creía que se encontraran los mismos fenómenos a través de diferentes períodos históricos. Pensaba que, en cada período, el discurso producía formas de conocimiento, objetos, sujetos y prácticas de conocimiento, que diferían radicalmente de período a período, sin necesaria continuidad entre ellos. (Hall, 2013, p. 485).

En relación con lo anterior, cada uno de los periodos analizados se caracteriza por una serie de condiciones sociopolíticas que implican una transformación en las formas de representar a la persona desaparecida y a la desaparición forzada. Sin embargo, desde el análisis desarrollado, se puede evidenciar que en medio de esos acontecimientos, se establecen regularidades, como la permanencia del discurso contrainsurgente en el marco de la guerra sucia. De esta manera, se destaca en el primer periodo la configuración de la persona desaparecida como portadora de una identidad política mediada por la persecución y acusaciones por parte de agentes del Estado. Pero esta representación no se extiende por mucho tiempo, ya que posteriormente se desdibuja en pro de la construcción de una persona desaparecida “normalizada” desde el exaltar valores y características dentro de lo familiar, laboral o narrar el estado de indefensión de la persona al momento de la desaparición como estrategia para probar su inocencia.

Asimismo, esta representación de la persona desaparecida “normalizada” aunque permanente también se ve mediada por las transformaciones y necesidades que implica cada periodo, como en el tercer momento, cuando se hacen públicos los casos de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares para probar su inocencia, es decir que para probar que no se trataba de guerrilleros, hicieron énfasis en los problemas físicos, cognitivos o de drogadicción de la persona desaparecida.

Esta necesidad de probar la inocencia de la persona desaparecida desde la normalización, se debe al discurso de la instituciones del Estado que las señalaba o justificaba la

desaparición al relacionarlas con grupos contrainsurgentes. De esta manera, en medio de la configuración de una persona desaparecida normalizada que hace parte un núcleo familiar, trabaja y es el sustento económico de su familia, se crea una dualidad, entre aquellos sujetos inocentes que no merecían ser desaparecidos y aquellos que sí pertenecían a grupos contra insurgentes. En relación con esto, se destaca que la desaparición forzada no es una pena o castigo dentro del sistema judicial, sino una violación a los derechos humanos y crimen tipificado, por lo que, a partir del hecho no se definen inocentes o culpables, pero sí víctimas. Sin embargo, este discurso del Estado ha llevado a los familiares a probar no solo la desaparición sino también a defender a su familiar desaparecido frente a los señalamientos.

Otra continuidad, dentro de las representaciones de las personas desaparecidas se relaciona con los roles de género, desde la configuración de estas como hombre proveedor del hogar y a la persona que busca mujer madre o esposa, lo que implica una reconfiguración de los roles de género tras la desaparición, ya que las esposas y en ocasiones los hijos de las personas desaparecidas, deben asumir el rol de proveedores y protectores del hogar. Mientras que en las dos ocasiones en que se habla de mujeres desaparecidas estas son representadas como amas de casa.

Por otro lado, el tercer periodo planteado por Sánchez (2018) fue un momento de transformaciones, ya que tras seis proyectos de ley fallidos se logra la tipificación del crimen de la desaparición forzada, que en periodos anteriores, había sido configurada como secuestro simple u homicidio dentro de los discursos familiares y de las instituciones. Este es un acontecimiento importante, ya que se establece una comprensión pública y oficial de la desaparición forzada como crimen, tras años su negación por parte del Estado, además, de que este proceso medio la configuración de la representación de las personas desaparecidas como “ciudadanos” dentro de los discursos de las instituciones.

Otro acontecimiento de transformación o de quiebre dentro de este tercer momento, se presenta cuando se hacen públicos los casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” en el 2008, ya que estos hechos desbordan la experiencia frente al crimen que tenía la seccional y la comprensión del fenómeno que se había establecido recientemente, debido a que esta era una nueva modalidad del crimen dentro del mismo conflicto.

En relación con el cuarto y último momento que se aborda, en este se hace presente una transformación dentro del discurso del Estado que en periodos anteriores había negado a las víctimas y señalado a las ONG, en especial en el momento anterior en el que dentro la Ley 975 o Ley de justicia y paz no se reconoce como objeto de reparación a las víctimas de desaparición forzada. De esta manera , la promulgación de la Ley 1448 o Ley de víctimas y restitución de tierras implicó el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado y la existencia de unas víctimas. Sin embargo, la representación de la persona desaparecida como víctima en el marco de esta ley resulta excluyente, al plantear que no se reconocerá como víctimas a personas que hayan integrado grupos al margen de la ley, lo que hace evidente una jerarquización de las víctimas mediante certificaciones, además, de la presencia de documentos relacionados con la muerte presunta de las personas desaparecidas.

Esta representación de la persona desaparecida como víctima aunque deviene del discurso de las instituciones, se extendió a las formas en que los familiares y Asfaddes configuran a los desaparecidos y se auto representan.

Por último, una transformación importante dentro de los discursos familiares y de Asfaddes seccional Bucaramanga se da cuando, en el marco de una ley que no reconoce a las personas que integraron grupos armados como víctimas u objeto de reparación, desde Asfaddes se representa a los niños reclutados como víctimas y al reclutamiento forzado como una forma de desaparición.

CAPÍTULO 4

USOS PÚBLICOS DEL ARCHIVO VISUAL DE ASFADDES SECCIONAL BUCARAMANGA

Luego de haber establecido cuáles fueron las principales representaciones que se configuraron dentro de la subsección de casos o expedientes del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga a partir de las voces de los diferentes actores que han contribuido en su construcción, así como comprender, los acontecimientos, tránsitos y continuidades que permean el archivo como materialidad, proceso y discurso desde el marco temporal que se instaure a partir de la genealogía de los trabajos de la memoria en Colombia de Gonzalo Sánchez (2018). Es necesario establecer que una parte importante del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga se compone de imágenes y que son estas las que de cierto modo permiten comprender los usos públicos del archivo, ya que son estas las que se han hecho visibles en el espacio público a partir de la exhibición de las fotografías de las personas desaparecidas principalmente en la Galería de la memoria.

De esta manera, para dar cuenta de lo anterior y responder a los objetivos propuestos en esta investigación, en este capítulo, en primer lugar, se desarrolla una caracterización de las imágenes que componen el archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga, para posteriormente, plantear los tránsitos y transformaciones a las que se han visto sometidas. Por último, se presentan los usos públicos que se le han dado a las imágenes que componen el archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga, las formas en que estos usos dialogan con las representaciones que se configuraron dentro de los casos o expedientes (desarrolladas en el capítulo anterior), y su influencia en la configuración de unas políticas de la memoria frente a la persona desaparecida y la desaparición forzada.

4.1 Caracterización y primeras apreciaciones del archivo visual de Asfaddes

En primer lugar, es necesario afirmar que las fotografías de los desaparecidos o que hacen referencia a la desaparición son un elemento de gran importancia en la configuración de unas políticas de la memoria sobre el conflicto armado, ya que “su utilización en diversas esferas constituye una de las principales formas de representación de la desaparición” (Da

Silva Catela, 2012, p. 75) o como lo afirma Langland (2005) “el uso de las fotos de los desaparecidos ha llegado a ser parte de un lenguaje simbólico universal” (p. 88).

De esta manera, según Langland (2005) las cualidades que hacen de las fotografías “herramientas para la lucha por las memorias” (p. 89) son tres: (1) el carácter de verdad que se le atribuye a la imagen fotográfica, (2) su capacidad para impactar emocionalmente y generar empatías, y (3) su materialidad reproducible.

A partir de estas cualidades, se puede afirmar que las imágenes de las personas desaparecidas en Colombia son una herramienta de lucha por la memoria, que se contrapone a las posturas negacionistas frente a las desapariciones forzadas, que afirmaban que estas no existían y que solo era una estrategia de desprestigio en contra del gobierno; que las personas desaparecidas se habían marchado a la guerrilla o hacían parte de grupos al margen de la ley, del mismo modo, desde versiones oficiales se difundía que las desapariciones tenían que ver con problemas personales y no políticos (Asfaddes, 2003 y Gómez, 2019)¹¹⁶.

En relación con lo anterior, las imágenes que hacen parte de los procesos de documentación de los casos de desaparición forzada y que posteriormente salen al espacio público, no necesariamente tienen que mostrar el conflicto armado o la desaparición en escena¹¹⁷, para rememorar y probar su existencia, basta con la fotografía de un rostro, ya que esta imagen se configura como el testimonio de la existencia y la ausencia de una persona. Del mismo modo, estas fotografías tienen “la capacidad de despertar sentimientos de conexión personal” (Langland, 2005, p. 90) con unos espectadores que son puestos en la posición de testigos para crear una colectividad del recuerdo (Langland, 2005).

Asimismo, una fotografía no solo implica la existencia de un sujeto, sino que en esta se hacen presentes las condiciones de posibilidad para la captura de la imagen y su posterior visualización, además, de todos los procesos que la han permeado. Por lo que, las

¹¹⁶ En relación con lo anterior, la versión oficial del gobierno termina generando la estigmatización y señalamiento de los familiares, entre otras consecuencias.

¹¹⁷Lo anterior, se debe principalmente a que una de las características de la desaparición forzada es la ausencia de pruebas, por lo que, como lo afirman Inzaurrealde y Saab (2019) “carecemos de material fotográfico directo sobre la desaparición. Aun así, en un inicio, las fotografías de los familiares perdidos se convirtieron en la forma dominante de representar la desaparición”(p. 80).

fotografías de los desaparecidos no son imágenes estáticas en el tiempo, sino que están cargadas de una multiplicidad de procesos entre la captura de la imagen, ya sea en escenarios de identificación o celebración familiar, y su tránsito de escenarios privados a su reproducción en el espacio público tras la desaparición.

En relación con lo anterior, desde Tassin (2017) y su uso del término “eliminados” para hacer referencia a aquellos sujetos que “como no se comprobó su muerte su propia existencia se encuentra privada de la realidad” (104), se entiende que la desaparición pretende eliminar la existencia de unas identidades, en especial en escenarios mediados por la lucha contra la subversión o que han vivido conflictos armados prolongados, como en el caso de Colombia. Frente a esto “el registro fotográfico desempeña una función constatativa al documentar la existencia del sujeto fotografiado” (p. 165). De ahí, que en las detenciones o los allanamientos se llevaran fotografías como en el caso 228 de 1985 en el que el familiar que interpone la denuncia afirma que el “Ejército llegó a la casa, daño todas las pertenencias y se llevó la plata que teníamos para el regreso para Barranca, se llevaron todas las fotografías de la familia” (Hoja de vida de..., caso 228, 1985).

De esta manera, las fotografías de las personas desaparecidas son prueba de la existencia de estas identidades borradas, de la acción desaparecedora a la que fueron sometidas, y del conflicto armado como marco de enunciación de todo lo anterior.

Teniendo en cuenta estas reflexiones iniciales, el archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga se compone de imágenes resguardadas en cuatro acerbos, como se presenta en la tabla 2:

Acerbos que contienen las imágenes de Asfaddes seccional Bucaramanga	Tipo de imagen y caracterización
Subsección de casos o expedientes	Fotocopias de las fotografías de las personas desaparecidas Fotografías 3x4 de las personas desaparecidas adheridas a formatos. Fotocopias de documentos de identidad. Fotocopias de fotografías de levantamiento de cadáver. Fotografías de escenas familiares y cotidianas completas o recortadas.

	Recortes de prensa donde se hacen presentes imágenes de las personas desaparecidas.
Fotografías de las actividades de la asociación	Este cuenta con 120 fotografías que se encuentran impresas en vinilo adhesivo y pegadas en una pared junto a la entrada de la sede de Asfaddes seccional Bucaramanga. De estas imágenes se seleccionaron 50 en las que se evidencia un uso del archivo fotográfico de la asociación.
<p>Fotografías de las personas desaparecidas</p>  <p>Imagen 10. Fotografías de las personas desaparecidas. Fuente. Elaboración propia.</p>	Este acervo se compone por 182 fotografías de las personas desaparecidas de las cuales se tuvo acceso a 72 imágenes. Es de resaltar que estas imágenes varían en tamaño y materialidad, pero principalmente son imágenes fotográficas que se pueden considerar medianas de 10 x 10 aproximadamente, a blanco y negro o color, impresas en papel fotográfico, otras en cartulina brillante o laminadas. Algunas tienen los nombres de las personas desaparecidas, la fecha y lugar de desaparición junto con el nombre y el logo de la asociación (parecen una réplica miniatura de la galería de la memoria).
<p>La galería de la memoria</p>  <p>Imagen 11. Imagen de la Galería de la memoria de Asfaddes seccional Bucaramanga. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.</p>	Esta se compone de las fotografías de las personas desaparecidas impresas en un retablo de 40cm x 50cm en un tono sepia, estas imágenes están enmarcadas con dos franjas blancas una al lado izquierdo de la imagen y la otra en la parte inferior, en el primer espacio aparece un logo de la asociación y en el inferior se encuentra el nombre de la persona desaparecida en mayúsculas y negrilla bajo este dice: “DETENIDO DESAPARECIDO”, la fecha y el lugar de la desaparición, por último, está el nombre de la asociación en letras verdes.

Tabla 3. Descripción de las imágenes que componen el archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga. Fuente. Elaboración propia.

Frente a estas cuatro agrupaciones de archivo visual, se hacen evidentes una serie de relaciones que se establecen entre estos grupos dentro de las imágenes, por ejemplo, la galería de la memoria al ser uno de los recursos de denuncia pública de la seccional es usada de forma recurrente en las actividades de la misma, por lo que, tiende a aparecer en el contenido de este grupo de imágenes, del mismo modo, hay fotografías que hacen parte de los expedientes y pasaron a integrar la galería. Por lo que, se hace necesario que el análisis de estas imágenes se dé de forma conjunta y orgánica en busca de su genealogía, trayectorias, transformaciones y usos públicos.

De esta manera, el análisis visual del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga se realizó a partir de un esquema de redes que permite evidenciar las posibles relaciones que se establecen entre las imágenes. Para el desarrollo de este esquema, en primer lugar, dado el carácter arqueológico genealógico de esta investigación se sitúan las imágenes en un orden temporal, para posteriormente crear una serie de redes que se entretajan para marcar las relaciones inmersas dentro del archivo visual a partir de la trayectoria de la imagen, sus transformaciones y los usos. Del mismo modo, es necesario aclarar que no se desarrolló un análisis de cada imagen sino de los conjuntos que crean las redes.

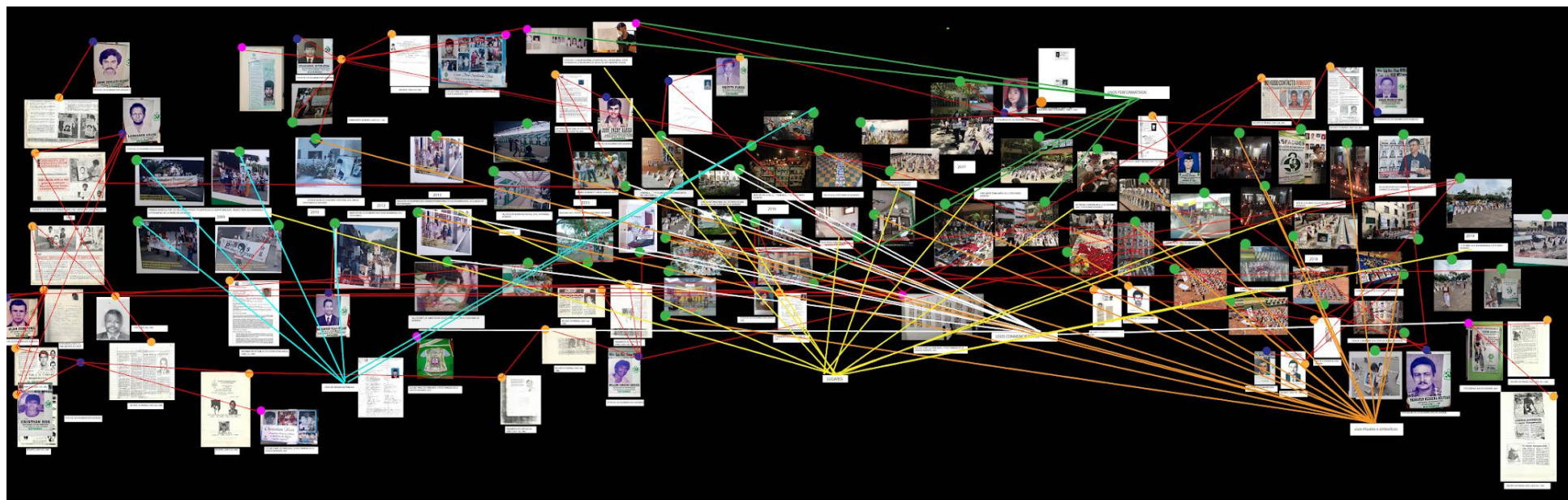
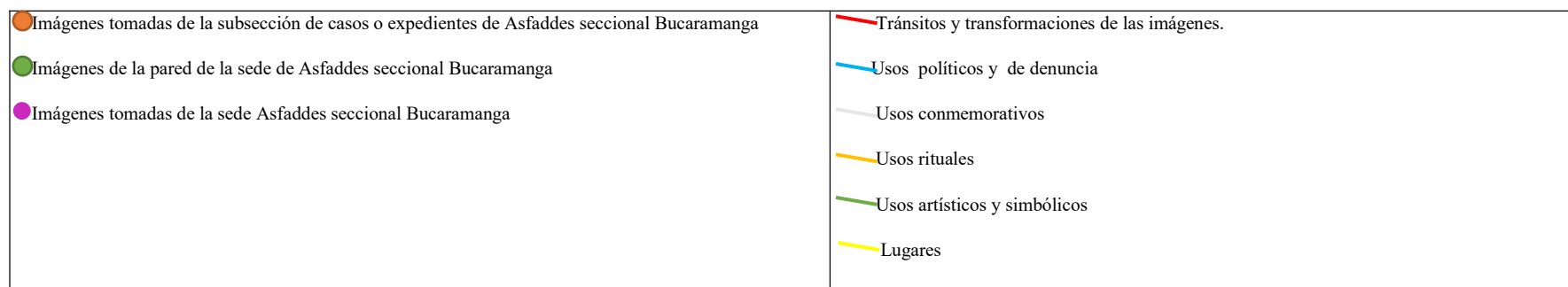


Imagen 12. Esquema de relaciones en red para el análisis del archivo visual y sus convenciones. Fuente. Elaboración propia.



4.2 Análisis del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga

Para analizar las fotografías que componen los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga se parte de estudiar la relación entre las culturas de la memoria y la cultura visual, ya que a partir de ambos se puede destacar la importancia de las imágenes como evocadoras de memorias.

En relación con lo anterior, como se comprende desde Erll (2012) la cultura y la memoria son “tejidos autoentrelazados” ya que, “el individuo siempre recuerda en contextos socioculturales [y] la cultura surge cuando se establece una memoria colectiva a través de símbolos, medios e instituciones”(p. 12), de esta manera, tanto memoria como cultura son elementos que hacen parte de los procesos sociales bajo una intención de recordar que establece unas memorias de la cultura y unas culturas de la memoria.

La primera, hace referencia a la afirmación de Erll (2012) que enuncia que siempre se recuerda bajo contextos socioculturales, lo que también se podría establecer desde Kuri (2017) al afirmar que “toda memoria es una construcción social y espacio temporal erigida en la vida cotidiana” (p. 10), por lo que, los recuerdos se ven permeados por estas condiciones socioculturales y espacio temporales a partir de las tradiciones, transmisiones o el mismo lenguaje.

En relación con las culturas de la memoria, estas son entendidas como aquellas sociedades con “fiebre” de memoria o de archivo, en palabras de Derrida (1997), en las que se da un afán de resguardar los objetos y recuerdos de su obsolescencia, esto se relaciona con la velocidad en que se dan las transformaciones dentro de las sociedades contemporáneas y la imposibilidad de recordarlo todo, por lo que, se hace necesario el establecimiento de una dimensión material del recuerdo¹¹⁸ a partir de objetos, fotografías, monumentos, textos, ritos o archivos. Estos elementos se convierten en un ancla del recuerdo en contraposición

¹¹⁸ Erll (2012) plantea tres dimensiones del recuerdo, entre las que estarían: la dimensión material que refiere a los objetos o actos destinados a evocar las memorias de un colectivo, la dimensión social que se relaciona con la producción colectiva del recuerdo desde la transmisión y la creación de instituciones, y por último, la dimensión mental, que parte de los códigos, símbolos, cosmovisiones y formas de pensamiento que se inscriben dentro de una cultura, como lo serían, las representaciones, ideas y normas.

al “ritmo cada vez más acelerado de los cambios o como un sitio para preservar el espacio y el tiempo” (Huyssen, 2001, p. 35).

Por otro lado, la cultura visual se preocupa por los “acontecimientos visuales” dentro de lo cotidiano y analiza “las representaciones visuales del presente y del pasado y las posiciones visualizadoras de los sujetos” (Hernández, 2005, p. 9).

De esta manera, el análisis de la realidad social que se propone a partir de la cultura visual, no es un problema del ver sino del habitar, ya que se percibe a la imagen como una construcción cultural, que se configura bajo unas prácticas políticas y sociales, que también hacen parte de los instrumentos de reproducción cultural que se integran dentro de la cotidianidad de los sujetos, por lo que, se reconoce que “la configuración actual de la imagen funciona como complejo expresivo y mimético, lo que propone una alternativa para los estudios sociales cuando se asume la irrupción contemporánea de la imagen no como un problema actual del ver, sino fundamentalmente, del vivir y el habitar” (Rodríguez, 2011, p. 67).

En relación con lo anterior, la imagen a partir de su hiperreproductibilidad y circulación, tiene una amplia influencia dentro de los modos de recordar, como dimensión material del recuerdo y medio de transmisión de memorias que “van mucho más allá de aumentar la memoria humana individual a través de la preservación de información;... [ya que las imágenes] producen mundos de memoria colectiva según su capacidad de rendimiento y su capacidad mnemomedial -mundos que una comunidad del recuerdo nunca llegaría a conocer sin ellos-“ (Erll, 2012, p. 172). De esta manera, se comprende la influencia que pueden tener las imágenes dentro de la configuración de unas políticas de la memoria.

En relación con lo anterior, las imágenes al tener el poder de controlar el recuerdo, son maleables y poco inocentes al ser mediadas por diferentes discursos que se ven transformados con el tiempo y que enfatizan en lo que se debe recordar de forma colectiva desde lo que se muestra, lo que se resalta y lo que se oculta o pasa desapercibido, a partir de las diferentes relaciones que se establecen entre ellas y sus lugares de enunciación. Esto se debe a que como lo afirma Mirsoeff (2003) en ocasiones “ver es más importante que creer”

(p. 17) y ante un escenario donde priman las imágenes estas tienen el poder de configurar los recuerdos y desaparecer acontecimientos de la memoria colectiva.

Por esta razón se entiende que las imágenes en su conjunto configuran una discursividad que parte de lo visual y no puede ser alejadas de su lugar de enunciación, de allí que, el análisis del archivo fotográfico de Asfaddes seccional Bucaramanga no se realizó de forma fragmentaria, ni lineal, ya que las relaciones que se establecen entre las imágenes permiten percibir las condiciones de posibilidad, tránsitos, transformaciones y los usos que han mediado los archivos, además, de las representaciones de las personas desaparecidas y de la desaparición.

4.2.1. Orígenes, tránsitos y transformaciones de las imágenes del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga

En el archivo de los expedientes de Asfaddes seccional Bucaramanga en el caso 315 de 1989 aparece una ficha Kadex que contiene la información de un docente amenazado, en este formato diligenciado a mano, hay una fotografía a blanco y negro de tamaño 3x4 borrosa de un hombre. Del mismo modo en el caso 270 de 1988 se hace presente un panfleto del Sindicato de Educadores de Santander (SES) relacionado con la celebración del día del trabajo (1 de mayo de 1989) en Bucaramanga; en este documento se hacen presentes varias imágenes, una ellas es una fotografía a blanco y negro de dos niños sentados en un andén mientras uno de ellos sostiene un cartel, este es casi del tamaño de los niños y dice con letra cursiva “dónde está mi papá...?” y en la parte de abajo “Educador detenido desaparecido”. En este cartel aparece la misma imagen de la ficha Kadex solo que ahora elaborada con pintura.

En el mismo caso, en otro panfleto que dice “por la vida y la libertad: ni desaparecidos, ni impunidad” aparece la misma pintura acompañada de las imágenes de otros dos desaparecidos, así mismo, en 1988 en un boletín informativo del sindicato de educadores de Santander con el título: “Detenidos desaparecidos”, se ponen las fotos de tres personas desaparecidas, entre las que se logra comprender por el nombre, que una de las imágenes pertenece a la misma persona de la ficha kadex, se identifica por el nombre, debido a que la calidad del fotocopiado hace que el rostro sea irreconocible.



Imagen 13. Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 1. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

Algo similar ocurre en el caso 314 en el que en 1995 se diligenció el Formulario de Asfaddes y se le pone una foto 3x4, esta es la fotografía de un hombre joven usando traje en un plano medio corto, a color con fondo azul. Es de resaltar que, en el archivo de las actividades de la asociación, se puede observar esta fotografía, en la entrega digna del cuerpo de la persona desaparecida, pero en este caso la imagen está en una pancarta junto con imágenes familiares más pequeñas, a esta se le cambió el fondo azul por uno más claro que también tiene, nubes, junto a esta se puede observar que hay un texto que no se alcanza

a leer. En la escena que rodea la pancarta se pueden ver una mesa al fondo, un sacerdote y ramos de flores. Otra aparición de la imagen del Formadatos, se da en las fotografías de las personas desaparecidas, donde es evidente que esta fue intervenida, ya que ahora tiene tonalidad sepia y está acompañada por un nombre, la fecha de la desaparición y el lugar, además, del nombre y logo de la asociación. Esta misma imagen es observada en el 2015 a blanco y negro en una obra de arte presentada en el 15 Salón regional de artistas donde varias fotografías de las personas desaparecidas fueron intervenidas. Otro momento en el que se hace presente, se da dos años después, el 30 de agosto del 2017 en la Universidad Industrial de Santander (UIS) de Bucarica donde se hace el montaje de la Galería de la memoria en un espacio cerrado rodeado de sillas. De esta manera, en la primera fila de estos retablos, se hace presente la imagen del joven ahora con una tonalidad sepia propia de las imágenes de esta galería y rodeada de información, es de resaltar que frente a cada uno de los retablos hay un par de zapatos.



Imagen 14. Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 2. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

Por otro lado, cuando se realizó la visita a la casa de Asfaddes la coordinadora de la asociación mostró unos cuadros que realizaron para los familiares, donde convergen varias fotografías de la persona desaparecida en su vida familiar o cotidianidad. De esta manera, llama la atención una imagen de uno de los cuadros que corresponde a un trabajador de la UIS, ya que esta fotografía a color, plano entero, en la que la persona desaparecida está acompañada de otras tres personas y todos están usando la misma camiseta, ha sido recurrente en los archivos fotográficos de la asociación con la diferencia de que fue recortada para que únicamente apareciera el rostro de esta persona. De esta manera, el fragmento de la imagen se hace presente en el caso 270 de 1989, en un volante del Colectivo de Solidaridad en Defensa de los Derechos Humanos en el que aparecen las fotocopias borrosas de las fotografías de tres personas desaparecidas, sus nombres, la fecha de la desaparición y el año en el que se imprimió el volante: 1990. Así mismo, esta fotografía hace parte en las imágenes de los desaparecidos que guarda la asociación. Por lo que, no es de extrañarse que esta fotografía recortada se pueda vislumbrar en varias de las fotografías de las actividades de Asfaddes como parte de la galería de la memoria, como en una vigilia del 23 de mayo del 2017 en la UIS de Bucarica o el 30 de agosto del mismo año en la misma universidad.



Imagen 15. Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 3. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

En relación con lo anterior, frente a las imágenes del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga se presentan los siguientes tránsitos y transformaciones: de una foto a color o blanco y negro de 3x4 a un volante con el título “DESAPARECIDO” o a panfletos junto a otros rostros, también publicadas en periódicos, pintados en un cartel, en una pared o

impresas en una pancarta, pegadas sobre la silueta de una camiseta, enmarcadas y puestas en el altar de una iglesia, exhibidas en un retablo como parte de la galería de la memoria, en una postal o laminadas sobre el pecho de una madre o un hijo.

Las fotografías de las personas desaparecidas transitan por diferentes contextos y lugares de enunciación que implican transformaciones en las materialidades de las fotografías de las personas desaparecidas, ya que como lo afirma Da Silva Catela (2012): “si inicialmente eran una simple foto que identificaba a un ciudadano en un documento público, a medida que la propia noción de desaparecido fue construyéndose políticamente, se le fueron asociando números de legajos, fechas, procesos judiciales, que ampliaron su significado y su valor tanto simbólico como político y judicial” (p. 80).

De esta manera, al mismo ritmo en que se replican las imágenes, estas adquieren nuevos usos dependiendo del contexto, se cambian los soportes y tamaños o se le añaden una serie de elementos, como fechas, nombres, logos o frases, pero también se transforma a la imagen en sí misma desde el cambiarle el fondo por uno de un cielo azul con nubes o el color por una tonalidad sepia, lo que implica la suma de una serie de significados. Como ejemplo de esto, Feld (2014) afirma que “un nuevo trabajo de estetización se ha producido al virar al sepia las fotos de los detenidos-desaparecidos, lo que disipa las reminiscencias de la foto policial [o de documento de identificación] y les da el aspecto de un viejo álbum de familia” (p. 48)

En relación con lo anterior, es necesario reconocer que si bien las reproducciones de las imágenes de las personas desaparecidas implican añadir información también acarrea borramientos. Frente a esto es necesario cuestionar siguiendo las Reflexiones de Claudia Feld (2014) “hasta qué punto pueden borrarse sus marcas de origen” (p. 14), ya que en la reproducción de la imagen y sus transformaciones, no solo esconden sus usos originarios, sino que pueden terminar deformando o borrando a la persona desaparecida de la imagen. Esto se hace evidente principalmente en el uso del fotocopiado como una forma de reproducir la imagen de las personas desaparecidas, como ejemplo de estos borramientos, se presenta la Imagen 13, donde aparecen las fotografías de personas desaparecidas que son reconocibles únicamente por los nombres o la información que se ubica a su alrededor, ya que la calidad de las imágenes permite ver muy poco.



Imagen 16. Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 4. Borraduras. Foto. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

De esta manera, la intencionalidad de visibilizar a la persona desaparecida gracias a la reproducción en masa de la imagen que permite el fotocopiado resulta inútil. Frente a esto, se considera interesante retomar a Benjamin (2003), ya que este afirma que “el aura nos hace una última señal desde la expresión fugaz del rostro humano” (p. 58), para este autor el aura está relacionada con la autenticidad y la pérdida de ésta, implica la desvalorización del aquí y ahora de la imagen, y la pérdida o transformación de su núcleo sensitivo mediada por el afán de las masas de “acercarse a las cosas” desde su reproducción (Benjamín, 2003).

De acuerdo con lo anterior y retomando el cuestionamiento de Feld (2014) se podría decir que la reproducción y transformaciones de las fotografías de las personas desaparecidas implica un borramiento de sus marcas originales o la pérdida de su aura, ya que la experiencia sensible propia de la toma de la imagen, ya no existe debido a que esta ha tomado nuevos sentidos desde el momento de la desaparición, como evocar al ausente, acompañar el proceso de búsqueda o probar la existencia de una persona, de la desaparición forzada o del conflicto armado en el ámbito público.

De esta manera, a partir de las trayectorias de las imágenes de las personas desaparecidas dentro de los archivos, presentada anteriormente, se hace evidente que las fotografías originarias se dividen en dos grupos: en primer lugar, está la fotografía tipo documento 3x4

a blanco y negro o a color con fondo azul o blanco, estas imágenes son propias de documentos de identidad (cedulas, tarjetas de identidad, pasaportes), carnets de instituciones educativas, bibliotecas, sindicatos, libreta militar, empresas, etc., u hojas de vida. En segundo lugar, están las imágenes de la vida cotidiana de estas personas en las que se hacen presentes escenas comunes con familiares o amigos que son fragmentadas para extraer la imagen de la persona desaparecida.

En relación con el primer conjunto, Richard (2006) afirma que este tipo de fotografías configura “un sujeto normado por la ley que lo individualiza aislando su identidad, separándola de su contexto de relaciones cotidianas para colocar esa identidad a disposición del control social bajo el registro de lo impersonal” (p. 166). Esto podría deberse a que estas son imágenes estandarizadas con una única medida dispuesta a encajar en los diversos documentos que las solicitan con la pretensión de identificar a los sujetos. Asimismo, las corporalidades fotografiadas comparten las mismas poses que son fragmentadas por el plano medio corto, con las miradas fijas al lente, sin sonrisas, ni sombras y bajo el manto azul o blanco que elimina todo rastro del contexto. Se podría decir que estas fotografías a pesar de ser tomadas “voluntariamente” implican un sometimiento fotográfico de las corporalidades e identidades de los sujetos, ante el requisito de ser fácilmente identificable y clasificado por las instituciones estatales.

De esta manera, participar en el ámbito social implica ser fotografiado y registrado, por lo que, se hace necesario retomar, la representación de la persona desaparecida como ciudadano que posee unos documentos de identidad con su imagen que lo acreditan como tal, es necesario mencionar, que esta representación remite a una persona con derechos, pero también con deberes que deben cumplirse para no recaer en penas o castigos, es decir que es un sujeto protegido por el amparo de ley, pero también sometido al poder del Estado.

Para Richard (2006) este tipo de fotografías puede tomarse como una metáfora de la desaparición al decir que: “tanto en el caso de la fotografía de identidad como en el caso de la desaparición, es la ley hecha serie la que des-personifica, obliterando masivamente las señas de la persona que desaparecen en la repetición y el anonimato de la violencia” (p.167). Frente a lo anterior, efectivamente estas fotografías hacen parte de los mecanismos de poder que se establecen sobre los cuerpos estandarizándolos al punto de que se desaparece

la individualidad. Sin embargo, ante la desaparición “la imagen permite la constitución de la noción de persona, haciéndola salir del anonimato de la muerte, para recuperar una identidad y una historia, empezando por el rostro” (Da Silva Catela, 2012, p. 78).

De modo que, las fotografías que devienen de un ejercicio de control social se contraponen al aparato desaparecedor, como una forma de tomar estos mecanismos y reencausarlos en favor de la recuperación de la individualidad de los sujetos desaparecidos, lo que resulta irónico, ya que las fotografías “inicialmente usadas para registrar a ciudadanos en sus documentos nacionales de identidad—hayan sido eficazmente simbólicas para representarlos también en su condición opuesta, la de desaparecido, negados por el mismo Estado que los instituyó y registró con una fotografía...” (Da Silva Catela, 2012, p. 80) es una forma de confrontar a los mecanismos de desaparición.

En relación con las fotografías de la cotidianidad de las personas desaparecidas, ya sean familiares o con amigos, se asume que estas imágenes devienen de un contexto similar al de la toma de la fotografía, es decir de lo cotidiano familiar en el álbum fotográfico, junto con otras imágenes que representan la vida y los acontecimientos dignos de ser capturados en este ámbito. Por lo que, el exponer la fotografía del álbum familiar se configura a “un sujeto vinculado a la trama biográfica de una composición familiar que ritualiza sus lazos personales en la ceremonia fotográfica del estar-juntos” (Richard, 2006, p. 166).

Frente a lo anterior, la aparición de estas fotografías dentro de los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga se da de dos formas: en una, se evidencia una fragmentación de la imagen que busca extraer de esta a la persona desaparecida para individualizarla en el proceso de búsqueda, según Richard (2006) “estas fotos arrancadas de las páginas del álbum de familia muestran a quienes fueron arrancados de sus transcurso de vida por la brusquedad de la sustracción...” (p.167).

Por lo que, recortar la fotografía representa el acto de extracción de la persona desaparecida al separarla de las otras personas de la imagen y del mismo contexto, al igual que del álbum familiar que le pertenece al ámbito privado, para ser llevada a un escenario público y apoyar el proceso de búsqueda. De acuerdo con esto, a partir de la fragmentación de la fotografía familiar, al parecer se busca imitar las fotografías de los documentos de identidad

como en las imágenes del caso 270 mencionado anteriormente o en el 128 donde la persona desaparecida se halla de perfil con la cabeza inclinada hacia abajo y está sonriendo, esta imagen por sus características tiene un aire de informalidad que dista de las fotografías tomadas para documentos de identificación u hojas de vida, además de que al lado izquierdo de la persona desaparecida se hace presente la parte de un hombro, por lo que se entiende que la fotografía original fue cortada.



Imagen 17. Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 5. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

Según Da Silva Catela (2012) el recortar una foto para que se “asemeje” a una foto carnet, implica compartir un sistema simbólico que ordena finalmente su contemplación y lectura (p.80). Esto podría tener varias razones: por un lado, la unificación de una estética de las fotografías de las personas desaparecidas, por otro, el deseo de no relacionar a otros sujetos en el marco de la búsqueda, o que ampliando el rostro y recortando la imagen se destacan ciertos rasgos que faciliten su identificación. Por último, se considera que esta decisión podría estar influenciada por condiciones impuestas por las instituciones de búsqueda que solicitaban cierto tipo de fotografías, desde instructivos como el del Formato Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) en el que en el punto siete se dice: “las fotografías deben ser nítidas recientes, si es posible, aporte también fotografías en la línea de la sonrisa. Solicite la elaboración de un retrato hablado cuando no se aporten fotografías, o de proceso de envejecimiento, cuando no suministren fotos recientes” (SIRDEC, caso 215, 2013). Si bien

dentro de esta instrucción no se solicita una medida, ni un plano fotográfico, esto puede mediar la selección e intervención de las imágenes de las personas desaparecidas.

En otros casos, en los archivos aparece la imagen familiar completa como si de un álbum se tratase, como el caso 286 de 2007 donde se hace presente una fotografía familiar a color de cuerpo completo, en ella se ven tres personas, un hombre, una mujer y un niño, por lo que, se asume que es la familia de la persona desaparecida. En esta imagen todos están sonriendo, el hombre está abrazando a la mujer y ella pone su mano sobre el hombro del niño. Otra imagen de esta naturaleza se hace presente en un recorte de prensa con el título: ‘A comerciantes de Bucaramanga "¡se los tragó la tierra!"’ En la carpeta del caso 202 registrado en el archivo en el 2002, esta imagen es de una boda, en esta se ve a dos personas. En primer plano está una mujer con vestido de novia sosteniendo un ramo de flores y sobre su cabeza lleva un velo, ella está sonriendo y parece que está sentada. En la parte de atrás de la mujer hay un hombre de pie usando un traje con corbata, mientras tiene una pequeña sonrisa y mira a la cámara.



Imagen 18. Trayectoria y transformaciones de las imágenes del archivo visual 6. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

Se podría decir que estas imágenes revelan una cotidianidad fragmentada o de acuerdo con Feld (2010) “muestran justamente la imposibilidad de “ver” la desaparición: no son las “pruebas” del crimen ni las fotos de las víctimas en tanto tales’(p. 3), ya que al elegir estas fotografías que muestran escenas familiares que se podrían denominar como felices y no córtalas sino presentarlas como tal, se pueden evidenciar las consecuencias de la

desaparición en la vida familiar sin obviar. De manera que el mostrar la imagen bajo el contexto de la desaparición, implica la ausencia de uno de los integrantes y por tanto una ruptura.

Del mismo modo, la presentación de este tipo de fotografías que escenifican un momento de la vida familiar, implican la representación de la persona desaparecida en función de esta como padre, hijo, esposo..., esto podría relacionarse con una de las representaciones predominantes en el capítulo anterior, que se basa en la configuración de una persona desaparecida “normalizada” con familia y trabajo, cuya vida se vio interrumpida por la desaparición forzada, esto en función de evitar señalamientos por parte de los discursos contrainsurgentes.

Para finalizar, se comprende que las fotografías de las personas desaparecidas se han convertido en la principal forma de representación de la desaparición forzada en el espacio público, del mismo modo, se establece que estas imágenes devienen de escenarios de identificación estatal en documentos de identidad o del ámbito familiar desde fotografías que se extraen de los álbumes y en algunos casos son fragmentadas. De este modo, las imágenes de las personas desaparecidas se ven afectadas por una serie de tránsitos y transformaciones que van cambiando sus materialidades, formas, contenidos y sentidos, pero también adquieren huellas y marcas que implican una serie de borraduras en el afán de reproducir la imagen. Todo lo anterior se da a medida que las imágenes de las personas desaparecidas adquieren nuevos usos dependiendo de las necesidades de los contextos.

4.2.2. Usos públicos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga

Los tránsitos y transformaciones a las que se han visto sometidas las imágenes que hacen parte del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga se relacionan con los usos que se le han dado dentro del ámbito privado y público, ya sea como parte del archivo familiar o de la asociación, en función de procesos judiciales y de búsqueda, o integrando movilización agenciada por la asociación. De esta manera, en este apartado se reflexiona sobre los usos públicos que se le han dado al archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga, las

representaciones de la persona desaparecida y de la desaparición forzada que se agencia desde estos usos y su influencia en la configuración de unas políticas de la memoria del conflicto armado en Colombia.

Frente a esto, es necesario aclarar que el archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga es un archivo privado, en la medida en que no es de acceso abierto y solo es una parte de este la que sale al espacio público, a partir de las imágenes. Por lo que, es un archivo privado con unos usos públicos que se traducen en usos del pasado.

Segun Forcadell (et al.) (2004) el término “uso público de la Historia” fue acuñado por unos historiadores alemanes en 1986 y con este se hace referencia a “las funciones políticas y culturales inherentes a las representaciones del pasado” (p. 8), es decir que estos usos se traducen en utilidades que se configuran a favor y en beneficio de unos discursos predominantes de pasado.

Frente a lo anterior Rodríguez (2013), hace referencia a los usos del pasado o de la historia como la “apropiación por parte de los grupos, partidos, instituciones, naciones o Estados, a la condición dominante o subordinada de dicha apropiación, a su carácter selectivo y a las similitudes entre el pasado y la actualidad a las que apelan los grupos, las instituciones y los gobiernos para legitimar sus proyectos en el presente” (p. 37), a partir de esto se comprende que los usos del pasado se configuran a partir de unos sujetos, colectivos o instituciones, bajo unas intencionalidades que se relaciona con la construcción del presente a partir del pasado.

Además, los usos del pasado también se hallan inmersos en un juego de poder, ya que como se pudo observar dentro de la investigación de Rodriguez (2013) sobre los usos públicos del pasado agenciados por la Academia Colombiana de Historia, las versiones oficiales que se gestionan a partir del establecimiento de monumentos, la celebración de fechas de conmemoración o la publicación de libros de texto que se integran a los programas académicos, adquieren una mayor veracidad, alcance en la difusión del pasado y el establecimiento de unas políticas de la memoria, ante otras memorias que devienen de un ámbito no oficial que luchan por establecer su versión del pasado sin contar con grandes recursos como lo serían las organizaciones de víctimas.

En relación con lo anterior, es importante destacar la relación existente entre los usos públicos del pasado y las políticas de la memoria, en primer lugar, estas “se definen como todas las iniciativas públicas orientadas a la difusión y consolidación de una interpretación del pasado” (Rodríguez, 2013, p. 38), de modo que se comprende, que para el establecimiento de unas políticas de la memoria se hace necesaria la configuración de unos usos públicos del pasado, ya que las políticas de la memoria se caracterizan “por el encuentro entre políticas públicas, cultura y tradición en el marco de un conjunto de estrategias¹¹⁹ en las que se restituye una selección particular de aspectos del pasado a los cuales se les define un contenido y se les asigna un sentido con el propósito de configurar “los límites de la memoria social deseada” (Rodríguez, 2013, p. 38). Por lo que, los usos públicos del pasado hacen parte de las estrategias que median los sentidos del pasado y los límites de la memoria.

De acuerdo con lo anterior, a partir de la revisión del archivo visual de Asfaddes, principalmente la parte que se relaciona con las actividades desarrolladas por la asociación, se hicieron evidentes los siguientes usos del pasado: políticos, conmemorativos, artístico o simbólico, y ritual.

A continuación se presenta un desarrollo de cada uno de los usos presentados, en relación con la genealogía de los discursos de la memoria de Gonzalo Sanchez (2018) y las representaciones de la persona desaparecida y de la desaparición forzada desarrolladas en el capítulo anterior.

4.2.2.1 Usos políticos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga como parte de procesos de denuncia pública

Los usos políticos¹²⁰ son comprendidos como aquellos en los que las imágenes que integran el archivo de la seccional son usados en momentos de coyuntura bajo la intención de

¹¹⁹ Las estrategias enunciadas por Rodríguez (2013) serían: “conmemoraciones y rituales, construcción y preservación de monumentos, creación y administración de instituciones para la conservación y transmisión de la memoria (archivos, museos, institutos o centros de investigación) y programas educativos y escolares” (p. 38).

¹²⁰ Es necesario mencionar, que los otros usos del también pueden ser comprendidos como políticos, pero aquí se enfatiza en aquellos que buscan influir en la agenda nacional o las políticas públicas.

instalar la desaparición forzada y la imagen del desaparecido como parte de la agenda nacional en relación con el conflicto o influir en políticas públicas.

Frente a esto Mesa (2019) afirma que a partir de los usos políticos se pretende que “la fotografía se exprese desde lo argumentativo y como muestra de resistencia de las familias que continúan en pie ante la invisibilización estatal y social. Este uso normalmente se puede expresar en eventos como marchas, audiencias y plantones” (p. 70).

De acuerdo con lo establecido por Mesa (2019), los usos políticos de los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga se presentaron principalmente en escenarios de movilización social, enfocados en la denuncia de la desaparición forzada o la construcción de paz, en las que las imágenes del archivo son cargadas por los familiares o integrantes de Asfaddes y hacen parte de los elementos que legitiman la acción social al ser evidencia de la existencia de la persona desaparecida. De esta manera, dentro del esquema de relaciones para el análisis visual se hicieron presentes tres momentos que se caracterizan por el uso político del archivo visual: en primer lugar, 1989 en el marco de la marcha por el día del trabajo, en segundo lugar, en 2009 para denunciar los casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, por último, en una movilización del 2016 en pro de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP.

El primer momento en el que se evidencia un uso público del archivo dentro de la seccional de Bucaramanga es en 1989, año en que se firma el acta de su constitución, aunque de acuerdo con el libro de los veinte años de Asfaddes (2003) la seccional se organizó desde 1988.

En relación con lo anterior, en la genealogía de Sánchez (2018), se resalta que la emergencia de los discursos de la memoria se relacionan con los procesos de denuncia pública y la emergencia de la movilización social por los derechos humanos que estaban siendo vulnerados. De esta manera, este es un periodo marcado por las estrategias de lucha contrainsurgente aplicadas por el Estado, a partir del ejercicio de la violencia y la desaparición forzada enfocada a ciertos actores sociales como militantes políticos, sindicalistas, docentes, líderes campesinos, líderes comunitarios, autoridades indígenas y los defensores de derechos humanos (CNMH, 2016).

De este modo, las imágenes que hacen evidente el uso del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga en el marco de procesos de denuncia dentro de este periodo aparecen en una publicación del Sindicato de Educadores de Santander con ocasión del día del trabajo¹²¹. Estas imágenes se componen por dos recuadros con letras rojas en mayúsculas y dos fotografías a blanco y negro. En el primer recuadro dice: "SINDICATO DE EDUCADORES DE SANTANDER". En el segundo, dice: POR LA VIDA POR LA PAZ gobierno y militares díganos dónde tienen a nuestros familiares?" . La primera fotografía: blanco y negro, plano medio, en esta se puede ver a una mujer mayor que sostiene y observa un cartel que dice: "dónde está mi hijo LEONARDO?" y " Educador detenido". En medio del cartel entre estos dos mensajes hay un dibujo de un hombre con barba que se asume es el hijo de esta mujer. La segunda fotografía: Blanco y negro, plano completo, en esta imagen se puede ver a dos niños que miran a la cámara, ambos están sentados sobre un andén mientras sostienen un cartel, este dice "dónde está mi papá NILSON?".



Imagen 19. Usos políticos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Marcha del 1 de mayo de 1989. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

¹²¹ El 1 de mayo se celebra el día del trabajo "que conmemora la lucha obrera. Esta celebración tiene su origen en Chicago, Estados Unidos , un día como este, pero de 1886, (...) se registró el inicio de una histórica huelga que duró cuatro jornadas por parte de los trabajadores y es recordada con el nombre "Revuelta de Haymarket". También quedó registrada como la "Masacre de Haymarket", por la gran cantidad de obreros asesinados por la represión policial' (Claro, 2022).

En relación con lo anterior, se resalta que Asfaddes “trabajó muy estrechamente con el movimiento social que abrió valiosos espacios de denuncia en jornadas sindicales, huelgas, jornadas estudiantiles, y en eventos públicos para sensibilizar y denunciar la problemática de la desaparición forzada” (Asfaddes, 2003, p. 36). Además, como ya se mencionó en apartados anteriores Asfaddes seccional Bucaramanga desde su establecimiento ha recibido un amplio apoyo por parte del movimiento sindical, al punto de que la primera oficina de la seccional se encontraba en el sindicato de trabajadores de la UIS. Del mismo modo, se destaca que el sindicalismo fue una de las identidades políticas que se vio afectada por la desaparición forzada.

De acuerdo con esto, a partir del contenido de las imágenes se comprende que la participación de Asfaddes seccional Bucaramanga dentro de esta marcha del primero de mayo, se relaciona con la denuncia de la desaparición de docentes que también eran sindicalistas integrantes del SES. Sin embargo, frente a las formas de representar a las personas desaparecidas dentro de la imagen, en contraposición a lo evidenciado en el primer momento de la genealogía de Sánchez (2018), en el que la representación se configuraba a partir de la identidad política, dentro de las imágenes presentadas se configura una representación de la persona desaparecida a partir de su lugar dentro de su núcleo familiar y en la sociedad, al enunciarla como “padre”, “hijo” o “docente”, sin hacer mención de sus adscripciones políticas como sindicalistas. Lo que toma mayor poder enunciativo, cuando son la madre o los hijos los que cargan la imagen de la persona desaparecida, que expresa la ruptura acaecida en la vida familiar, lo que implica una serie de consecuencias sociales, económicas y morales, entre otras.

El segundo escenario, en el que se presenta un uso de las imágenes del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga se da en el desarrollo de la primera marcha por los “falsos positivos” y plantón en la Quinta Brigada, el 25 de marzo de 2009 liderada por Asfaddes seccional Bucaramanga. Esta marcha tiene lugar meses después de que se hicieran públicos en los medios de comunicación los primeros casos de ejecuciones extrajudiciales en agosto del 2008 relacionados con 11 jóvenes de Soacha que fueron llevados a Ocaña para ser presentados como guerrilleros dados de baja en combate y enterrados en fosas comunes como N.N. (CNMH, 2014).

En relación con lo anterior, se destacan dos imágenes: la primera es una fotografía que fue tomada en el espacio público, en lo que parece una vía, en esta se distinguen en un primer plano dos mujeres que sostienen una pancarta que dice: “... QUE SE DESTAPE ESA OLLA PODRIDA QUE TIENE EL ESTADO Y EL EJÉRCITO. MILITARES ASESINOS. FUERA. FUERA. FUERA”. Mientras que en la parte de atrás de las mujeres se ve un grupo de cinco personas que cargan carteles pequeños con fotografías de personas desaparecidas.

La segunda fotografía es tomada a un lado de las personas que marchan, en un primer plano se ve un hombre joven cargando una pintura de una persona desaparecida, en la parte de atrás se ven dos hombres que llevan una pancarta que atraviesa la calle de lado a lado, esta dice “LOS FALSOS POSITIVOS SON CRÍMENES DE ESTADO”.



Imagen 20. Usos políticos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Marcha por los “Falsos positivos” 2008. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.



Imagen 21. Usos políticos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Marcha por los “Falsos positivos” 2008. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

En relación con lo anterior, una de las características del uso político del archivo en el marco de procesos de denuncia se relaciona con la presencia de carteles que acompañan las marchas desde donde se pueden percibir las razones que motivan la movilización social del momento o transmiten una serie de mensajes. En este caso es a partir de estas pancartas que se pueden comprender las elaboraciones discursivas frente a las personas desaparecidas y de la desaparición forzada que se desarrollaron en este momento, que corresponde al tercer período elaborado por Sánchez (2018) que se caracteriza de forma particular por el establecimiento de una comprensión oficial de la desaparición forzada, debido a la tipificación del crimen mediante el Artículo 165 del código penal y la transformación del fenómeno agenciada por el conocimiento público de las ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con lo anterior, dentro de las imágenes se hace evidente que para ese momento ya había una apropiación social del término: “falso positivo” para hacer referencia a esta modalidad de desaparición. Como se mencionó en el capítulo anterior, este término fue acuñado por el entonces ministro de defensa Santos en su primer pronunciamiento frente a las ejecuciones extrajudiciales.

Así mismo, se establece una comprensión de estas desapariciones como “crimen de Estado” al reconocer la participación de agentes del Estado como autores, perpetradores del crimen y de sus instituciones como encubridoras, ya que: “en Colombia agentes del Estado han asesinado y desaparecido los cuerpos de civiles, no solo para presentar resultados operacionales, sino también para ganar méritos, permisos, estímulos y reconocimientos” (CNMH, 2016, p. 195) dentro de la institución.

Por otro lado, desde la afirmación “QUE SE DESTAPE ESA OLLA PODRIDA QUE TIENE EL ESTADO Y EL EJÉRCITO” se asume que hay otros casos de los que no se tiene conocimiento o que no han sido reconocidos por el Estado. En relación con esto según las cifras de la JEP entre 2002 y 2008 fueron desaparecidas mediante esta modalidad 6402 personas.

Por otro lado, el que la marcha se dirigiera hacia la Quinta Brigada del Ejército¹²² de Bucaramanga y ahí se desarrollara un plantón, se debe a la relación de sus integrantes con las ejecuciones extrajudiciales, lo que se hace evidente a partir de la apertura de investigaciones y las condenas a las que se han visto sometidos militares que pertenecían a esta brigada¹²³. De esta manera, se comprende que los usos políticos de las fotografías de las personas desaparecidas como parte de procesos de denuncia pública implican una confrontación, desde el exponer estas imágenes frente a las instituciones o actores relacionados con las desapariciones para revelar lo que estaba sucediendo, exigir justicia y verdad, además, de disputar una construcción del pasado al exponer la versión de las víctimas en el espacio público.

Por otro lado, frente a estos dos primeros momentos, en los que se presentan unos usos políticos del archivo visual de la seccional, llama la atención las formas en que los familiares y Asfaddes configuran las imágenes de las personas desaparecidas, ya que estas no son fotografías sino retratos a blanco y negro, dibujos o pinturas, que se adaptan a los formatos propios de los documentos de identidad al elaborar unos rostros que miran hacia el frente en un plano medio corto. Esto se debe a que como lo afirman Inzaurrealde y Saab (2019) “las madres, en busca de sus hijos, esgrimen los propios medios que el Estado usa para registrar a los ciudadanos y en el propio lenguaje burocrático del Estado: una foto de frente o de perfil, o ambas y una serie de datos fríos que documentan su identidad oficial. La intención es documental y se relaciona con la existencia jurídica de esas personas” (p. 79). De esta manera, se podría afirmar que ante escenarios de negación y estigmatización de las personas desaparecidas, debido a su relacionamiento con grupos guerrilleros o delincuencias en el marco de la lucha contrainsurgente, los familiares exaltan a su familiar

¹²² La Quinta Brigada del Ejército tiene su jurisdicción entre los departamentos de Santander, Norte de Santander, y las regiones del Sur de Bolívar y Sur del Cesar (PCNM, 2008).

¹²³ Como se presenta en una noticia del periódico el tiempo del año 2014: “a 40 años de prisión fueron condenados por un juez de Bucaramanga seis militares del batallón Ricaurte, de la Quinta Brigada, por su responsabilidad en la muerte de dos personas que en Lebrija (Santander) fueron reportadas por los militares como supuestos guerrilleros muertos en combate” (El Tiempo, 2014). Del mismo modo, en caracol radio en una noticia del 2019 se enuncia que “A 580 meses de cárcel fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia un sargento, un cabo y seis soldados de la Quinta Brigada, por falsos positivos contra cuatro campesinos de Santander” (Caracol Radio, 2019).

desaparecido a partir de las estrategias que el Estado configura para marcar a los ciudadanos, como una estrategia para probar su existencia.

El tercer momento, se destaca por el uso de fotografías de personas desaparecidas por parte de la seccional, en el marco de la marcha por la paz del 2016 en relación con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC - EP.

El proceso de negociación entre el gobierno del presidente Santos (2010 - 2014 y 2014 - 2018) y las FARC -EP tuvo su inicio en el 2012 y se desarrolló en la Habana Cuba, dentro de la agenda de este proceso se definieron seis puntos: reforma rural, garantías en la participación política, terminación del conflicto armado, solución del problema de drogas ilícitas, garantías para las víctimas del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdo (Departamento Nacional de Planeación, 2022).

De esta manera, para agosto del 2016 se anuncia públicamente que las negociaciones llegaron a un acuerdo final y el 2 de octubre del mismo año se llevó a cabo un plebiscito en el que los colombianos tomaron una posición frente a los acuerdos, lo que por una diferencia mínima dio como resultado su no aprobación por parte de un 51, 21% de la población votante en contraposición al 49,78% que votaron sí (Misión de Observación Electoral, 2016). Esto significó que una parte de la población no se sentía conforme con la aprobación de los acuerdos, por lo que, no era posible su implementación.

En relación con lo anterior, a los pocos días, se realizó una movilización a nivel nacional e internacional por la paz “para exigir un acuerdo..., tras la victoria, por un estrecho margen, del "No" (El tiempo, 2016). Frente a esto, el gobierno nacional se reunió con los precursores del “no” frente a los acuerdos de paz para acordar unos ajustes y el 24 de noviembre se da la firma de estos entre el gobierno nacional y las FARC-EP (Avella, 2019).

En el marco de estos acontecimientos, se hacen presentes unos usos políticos de los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga en la marcha por la paz como se presenta en la Imagen 22. Esta es una fotografía de la marcha que tuvo lugar en Bucaramanga el 24 de octubre del 2016, en esta en el primer plano se pueden ver tres mujeres cargando cada una un cartel que les cubre casi todo el cuerpo, estos tienen el nombre de la asociación y las

fotografías de nueve personas desaparecidas cada uno. En la parte de atrás de las mujeres se distinguen a otras personas con velas, además de una bandera de Colombia.



Imagen 22. Usos políticos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Marcha por la paz 2016.

Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

En esta imagen se hace evidente un uso de las fotografías de los desaparecidos en función de la legitimación del discurso por la paz y en pro de la aprobación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP, esto podría relacionarse con lo enunciado por Sánchez (2018) en el cuarto momento de la genealogía de los discursos de la memoria del conflicto armado, ya que dentro de este, las víctimas se convierten en el “soporte principal de la paz” (p. 109) y “en la principal fuente de legitimidad de la justicia transicional” (p. 109).

Por lo que, las fotografías de las personas desaparecidas en esta marcha se configuran como un soporte de los acuerdos de paz al representar las consecuencias del conflicto armado, desde el lugar de las víctimas, es decir, aquellos se han visto afectados de forma directa por este conflicto.

En relación con la configuración de las imágenes de las personas desaparecidas, en este caso se resalta que las fotografías, mantienen el formato característico de los documentos de identificación solo que en este caso son imágenes a color, acompañadas por una serie de datos de identificación, con un tamaño más pequeño y agrupadas con otras fotografías de

personas desaparecidas. Lo anterior, podría representar que las imágenes de las personas desaparecidas “dejaron, de esta forma, de pertenecer a la familia del desaparecido para conformar un corpus ‘de todos’ los que denuncian o se preocupan en torno al problema de la desaparición” (Da Silva Catela, 2012, p. 79), lo que configura un proceso de denuncia y búsqueda colectivo.

4.2.2.2. Uso del archivo visual de Asfaddes en el marco de procesos de conmemoración

El uso conmemorativo de las imágenes que acompañan los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga, se caracterizan por su periodicidad debido al establecimiento de fechas “como principios de ordenación social de la memoria, como escenarios de construcción de la identidad nacional y de confrontación entre proyectos políticos en pugna...” (Rodríguez, 2013, p. 20) mediante los cuales se establece aquellos acontecimientos que merecen ser recordados.

Asimismo, es necesario situar desde Jelin (2002) que también hay fechas conmemorativas que se relacionan con lo regional, local y colectivo o que “pueden tener sentido en el plano más personal o privado: el aniversario de una desaparición, la fecha de cumpleaños de alguien que ya no está” (p. 52).

En relación con lo anterior, dentro del esquema de análisis visual a partir de las redes elaboradas se hizo evidente el uso del archivo en el marco de cuatro conmemoraciones: el 9 de abril del 2012, la semana internacional del detenido desaparecido en mayo del 2013, el día internacional de las víctimas de desaparición forzada: 30 de agosto del 2017 y el homenaje a una persona desaparecida a los treinta años de los hechos en el 2016.

Se destaca que los usos conmemorativos del archivo visual de Asfaddes se caracterizan por el uso de la Galería de la memoria en diferentes escenarios y contextos de enunciación como calles, plazas, universidades o museos. La Galería de la memoria es una iniciativa de Asfaddes que inicia en 1998 cuando la Fundación Manuel Cepeda Vargas le plantea a los familiares reconstruir la desaparición forzada dentro del espacio público. De esta manera, un ocho de marzo en la Plaza de Bolívar se presentó la primera Galería de la memoria de Asfaddes que se componía de objetos personales de las personas desaparecidas y sus fotografías y con el tiempo esta se fue reduciendo únicamente a los retablos (Asfaddes,

2003). Asimismo, es necesario destacar que la configuración de la Galería de la memoria implica unos usos y unas transformaciones frente a las fotografías de las personas desaparecidas.

El primer momento en que se hace evidente un uso público del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga como parte de procesos de conmemoración (frente a las fotografías de las actividades de la asociación) fue realizada el 9 de abril del 2012 en el marco de una movilización. Cabe destacar que esta es una fecha importante para la historia colombiana, ya que este día se conmemora el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán y los hechos de violencia que se desencadenaron a nivel nacional que son recordados con el nombre del “Bogotazo”. Sin embargo, con el establecimiento de la Ley 1448 o Ley de justicia y paz del 2011, que hace parte del cuarto momento planteado por Sánchez (2018) en la genealogía de los discursos de la memoria en Colombia, se le da una nueva acepción a la fecha, ya que en el Artículo 142 que hace referencia al Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas se establece que:

El 9 de abril de cada año, se celebrará el Día de la memoria y Solidaridad con las Víctimas y se realizarán por parte del Estado colombiano, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas. [Además,] el Congreso de la República se reunirá en pleno ese día para escuchar a las víctimas en una jornada de sesión permanente (Artículo 142,..).

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente una transformación y disputa frente a los sentidos que se le atribuyen a la fecha, ya que como lo afirma Jelin (2002) el sentido de las fechas cambian a lo largo del tiempo, a medida que las diferentes visiones cristalizan y se institucionalizan, y a medida que nuevas generaciones y nuevos actores confieren nuevos sentidos” (p. 52).

En relación con lo anterior, se presenta la Imagen 23 en la que en un primer plano aparece un niño cargando uno de los retablos de la galería de la memoria que contiene la fotografía de un hombre, en la parte de atrás aparece otro niño con los brazos extendidos hacia arriba cargando un retablo con la imagen de un hombre, alrededor de este último niño hay dos hombres que cargan con un solo brazo extendido la imagen de una mujer y un hombre.

Mientras que hacia el lado derecho de la imagen hay un anciano que lleva sobre su hombro el retablo con el retrato de una mujer. Hacia el fondo se ven muchas más personas con imágenes que hacen parte de la galería de la memoria de Asfaddes.



Imagen 23. Usos conmemorativos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Marcha 9 de abril del 2012. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

Frente a esta fotografía, es necesario afirmar que la Galería de la memoria de Asfaddes con su configuración de convirtió en una de sus principales estrategias para la visibilización de la desaparición forzada y de las personas desaparecidas desde su ubicación en el espacio público como plazas, parques, museos, entre otros. Sin embargo, en la Imagen 22 se presenta una particularidad frente a los usos de la Galería, ya que en este caso las imágenes que la componen se hallan en movimiento y transitan por las calles como parte de una marcha. Por otro lado, dentro de la galería se hacen evidentes unas transformaciones frente a las imágenes que representan a las personas desaparecidas, debido a que esta aunque mantiene el formato de las fotos de documento de identidad cambia el color de las imágenes y lo reemplaza por un tono sepia general, lo que se puede tomar como una intención de unificar las fotografías, acompañadas de datos de identificación y con los logos de la asociación.

Por otro lado, la tonalidad sepia en las imágenes de las personas desaparecidas remite al álbum familiar (Feld 2014), pero también dota a las imágenes de un carácter de antigüedad y duelo. De acuerdo con lo anterior, dentro de la Galería de la memoria entrarían en diálogo

los estilos particulares de las fotografías originarias, entre las fotografías tomadas de documentos de identificación y aquellas que le pertenecían al álbum familiar.

El segundo momento en el que se evidencia un uso conmemorativo del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga se da en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido en mayo del 2013, cabe resaltar que esta fecha conmemorativa fue establecida en 1981¹²⁴ por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) “desde entonces durante la última semana de mayo de cada año, veinte asociaciones y grupos de familiares de desaparecidos de once países de América Latina realizan actividades simultáneamente ante las autoridades nacionales y la opinión pública (Asfaddes, 2003, p. 43).

En relación con lo anterior, se comprende que las fechas de conmemoración pueden establecerse a partir de un acuerdo colectivo que en este caso trasciende lo nacional, de manera, que estas fechas entran en diálogo y disputa con las conmemoraciones nacionales establecidas de forma oficial por las instituciones del Estado, para asignar lo que debe ser socialmente recordado.

De acuerdo con esto, la forma en que se dispone de las imágenes del archivo de la seccional en el marco de estos procesos conmemorativos se hace evidente en el desarrollo de una vigilia durante la Semana Internacional de los Desaparecidos Forzadamente organizada por la seccional Bucaramanga en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga¹²⁵ en el año 2013. En la imagen que recoge el evento se ven dos mujeres frente a la fachada del Museo de Bucaramanga, en cuya reja están colgados los retablos con las fotografías de las personas desaparecidas.

¹²⁴ Esta fecha conmemorativa se establece un año antes de la creación de Asfaddes nacional, por lo que, en representación de Colombia Asfaddes participa desde 1983 (Asfaddes, 2003).

¹²⁵ El Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, es reconocido por ser un Bien de Interés Cultural Municipal Bucaramanga que fue fundado en 1985 con la misión de “conservar, educar, divulgar y exhibir las expresiones artísticas más influyentes, a través de un diálogo participativo con distintos públicos que permite la convergencia de saberes y la transformación del imaginario colectivo en las comunidades de Santander” (MAMB, 2012).



Imagen 24. Usos conmemorativos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Semana Internacional de los Desaparecidos Forzadamente en el año 2013. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

En este caso nuevamente se hace un uso de la Galería de la memoria, al disponer los retablos colgados en la fachada del museo, en este caso las imágenes de la galería se convierten en un objeto estático, a diferencia del momento anterior en el que estas hacían parte de la marcha, se encontraban en movimiento y se relacionaban con unos sujetos.

De esta manera, la forma en que se dispone la Galería de la memoria en el museo la establece como objeto de observación, del mismo modo, el poner las imágenes en la fachada del museo y no dentro de este implica una intención de visibilizar a las personas desaparecidas y la desaparición forzada avalada por una institución museal, aunque no se trate de un museo de historia, ni de memoria.

En relación con lo anterior, Mesa (2019) afirma que “la galería fotográfica de Asfaddes (...) es uno de los dispositivos de mayor impacto para la denuncia pública, ya que al enseñar los rostros de los desaparecidos se da cuenta de la magnitud del hecho victimizante y humaniza las cifras interpuestas por los entes estatales” (p. 85). De esta manera, el disponer las imágenes de las personas desaparecidas una junto a la otra permite dimensionar la magnitud del delito sin sacrificar la individualidad de los sujetos, así como afirmar que las desapariciones no son casos aislados, sino que hacen parte de una política de Estado.

Otra fecha de conmemoración que se estableció dentro del panorama nacional y que se hace presente dentro de las fotografías de las actividades desarrolladas por Asfaddes seccional Bucaramanga, es el Día Internacional de los Desaparecidos que se celebra el 30 de agosto a partir de la Ley 1408 de 2010 “por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación”, del mismo modo, como parte de esta ley dentro del artículo 14 el gobierno reconoce como fecha de conmemoración nacional la Semana del Detenido Desaparecido la última semana de mayo.

De esta manera, se reconoce a la desaparición forzada como parte de la agenda de conmemoración nacional como deber de memoria de un Estado que por muchos años negó y estigmatizó a las víctimas. Por lo que, estas se reconocieron a sí mismas y crearon sus propias fechas de conmemoración que terminaron inmersas dentro de la agenda nacional como parte de las políticas de la memoria, ya que como lo afirma Espinosa (2018) existe “una íntima relación entre las políticas de memoria de pasados violentos y las políticas de reparación, [ya que] las medidas de satisfacción de la reparación individual de las víctimas se refieren justamente a medidas simbólicas que incluyen la difusión de la memoria, conmemoraciones y homenajes a las víctimas” (p, 21)

En relación con lo anterior, en el marco del Día Internacional de los desaparecidos, es decir el 30 de agosto del 2017, se tomó la siguiente fotografía, en la que se evidencian unos usos del archivo fotográfico de Asfaddes a partir de la disposición de la Galería de la memoria dentro de un salón de la UIS de Bucarica (una sede de esta universidad en Bucaramanga), como se presenta en la Imagen 25.



Imagen 25. Usos conmemorativos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Día Internacional de los desaparecidos, 30 de agosto del 2017. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

En relación con la imagen anterior, la forma en que se dispone la galería de la memoria en el marco de este proceso de conmemoración se diferencia de los usos anteriores, ya que en este caso los retablos se sitúan en un espacio cerrado, que además es un escenario de formación como lo sería la UIS. Del mismo modo, aparecen zapatos frente a las imágenes de las personas desaparecidas acompañados de una nota que dice “¿Dónde están?”. De esta manera, a partir de esta puesta en escena se configura una representación de la persona desaparecida como ausente, al disponer unos zapatos vacíos frente a la imagen de la persona que debería usarlos.

Por otro lado, se destaca que la seccional de Asfaddes Bucaramanga a lo largo de su historia ha mantenido una relación de solidaridad con esta universidad, ya que como lo afirma Suárez (2017) “la universidad no ha sido ajena a los avatares de la guerra que ha atravesado la historia reciente en Colombia ” (p. 570). De manera, que entre 1964 y 2016 han sido asesinados, torturados o desaparecidos 39 estudiantes y trabajadores de esta universidad. Por lo que, es comprensible que familiares de estudiantes y trabajadores de esta universidad participaran en la fundación de la seccional, del mismo modo, cuando se

crea la seccional ante la dificultad de conseguir una oficina Asfaddes recibió el apoyo del sindicato de trabajadores de la UIS.

Estas relaciones entre la UIS y Asfaddes seccional Bucaramanga se hacen evidentes a partir del uso del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga en el 2016 en marco de otra fecha de conmemoración no oficial, que se relaciona con la desaparición de un estudiante de la UIS en 1986, ya que como parte del homenaje de los treinta años de su desaparición¹²⁶, se dispone la Galería de la memoria lo se muestra en la Imagen 26.



Imagen 26. Usos conmemorativos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Homenaje a los 30 años de la desaparición de ... en la UIS. 2016. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

En esta fotografía, que hace parte del acervo que recoge las actividades desarrolladas por Asfaddes Bucaramanga, se ve la Galería de la memoria de la seccional dispuesta al interior de la UIS frente a la salida. Entre las filas de retablos camina la madre de la persona desaparecida, una mujer anciana vestida de rosado y con una pañoleta negra en la cabeza, tomada de la mano de una niña con vestido blanco.

¹²⁶ William Camacho era estudiante de quinto semestre de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial de Santander y fue detenido desaparecido el 18 de junio de 1986 en San Gil Santander junto con un comerciante.

En relación con lo anterior, en este caso se presenta el uso de la Galería de la memoria para homenajear a una persona desaparecida, lo que podría conllevar a una “jerarquización” de las víctimas donde aquellas que ocupaban papeles más protagónicos en la vida social son más importantes en el duelo social público” (Espinosa, 2018, p. 472). Lo anterior, debido al uso de las imágenes de las personas desaparecidas para exaltar a una sola, además, de que el estudiante de quinto semestre de ingeniería eléctrica de la UIS fue desaparecido junto a un comerciante que también cumple treinta años desaparecido, pero no hace parte de este homenaje, lo que podría deberse a que esta persona no tenía ningún vínculo con la universidad. Mientras que el estudiante era reconocido como un líder estudiantil, de manera que, la desaparición de esta persona o de sujetos relacionados con la universidad como estudiantes, docentes y trabajadores implica rupturas o afectaciones dentro de la comunidad universitaria lo que genera procesos de movilización social y de conmemoración pública.

4.2.2.3. Uso artístico o simbólico

Frente a los usos artísticos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga, se destaca que “las prácticas artísticas y las expresiones estéticas han devenido campo de comprensión clave para valorar la manera como los grupos sociales exteriorizan sus expectativas de sentido y ponen en relación las experiencias afectivas que le dan soporte vivencial a su existencia” (Martínez, Martínez y Calle, 2019, p.15). Mientras que el uso simbólico según Mesa (2019) es “aquel donde la fotografía se enmarca en subjetividades, genera sentimientos y es resignificada” (p. 70), por lo que, ambos usos dialogan en la configuración de unas experiencias sensibles que le atribuyen nuevos sentidos a la imagen.

De acuerdo con lo anterior, la relación entre prácticas artísticas y memorias del conflicto armado se transforma y se hace reiterativa a partir de promulgación de la Ley 1448 del 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras, que corresponde al cuarto periodo planteado por Gonzalo Sánchez (2018) el cual se caracteriza por el reconocimiento oficial de la existencia del conflicto armado por parte del gobierno nacional, asimismo, se dictan medidas de reparación a las víctimas y se establece la creación de instituciones para el resguardo de las memorias del conflicto como lo sería el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Museo de la Memoria, entre otras disposiciones.

De esta modo, como lo afirma Martínez y otros (2019) “en este renovado registro, se hace viable un cambio de posicionamiento de los artistas frente a la realidad política, en la medida en que buscan aproximarse a los efectos, los testimonios y las experiencias derivadas de la violencia política en grupos sociales y territorios concretos” (p. 30).

A partir de lo anterior, dentro del esquema de análisis visual se hicieron evidentes unos usos públicos que se relacionan con lo artístico agenciados por la organización o por terceros, en este caso artistas. Como parte de estos procesos se destacan dos exposiciones, la primera, sería en marco del XIV Salón Regional de Arte¹²⁷ en el que se presenta una obra de un artista bumangués que se titulada “Memoria para borrar (retórica de la impunidad)”, es de resaltar que dentro de esta se hace uso de las fotografías del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga, y la segunda, la exposición “zapatos desgastados” de autoría de la seccional.

En relación con la obra de Freddy Higuera titulada “Memoria para borrar (retórica de la impunidad)” que fue presentada como parte del XIV Salón Regional de Artistas en el año 2015, se destaca que:

El artista acude al historial de desaparecidos de 50 años de violencia soterrada, una pandemia que ha borrado la memoria y ha creado generaciones de personas alzadas por el fantasma del fratricidio, víctimas como números estadísticos o noticias mediáticas del conflicto, para instalar, borrar y limpiar el rostro de hombres y mujeres, que siguen siendo parte de la larga lista de víctimas del oscuro episodio de la violencia, como un llamado al no olvido (Ministerio de Cultura, 2018, p. 252).

De esta manera, se comprende que la obra hace referencia a la intención de “desaparecer al desaparecido”, es decir, eliminar de la mirada pública a las personas desaparecidas a partir de la saturación, al transformarla en una cifra o una noticia, de ahí que, esta sea la acción a las que se ven sometidas las imágenes por parte de un sujeto que limpia los retratos hasta que sus rasgos se desdibujan. Llama la atención que esta persona viste una camiseta con un

¹²⁷ Los salones regionales de artistas, como lo afirma el Ministerio de Cultura (2015) son un “recurso para representar las culturas regionales, propiciar la descentralización y hacer visible la diversidad cultural que caracteriza al país” (Ministerio de Cultura, 2015).

logo parecido al del partido político Centro Democrático en el que dice: “retórica de la impunidad”.

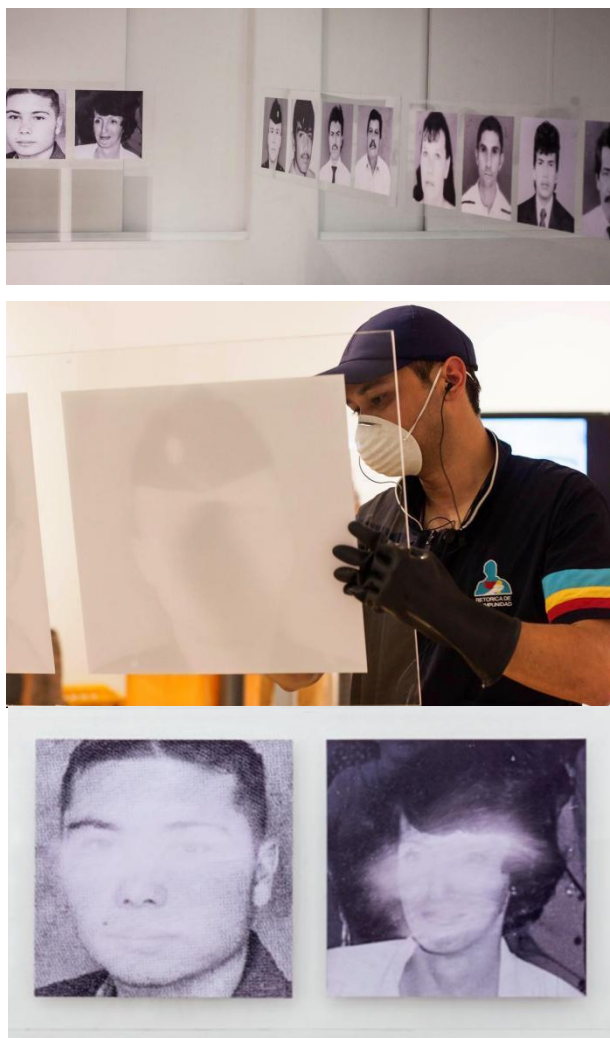


Imagen 27. Usos artísticos y simbólicos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Obra de Freddy Higuera titulada “Memoria para borrar (retórica de la impunidad)” 2015. Fuente. Ministerio de Cultura, 2015.

En relación con lo anterior, las personas desaparecidas se configuran como unos sujetos sometidos a un constante ejercicio de eliminación, asimismo, llama la atención el uso del logo del partido político Centro Democrático como parte de la acción de eliminación de los rostros, esto podría relacionarse con que uno de los principales líderes de este partido es el expresidente Uribe cuyo gobierno se prolongó por dos períodos presidenciales (2002- 2006 y 2006- 2010) y se caracterizó por mantener una postura negacionista frente al conflicto armado, la estigmatización pública de las ONG por parte del gobierno y el crecimiento de

forma significativa de las desapariciones forzadas en el marco de la Política de seguridad Democrática debido a la propagación de los casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

Por otro lado, algo particular del uso que se le da a las fotografías como parte de esta obra de arte, es que estas son intervenidas, ya que las imágenes de las personas desaparecidas no son la obra, sino que hacen parte de una puesta en escena o performance, que a partir de una serie de acciones pretende la construcción de una experiencia estética y apelar a las emociones del espectador.

Frente a la exposición “zapatos desgastados”, se afirma que dentro de esta también se hace un uso de los archivos visuales de Asfaddes, ya que como se hace evidente en las fotografías de las actividades de la seccional, en el marco de esta exposición entran en diálogo imágenes (las fotografías de las personas desaparecidas) y objetos (los zapatos) como se presenta en la Imagen 28. En esta se muestran unos zapatos en el piso que pertenecían a las personas desaparecidas, detrás de estos, se ven los retablos de la Galería de la memoria, esta vez colgados en la pared sin dejar espacio entre cada imagen, cubriéndola por completo.



Imagen 28. Usos artísticos y simbólicos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga. Exposición “zapatos desgastados” 2017. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

En relación con lo anterior, como lo afirma Perassi (2020) los zapatos son un objeto-testimonial¹²⁸ que se estableció dentro del imaginario colectivo a partir del Holocausto como una “auténtica archi-imagen, quizás la más siniestramente acumulativa para representar la industria genocida de la muerte (p. 264), pero también como elemento privilegiado en la rememoración de aquellos que ya no están, debido a que “los zapatos remiten a los cuerpos faltantes, espectrales, ya que siguen conservando la forma de quienes los llevaron, que existieron y que están disueltos, que deberían estar allí pero que ya no están ni estarán nunca más” (Perassi, 2020, p. 264).

¹²⁸ En Perassi (2020) los objetos testimoniales son comprendidos como “relato, tejido, texto, aunque a menudo sin palabras, consignados al desciframiento, a las ciencias de los signos, a la hermenéutica de los afectos lectores. A diferencia del relato subjetivo, al ‘objetivo’ nunca se le podrá acusar de fictividad: en su materialidad demora una verdad inexpugnable” (p. 262).

De esta manera, para la coordinadora de Asfaddes seccional Bucaramanga, la exposición Zapatos desgastados “representa los cientos de pasos dados por los desaparecidos, y de los zapatos desgastados por los familiares para buscarlos y entregarlos dignamente” (Unidad de víctimas, 2017). De acuerdo con lo anterior, la relación que se establece entre el uso de las imágenes del archivo visual de la seccional y los zapatos dispuestos frente a estas, implicaría además, la representación de una ausencia, desde el poner unos objetos vacíos frente a la imagen de una persona desaparecida que bien podría ser su propietaria. Por lo que, se configura la representación del ser ausente, a partir de la relación entre el objeto vacío y la fotografía, esta también se hace evidente en eventos de la seccional en los que se decide disponer los retablos que hacen parte de la Galería de la memoria en sillas.



Imagen 29. Usos artísticos y simbólicos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga, exposición de la Galería de la memoria 1, 2018. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

Por último, es necesario establecer que a partir de lo expuesto en relación con los usos artísticos del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga se pudo comprender que “la intención de aportar a la construcción de memoria sobre el conflicto y la violencia desde las prácticas artísticas implica, de entrada, transitar una serie de tensiones, pues la construcción de memoria histórica es también un escenario de debate político (...) y al tratar de construir sobre estas versiones formas expresivas y narrativas que permitan su transmisión cultural” (Martínez, 2019, p. 34). De esta manera, este uso se configura como disputa por el pasado

desde la versión de las víctimas a partir de procesos creativos que al tener una carga estética y simbólica tienen un gran alcance en la configuración de unas políticas de la memoria, debido a que como lo afirma Langland (2005) una de las cualidades de la imagen fotográfica, como herramienta en la disputa por el pasado, es que esta puede generar un impacto emocional, despertar sentimientos y empatías en función de lo que se está representando. Por lo que, estas imágenes al ser intervenidas o puestas en diálogo con otros elementos potencian esta cualidad al configurar una experiencia sensible y unos sentidos del pasado que permean al observador desde lo emocional.

Frente a los usos simbólicos del archivo, llama la atención la forma en que desde Asfaddes seccional Bucaramanga se establecen unas estéticas que podrían hacer referencia a escenarios de la muerte o de duelo a partir de la organización de la Galería de la memoria como se presenta en la imagen 30 en la que se muestra que los retablos ocupan por completo las tres paredes de un corredor. Esta configuración visual, sumada al uso de elementos de carácter ritual como velas y flores remiten a un cementerio con bóvedas.



Imagen 30. Usos artísticos y simbólicos del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga, exposición de la Galería de la memoria 2, 2018. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

En relación con lo anterior, como se comprende desde el CNMH (2016) en los casos de desaparición forzada la ausencia del cuerpo de la persona desaparecida “altera los ritos de entierro y de despedida, puesto que por las condiciones y características de la muerte se niega a los dolientes llevar a cabo las prácticas que dignifican los cadáveres y que resultan fundamentales para los trabajos del duelo” (p. 274). De esta manera, se hace evidente una imposibilidad en el desarrollo de ritos funerarios, ya que el realizarlos implica asumir que la persona desaparecida está muerta. Sin embargo, se hace evidente que la galería se convierte en un lugar simbólico en que los familiares ante la ausencia de una tumba pueden hallar a su familiar desaparecido.¹²⁹ Esto se debe a que “la foto funciona como una fuente de recreación de lazos sociales y parentales que han cesado con la ausencia física del muerto” (Da Silva Catela, 2012, p.76). De esta manera, las fotografías de las personas desaparecidas son una materialidad que representa a la persona desaparecida en el escenario público, al participar en procesos de denuncia y conmemoración, pero también ocupa un lugar dentro de lo privado, ya que se integra a la cotidianidad familiar, como testigo de las actividades que se desarrollan dentro del hogar.

4.2.2.4. Usos rituales del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga

En relación con los usos rituales del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga, es importante considerar que las “expresiones rituales, agenciadas por sobrevivientes del conflicto armado [...] proponen formas particulares de materializar, narrar, relatar, exteriorizar algunas de las experiencias y posibilidades de resignificación de la propia vivencia del conflicto, como estrategia íntima y como recurso para registrar, ficcionar o gestionar el recuerdo y los vínculos con un pasado doloroso” (Martínez, Martínez y Calle, 2019, p. 19). De acuerdo con lo anterior, se comprende que los familiares, así como las

¹²⁹ En el marco de esta investigación, se tuvo la oportunidad de acompañar tres procesos de conmemoración como lo serían la semana internacional del detenido desaparecido en mayo del 2022, el día internacional de los desaparecidos en agosto del 2022 y la celebración de los cincuenta años de Asfaddes realizada en la seccional Bucaramanga en diciembre del año 2022, de esta manera, como parte de estos procesos la Asociación dispuso en el espacio público la Galería de la memoria, frente a esto se pudo evidenciar la importancia que le dan los familiares de las personas desaparecidas a la Galería, desde el ir al encuentro de la imagen de su familiar o el descontento que genera al no encontrar la fotografía, debido a que por la dificultad de transportar la galería completa no siempre se llevan todos los retablos.

organizaciones de víctimas del conflicto armado como parte de sus procesos de duelo y estrategias para gestionar el pasado desarrollan rituales simbólicos desde los cuales se pueden agenciar una serie de narrativas frente al pasado reciente. En relación con el uso del archivo visual de la seccional en el marco de rituales se destaca que estos se desarrollan principalmente desde lo religioso en vigiliass, misas conmemorativas y entregas dignas.

A continuación se profundiza frente a las entregas dignas¹³⁰ situando en particular una que se desarrolló en el 2016 en la UIS de Bucarica, ya que dentro de las fotografías que recogen este evento se hace evidente el uso del archivo visual de Asfaddes como se presenta en la Imagen 30. Esta imagen es tomada en un salón de la UIS Bucarica, a los lados de este hay personas sentadas, en el centro del espacio hay una mesa con un ataúd pequeño que tiene una cinta blanca encima, llama la atención que a un lado de la mesa hay una silla con uno de los retablos de la galería con la foto de un hombre. Del mismo modo, en la parte de atrás de la mesa hay siete personas tres mujeres y dos hombres, que portan unas camisetas que tienen estampadas las fotografías de varias personas desaparecidas y en el fondo del salón se destacan una serie de imágenes de las personas desaparecidas.



Imagen 31. Usos rituales del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga, entrega e inhumación digna de ..., 2016. Fuente. Archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga.

¹³⁰ Con entrega e inhumación digna se hace referencia al “acto solemne donde se dignifica la memoria de la persona dada por desaparecida, el proceso de búsqueda de los familiares y se propician condiciones de respeto y humanidad, donde prevalecen sus necesidades y creencias espirituales y decisiones sobre la forma en la que se realiza el acto de entrega e inhumación del ser querido” (UBPD, 2020, p. 11.).

En este caso la fotografía se toma en la entrega de los restos de una persona desaparecida, por lo que, se podría decir que las imágenes del archivo de la seccional son usadas en función de un evento que se podría llegar a considerar un acto ritual funerario. según la UBPD (2020) en el marco de los procesos de entregas e inhumaciones dignas “los rituales funerarios son fundamentales en el proceso de duelo y permiten despedirse, honrando al ser querido, su historia, la relación vivida y la historia compartida. Adicionalmente, como parte del duelo, es un rito de paso hacia la continuidad de la vida sin la persona fallecida teniendo como constancia de su muerte el cuerpo esqueletizado” (p. 12). De esta manera, estos procesos de entrega se configuran como escenarios de encuentro entre los restos óseos de la persona desaparecida y los familiares que buscan, para de esta manera, poder desarrollar rituales funerarios dependiendo de las creencias de los familiares.

En relación con lo anterior, se destaca que a partir de la Ley 1408 del 2010 de homenaje a las víctimas de desaparición forzada en el artículo 7 y 8 se dictan medidas frente a los procesos de entrega digna de cuerpos identificados:

“ARTÍCULO 7º . Los familiares de las víctimas que resulten identificadas, recibirán, por parte del Programa Presidencial para la Acción Social, los recursos necesarios para solventar los gastos funerarios, de desplazamiento, hospedaje y alimentación durante todo el proceso de entrega de cuerpos o restos” (Artículo 7, ley 1408).

“ARTÍCULO 8º. El Ministerio de la Protección Social deberá asegurar que los familiares de las víctimas que resulten identificadas, reciban atención psicosocial durante todo el proceso de entrega de cuerpos o restos. Los beneficiarios podrán optar por atención psicosocial pública o privada” (Artículo 8, ley 1408).

De esta manera, el gobierno nacional dictó una serie de disposiciones frente al desarrollo de los procesos de entrega digna de las personas desaparecidas y se presentan los apoyos económicos y psicológicos que se le debe brindar a los familiares. Sin embargo, a partir del archivo de expedientes se pudo comprender, que los procesos de entrega digna fueron unos escenarios de disputa para Asfaddes, debido a las preferencias de las instituciones del Estado a desarrollar entregas masivas en el marco de homenajes a integrantes de la

institución, lo que resulta problemático para la seccional, ya que como lo afirmaba la coordinadora, de ese entonces, “Asfaddes no es de la política entregas masivas, porque ya en Bucaramanga sufrimos los atropellos de la Fiscalía donde se le hizo homenaje hasta a una perra y pusieron la gente a llorar y agradecer no sé qué favores” (Derecho de petición dirigido al Fiscal General de la Nación por parte de la coordinadora de Asfaddes, caso 25, 2012).

Frente a esta situación, se hace evidente que el desarrollar entregas de forma simultánea o masiva, limita el cumplimiento de los artículos expuestos anteriormente, le resta individualidad a las víctimas y termina en hechos de revictimización.

En relación con la legislación actual en materia de entregas dignas, en el año 2020 la UBPD publicó unos “lineamientos de Entrega e Inhumación Digna de Cuerpos” en los que se dicta que “las entregas dignas y humanitarias de cuerpos esqueletizados son siempre de carácter individual familiar no colectivas” (p. 51), a menos de que estas personas hagan parte de una misma comunidad y haya un consenso entre los familiares.

En relación con los usos de los archivos en el marco de estos procesos, el lugar central que toma la imagen de la persona desaparecida que es entregada a sus familiares es una forma de individualizarla, del mismo modo, poner el retablo de la persona desaparecida en la silla vacía, recurre nuevamente a la representación de la ausencia a partir de la relación entre la imagen y el objeto que en este caso se ve trastocada por la presencia del ataúd que contiene los restos óseos de la persona desaparecida.

Para finalizar, es necesario reflexionar frente a aquel sujeto que no aparece dentro de las imágenes pero que tiene un rol determinante dentro de la captura fotográfica, ya que se encuentra detrás de la cámara, registrando cada uno de los acontecimientos. De esta manera que, frente a las fotografías de las actividades de Asfaddes seccional Bucaramanga, el fotógrafo se configura como un testigo que es una parte integral de escena, ya que este no es un agente externo, sino “un actor social y un sujeto involucrado con el contexto que registra, desde un posicionamiento personal que tiene dimensiones afectivas, éticas y políticas” (Aranguren y Gallo, 2021, p. 104), ya que tomar una fotografía es tomar una

postura frente a la realidad, es decir que a medida que se registra la realidad también se configura una versión de esta desde lo fotográfico.

De acuerdo con lo anterior, la fotografía es un proceso de selección desde el elegir que acontecimientos son dignos de atravesar la lente y la forma en que se exhiben, hasta aspectos la elección más técnicos como el enfoque, qué objetos o corporalidades se privilegian en el centro del cuadro y con qué planos. De esta manera, el fotógrafo es más que un observador objetivo al ser un actor constitutivo de la realidad que registra, “se trata de verlo en una compleja trama de relaciones intersubjetivas... que subyace e incluso hace posible el trabajo fotográfico, y en virtud de su posicionamiento ético o político más halla de lo transaccional” (Aranguren y Gallo, 2021, p. 103).

En relación con lo anterior, las imágenes analizadas en este apartado son el registro de las actividades en la seccional que configuran como unas memorias de trabajo de Asfaddes frente a la desaparición forzada, por lo que, se comprende que el fotógrafo al ser un actor político y social que integra la realidad que registra, hace parte de la asociación y tiene un rol dentro de las actividades que se están llevando a cabo.

De acuerdo con esto, las fotografías de las actividades de la seccional se podrían dividir en dos tipos, en primer lugar, estarían las imágenes que privilegian a los objetos al centrarse principalmente en la galería de la memoria, estas se caracterizan por la ausencia de personas en el cuadro, por otro lado, estarían las imágenes que presentan a sujetos desarrollando una acción, ya sea marchando, cargando una pancarta u organizando la galería.

En relación con el primer grupo, estas son imágenes tomadas en un plano general que permite abarcar la magnitud del montaje de la galería, es de resaltar que estas fotografías se relacionan con los usos artísticos o simbólicos del archivo, ya que presentan a los cuadros de la galería de la memoria como objetos estéticos y de observación que tienen la capacidad de evocar a la persona desaparecida despertando una serie de emociones en el espectador.

Mientras que en segundo grupo, estas son fotografías tomadas con un plano general, dentro de estas no hay imágenes en plano medio o medio corto, ya que estas no se centran en una sola persona, sino que a diferencia de las imágenes de documento de identidad, pretenden

capturar a un grupo de personas en acción y configurar una descripción del contexto, ya sea en movilizaciones o eventos desarrollados en calles, plazas, universidades, museos, etc. Del mismo modo, dentro de estas fotografías se resaltan unas corporalidades desde el aparecer en los primeros planos, mujeres, niños y ancianos.

De esta manera, se configura una cotidianidad y un núcleo familiar quebrantado, desde la ausencia de ciertas corporalidades dentro del recuadro, asimismo, nuevamente se destaca la representación de la persona desaparecida como hombre y de la persona que busca mujer que en su rol de madre esposa que cuida a la familia toma un lugar activo dentro de los procesos de denuncia pública y movilización social en relación con la desaparición forzada.

Por otro lado, la presencia de niños dentro de las imágenes permite vislumbrar que estos se ven gravemente afectados por la desaparición forzada, ya que como lo afirma Asfaddes (2003) incide de manera negativa en el desarrollo de los niños afectando sus patrones de comunicación y socialización, sus roles dentro de la familia y su integración dentro de un colectivo, pérdida de oportunidades, acceso a la educación, además, afectaciones emocionales y psicológicas. Asimismo, la presencia de niños dentro de las imágenes de las actividades de Asfaddes seccional Bucaramanga podrían relacionarse con procesos de transmisión generacional, herencias desde Jelin (2002) o posmemoria¹³¹ desde Hirsh (1998) en los que las nuevas generaciones que no experimentaron los hechos traumáticos de la desaparición se integran a los procesos de agenciados por la asociación y sus familiares. Por otra parte, la presencia de los niños en las marchas también era una estrategia de protección para quienes participaban en la movilización, ya que como lo afirma Coordinadora de la seccional en entrevista, en relación con las primeras marchas sobre las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, llevar niños a marchar impedía que el ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios) les echara gases lacrimógenos o los violentará de alguna manera.

Frente a la presencia de adultos mayores dentro de las actividades de la seccional, como en la Imagen 25 sobre el homenaje de los 30 años de la desaparición de un joven estudiante de la UIS, se resalta que con esta imagen de una mujer anciana, que es la madre del

¹³¹ Este término fue acuñado por Hirsh (1998) para referirse a las memorias que eran transmitidas a la generación posterior al holocausto, es decir aquella generación que no vivenció los hechos traumáticos.

homenajeados y además, una de las fundadoras de la seccional, caminando entre los retablos de la galería de la memoria, se evidencia la forma en que el proceso de búsqueda es extenso y en ocasiones inacabado.

En relación con lo anterior, se reconoce que la selección que hace el fotógrafo al momento de la captura de las imágenes da cuenta de unas intencionalidades, pero también configura unos discursos a partir de aquello que se privilegia a partir de los planos y el encuadre como parte del proceso de selección de la realidad que pasará a integrar las memorias de la seccional.

A modo de cierre, frente a las imágenes del archivo visual de Asfaddes seccional Bucaramanga, se destaca que estas, como parte de un archivo consolidado, son un proceso más que un objeto, ya que se ven mediadas por una serie de relaciones sociales que hacen parte de su creación, al igual que unos tránsitos, unas transformaciones, los discursos que legitima, las representaciones que se establecen a partir de este, los usos que se le han dado y los lugares donde han sido resguardadas o exhibidas.

En relación con lo anterior, las fotografías de las personas desaparecidas pasan a configurar el archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga bajo el objetivo de diferenciar a la persona desaparecida dentro del proceso de búsqueda en el que se ven sometidas a una serie de transformaciones y a medida que se conservan las marcas de origen como dimensiones, fondos u otros elementos.

Por otro lado, es necesario resaltar que a medida que a las imágenes se les añade información o se transforman, no solo se modifican sus sentidos, sino que también se crean borraduras que eliminan las marcas originales de las fotografías, del mismo modo, en un afán de reproducción se puede terminar borrando la imagen de la persona desaparecida, lo que se relaciona con el hecho de que los archivos.

En relación con los usos de los archivos visuales de Asfaddes seccional Bucaramanga en primer lugar es necesario destacar que las imágenes de las personas desaparecidas se han convertido en la forma privilegiada de representar la desaparición forzada en el ámbito público a partir del uso de la Galería de la memoria, que al tener un carácter itinerante se

presenta dentro de diferentes contextos y lugares como en las calles en el marco de marchas o en universidades, museos, plazas públicas, entre otros.

De esta manera, los usos públicos que se identificaron dentro del archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga son: como elemento de legitimación de unos discursos políticos en procesos de denuncia, apoyo en los procesos de conmemoración y objeto artístico, simbólico o ritual, estos usos se presentan en el marco de unas transformaciones sociales que hacen necesario que estas imágenes que solían pertenecer a un archivo privado se conviertan en un elemento importante en la disputa del pasado. Además, de que configuran unas formas de representar a la persona desaparecida como ciudadano, parte integral de una familia y ausente, representaciones visuales que contribuyen a la comprensión de la magnitud de la desaparición forzada en el escenario público.

En relación con lo anterior, se destaca que el archivo tiene una amplia carga epistemológica que permite la construcción de conocimiento, la comprensión de fenómenos sociales y el establecimiento de unos sentidos frente al pasado desde su incidencia dentro de unas políticas de la memoria. De acuerdo con esto, Asfaddes seccional Bucaramanga, a partir de las imágenes de las personas desaparecidas adquiere una incidencia dentro del espacio público como parte de iniciativas de memoria y procesos de socialización, que en el marco unos usos conmemorativos de acuerdo con Rodríguez (2013) hacen parte de las estrategias que influyen en la configuración de unas políticas de la memoria, lo que se hace evidente desde la introducción de la desaparición forzada y la imagen de las personas desaparecidas como parte de la agenda nacional en relación con el conflicto dentro de procesos de conmemoración oficiales agenciados por el Estado que pasan integrar la identidad nacional, frente a lo anterior Groppo (2002) afirma que “las políticas de la memoria se esfuerzan precisamente por forjar una identidad colectiva, en particular una identidad nacional” (p. 190).

Del mismo modo, como lo afirma Rabotnikof (2007) otra forma de gestionar el pasado que influye en la configuración de unas políticas de la memoria, se relaciona con las medidas de justicia retroactiva y juicios históricos- políticos, dentro de esta categoría se podrían integrar procesos de justicia transicional y como parte de estos la apertura de casos en la

JEP relacionados con la desaparición forzada como el Caso 03 sobre las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, desde los cuales la desaparición forzada se sitúa como tema de interés nacional gracias al trabajo de denuncia y visibilización desarrollado por los familiares de las personas desaparecidas y las ONG defensoras de derechos humanos entre las que estaría Asfaddes.

En relación con lo anterior, se comprende que el archivo tiene una amplia carga epistemológica que lo convierte en un elemento privilegiado en la configuración de unos discursos y una comprensión del pasado que termina por influir en las formas en que sujetos representan su mundo y construyen la realidad a partir del pasado.

CONCLUSIONES

En primer lugar, es importante destacar la importancia de los procesos de documentación de familiares, colectivos y ONGs de víctimas del conflicto armado que se configuran como archivos de derecho humanos y desde sus usos permiten posicionar la desaparición forzada dentro del debate público y la agenda nacional.

Frente a las representaciones que se configuran acerca de las personas desaparecidas y la desaparición forzada en los archivos de Asfaddes seccional Bucaramanga, se hace evidente que estas representaciones así como los archivos se construyen a partir de una serie de acontecimientos históricos y procesos que median las formas de nombrar y entender a los sujetos, del mismo modo, las representaciones y los archivos hacen parte de unos ejercicios de poder -saber en los que aquel que tiene el control establece las formas de representar a sujetos, comunidades y el pasado a partir de unos discursos.

En relación con lo anterior, y derivado del análisis realizado se evidenció que el archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga es un archivo polifónico que se encuentra inmerso en un sistema de relaciones entre los actores que producen los documentos (familiares de las personas desaparecidas, Asfaddes seccional Bucaramanga, instituciones del Estado y prensa regional), por lo que, dentro del archivo entran diálogo y disputa los discursos de estos actores, ejerciendo influencias entre sí para establecer unos modos de representar y configurar el pasado reciente y de manera específica a las personas desaparecida y la desaparición.

De esta manera, el archivo es un proceso epistemológico que se caracteriza por una serie de condiciones sociopolíticas que implican unas transformaciones, regularidades, rupturas y borraduras o ausencias en las formas de representar, que solo pueden ser comprendidas dentro de su marco de enunciación temporal.

En relación con lo anterior, se destaca que el discurso de las instituciones estatales, en el marco de la lucha contrainsurgente fue uno de los más influyentes y con mayor permanencia dentro de las formas de representar a las personas desaparecidas y a la desaparición forzada, desde el crear la necesidad de que los familiares y Asfaddes reafirmaran la identidad y establecieran la inocencia de la persona desaparecida debido a los señalamientos y la estigmatización de actores políticos y sociales que han sido

relacionados con la insurgencia. De esta manera, estos discursos mediaron la configuración de una de las representaciones que tomó mayor recurrencia dentro de los discursos familiares y de la asociación, que además, se desarrolló de forma permanente, desde la representación de una persona desaparecida “normalizada”, que es parte integral de una familia y estudia o trabaja.

Frente a esto, se resalta que el Estado no es el único con poder para intervenir dentro de las formas de representar, ya el discurso colectivo desde los procesos de movilización social pueden influir en la legislación nacional, debido a que la desaparición forzada se configura en primer lugar dentro del discurso colectivo de los familiares y ONGs (guiados por las experiencias de los países del Cono Sur), antes de que el Estado instaure una comprensión pública del fenómeno y la tipificación del crimen dentro del Código Penal.

Esto también se hizo evidente en los casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, ya que fueron los familiares y las ONGs los encargados de darle visibilidad a estos crímenes cometidos por la fuerza pública, desde los procesos de denuncia en el espacio público, además, del establecimiento de una comprensión colectiva del fenómeno como desapariciones forzadas ejecutadas como política de Estado. Esto contribuye al reconocimiento oficial de las ejecuciones extrajudiciales y el establecimiento de unos culpables, de manera, que en la actualidad en el marco de un proceso de justicia transicional como la JEP se abriera el caso 03 sobre “asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.

Del mismo modo, una tensión importante dentro de los discursos familiares y de Asfaddes seccional Bucaramanga frente a las instituciones del Estado se da cuando, en el marco de Ley 1448 o Ley de víctimas y restitución de tierras, se establece una categoría de “víctima” excluyente que no reconoce a las personas que integraron grupos armados como víctimas u objeto de reparación, en contraposición a los discursos de Asfaddes en lo que se empieza a representar a los niños reclutados como víctimas y al reclutamiento forzado como una forma de desaparición.

Por otro lado, frente a las formas en que estas representaciones de las personas desaparecidas y la desaparición forzada influyen en la configuración de unas políticas de la

memoria, se hace evidente que esto se da en la medida en que el archivo circula en el escenario público y adquiere unos usos como parte de procesos de disputa política, denuncia, conmemoración, arte o rituales. De acuerdo con esto, en relación con el archivo de Asfaddes seccional Bucaramanga son las imágenes de las personas desaparecidas las que adquieren unos usos públicos y se convierten en herramienta de lucha por la memoria, ya que cumplen con las tres cualidades establecidas por Langland (2005): el carácter de verdad, el impacto emocional y la reproductibilidad. Del mismo modo, en el marco de estos usos a partir de las formas en que se configuran las imágenes o se realiza el montaje de estas, se presentan unos discursos que establecen unas representaciones de la desaparición forzada y la persona desaparecida como parte de un núcleo familiar quebrantado por su ausencia.

En relación con lo anterior, Asfaddes seccional Bucaramanga a partir de los usos públicos que hace del archivo influye en la configuración de unas políticas de la memoria del conflicto armado a partir del integrar la desaparición forzada y a las personas desaparecidas como víctimas de este conflicto, dentro de la agenda nacional a partir de procesos de conmemoración oficiales o escenarios de justicia transaccional del conflicto armado.

Para finalizar, el presente análisis se desarrolla en un momento crucial para los archivos de los derechos humanos debido a que la Comisión de Verdad en la construcción de un informe que dé cuenta del conflicto armado y las violaciones a los derechos humanos configura uno de los archivos de derechos humanos más grandes de Colombia. De esta manera, se da apertura a un nuevo escenario de investigación en relación con los archivos de los derechos humanos, el conflicto armado y las representaciones de las personas desaparecidas en el marco de procesos de justicia transicional.

Para futuros procesos de investigación se considera importante profundizar en los discursos que circulan dentro de los archivos de la prensa y las representaciones que se configuran dentro de estos medios frente a las personas desaparecidas, la desaparición forzada y el conflicto armado en Colombia.

Bibliografía

Acebedo, A. y Gomez, F. (2000). Conflicto y violencia en la Universidad en Colombia. El proyecto modernizador y el movimiento estudiantil universitario en Santander, 1953-1980. *Reflexión Política*, N. 4.

Adminpaz, P. (2021). Las Víctimas En La habana. Paz con mujeres. Available at: <https://humanas.org.co/pazconmujeres/las-victimas-en-la-habana/> [Accessed August 15, 2022].

Aguilera, M. (2006). ELN: entre las armas y la política. IEPRI.

AGN y CNMH. (2017). Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos, e infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Anstett, E. (2010). Comparación no es razón: a propósito de la exportación de las nociones de desaparición forzada y detenidos- desaparecidos. En Gatti, G (Ed.) *Desapariciones. Usos locales, circulaciones globales*. (33- 52). Siglo del Hombre Editores: Colombia.

Asfaddes. (2003). Veinte años de historia y lucha.

Aranguren, J. y Bello, A. (2020). Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional por medio de prácticas textiles en el conflicto armado colombiano. *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*, (N 6), 181- 204. <https://doi.org/10.25025/hart06.2020.10>

Aranguren, J y Gallo, L. (2021). Entre el compromiso y el distanciamiento: la fotografía como escucha del dolor de la guerra en Colombia en E. Wills (ed.), *Narrativas artísticas del conflicto armado colombiano*. Universidad de los Andes.

Arboleda, A. (2019). La impunidad: Buscarlos en una selva de impunidad. En Arellana, E. y Mingorance, F. (Coords). *Cartografía de la desaparición forzada en Colombia. Relato (siempre) incompleto de lo invisibilizado* (69-81). Human Rigths Everywhere.

Arellana, E. (2019). Las víctimas: Mapoemas y poemapas. En Arellana, E. y Mingorance, F. (Coords). *Cartografía de la desaparición forzada en Colombia. Relato (siempre) incompleto de lo invisibilizado* (69-81). Human Rigths Everywhere.

Artes visuales Mincultura. (5 de abril de 2019). 15 Salones Regionales de Artistas (colectivas). https://issuu.com/artesvisualesmincultura/docs/15-sra_colectivas_digital

Artículo 165. Desaparición forzada. Ley 599 de 2000. 24 de julio de 2000 (Colombia).

Avella, A. (2019). Ideas en fuga: análisis de las representaciones visuales de las FARC-EP durante el Proceso de Paz de la Habana (2012-2015) [Tesis de maestría, Universidad Pedagógica Nacional].

Azcárraga, B., Benavente, C., Cárdenas, M. y Faúndez, X. (2017). La desaparición forzada de personas a cuarenta años del Golpe de Estado en Chile: un acercamiento a la dimensión familiar. *Revista Colombiana de Psicología*, 27, 85-103.
<https://doi.org/10.15446/rcp.v27n1.63908>

Barrera, D. y Villa, J. (2017). Registro identitario de la memoria: políticas de la memoria e identidad nacional. *Revista Colombiana de Sociología*., 40(1), 149-172.
<https://doi.org/10.15446/rcs.v40n1Supl.65911>

Barón, M. y Gutierrez, F. (2006). Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia. IEPRI.

Bernasconi, O. (2018). Del archivo como tecnología de control al acto documental como tecnología de resistencia. *Cuadernos de teoría social*, 4 (7), 69-92.

Bossíé, F. (2019). Mirar el archivo con ojos de mar: un modo de hacer memoria sobre Daniel Omar Favero. *Lo que los archivos cuentan*, 7, 201-219.

Bourdieu, P. (1979). La fotografía: un arte inmediato. *Nueva Imagen*.

Bustamante, J. (2016). Voces de los objetos Encrucijadas y desafíos en contextos de memoria y conmemoración en Chile. 1990 al presente. *Antropologías Del Sur*, 3(5), 15-32.
<https://doi.org/10.25074/rantros.v3i5.811>

Cardona, A. (2013). Retratos de familia [Audio visual].

Casado Neira, D., Castillejo Cuéllar, A., Díaz, P. y Ruiz, I. (2018). Materializando la desaparición: la singularidad de sus cosas. *Oñati Socio-legal Series* [online], 9 (2), 237- 251.
<https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1025>.

Castillejo, A. (2016). Violencia, inasibilidad y la legibilidad del pasado. En F. Gorbach y M. Rufer (Ed.), (In)Disciplinar la investigación. *Archivo, trabajo de campo y escritura* (114-139), Siglo XXI – UAM.

Castro, E. (2018). El vocabulario de Michel Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y autores. *La torre literaria S.A.*

- Cataño, G. (2020). Los “Falsos positivos”: Noción a la deriva. En Barbosa, G. y Ciro, A. (Eds). *Garantía de no repetición: Una contribución a la justicia transicional* (76- 118). Universidad Externado de Colombia y Ejército Nacional de Colombia.
- Crenzel, E. (2010). Introducción. *Memorias y representaciones de los desaparecidos en la Argentina, 1983-2008*. En Cenzel (Coord). *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008)* (11- 23). Editorial Biblos, Latitud sur.
- Crenzel, E. (2010). La víctima inocente: de la lucha antidictatorial al relato del Nunca más. En Cenzel (Coord). *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008)* (65- 84). Editorial Biblos, Latitud sur.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). *Desaparición forzada Tomo II: Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970 - 2010)*. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2014), *Desaparición forzada Tomo I: Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia*. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). *Desaparición forzada Tomo III: Entre la incertidumbre y el dolor: impactos psicosociales de la desaparición forzada*. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), *Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia*, CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), *Tomas y ataques guerrilleros (1965 - 2013)*, CNMH – IEPRI.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), *Política Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado*, CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), *Y a la vida por fin daremos todo... Memorias de las y los trabajadores y extrabajadores de la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar. 1950-2018*. CNMH.
- Cepeda, A. (2020) *Madres constructoras de memoria: uso del performance para la presentación de sí mismas y la representación de sus hijos desaparecidos en Facebook*. *Virtualis*, 11 (20), 1-32.
- Cepeda, A. (2013). *Narrativas Familiares y Memoria de la Pos-dictadura en Argentina: El Caso de HIJOS de Desaparecidos*. *Asian Journal of Latin American Studies*. 26 (1), 25-45.

Chacón, M. y Sánchez, F. Conflicto, Estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Código de Procedimiento Penal [CPP]. Ley 906 de 2004. 31 de agosto de 2004 (Colombia).

Colombo, P. (2019). (Des) habitar: Inscripción espacial de la desaparición forzada en la casa. Kamchatka. 13 (pp. 319-340).

Comisión de búsqueda de personas desaparecidas (s.f). Quiénes somos. <http://www.comisiondebusqueda.gov.co/index.php/nosotros/quienes-somos>

Comisión de la verdad, JEP y UBPd. (2019). Sistema Integral de Verdad justicia reparación y no repetición (SIVJRNR). Recuperado el 25 de agosto del 2022 de: https://www.jep.gov.co/DocumentosJEPWP/3SIVJRNR_ES.pdf

Comisión de la Verdad. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe final.

Comisión de la Verdad. (2022b). Colombia adentro Relatos territoriales sobre el conflicto armado. MAGDALENA MEDIO.

Comisión de la Verdad. (2022c). Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas.

Comisión de la verdad. (2022). Archivo de los derechos humanos. <https://www.comisiondelaverdad.co/archivo-de-los-derechos-humanos>

Comisión de la Verdad. (2022). Desaparición forzada. <https://www.comisiondelaverdad.co/violaciones-de-derechos-humanos-infracciones-al-derecho-internacional-humanitario-y/desaparicion#:~:text=La%20desaparici%C3%B3n%20forzada%20es%20un,el%20miedo%20y%20la%20zozobra.>

Comisión de la verdad (11 de junio de 2022). Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final. <https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe>

final#:~:text=121.768%20personas%20fueron%20desaparecidas%20forzadamente,puede%20llegar%20a%20210.000%20v%C3%ADctimas.

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 12 de julio de 1991 (Colombia).

Contreras y Lozada (2021). Organización, digitalización e historia institucional del subfondo Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), seccional Santander, bajo custodia del fondo Archivo Oral de Memoria de las Víctimas (Amovi- UIS) [trabajo de grado, Universidad Industrial de Santander].

Cordero, P. (2020). Parámetros para el tratamiento de los archivos de los grupos armados no estatales con miras a su vinculación al sistema nacional de archivos de Colombia. caso de estudio Farc-EP. [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana].

Da Silva Catela, L. (2002). El mundo de los archivos. En L. Da Silva Catela y E. Jelin (Eds.). Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. Siglo XXI Editores.

Da Silva Catela, L. (2012) Re-velar el horror. Fotografía, archivos y memoria frente a la desaparición de personas. *Revista de Historia – IHNCA*. (n. 27), 75-91.

Delgado, A. (2007). 140 sindicalistas cada año, señores. https://www.cinep.org.co/public-files/PDFS/20070401e.140_sindicalistas60.pdf

Derrida, Jacques (1997). *Mal de Archivo. Una impresión freudiana*. Trotta.

Directiva Ministerial 029 del 2005. “criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”.

El Espectador. (14 de noviembre, 2019). Infografía: el camino de paz recorrido a dos años del acuerdo final. <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/infografia-el-camino-de-paz-recorrido-a-dos-anos-del-acuerdo-final-article/>

El Tiempo. (5 de octubre de 2016). ¡Acuerdo ya!, fue la proclama de la marcha por la paz de Colombia. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16719798>

Enciso, J. (2016) Género, resistencia y desaparición forzada: Una mirada a través de la construcción de trayectorias de vida. *Revista Cambios y Permanencias*, 8 (1), 504-532.

Erl, A. (2012). *Memoria colectiva y culturas del recuerdo*. Universidad de los Andes.

Espinosa, F. (2019). De damnificados a víctimas. La construcción del problema público de los afectados por la violencia en Colombia (1946-1991) [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de México].

Espinosa, F. (2021). Debates sobre los archivos de Derechos Humanos y su institucionalización en Colombia. Hacia una apuesta postcustodial [ponencia]. Congreso virtual Memoria, derechos humanos y buenas prácticas en archivos universitarios y de investigación. Universidad de los Andes.

- Feld, C. (2010). La representación de los desaparecidos en la prensa de la transición: el “show del horror”. En Cenel (Coord). Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008) (25 - 42). Editorial Biblos, Latitud sur.
- Feld, C. (2014). ¿Hacer visible la desaparición?: las fotografías de detenidos desaparecidos de la ESMA en el testimonio de Víctor Bastera. *Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*, 1, 28-51.
- Figueroa, M. (2016). “Fue así como se fue” El álbum fotográfico familiar como espacio para representar y reconocer a las víctimas de la violencia en el Perú. *Maguaré*, 30 (2), 81-120.
- Florez, J. (2013). Memoria histórica y archivos de derechos humanos: la valoración documental en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras [Tesis de Maestría]. Universidad de la Salle.
- Foucault, M. (2005). *Arqueología del saber*. Siglo XXI.
- Forcadell (et al.). (2004). *Usos de la historia y políticas de la memoria*. Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Galarza, P. (2016). Deberes de la persona y el ciudadano. *Revista Criterio Libre Jurídico*. 13(2), 102-111. <http://dx.doi.org/10.18041/crilibjur.2016.v13n2.26206>.
- García, M. (2019). ¡Archivar para resistir! Fondos Fabiola Lalinde y Afavit [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Gatti, G. (2017). Prolegómeno. Para un concepto científico de desaparición. En Gatti, G (Ed.) *Desapariciones. Usos locales, circulaciones globales*. (13- 31). Siglo del Hombre Editores: Colombia.
- Genschow, K. (2017). La memoria de los cuerpos. La representación de la tortura en los archivos del cardenal. *Sociocriticism*.
- Gibson, J. y Graham, k. (2002). Intervenciones posestructurales. *Revista Colombiana de Antropología*, 38, 261-286.
- GMH. (2013). ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad.
- Gómez, P. (2019). Las razones. Lo que desaparece con cada desaparecido. En Arellana, E. y Mingorance, F. (Coords). *Cartografía de la desaparición forzada en Colombia. Relato (siempre) incompleto de lo invisibilizado* (53- 66). Human Rights Everywhere.

Gómez, J., Herrera, J., y Pinilla, N. (2010). Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Universidad del Rosario.

Grosso, B. (2002) Las políticas de la memoria Sociohistórica, (11-12). URL: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3067/pr.3067.pdf

Guerra, A. (11 de octubre de 2008). Investigan a 11 militares en Santander por falsos positivos. <https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/investigan-a-11-militares-en-santander-por-falsos-positivos/20081110/nota/707250.aspx>

Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria. Editorial: Anthropos.

Hall, S. (2013). Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Corporación Editora Nacional.

Hancevich, M. y Soler, L. (2010). Sobre lo (im)posible de recordar. La representación de los desaparecidos en el cine (1995- 2003.) En Cenzel (Coord). Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008) (99- 112). Editorial Biblos, Latitud sur.

Human Rights Everywhere (s.f.). JEP-CEV-HRDAG: desaparición forzada estimada (%) 1985 - 2016. <https://desaparicionforzada.com/mapas/>

Huyssen, A. (2001), En busca del future perdido. Fondo de cultura económica.

Inzaurrealde, G y Saab, A. (2019). La memoria abierta: archivo y desaparición. EU-topias, 17, 75-86.

Jelin, E. (2002). Introducción. Gestión política, gestión administrativa y gestión histórica: ocultamientos y descubrimientos de los archivos de la represión. En E. Jelin y L. Da Silva (Eds.), Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. (1-13). Siglo XXI de España Editores, S.A.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI.

Jelin, E. (2010). ¿Víctimas, familiares o ciudadano/as? Las luchas por la legitimidad de la palabra. En Cenzel (Coord). Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008) (227 - 251). Editorial Biblos, Latitud sur.

JEP. (2022). Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. <https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso03.html#container>

Langland, V. (2005). Fotografía y memoria en E, Jelin y A, Longoni (Comps.), Escrituras e imágenes ante la represión. (87-91). Siglo XXI de España Editores, S.A.

Larralde, F. (2013). Lucila Quieto, hijos atravesando el paisaje: Imágenes para construir el recuerdo añorado. Aletheia, 4 (7), 1-11 : http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6252/pr.6252.pdf

La República (10 de diciembre de 2019). Así le fue a audiencias de los medios de comunicación en la última década. <https://www.larepublica.co/empresas/asi-le-fue-a-audiencias-de-los-medios-de-comunicacion-en-la-ultima-decada-2942547>

Ley 589 del 2000. Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones. 6 de junio del 2000.

Ley 1408 de 2010. Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación.

Ley 1448 del 2011. Ley de víctimas y restitución de tierras. “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

Longoni, A. (2010). Fotos y siluetas: dos estrategias contrastantes en la representación de los desaparecidos. En Cenzel (Coord). Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008) (43- 64). Editorial Biblos, Latitud sur.

López, A. (2006). Narcotráfico, ilegalidad y conflicto en Colombia. IEPRI.

Calle, M., Martínez, F. y Martínez, J. (2019) *Mediaciones estéticas y expresividades de la memoria*. Universidad Tecnológica de Pereira.

Martínez, F., (2019). Mediaciones artísticas. Resignificación de lo político y emergencia expresiva del testimonio en M. Calle, F. Martínez y J. Martínez (Comps.) *Mediaciones estéticas y expresividades de la memoria*. Universidad Tecnológica de Pereira.

Medina, H. (2013). Memoria, restitución y prácticas de la transmisión: El Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. Confluente. Rivista Di Studi Iberoamericani, 5 (1), 204-217. <https://doi.org/10.6092/issn.2036-0967/3764>

Mena, M. (29 de mayo de 2015). El cambio de paradigma en el campo de la Archivística [Conferencia magistral]. XV jornada archivística de la RENALES. Hidalgo, México. https://www.uaeh.edu.mx/xvjornadasarchivisticasrenaies/memorias/conferencias/el_cambio_de_paradigma_en_el_campo_de_la_archivistica.pdf

Mendoza, N. (2013). Políticas de la memoria y transmisión generacional de pasados recientes en H.I.J.O.S Argentina e Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad en Colombia [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México].

Mesa, A. (2019). Cuerpo ausente, imagen presente: usos de la fotografía en la asociación de familiares de detenidos desaparecidos ASFADDES - Seccional Medellín [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia].

Ministerio de cultura. (s.f.). Salones Regionales de Artistas. <https://www.mincultura.gov.co/areas/artes/artes-visuales/salones-regionales/Paginas/default.aspx#:~:text=Los%20Salones%20Regionales%20son%20considerados,construcci%C3%B3n%20cultural%20y%20pol%C3%ADtica%20colectiva>.

Ministerio de Justicia y del Derecho (s.f.). Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJNR). <https://www.minjusticia.gov.co/programas/justicia-transicional/marco-juridico-para-paz#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20SIVJNR%3F,fin%20de%20garantizarles%20sus%20derechos>.

Mingorance, F. (2019). La cartografía. Visibilizar lo [que quieren que sea] invisible. En Arellana, E. y Mingorance, F. (Coords). Cartografía de la desaparición forzada en Colombia. Relato (siempre) incompleto de lo invisibilizado (17 - 50). Human Rights Everywhere

Misión de observación electoral. (2016). Resultados del Plebiscito para la refrendación del Acuerdo de Paz Gobierno – FARC Octubre 2 de 2016. <https://www.datoselectorales.org/wp-content/uploads/2019/04/MOE-Resultados-Plebiscito-2016.pdf>

Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Editorial Huemul S.A.

Movice. (28 de junio de 2015). Historia. <https://movimientodevictimas.org/historia/#:~:text=El%2025%20de%20junio%20de,los%20derechos%20humanos%20y%20genocidio>.

Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. (2012). El MAMB Valor histórico, misión y visión. <https://museodeartemodernodebucaramanga.com/valor-historico/>

Muñoz, J. (2006). Doctrina de la seguridad nacional. las relaciones entre saber y poder: discurso y prácticas. Universidad de Antioquia, Medellín.

- Nora, P. (1997). *Les Lieux de mémoire*. Ediciones Trilce.
- Orozco, I. (1990). Los diálogos con el narcotráfico: Historia de la transformación fallida de un delincuente común en un delincuente político. *Análisis político*. N 11. 28-58.
- Peco M. y Peral, L. (2005). *El conflicto de Colombia*. Ministerio de Defensa.
- Peller, M. (2016). Lugar de hija, lugar de madre. Autoficción y legados familiares en la narrativa de hijos de desaparecidos en Argentina. *Revista Criação & Crítica*, (17), 75-90. <https://doi.org/10.11606/issn.1984-1124.v0i17p75-90>
- Perassi, E. (2020). Objetos-testigo. Fracturas y reconstrucciones del relato identitario. Kamchatka. *Revista de análisis cultural*, 16, 261-289.
- Pereira, J. (2010). *Narcotráfico en Colombia*. [Ensayo, Universidad Militar Nueva Granada].
- Pizarro, E. (2005). Las FARC-EP: ¿Repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? En IEPRI (Eds.). *Nuestra guerra sin nombre* (98- 118).
- Portal para la paz (2022). Explicación puntos del acuerdo. <https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/811/explicacion-puntos-del-acuerdo/#:~:text=En%20este%20contexto%20se%20desarrollan,garant%C3%ADa%20de%20los%20derechos%20humanos>.
- Proyecto Colombia Nunca Más. (2008). *Crímenes de lesa humanidad en la zona quinta*.
- Quílez, L. (2016). Representando la ausencia en la Argentina de la postdictadura. Reformulaciones del álbum familiar en los proyectos fotográficos de hijos de desaparecidos. *Arte Y Políticas De Identidad*, 13(13), 235-250. <https://doi.org/10.6018/250991>
- Quintero, R. (2019). 1989: El año en el que los narcos nos desangraron. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ataques-y-atentados-del-narcotrafico-en-colombia-en-1989-324084>
- Restrepo, D. (2021). *Gestión Documental y Sociedad del Conocimiento, del Universo al Multiverso de los Archivos* [Ponencia, Universidad de los Andes]. Congreso virtual Memoria, derechos humanos y buenas prácticas en archivos universitarios y de investigación. <https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/49560>
- Rabotnikof, N. (1993). *Lo público y sus problemas: notas para una reconsideración*. Instituto de Investigaciones Filosóficas, UAM.

- Rabotnikof, N. (2007). Memoria política a treinta años del golpe. En H. Crespo, C. Lida, y P. Yankelevich, (Comp.), Estudios en torno al golpe de estado (259- 284). Buenos Aires. Argentina: Fondo de cultura económica de Argentina S. A.
- Richard, N. (2006). Imagen recuerdo y borraduras. University of New Hampshire Interlibrary.
- Rivas, N. (2017). Reconstrucción de la memoria a partir de los objetos de los desaparecidos en Quito [Tesis de maestría FLACSO]. Repositorio FLACSO Andes..
- Rodríguez, S. y Sánchez, M. (2009). Problemáticas de la enseñanza de la historia reciente en Colombia: trabajar con la memoria en un país en guerra. *Reseñas* (7), 15-66.
- Rodriguez, S. (2013). Memoria y olvido: Usos públicos del pasado desde la Academia Colombiana de Historia (1930-1960) [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Colombia].
- Rodriguez, C. (2020). Antecedentes históricos sobre “los falsos positivos” en Colombia. En Barbosa, G. y Ciro, A. (Eds). *Garantía de no repetición: Una contribución a la justicia transicional* (26 - 75). Universidad Externado de Colombia y Ejército Nacional de Colombia.
- Romero, A. (2015). Nuestros/as desaparecidos/as sí existen: fotografías y narrativas familiares en torno a los hechos del Palacio de Justicia. [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Pontificia Universidad Javeriana.
- Rufer, M. (2016). El archivo. De la metáfora extractiva a la ruptura poscolonial. En F. Gorbach y M. Rufer. (In)Disciplinar la investigación. *Archivo, trabajo de campo y escritura* (Eds.), (160-186). Siglo XXI – UAM.
- Saban, K. (2017). Histori(et)ar la memoria: sobre Historietas x la identidad, un proyecto de Abuelas de Plaza de Mayo. En Mandolessi, S. (et al.) (Ed.), *El pasado inasequible: desaparecidos, hijos y combatientes en el arte y la literatura del nuevo milenio* (221- 252). Eudeba.
- Sánchez, G. (1990). “Guerra y política en la sociedad colombiana”. *Análisis Político* No.11, Bogotá: IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
- Sanchez, G. (2018). Reflexiones sobre genealogía y políticas de la memoria en Colombia. *Análisis político* (92). 96-114.

Sánchez, J. (2020). El giro archivístico: su impacto en la investigación histórica. *Humanitas*, 183- 223.

Semana. (19 de enero de 2023). Construcción del Museo de Memoria continúa en ‘veremos’; hay serios problemas de infraestructura. <https://www.semana.com/nacion/articulo/construccion-del-museo-de-memoria-continua-en-veremos-hay-serios-problemas-de-infraestructura/202341/>

Suarez, I. (2017). Sendero de conciencia UIS Verdad y Memoria de las Víctimas. En homenaje a la memoria de los y las miembros de la comunidad UIS víctimas del conflicto interno social, político y armado colombiano. *Cambios y Permanencias*, 8, 570-579.

Schwartz, M. y Cook, T. (2002). Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory. *Archival Science*, 2. 1-19.

Sindicato de Educadores de Santander (s.f). Historia.

Soto. E, (2009) Detenidos Desaparecidos: Ausencia y presencia a través de la imagen fotográfica. *Revista Electrónica de Psicología Política*. 7 (21). 1-28.

Stoler, A. (2010). Archivos coloniales y el arte de gobernar. *Revista Colombiana de Antropología*, 46 (29) 465-496.

Suárez, I. (2021). Historia, archivística y poder. *Apuntes para el debate*. C & P, 3, 137-165.

Tawse, D. (2009). Conflicto Armado Colombiano. *Desafíos*. N 19. 269-299.

Tavernini, E. (2016). Procesos de recuperación y negación de la voz filial en las poéticas de hijos de desaparecidos: La colección de poesía Los Detectives Salvajes. *Cuadernos de Aletheia*, 2, 40- 53.

Tello, A. (2016). Foucault y la escisión del archivo. *Revista de Humanidades*, 34. 37-61.

Triana, T. (2019). Recuperando los recuerdos de Cristóbal Triana: un acercamiento crítico a la desaparición forzada desde la posmemoria. *Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies*, 0(9), 75-85. doi:<https://doi.org/10.1344/AFLC2019.9.7>

Unidad de Víctimas. (31 de agosto, 2016). Santander conmemora el día de los desaparecidos en Floridablanca y Bucaramanga. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparaci%C3%B3n/santander-conmemora-el-d%C3%ADa-de-los-desaparecidos-en-floridablanca-y-bucaramanga/16226>.

UBPD. (2020). Lineamientos de participación de los familiares de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado interno durante el proceso de entrega e inhumación digna de cuerpos con carácter humanitario y extrajudicial. <https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/wp-content/uploads/2022/04/Lineamientos-entregas-dignas.pdf>

Vaisman, N. (2017). Posmemoria y memoria desaparecida en dos obras de la posdictadura argentina. En S. Mandolessi, (et al.) (Ed.), El pasado inasequible: desaparecidos, hijos y combatientes en el arte y la literatura del nuevo milenio (185- 209). Eudeba.

Vázquez, F (2001) La memoria como acción social, Paidós.

Verdad abierta (s.f.). Nace la asociación de ganaderos, Acdegam. <https://verdadabierta.com/nace-la-asociacion-de-ganaderos-acdegam/>

Entrevistas realizadas

Entrevista a una de las fundadoras de la seccional de Asfaddes en Bucaramanga desarrollada el 26/05/2022 en Bucaramanga, ella vinculó a Asfaddes cuando su hermano un estudiante de la UIS que desarrollaba actividades de liderazgo estudiantil fue desaparecido el 16 de junio de 1986. De esta manera, llevó vinculada a la seccional 36 años. Actualmente se está reintegrando a los procesos de la seccional, ya que por un tiempo se distanció de la misma.

Entrevista a la Directora de Amovi- UIS desarrollada el 27/05/2022 en Bucaramanga, ella es profesora titular de la UIS, tienen un posdoctorado en Historia, es archivista, además, de ser la creadora de Amovi-UIS.

Entrevista a la Coordinadora de Asfaddes Seccional Bucaramanga desarrollada el 30/05/2022 en Bucaramanga, ella se vinculó a Asfaddes en 1995 luego de la desaparición de su hijo el 5 de septiembre en 1994, por lo que, lleva 28 vinculada a la asociación participando de forma activa en sus procesos.